

REPUBLICA ARGENTINA
DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
61ª REUNION – Continuación de la 5ª SESION EXTRAORDINARIA (ESPECIAL) –
ABRIL 29 Y 30 DE 1993

Presidencia de los señores diputados **Alberto Reinaldo Pierri, Luis Alberto Martínez, Hugo
Bartolomé Rodríguez Sañudo, Carlos Federico Ruckauf,
Oscar Santiago Lamberto y Francisco de Durañona y Vedia**

Secretarios : doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla
Prosecretarios : doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES :

ACEÑOLAZA, Florencio
Gilberto
ACHEM, Antonio
ADAIME, Felipe Teófilo
AGUADO, Jorge Rubén
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ALABI, Ernesto Salim
ALBAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALENDE, Oscar Eduardo
ALGABA, Ernesto Pedro Andrés
ALSOGARAY, Alvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Alberto
ALVAREZ, Héctor Claudio
ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl
Angel
ALVAREZ GARCIA, Normando
M.
AMADEO, Eduardo Pablo
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGÜELLO, Jorge Martín
Arturo
ARIAS, César
ARMENDARIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Juan Carlos
BAGLINI, Raúl Eduardo
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BARBERA, Eliseo
BARBOTI, Atilio Ector
BASSANI, Angel Marcelo
BAUM, Daniel
BAYLAC, Juan Pablo
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BELTRAN, Carlos Roberto
BENEDETTI, Jorge Enrique
BERHONGARAY, Antonio
Tomás
BERMUDEZ, María del Pilar
BISCHOF, Enrique Alberto
BISCIOTTI, Victorio Osvaldo

BLANCO, Oscar Alberto
BORDA, Osvaldo
BORDIN CAROSIO, Hugo
Antonio
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BREARD, Noel Eugenio
BROOK, Mario Carlos
BRUZZO, Omar Obdulio
CABRERA, Gerardo Angel
CAFIERO, Juan Pablo
CAIMMI, Fernando Enrique
CALLEJA, Ovidio Amílcar
CAMAÑO, Dante Alberto
CAMAÑO, Eduardo Oscar
CAMAÑO, Graciela
CANATA, José Domingo
CARRERAS, Porfirio Mario
CASARI de ALARCIA, María
Leonor
CASTILLO, José Luis
CASTILLO, Oscar Anibal
CAVALLARI, Juan José
CEBALLOS, Walter Alberto
CICARE, Miguel Angel
CORCHUELO BLASCO, José
M.
COSSOS PEREZ, Juan Nicolás
CRAMARO, Hugo Arnaldo
CROSTELLI, Juan Carlos
CRUZ, Washington Jesús
D'ALESSANDRO, Miguel H.
D'AMBROSIO, Angel Mario
DAUD, Jorge Carlos
DE MARTINO, Victor Amador
DI TULIO, Héctor Horacio
DURAÑONA Y VEDIA,
Francisco de
DURRIEU, Marcela Margarita
DUSSOL, Ramón Adolfo
ECHEVARRIA, Luis María
ELIAS, Angel Mario
ESPECHE, Alberto Luis
ESTEVEZ BOERO, Guillermo
E.
FAJARDO, Juan Carlos
FALLETI, Julio César José

FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FELLNER, Eduardo Alfredo
FERNANDEZ, Roberto Enrique
FERNANDEZ GILL, Guillermo
C.
FERRADAS, Miguel Enrique
FESCINA, Andrés Julián
FIGUEROA, Pedro Octavio
FLORES, Rafael Horacio
FOLLONI, Jorge Oscar
FONTELA, Moisés Eduardo
FORNERON, Lino
FRIGERIO, Octavio Oscar
GALVAN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GAN, Fernando Pascual
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCIA, Pedro Alberto
GARCIA CUERVA, Ignacio S.
GARCIA de NOVELLI, María
C.
GARGIULO, Pablo
GATTI, Héctor Angel
GAUNA, Juan Octavio
GERMANO, Alberto Raúl
GIOJA, José Luis
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ, José Ernesto
GÓMEZ, Roque Julio César
GOMEZ CENTURION, Carlos
E.
GONZALEZ, Alberto Ignacio
GONZALEZ, Luis Mario
GONZALEZ CABAÑAS,
Tomás W.
GONZALEZ GASS, Gabriela M.
GONZALEZ GAVIOLA, Juan
H.
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Antonio Isaac
GUERRERO, Luis Serafín
GUZMAN, María Cristina
HARDY, Anibal Osvaldo
HERNÁNDEZ, Antonio María
HERNANDEZ, Santos Abel
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA, Luis Fernando
HERRERA ARIAS, Manuel H.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

HUMADA, Raúl
 IBARBIA, José María
 IBARRECHE, Julio César
 IGLESIAS, Evaristo Constantino
 IRIBARNE, Alberto Juan
 Bautista
 ITURRE, César Eusebio del Valle
 JALIL, Luis Julián
 KELLY, Elsa Diana Rosa
 KOTH, Carlos
 LAMBERTO, Oscar Santiago
 LARRABURU, Dámaso
 LECONTE, Ricardo Guillermo
 LOPEZ, Alcides Humberto
 LOPEZ ARIAS, Marcelo
 Eduardo
 LOPEZ de ZAVALIA, Fernando
 J.
 LOSADA, Luis Enrique
 LOUTAIF, Julio César
 LYNCH, Carlos Alberto
 MACHADO, Oscar Alfredo
 MACHICOTE, Jorge R.
 MAGGI, Juan Alberto
 MANFREDOTTI, Carlos
 MANNY, José Juan
 MAQUEDA, Juan Carlos
 MARCÓ, Jorge Raúl
 MARCOLLI, Juan Miguel Angel
 MARCOS, Ricardo Ernesto
 MARELLI, Mabel G. de
 MARTIN de DE NARDO,
 Marta
 MARTINEZ, Luis Alberto
 MARTINEZ RAYMONDA,
 Rafael
 MATZKIN, Jorge Rubén
 MENDOZA, Claudio Ramiro
 MENDOZA, Martín
 MENEGHINI, Javier Reynaldo
 MICHELLI, Marco Aurelio
 MICHITTE, Salomón Antonio
 MOLARDO, Elvio Francisco
 MOLINAS, Ricardo Francisco
 MONTEVERDE, Carlos
 Roberto
 MOREAU, Leopoldo Raúl Guido
 MOURE, Juan Manuel
 MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
 MUÑOZ, Marcelo Bernardo
 NACUL, Miguel Camel
 NATALE, Alberto Adolfo
 NIKISCH, Hugo Víctor
 NIÑO, Jorge
 NOVAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORGAZ, Carlos Alfredo
 ORQUIN, Leopoldo Manuel
 ORTIZ MALDONADO, Gastón
 H.
 ORTIZ PELLEGRINI, Miguel
 A.
 PARADA, Alberto

PARENTE, Rodolfo Miguel
 PAROLA, José María
 PARRILLI, Oscar Isidro José
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERALTA, Aníbal Pedro
 PESCE, Félix
 PICCININI, Ana Ida
 PIERRI, Alberto Reinaldo
 PINTO, Guillermo
 PIOTTI, Alberto Daniel
 PRAT, Alfredo Ernesto
 PROFILI, Gerardo Pedro
 PRONE, Alberto Josué
 PURICELLI, Arturo Antonio
 QUEZADA, Rodolfo Héctor
 RAIMUNDI, Carlos Alberto
 RE, Ricardo Horacio
 RODRIGO, Esteban Joaquín,
 RODRIGUEZ, José
 RODRIGUEZ, Raúl Eduardo
 RODRIGUEZ SANUDO, Hugo
 B.
 ROIG, Angel
 ROMERO, Carlos Alberto
 ROMERO, Humberto Antonio
 ROY, Irma
 RUCKAUF, Carlos Federico
 RUIZ, Angel Rafael
 SAADI, Luis Alberto
 SABIO, Juan Carlos
 SACKS, Rubén Rodolfo
 SALUSSO, Horacio Ramón
 SALVADOR, Daniel Marcelo
 SAMID, Manuel Julio
 SANCHEZ GALDEANO,
 Roque
 SANTIN, Eduardo
 SCELZI, Carlos José
 SEGUI, Héctor Miguel
 SODERO NIEVAS, Víctor
 Hugo
 SORIA, Carlos Ernesto
 SORIA ARCH, José María
 SPINOSA, Augusto Juan
 STORANI, Conrado Hugo
 SUCARIA, Neyef
 SUEIRO, Carlos Adolfo
 TACTA de ROMERO, Emma A.
 TOMA, Miguel Angel
 TOPA, Raúl Roque
 TOTO, Francisco Patricio
 TROYANO, Silvia Elena
 URIONDO, Luis Enrique R.
 VALCARCEL, Juan Manuel
 VANOSSI, Jorge Reinaldo
 VARELA, Néstor Angel
 VARELA BARRIO, Juan Carlos
 VARELA CID, Eduardo
 VAZQUEZ, Ricardo Héctor
 VAZQUEZ, Roberto
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VERDU, Mario
 VICCHI, Raúl Horacio

YOMA, Jorge Raúl
 ZAMBIANCHI, Carlos
 ZAMORA, Federico
 ZAMORA, Luis Fernando
 ZARACHO, Evelio Argentino
 ZAVALA, Gilberto Antonio
 ZICARELLI, Orlando

AUSENTES CON AVISO
 ABDALA, Germán Darío
 BRUNATI, Luis Pedro
 FERNANDEZ, Roberto Carlos
 FERREYRA, Eduardo Mario
 SUREDA, Angela Gerónima

AUSENTES CON SOLICITUD
 DE LICENCIA PENDIENTE
 DE APROBACIÓN POR LA
 HONORABLE CAMARA
 BERICUA, Jorge
 CAPUTO, Dante Mario
 SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE, CON RENUNCIA
 PENDIENTE DE
 ACEPTACION DE LA
 HONORABLE CAMARA

GONZALEZ, Oscar Félix

SUMARIO

1. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación del Sistema Nacional de Previsión Social (31-PE-92). (pág. 7011).

....

3. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 1 de este sumario (pág. 7058).

...

6. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 1 y 3 de este sumario (pág. 7065).

...

8. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 1, 3 y de este sumario. Se rechaza una moción de orden de que el asunto vuelva a comisión formulada por el señor diputado Gauna durante el debate, y se aprueba en general el dictamen. (pág. 7091).

En Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de abril de 1993, a la hora 10 y 16:

SISTEMA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL. (Continuación)

Sr. Presidente (Ruckauf). — Continúa la sesión. Prosigue la consideración en general del dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre modificación del Sistema Nacional de Previsión Social ¹.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: en primer término quiero señalar que voy a hacer uso de la palabra en representación del bloque Demócrata Progresista y, por un especial pedido del señor diputado Pedro Figueroa, del Movimiento Popular Jujeno, lo haré también en su nombre, con honor y sumamente complacido. Antes de proseguir con la alborotada, confusa y complicada tramitación de este proyecto de ley de reforma previsional -en la que vamos de sorpresa en sorpresa- solicitaría se me informe si en los agregados al dictamen ha habido alguna modificación en el texto de siete páginas que reemplazó al de cinco que circulaba ayer a las quince horas.

Sr. Presidente (Ruckauf). — El informe que ayer dio el señor diputado González Gaviola se refirió al proyecto que finalmente había decidido proponer la bancada oficialista.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: la pregunta la formulé porque sé que hasta anoche esa era la postura final, pero como con la mañana cambia el día quería saber si existía alguna nueva modificación.

Sr. Molinas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Martínez Raymonda. Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Ruckauf). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: ayer un diputado nacional que creo pertenece a la Confederación General del Trabajo nos dijo que estaban haciendo cálculos para traerlos. Quisiera

saber si los trajeron o si seguiremos discutiendo un despacho que nadie conoce.

Sr. Presidente (Ruckauf). — Señor diputado Martínez Raymonda: el señor diputado Parrilli solicita una interrupción para aclarar su pregunta en nombre de la bancada justicialista. ¿La concede?

Sr. Martínez Raymonda. Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. — Señor presidente: simplemente quería decir al diputado y amigo Martínez Raymonda que todo esto me recuerda el refrán que dice: "Si bogas te apaleo y si no bogas también te apaleo". O sea que si no efectuamos modificaciones al proyecto en consideración, nos critican, y también lo hacen si las introducimos.

Entonces; no tiene sentido esta suerte de re-criminación que pretende hacernos el señor diputado Martínez Raymonda, porque en la práctica nuestro bloque ha demostrado la más abierta predisposición y la más amplia predisposición al diálogo para introducir modificaciones a este proyecto, obviamente en el marco de su espíritu.

Debe entender el señor diputado Martínez Raymonda —quien, indudablemente, tiene más experiencia que quien habla— que un proyecto de ley de casi 180 artículos merecerá sin duda modificaciones durante su tratamiento en particular. Hay aspectos que ajustar y mejorar que habrá que rectificar.

Las modificaciones sustanciales que nuestro bloque propone son aquellas de las que anoche ha dado cuenta el señor diputado González Gaviola en nombre de nuestra bancada.

Esos son los ejes fundamentales sobre los que ha de girar la discusión; es cierto que hay aspectos que precisar, puntos que ajustar y cosas que cambiar, pero lo haremos en un marco en el que se nos permita trabajar, sin que nos critiquen porque modifiquemos o no el proyecto.

Debe entenderse que la voluntad de nuestro bloque consiste en el hecho de que el proyecto de ley sea sancionado lo mejor posible, para que la futura norma quede redactada de forma tal que sea lo más comprensible para todos los ciudadanos.

Manteniendo el espíritu y los principios generales de este proyecto de ley estamos dispuestos a efectuarle modificaciones en el tratamiento en particular.

¹ Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 28 y 29 de abril de 1993, página 6830.

Sr. Presidente (Ruckauf). - La Presidencia entiende que el señor diputado preopinante ha aclarado las dudas que tenía el señor diputado por la Capital, por lo que le pediría que tenga a bien avanzar sobre el fondo del asunto ya que está interesada en oírlo.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: agradezco el interés de su parte, pero le aclaro que mi pregunta tenía una carga de ironía que seguramente habrán advertido. No obstante, era necesario que se me diera una explicación de una cosa inexplicable.

Claro que ha tenido flexibilidad el bloque de la primera minoría para ir modificando la futura ley. El presidente de dicho bloque dijo que se hicieron cien reformas, pero quiero aclarar que no las hemos hecho sino que las han hecho; las han hecho dentro del oficialismo, parlamentario y sindical.

Se comenzó el año pasado dando a los sindicatos la posibilidad de constituir administradoras de fondos, con lo que yo estaba de acuerdo —lo dije antes que el gobierno—, aunque no sé por qué debía hablarse solamente de sociedades anónimas, ya que podría tratarse también de sociedades sin fines de lucro, de bien público, o de otra naturaleza jurídica.

Posteriormente, se trató de introducir otras cosas no tan santas. De modo que los cambios que se hicieron en el transcurso del camino fueron varios, pero —repito— siempre “dentro de casa”. Se nos notificaba de los acuerdos logrados, y el último es el del día de ayer, que tengo que comentar porque fue producto de tres semanas de comedia de enredos a la francesa.

En la semana del 14 de marzo el señor presidente del bloque Justicialista habló de la posibilidad de encontrar un camino de diálogo, diciendo que se podía hablar de la voluntariedad en cuanto a la opción de la capitalización. Con tal motivo se realizaron algunas reuniones, y en el despacho del diputado Baglini, frente a representantes de varios bloques, el presidente del bloque Justicialista dijo que existía la posibilidad de discutir el tema de la opcionalidad u obligatoriedad del sistema de capitalización.

Por último, quedamos en que la Presidencia convocaría a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria a fin de encontrar un mecanismo que permitiera destrabar el tema sin necesidad de que el proyecto volviera formalmente a comisión pero encomendándose a las comisiones de Previsión y de Presupuesto la formación de un grupo de trabajo especial. En

dicha reunión estuvo presente, entre otros, el señor diputado Matzkin, pero no se concretó nada, por lo que a la tarde del día siguiente el señor presidente Pierri convocó a una nueva reunión -digamos no ortodoxa en materia reglamentaria- en la sala donde habitualmente se reúne la Comisión de Labor Parlamentaria.

En ella el señor diputado Matzkin dijo que iban a conversar pero que sobre los temas básicos, entre los cuales estaba incluido el de la obligatoriedad, no había nada que hablar. Sin embargo, ayer por la mañana nos sorprendió la noticia de que el tema de la obligatoriedad apareciera ya arreglado con los dirigentes sindicales, cuando lo correspondiente hubiera sido consensuarlo con los bloques políticos que componen esta Cámara dentro del marco reglamentario en que debe funcionar el Congreso de la Nación.

Quería hacer estos planteos porque creemos que esta iniciativa no fue tratada en serio. Precisamente por esta razón es que queríamos que el proyecto volviera a comisión. Pero voy a referirme a la iniciativa en sí porque si seguimos con estos planteos se nos va a ir toda la mañana.

Efectivamente, cuando aparecieron los primeros proyectos enviados por el Poder Ejecutivo —que como dijimos fueron mutando como el camaleón— nos pareció que se trataba de algo interesante, como para pensarlo. Pero a medida que avanzábamos en su análisis, nos dábamos cuenta de que los objetivos que se señalaban como loables en la búsqueda de soluciones a un problema tan viejo y grave como el del sistema previsional argentino, entre los cuales —lo dijo el señor ministro— estaban los de mejorar la condición de los jubilados actuales —después vamos a analizar esto—, evitar que el Estado metiera sus manos en los aportes de los trabajadores; canalizar el ahorro a través de un mercado de capitales que diera respaldo al crecimiento de la Nación, y finalmente, lograr para nuestros hijos un destino venturoso cuando lleguen a la vejez, no resultarían alcanzados. Incluso, esto lo hemos analizado en alguna nota periodística dado que en la comisión no hubo oportunidad de hacerla.

Con respecto al primero de esos objetivos, creemos que nació muerto *ab initio*. Los 3.200.000 jubilados y pensionados actuales -en realidad no sabemos a cuánto ascienden exactamente, porque a pesar de que desde hace tiempo el diputado Natale proyectó que se hiciera un censo éste todavía no se ha realizado- quedan totalmente marginados del esquema de la ley; ni si-

quiera se los menciona. Este marginamiento no es totalmente pasivo, ya que el proceso de transición del actual sistema de reparto al de capitalización va a drenar 3.000 millones de pesos por año al sistema vigente.

Esto era así, antes de la modificación propuesta en el día de ayer. Al sacarle 3.000 millones de pesos al sistema, se deja un vacío, un hueco, se produce un déficit, el cual supongo que nadie habrá pensado en cubrir bajando las remuneraciones de los jubilados, porque esto sería una farándula del suicidio, de la locura. Hay que cubrir ese déficit. ¿Cómo se pensaba hacerlo en el proyecto original? Colocando en los fondos capitalizados del nuevo sistema títulos de la deuda pública, para lo cual en aquel momento se autorizaba hasta el 80 por ciento de los fondos de pensión o de jubilaciones privadas, en títulos públicos; para que no me interrumpan, debo aclarar que ahora se propicia bajar ese porcentaje al 30, aunque no se explica con qué se cubriría el faltante.

Pero, naturalmente, esos 3.000 millones de pesos que irían de un sistema al otro no iban a llegar indemnes a los fondos de pensión porque en el camino, debido a la comisión y a las primas de seguros de muerte e invalidez —que algunos estimaban en un 3 o 3,5 por ciento del 11 por ciento— iban a quedar reducidos al 65 por ciento de lo aportado. Con esto, la vuelta al viejo sistema, figuradamente la víbora que se come la cola, no iba a alcanzar para tapar el déficit pero, como éste debía ser cubierto, se iba a usar para ello nada más ni nada menos que el eventual y posible mejoramiento de la recaudación; de ser esto así —por lo que veremos después— las perspectivas de la clase pasiva con respecto al mejoramiento de sus remuneraciones quedarían postergadas —no según mis teorías sino de acuerdo con las planillas de la Secretaría de Seguridad Social del día 12 de octubre de 1992—, hasta el año 2014. Recién en ese momento la curva acumulada del déficit que llegaría a 22.622 millones de pesos o dólares —mientras el señor ministro Cavallo mantenga la convertibilidad— comenzaría a declinar, razón por la cual para el año 2014, por mucho que queramos a todos nuestros jubilados y pensionados, serían muy pocos los que alcanzarían a ver la inclinación de la curva del déficit.

Con estos datos registrados en planillas oficiales —aquí me adelanto a pedir la inserción de las dos planillas de la Secretaría de Seguridad Social en el Diario de Sesiones— queda demostrado que el tránsito de un sistema al otro reviste gravedad incluso para la propia estabilidad del sistema de equilibrio fiscal, que es uno de los logros que le

hemos reconocido al ministro Cavallo, al señor presidente de la República y al Poder Ejecutivo en general. Nosotros contribuimos a que funcionara esta política porque votamos favorablemente la ley de convertibilidad, la ley de consolidación, la ley de empleo y todas aquellas que, a nuestro juicio, eran necesarias para la reforma del Estado.

Frente a esto hay algunas situaciones que también nos preocupan. El primer objetivo es mejorar la condición de los jubilados actuales; esto debemos olvidarlo porque no es realmente un objetivo perseguido por el proyecto de ley y además genera este problema del déficit que ya veremos cómo se resuelve con la reforma planteada en el día de ayer.

En cuanto al segundo objetivo, que el Estado nunca más se pudiera apropiarse de los aportes de los trabajadores, el proyecto establece que se puede colocar hasta el 80 por ciento de esos fondos en títulos públicos y creo que con esta autorización se está apropiando de los aportes de los trabajadores.

El tercer objetivo es la creación del mercado de capitales. Si el 80 por ciento de los fondos es destinado a títulos públicos —del 65 por ciento que quedaba, porque le habíamos sacado la comisión— queda finalmente el 13 por ciento de los aportes efectuados por los trabajadores al sistema de capitalización para ser destinado al desarrollo, a la inversión y al estímulo del crecimiento de la República. En síntesis, de esos 3.000 millones de dólares el 13 por ciento corresponde a 400 millones de la misma moneda. Este monto es aproximadamente igual a la cuenta sin control que el presupuesto asignó al Ministerio del Interior destinado a ayudar a las comunas amigas, no a las adversarias. Esto es una paparrucha.

En segundo lugar, ante esta carencia de disponibilidades el objetivo del desarrollo por medio de la capitalización se prolonga en el tiempo. Se aduce que ahora ese porcentaje del 80 lo bajan al 30 por ciento, pero eso lo analizaremos luego dado que yo debo trabajar sobre el esquema que tenía hasta ayer por la tarde, porque las sorpresas, por más que uno sea rápido, hay que repensarlas. La última parte es la más peligrosa, la que es permanente, para siempre. Se va a crear un sistema de capitalización...

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Natale. - Pido la palabra.

Sr. Presidente (Ruckauf). - La Presidencia

solicita a los señores diputados que guarden la debida compostura y respeten al orador.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale.- Señor presidente: justamente pensaba efectuarle una solicitud en el mismo sentido de la exhortación que usted acaba de hacer. Hay 35 diputados presentes, de manera que solicito a los miembros del bloque Justicialista que están en el recinto que escuchen al orador, y si no quieren hacerlo, que por favor no interfieran con sus expresiones y comentarios pues perturban la atención de quienes pretendemos escucharlo.

Sr. Presidente (Ruckauf) - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: no tengo la preocupación de que me entiendan pero sí por lo menos de que no me interrumpan; Como decía, el último punto es el vital, adonde van lanzados hacia un futuro de porvenir venturoso nuestros hijos y nietos que serán algún día ancianos. Allí, al final del camino, les esperará una caja que una vez abierta —se les promete— brindará bendiciones y felicidades plenas para toda nuestra existencia.

Aclaro que éste no es un ataque al proyecto de ley sino a una concepción voluntarista y utópica, porque realmente, ¿quién puede garantizar algo a 30 años? Todos dudan de esto, incluso los propios diputados que apoyan el dictamen de mayoría. Entonces, si no se puede garantizar nada —más tarde me referiré a las garantías, esto lo digo de modo genérico— es necesario adoptar las prevenciones del caso en el proyecto que se pretende aprobar. ¿Por qué tirarse a la piletta antes de hacer el pozo y poner el agua? ¿Por qué no ir escalonada y paulatinamente afianzando el cambio y la transición en función de lo que las posibilidades del país vayan generando? ¿Por qué no tener la medida de estudiar procedimientos de alternativa o de transición pausada que de paso eliminaran el primer problema, el del déficit?

En este punto quisiera introducir un elemento que pensaba mencionar más tarde pero que creo vale citar ahora. En el día de ayer recibí la colaboración de una consultora que ha trabajado en el tema, y a mi solicitud efectuó un análisis partiendo de las planillas de la Secretaría de Seguridad Social del 12 de octubre del año pasado -las que mencioné unos instantes atrás-, de acuerdo con las cuales en el año 2014 el déficit acumulado alcanzarían a 22.622 millones de pesos. Esta consultora trabajó con cifras que los economistas y auditores estimaron propias, y por ejemplo concluyeron que si durante los cinco primeros años, desde 1994 a 1998, se retuvieran en el

sistema de reparto 5 puntos del aporte obrero -en realidad los auditores utilizaron la cifra del 4,75 por ciento, pero yo prefiero redondearla para hacer las cuentas más rápido-, el déficit aparecería recién en el año 2008 y sería, de 23 millones de pesos, y por un solo año. Esto significaría que reteniendo 5 puntos en el sistema de reparto no habría déficit en toda la transición.

Si se quisiera bajar aun más el índice y tomar 2,60 durante 10 años en lugar de 5, el déficit también reaparecería en el 2008 y sería de 49 millones de pesos por una sola vez. Así sucesivamente podríamos continuar haciendo las cuentas y los cálculos que deseáramos. Con la misma filosofía del proyecto que propicia la capitalización no es sensato pensar que en ese sistema se va a hallar el gran mercado que reactivará la economía argentina. ¿No se puede concretar esto de modo tranquilo, pausado, paulatino, sensato, medido, equilibrado y responsable, evitando el daño irreparable a los jubilados actuales, e incluso al propio proyecto político-económico de equilibrio fiscal que a todos nos interesa preservar? Yo me refiero a una suerte de transición suave y pausada, ¿o es que nos gusta el *shock* por el *shock* mismo?

Aclaro que estas manifestaciones las he hecho con la mejor buena voluntad ante los más altos niveles del Ministerio de Economía, en las vísperas de que se produjera incluso el primer despacho, porque me pareció de razonabilidad absoluta ir por vía paulatina al mismo objetivo que se buscaba. Me contestaron que eso era tomar precauciones, que yo estaba buscando que se confeccionara un traje muy ancho por si engordaba y que lo mejor era hacer un traje justo de ahora para adelante. Pero yo pregunto por qué hay que jugar a la incertidumbre. Fíjense las cosas que tendrían que darse para que todo salga bien, teniendo en cuenta el caso de una persona de 35 años que todavía debe aportar 30 años más: que tenga 30 años de inflación cero, o una rentabilidad tal que supere la inflación en 2 o 3 puntos por año, por lo menos, para lograr una capitalización; que tenga 30 años de paz mundial, es decir que no se produzca una hecatombe en ese lapso, aunque todos sabemos que en 30 años, de 1914 a 1944; hubo dos guerras mundiales y murieron 60 millones de personas; que no haya terremotos, inundaciones o

catástrofes; que la capa de ozono no se vaya a agujerear más, porque por ahí nos quema las cosechas, y que como condición prioritaria el ministro Cavallo continúe en su cargo durante 30 años, para que nos asegure la paridad cambiaria entre el dólar y el peso, de 1 a 1, en el año 2022, cuando el jubilado se presente a cobrar.

¿Alguien piensa que esas condiciones pueden darse todas juntas para que el futuro jubilado encuentre al final del camino su "paquetito" indemne? Incluso está el peligro de que quiebren las administradoras, pero esa posibilidad no la mencioné porque se ha aclarado que si eso sucede el patrimonio de ellas quedará separado de los aportes. Por supuesto que se pueden equivocar en la compra de las acciones o papeles, pero dejemos de lado esa posibilidad.

Hice un cálculo sobre la base de un trabajador que ganara 1.000 pesos mensuales; aportará 110, le sacarán el 35 por ciento —comisión de seguros— y el resto se lo capitalizarán; ¿de qué forma? Con una renta neta de dos puntos de capitalización anual progresiva y constante. ¿Saben cuántos bancos del mundo pagarían por tener un 2 por ciento de rentabilidad neta, continua y acumulativa? Se vuelven todos locos por eso. No hago nombres para no hacer "chivos" de los financistas internacionales.

Con todo esto, el jubilado llegará a tener 38.088 pesos el día de su jubilación, que será a los 65 años y luego de 30 años de aportes. Con ese dinero se va a una compañía de seguros de vida y de retiro a comprar una renta vitalicia, y el cálculo que me hicieron mis amigos consultores —sobre la base de las planillas que ellos manejan— es el siguiente: si el futuro jubilado aportó 30 años sobre un sueldo de 1.000 pesos, le darán una renta vitalicia de 230 pesos, es decir, el 23 por ciento de su sueldo. A esto hay que sumarle la prestación básica universal de 137,50 pesos, calculada sobre la base de 55 pesos, que es el aporte del salario medio según los que dicen saber, aunque ahora veremos que nadie sabe nada sobre números.

Entonces, ese señor cobrará exactamente 367,50 pesos para el resto de su vida; el 36,7 por ciento de su sueldo. ¿Saben una cosa? Es menos de lo que está cobrando con este desastroso sistema de reparto, y además no le tendría que pasar nada en el futuro. Esto demuestra que realmente se está jugando con un voluntarismo casi suicida con los destinos de las personas que ya están jubiladas, de quienes están en camino de jubilarse y de los que empiezan la relación laboral. Y resulta que no nos podemos sentar en la comisión para analizar esto porque nos apuran los bancos. Ayer nos dijeron

que no tienen más paciencia, que sólo disponen de una semana para esperar.

Este tema me tiene sin dormir. Los grandes inversores de riesgo en la historia del capitalismo mundial, como los petroleros o los mineros, se comportan en forma absolutamente diferente. Un petrolero obtiene el derecho de explorar un área, invierte doscientos o trescientos millones de dólares, empieza a hacer agujeros, yerra, no encuentra petróleo y pasan tres o cinco años hasta que lo ubica. ¡Aquí tiene que haber una oficina con una computadora y no pueden esperar una semana! Esto lleva a que nos sobrecojamos y nos preguntemos qué pasa, por qué está ocurriendo esto, a qué se debe esta ansiedad, angustia y desesperación —como diría el tango—, cuando lo que está en juego es nada más ni nada menos que la previsión social en la Argentina.

Voy a saltar sobre los detalles porque ellos nos llevarían lejos y porque, pienso que si hay debate en particular la Cámara deberá resolver la vuelta a comisión, por el bien de todos —y hasta me animo a decir con un plazo fijo para emitir despacho y con preferencia explícita para su tratamiento—, y no por una chicana dilatoria.

Veamos qué pasa con las novedades. El miércoles pasado, el señor diputado Matzkin dijo que el proyecto no era revisable y ayer apareció un pequeño texto de cinco hojas que pasó a tener siete a la noche, lo cual me hace suponer que en la noche pasan cosas peligrosas. Pasan cosas peligrosas como que nos despertemos ricos todos los argentinos y el problema de la clase pasiva argentina haya quedado superado. Según las cifras del Ministerio de Economía, los jubilados argentinos ahora saben que cada uno tiene 6.700 pesos por año —que dividido 12 da 560 pesos por mes— o 13.400 pesos si tiene la suerte de vivir con su compañera —1.120 pesos por mes—. Esto nos muestra que la matemática, la contabilidad o las cifras de la informática pudieron transformar un producto bruto interno de 168.000 millones de pesos en uno de 220.000 millones en la noche de ayer. Esta es la noticia más espectacular y habría que levantar la sesión para festejar la Argentina rica que ha pasado a ser el segundo país de América latina, después de Bahamas, en cuanto a su producto bruto per cápita.

Las cifras son parte de una ciencia infusa que sólo manejan quienes la conocen. Como dijo aquel ministro brasileño, las estadísticas son como las bikinis: muestran mucho pero ocultan lo esencial. Aquí han mostrado más allá de lo esencial porque nos despertamos con un gran aumento del producto bruto, quizás como consecuencia

del tratamiento del régimen previsional en la Cámara de Diputados.

Entonces se nos dice que se ofrecerá la opción de permanecer en el sistema de reparto o entrar en el sistema de capitalización por propia determinación. Sorprende que el señor diputado Matzkin haya dicho el miércoles de la semana pasada que no se podía tocar esto y que ayer a la mañana, después de un acuerdo entre el ministro y la CGT, se destrabe este tema porque los sindicatos pedían la opcionalidad. Pero de todas maneras habría que hacer nuevamente las cuentas y analizar las consecuencias macroeconómicas de este cambio, así como el modo en que se formarán los capitales persistiendo el sistema de reparto.

Esas cuentas hay que hacerlas. Los abogados somos un poco macaneadores, más que los contadores, que son más serios, pero tanto no podemos inventar para saber qué va a pasar con esto.

Veamos cómo viene la opción. ¿Viene suave para que cada uno diga, en la tranquilidad de su conciencia, que se va a decidir por el sistema de la capitalización porque es mejor o bien que se va a quedar en el reparto porque es tradicional y encierra un sentido de solidaridad? No: viene empujada por los vientos de la presión tributaria. En los viejos tiempos los comerciantes actuaban de un modo diferente; ahora son más serios, porque antes, cuando se aproximaban las liquidaciones de verano, remarcaban el precio al doble y luego lo bajaban a la mitad.

Se habla de dar estímulo fiscal a los que se incorporen al sistema de capitalización. Cuando me lo dijeron la primera vez me pareció una fantasía, algo propio de gente trasnochada. Yo también a veces tengo ideas fantasiosas pero me asiste la suerte de no ser gobierno, de manera que no causo ningún perjuicio; mas cuando esa idea se tiene siendo gobierno el tema comienza a asustar y a preocupar.

También se ha hablado de bajar el monto no imponible del impuesto a las ganancias. ¿Cómo lo van a hacer? Yo pregunté qué estímulo fiscal puede tener el trabajador que el único impuesto que paga es el interno de los cigarrillos, si fuma, porque si no lo hace, ni eso. Dijeron que se va a bajar el mínimo no imponible, de manera tal que el impuesto a las ganancias alcance al más humilde de los trabajadores argentinos.

Esto es mucho peor cuando lo veo escrito: van a eliminar las deducciones por cargas familiares. Ahora es un pecado tener hijos en la Argentina, porque el monto no imposible y las deducciones por cargas...

Sr. Matzkin.— ¿Me permite una interrupción señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Martínez Raymonda. - No, señor diputado. Ayer el señor diputado López Arias me pidió una interrupción para hacer una aclaración; ésta se transformó en una moción que derivó en una discusión de tres horas y finalmente anoche me quedé sin poder hablar. La Cámara ha sido desconsiderada conmigo y por primera vez en mi vida parlamentaria yo lo seré también...

Cómo acaban de informarme que la interrupción que solicita el señor diputado Matzkin obedece a una razón protocolar, concederé la interrupción. Espero que sus palabras no deriven en una moción.

Sr. Presidente (Ruckauf).— Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. - Señor presidente: vemos que el señor diputado Martínez Raymonda está muy enfervorizado en su discurso, el que estamos siguiendo con atención aunque obviamente no compartimos. Pero la cuestión es otra; la interrupción se debe a que se encuentran presentes en el recinto ilustres visitantes, legisladores del Parlamento Europeo de origen italiano, español, luxemburgués y, si no me equivoco, inglés. Si le parece bien, señor presidente, podríamos darles la bienvenida y luego continuar trabajando.

Sr. Presidente (Ruckauf). — La Presidencia comparte el criterio expuesto por el señor diputado, que seguramente será apoyado por los distintos bloques, y da la bienvenida a los señores legisladores extranjeros que hoy nos visitan (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Ruckauf). — Continúa: en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. - Señor presidente: adhiero a las expresiones de bienvenida dirigidas a los ilustres visitantes que tenemos en el recinto. Por una razón de cortesía quiero pedir disculpas por la vehemencia de mis palabras. No dudo de que me entenderán, porque por una cuestión familiar y étnica convergen en mí la sangre española y la italiana y ambas proveen esta cuota de temperamento que los latinos —y los argentinos— tenemos y que nos hace actuar con pasión cuando se trata de luchar por el bien del país,

Retomando el tema, hablábamos de cuáles serán las consecuencias macroeconómicas del cambio de opción de un sistema u otro. En primer

lugar, no entiendo mucho esto de que el que se queda en un sistema se encuentra en una situación irreversible, porque decimos que está basado en la libertad, tendría que ser posible cambiar. En fin, este es un tema para analizar.

En segundo término —aclaro que voy pasando de las cuestiones menores para llegar a las mayores—, se dice que será de acuerdo con las reglamentaciones que dicten las normas correspondientes. No se sabe si se va a decir por ejemplo, que esta opción va a durar hasta diciembre de 1994 o de 1995; todo está en una absoluta nebulosa.

En tercer lugar; y seguimos creciendo en el nivel de importancia, ¿quiénes se van a ir digamos automáticamente de un sistema al otro? Primero, los que perciben sueldos altos o de medianos para arriba; me refiero a los que perciben más de 1.000 pesos de sueldo. Hemos visto que por el camino de la prestación básica universal más la remuneración, cobrarían 360 pesos, por lo que no van a encontrar mucho estímulo en el sistema de reparto ya que se suprime el 1,5 por ciento por año de antigüedad que establece este régimen hasta la sanción de esta ley y se lo reemplaza por el 0,50 por ciento si opta por permanecer en el esquema de reparto. Significa darle un insignificante "caramelito" al que se queda, mientras que el que se va estará librado de los impuestos que sí tendrá que pagar el que se queda. La ley de impuesto a las ganancias no va a hacer discriminaciones, como alguien lo supuso durante el debate de anoche. Incluso eso no lo pude encontrar en ninguna parte, y a su vez la propia técnica impositiva hace imposible que esto rija sólo para los autónomos, como se dijo.

El impuesto a las ganancias rige para todo el mundo, menos para los exceptuados, pero son otras las causas. En cambio, el que se va del sistema, va a tener el dulce de la deducción impositiva.

En cuarto lugar, el trabajador que se quede con ese complementario por permanencia —hasta se lo califica así— si tiene un sueldo bajo tendrá con el actual sistema por prestación básica universal 137,50 pesos, junto al 1,5 por ciento por año de antigüedad anterior a la ley y el 0,5 por ciento por cada uno de los años posteriores.

Ayer en la sala de periodistas me pidieron que les hiciera una cuenta; con un sueldo de 1.000 pesos, a *grosso modo* y con un cálculo con muchas posibilidades de error, les dije que percibiría aproximadamente como jubilación 400 pesos y chirolas, es decir, una cifra del orden del 42 por ciento del salario. Reitero que estamos hablando de un salario permanente de 1.000 pesos, en una época de estabilidad y no de inflación.

En quinto lugar, me voy a referir a la cuestión que atañe a los dirigentes gremiales, quienes en representación de sus gremios o de la CGT o de las "62" —porque no sé quién hizo el acuerdo ya que no ocurrió ni en el recinto ni en la comisión sino que lo hicieron con el ministro— establecieron como condición para volver al recinto y apoyar la ley que se aceptara este régimen de opción. Frente a ello me pregunto qué han tenido en mente. Mi primera reacción fue suponer que su actitud era buena porque contenía la idea de la libertad y de la no intervención. También sería saludable que similar actitud la tuvieran en relación a las obras sociales, es decir que los afiliados tuvieran libertad para elegirlos. Los sindicatos no lo quieren, pero nosotros sí queremos que tengan también esa posibilidad de elección, dentro de un espíritu de libertad.

Esta fue una novedad importante. Sin embargo, cuando analizo este régimen no advierto dónde está la libertad porque condena a los afiliados, si los dejan en el sistema de reparto, a sufrir el achataamiento de los beneficios que estas disposiciones establecen. Y en cambio están creando las condiciones beneficiosas para que se vayan al sistema de capitalización.

¿No será que están pensando en que puede ser un buen negocio, ya que ellos tienen influencia sobre los afiliados a sus gremios, erigirse en gestores del traslado de los trabajadores del sistema de reparto al de capitalización?

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, doctor Oscar Santiago Lamberto.

Sr. Martínez Raymonda. — No quiero pensar, que esto sea así; espero que no ocurra eso. Una cosa es que los bancos estén apurados para que se sancione este régimen, y otra es que lo mismo persigan los dirigentes gremiales. Creo que no pueden estar apurados para que de esto se haga un negocio.

Esta cuestión también tiene algo de vodevil; perdóneseme la expresión parlamentaria, y pido disculpas a los ilustres visitantes, pues mis palabras no implican...

Sr. Uriondo.— Se están retirando por lo que dijo...

Sr. Martínez Raymonda. - Entonces, lo digo más tranquilo.

Ayer, cuando se señalaban las ventajas de ingresar al sistema de capitalización, el señor di-

putado Sueiro en representación de la CGT mencionó dos. Una era que se podía lograr la voluntad de quedarse o irse del sistema; y la segunda, que habían estudiado que en un sistema de capitalización al trabajador le costaba un punto de los once de comisión de la administradora, y 2,5 puntos del seguro. Quiero leer textualmente cuál fue la propuesta que hicieron porque no conviene dejarlo librado a mi memoria. Dice así: "Con la redacción que se concretará en la iniciativa estimamos que el costo de este seguro se podrá reducir a un 0,5 por ciento, a tal punto que en lugar de capitalizarse un 7,5 por ciento, esta última cifra llegue al 9,5 por ciento."

Más adelante, leyendo la versión taquigráfica, el señor diputado González Gaviola amplía el tema ante una pregunta formulada por el señor diputado Fontela. Cuando me lo contaron no lo podía creer, pero es así. Decía el señor diputado González Gaviola: "Quiero agregar a lo señalado por el señor diputado Sueiro que la disminución del costo estaría basada fundamentalmente sobre una disminución de prestaciones en el seguro por fallecimiento, en la medida en que la propuesta que la CGT acerca considera que una persona que llega a la contingencia del fallecimiento de su cónyuge a una temprana edad, sobrecarga excesivamente el sistema previsional, pudiéndose dar una pensión básica de sostenimiento equivalente a la PBU, la liquidación del fondo de capitalización que hasta ese momento tenga y un equivalente a 24 sueldos, según creo es la propuesta.

"De esta manera se acompaña un proceso de reinserción en el mercado laboral a la persona que a temprana edad ha sufrido la contingencia del fallecimiento del cónyuge."

Por esta ley natural cronológica en la que todos estamos insertos, las damas son más galantes y nos dejan pasar primero a nosotros por la puerta de la muerte. Es entonces que quienes sufren la contingencia de perder a su cónyuge son en su gran proporción las señoras. Se están refiriendo a las viudas jóvenes y se preguntan cómo les vamos a pagar una pensión si son jóvenes. No sé quién puede determinar si una persona es joven o no; tal vez haya un tribunal encargado de hacerlo teniendo en cuenta determinadas características tipológicas, belleza, femineidad, elegancia, etcétera, para insertarlas en el mercado de la vida. ¡De qué vida se trata! ¿Pondrán una fábrica de carteras para revolver? Creo que esto es un agravio infernal. No podemos decir que no le vamos a dar pensión a la viuda joven para bajar el costo del seguro. Esto es una insensibilidad y una ofensa hacia el sexo femenino que es el que sufre en mayor medida la contingencia de quedar

viudo. Esto no puede ser realmente cierto en los hechos concretos porque si es así espero que la Cámara rechace la propuesta.

Se hicieron otras preguntas en la sesión de anoche que escuché estando fuera del recinto por circunstancias especiales. En este sentido se consultó si se mantenían las garantías del artículo 39 incorporando al Banco de la Nación como administrador. Quiero ser honesto conmigo, con la Cámara y con el país. Esta modificación por la que se incorpora al Banco de la Nación como administrador brindando una opción, más allá de su buena o mala administración, constituía un intento que no me pareció malo pero, en definitiva, no resolvía para nada los problemas de fondo de la ley, porque el Banco de la Nación a los 30 años iba a tener que pagar comisiones y atender los bonos públicos. No era malo como política, porque si bien desde el punto de vista macroeconómico no arreglaba el proyecto, personalmente no me molestaba, ya que compartía la necesidad de poner al Estado como testigo. Por eso no dije nada.

Pero luego se hicieron otros agregados en materia de garantías, que ya no se referían a la intangibilidad de los depósitos sino a algo mucho más importante: la intangibilidad del valor monetario. Así, para los pesos se tomaba en cuenta la tasa pasiva del Banco Nación, y para dólares un seguro de cambio en el que se consideraba el valor de origen de los depósitos en dólares hechos a lo largo de 30 años.

Realmente desde el punto de vista financiero y cambiario constituía un enunciado muy incierto, pero por lo menos era una forma de afirmar un derecho y otorgar alguna garantía. También se preguntó si eso quedaba subsistente, ante lo cual el señor diputado González Gaviola contestó que efectivamente se mantenían las dos garantías. Sin embargo, los diarios de hoy indican que mientras que el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Enrique Rodríguez, dice que sí, al igual que el titular de la CGT, el señor Naldo Brunelli, el ministro Cavallo dice que no.

Otra de las cosas que debemos esperar es la reforma de la reforma, ya que no sabemos quién tiene razón, si el ministro Rodríguez, el ministro Cavallo o el titular de la CGT. Esta incertidumbre está manejando todo lo que ocurre alrededor de este proyecto.

No puedo dejar de señalar antes de finalizar mi exposición que no estamos por el no a una reforma. Sabemos que el actual sistema previsional no puede seguir en las

condiciones que se encuentra. Por ello, hace aproximadamente 6 o 7 años -creo que fue en el año 1986- el único representante demócrata progresista que había en ese momento en el Parlamento, el señor diputado Natale, presentó cinco proyectos de ley, muchos de los cuales fueron recogidos en la propuesta que hicimos cuando observamos el Orden del Día N° 922.

Esa propuesta consiste, básicamente, en sanear el sistema de reparto, ya que la norma vigente tiene incorporado un alto porcentaje de perversidad en su propio texto, porque al margen del mal manejo administrativo establece como requisitos para poder jubilarse tener 60 años de edad, 30 años de servicio y 20 años de aportes. Es decir que incita a "negrear" la tercera parte de los aportes que un trabajador puede efectuar a lo largo de su vida activa. Nuestro proyecto liga el aporte con el beneficio, ya que en el momento de otorgar la jubilación no se computan sino los años en los que se haya acreditado el aporte.

Además, nuestra iniciativa proponía un doble sistema de control: el del instituto correspondiente —ahora se denomina la ANSES, porque se le cambió el nombre— y el del que ejerza el trabajador a través de una libreta que se entregaría a todos los ciudadanos en el momento de enrolarse —es decir, a los 16 años— así como también a todas las personas que ya estén trabajando. En esa libreta el trabajador llevaría asentados los aportes que deposita el empleador, con lo cual la evasión puede ser controlada por el propio empleado, ya que éste recibiría anualmente del instituto una planilla con el saldo de su cuenta para que lo pueda comparar con el de su libreta.

También proponíamos la eliminación del promedio de los tres mejores años de los últimos 10; ni siquiera sugeríamos el promedio de los últimos 10 años, tal como se propicia a través del proyecto en tratamiento. Entendemos que no es justo proceder de esa forma en un sistema solidario, porque en muchos casos un trabajador puede iniciar su carrera dentro de una empresa como cadete para continuar como empleado, capataz, gerente hasta llegar a gerente general. En consecuencia, no debería jubilarse con lo que percibiría como gerente general sino con el promedio de toda su carrera. Obviamente, para que esto sea posible sin ajustes tendrían que darse las condiciones ideales que mencioné con anterioridad, es decir, que no haya guerras y que Cavallo continúe siendo ministro hasta el año 2022, para que nos garantice la paridad de un peso igual a un dólar.

En consecuencia, proponíamos relacionar el aporte con la prestación, estimular la eliminación

de la evasión mediante el otorgamiento de una libreta previsional y realizar un censo para limpiar esta masa informe, porque no se sabe con qué cantidad de jubilados y pensionados cuenta el sistema. Con respecto a esto último algunos dicen que hay 3,5 millones de jubilados, otros hablan de 3,3 millones y otros de 3,2 millones de jubilados. O sea que no nos limitamos a proponer un sistema sólo de reparto o sólo de capitalización, porque creemos que eso no puede funcionar.

En este sentido, hace poco conversaba con un amigo que es un diplomático alemán, al que conocí con mayor profundidad cuando estuvo acreditado en la Argentina, y que en estos días estuvo de visita en nuestro país. Me comentaba los enormes problemas que tienen en Alemania, donde funciona un sistema de reparto.

Lo que ocurre es que la edad va creciendo por este maravilloso accionar de la ciencia y la gracia de Dios, llegando los hombres a vivir de 80 a 90 años. Pero además disminuye la masa contributiva, porque las máquinas están desplazando al hombre y no aportan al sistema. O sea que lo que habría que conseguir es que las máquinas y los robots "aporten" para aliviar los sistemas previsionales del mundo. Europa tiene 13 millones de desocupados que no aportan y que además utilizan los servicios sociales.

Las leyes previsionales técnicamente perfectas no existen por estos fenómenos de la tecnología que reducen la mano de obra y prolongan la edad, por suerte para los pasivos. Por supuesto que ahí debe estar presente la inteligencia del hombre y, sobre todo, del político y del estadista para que se haga la redistribución de la plusvalía de la tecnología en la economía del mundo. Si la máquina permite ganar más, una parte de esa ganancia debe ser destinada a la redistribución social y no solamente al salario y a la baja de costos, porque si no la humanidad —en un día que no veremos— llegará a estallar al no encontrarse un equilibrio entre estos fenómenos, lo que está fuera de nuestro alcance y control al ser la Argentina un país chico dentro de la constelación universal.

Pero nosotros podemos acompañar el sistema de reparto creando una pequeña caja complementaria de 3 o 4 puntos en lugar de los 11 del aporte del trabajador, dejando 7 puntos en el sistema. Hace un rato veíamos —en la serie que leí— que con 5 puntos no hay déficit; solamente habría 23 millones de déficit en el año 2009. ¡Maravilloso! No le tocamos ni un peso a los jubilados actuales.

Estamos de acuerdo con que la DGI debe cruzar información para evitar la evasión. Esa

es una medida sensata y estamos en marcha. Eso será para bien y no para tapar agujeros del déficit. Además, como esa caja complementaria es chica no va a generar interés en los grupos financieros y podrá ser administrada a través de un ente público sin fines de lucro, con participación de jubilados, trabajadores y empresarios. De esta forma nos vamos a ahorrar el seguro que será atendido por el sistema de reparto y tendremos más dinero para destinar a inversión, prácticamente el total de lo que se destine a la caja complementaria.

Quien en estos momentos está ocupando la Presidencia de la Cámara se está sonriendo porque le pasa lo mismo que al señor ministro de Economía cuando me decía durante un reportaje radial que yo estaba pensando en la ley ideal y lo que había que votar era la ley posible.

Pero yo le contesto lo siguiente: la ley posible es la que intentamos nosotros, yendo despacio y pisando firme, sobre tierra segura y no sobre ilusiones maravillosas pero hipotéticas. Creo que éste es el camino. Si después las cosas van bien, podemos pasar de los 4 a los 5 o a los 6 puntos del aporte.

¿Por qué tenemos que tirarnos a la piletta cuando todavía no está hecho el pozo ni hay agua? ¿Por qué no esperar hasta ver cómo funciona el sistema? ¿A quién perjudicaríamos con esta espera? Claro, a lo mejor entran a jugar aquí los tiempos de los funcionarios, que en el sistema republicano felizmente no son eternos, a pesar de mi humorada hacia el señor ministro Cavallo, ante quien me saco el sombrero por haber logrado una estabilidad que ahora hay que traducir en crecimiento.

Creo que la rotación o alternancia de los funcionarios en el poder es la base del sistema republicano. Entonces, señor presidente, ¿por qué no ir por un camino tranquilo y pensar que lo que nosotros no completamos podrá ser concretado por nuestros sucesores?

Recuerdo que en una reunión de la comisión que usted preside, señor presidente, a la que había asistido el señor secretario Schulthess para contarnos los esbozos de la ley, aparecieron preguntas de todo tipo; estábamos todos desorientados y —como era lógico, ya que se trataba de algo nuevo— ni siquiera el señor secretario tenía respuestas para todo. En un momento de dicha reunión dije —con humor negro— que no me preocupaba lo que pudiera pasar dentro de treinta años, a raíz de lo cual me miraron todos sorprendidos. Hice la siguiente reflexión: los arquitectos que proyectaron el edificio anexo calcularon bien las estructuras, las paredes, los muros, etcétera, por lo que dentro de treinta años

cada salón va a estar igual, o tal vez remozado, y seguramente con diputados más inteligentes que nosotros y con elementos tecnológicos superiores, los que se reunirán para ver cómo resuelven el problema de quienes llegan a jubilarse y no encuentran nada en las cajas de capitalización.

Entonces, propongo que el proyecto vuelva a comisión para ver lo que se puede hacer. Pongámoslo sobre la mesa y analicémoslo con el corazón en la mano y la mente despejada, sin artilugios. Como se dijo, estamos en un año electoral. Pero en nombre de mi bloque asumo el compromiso de volver a este recinto dentro de quince o veinte días —aun enfrentando a quienes quieren demorar esto por razones electoralistas—, con uno o más despachos, y sancionar la ley que realmente está necesitando la clase pasiva. No llevemos al país, por un apresuramiento y una pasión legítima pero ilusoria, a un túnel del tiempo.

Tengo aquí algunos datos sobre el proceso de la privatización de la jubilación en Chile; sería largo mencionar todos los datos, pero por lo menos quiero dar una pincelada. En Chile las cosas eran diez mil veces peores que en nuestro país.

Sr. Presidente (Lamberto).- La Presidencia advierte al señor diputado que restan dos minutos para que finalice su tiempo.

Sr. Martínez Raymonda. - Ya concluyo, señor presidente.

En 1968, el presidente chileno Frei dijo que su país estaba frente al caos, ya que había dos mil leyes previsionales, un sindicato con 2.100 trabajadores regido por 27 leyes, nueve cajas destinadas a los trabajadores de los hipódromos, treinta cajas principales y setenta complementarias. Realmente era un caos. Entonces, ¿qué hicieron? Dado que tenían una economía en crecimiento -10 o 15 por ciento por año- desecharon el sistema viejo; a los trabajadores autónomos los sacaron del sistema y conformaron un esquema de capitalización, el que en un principio fue voluntario. En realidad era voluntario pero empujado, ya que a aquel que entraba al sistema le aumentaban el sueldo por que se reducía el aporte patronal, por lo que comenzó siendo voluntario y terminó siendo obligatorio.

Quiero citar algunas cifras acerca de lo ocurrido en Chile durante 1992; cabe aclarar que no puedo citar datos más actualizados dado que los tres últimos tomos se encuentran en

la Aduana de Ezeiza y todavía no hemos podido rescatarlos. Las cifras son las siguientes: 4.200.000 inscritos, de los cuales están al día 2.200.000, lo que significa que hay más de un 40 por ciento de no aportantes y morosos. Además, las administradoras tienen mucho más dinero, pero las primeras jubilaciones que han otorgado son equivalentes, en pesos chilenos, a 120 dólares mensuales, cuando la vieja caja otorgaba 80 dólares. Toda la transición fue incrementar en un 50 por ciento la situación realmente ridícula que estaba padeciendo Chile.

No digo que no haya que buscar caminos nuevos, pero no debemos apegarnos a cosas que no responden a nuestra idiosincrasia. Los autónomos quedaron fuera del sistema. La Argentina tiene una economía informal mucho más grande que Chile.

Por último, en nombre de la democracia progresista y a pedido del señor diputado Pedro Figueroa, del Movimiento Popular Jujeño, quiero expresar nuestra posición de votar en contra el despacho, y plantear su vuelta a comisión para que todos reflexionemos acerca de las ventajas de hacerlo, para aportar las medidas que realmente conduzcan a una buena solución para los hombres y mujeres que hoy son jubilados, los que aún están trabajando o los que van a nacer en la Argentina. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Lamberto).- Tiene la palabra la señora diputada por Formosa.

Sra. Martín de De Nardo.- Señor presidente: en primer lugar quiero expresar las dudas generadas en mi espíritu en virtud de las exposiciones vertidas en la última parte de la sesión de ayer —especialmente entre las 24 y la 1 de la mañana— con respecto al Orden del Día N° 922. No obstante esas dudas, el anuncio de la opción y de dar prioridad a la libre voluntad de expresión de los trabajadores me provocó una alegría interna y una especie de tranquilidad, porque pensé que la discusión generada en el sentido de contraponer el sistema público de reparto con el de capitalización privada quedaba aparentemente zanjada.

Luego de las explicaciones brindadas por el señor miembro informante acerca de las modificaciones introducidas en esta Cámara de manera sorpresiva y a hora avanzada, me quedé tranquila pero triste. Pensé que la cuestión estaba salvada, que el sistema no había cambiado. No obstante, sí habían cambiado algunos moños, algunos collares, pero el perro seguía siendo el mismo. Esto es así fundamentalmente porque se dice que la opción de los trabajadores está garantizada por la eliminación de la palabra "obligatoria" —entre otras— en el artículo 1°, cuando se refiere a la

capitalización individual. Y para que el texto sea coherente, esto se complementa con algunas otras modificaciones.

Los señores diputados pueden ver que la modificación de la opción deja librada la forma de expresión y sus condiciones a la reglamentación. Esto nos genera una serie de dudas con respecto al sistema implementado, pero es indudable que posiblemente va a significar un condicionamiento esencial en las nuevas contrataciones laborales que se realicen a partir de la sanción de esta ley.

También se preguntó expresamente sobre el plazo para efectuar la opción, a lo cual se respondió que dicho plazo es indefinido y que la opción es irrevocable. La irrevocabilidad de la opción es un concepto que no se comprende y que no ha sido razonablemente fundamentado como para que sea de esa manera. Digo esto porque si en el texto del Orden del Día N° 922 se contempla el caso de personas que tienen una parte de sus aportes en el sistema público y otra en el sistema privado, no veo razones para que la opción sea irrevocable.

Por otra parte, como ya lo señaló el diputado preopinante, las diferencias de prestaciones que se ofrecen en el sistema público a aquellos que opten por el privado llevan a que por un lado se ofrezca un caramelo y, por el otro, una bolsa de caramelos. Es decir, se trata de una falsa libertad de opción que en realidad está condicionada y dirigida a que la mayoría se vuelque al sistema de capitalización individual.

No se entiende por qué la prestación compensatoria sólo se aplica a quienes hasta este momento han aportado al sistema de reparto público y no a aquellos que comienzan su relación laboral a partir de la sanción de este proyecto de ley y que opten por el sistema de reparto público.

Considero que es fundamental que se elimine el inciso b) del artículo 23 pues me parece irracional esta discriminación entre quienes en la actualidad tienen la mayoría de sus aportes en el régimen de reparto público y los trabajadores que inician una nueva relación laboral y opten por el sistema de capitalización privada o por el de reparto público, en particular teniendo en cuenta que el monto de los aportes en cuanto a los porcentajes sigue siendo el mismo.

Ciertamente las últimas propuestas de enmiendas han introducido modificaciones en el destino de los fondos de inversión. Se sostuvo que la proposición de elevar de 20 a 40 el porcentaje contemplado en uno de los incisos del artículo 73 estaba destinada a favorecer las economías

regionales. Ante ese anuncio pensamos que irían al chanchito algunos recursos más en beneficio de las provincias. Sin embargo, tal como está redactado el texto de la reforma, no garantiza en modo alguno que parte de esos fondos se destinen a inversiones que favorezcan las economías regionales.

Por otro lado, debo mencionar que compartimos plenamente otras modificaciones favorables a las provincias, como por ejemplo las referidas a las cédulas hipotecarias.

También se ha sostenido que se introducirán modificaciones en el sistema de comisiones, pero tales enmiendas no son expresas en el texto que se nos ha remitido.

Una de las modificaciones en el sistema de comisiones es la anunciada por el representante de la CGT, que importa un 2 por ciento más en el fondo a capitalizar.

Nos preocupan las diferencias que van a operar en las prestaciones de las contrataciones con las aseguradoras, y fundamentalmente aquellas que limitan las pensiones por fallecimiento del cónyuge cuando el deceso se produce a temprana edad. Entendemos que no es fácil la inserción laboral de la mujer en las condiciones actuales del mercado laboral, pero menos aun para aquellas mujeres que tienen varios hijos y cuya vida se desarrolla en el interior del país. Estimamos que la limitación de una prestación complementaria por tan sólo 24 meses en modo alguno cubre las necesidades y las contingencias que se presentan a la mujer ante el fallecimiento del esposo.

Una vez que tengamos en nuestro poder el texto definitivo, con esta modificación simplemente anunciada pero no expresada en las copias que se nos han hecho llegar en la madrugada del día de hoy, discutiremos más profundamente el tema y analizaremos la posibilidad de incorporar un artículo alternativo que asegure a la viuda en esas condiciones mejores prestaciones que las previstas para bajar el costo que representan los contratos con las compañías de seguros.

Estas modificaciones que nos acercaron produjeron una esperanza pasajera de poder llegar a un sistema mixto, para que la opción sea real y verdadera —no falsa— garantizándose la libertad de los trabajadores, que no debería estar condicionada en el inicio de la relación laboral.

Pero también se expresó en el recinto la posibilidad de un veto por parte del Poder Ejecutivo. El bloque Justicialista aseguró que estas modificaciones fueron consensuadas con el Poder Ejecutivo, por lo que pienso que la ley no será vetada, teniendo en cuenta que no será necesario porque la opción es realmente falsa y el sistema sigue siendo el mismo. Al que opte por el

sistema de reparto público se lo castiga con una prestación de permanencia complementaria del 0,5 por ciento y se les hace perder a quienes comienzan a aportar —sin razón valedera— la prestación que hoy prevé la ley para quienes hayan aportado al sistema de reparto público.

Por estas razones creo que son válidas las discusiones que se plantearon en el día de ayer sobre las ventajas o desventajas del sistema de reparto o de capitalización privada.

Hemos visto que en el ánimo de la mayoría de los señores legisladores existe la posibilidad de plasmar un sistema de pase paulatino al de capitalización privada, donde se garantice plenamente la intangibilidad de las prestaciones, la dignidad de los trabajadores pasivos y el mantenimiento del valor de sus aportes.

Por eso creo que estas modificaciones deberían ser analizadas en comisión. Pero no obstante eso, y ante la posibilidad de que se rechace un pedido en ese sentido, plantearemos en el debate en particular las modificaciones necesarias para que la opción sea real; es decir que no haya alteraciones en las prestaciones que reciban los trabajadores que opten por el sistema de reparto o por el sistema de capitalización individual.

Ayer se habló mucho sobre la quiebra del tema previsional y otros oradores —como el diputado Fontela— se refirieron al incremento de las recaudaciones, producto de las privatizaciones y del mejoramiento del sistema recaudatorio. No obstante eso, sabemos que la gravedad del sistema no puede desconectarse de la crisis general en la que se encuentra la economía argentina: desindustrialización, desocupación y subocupación.

Esto hace que el cuentapropismo sea cada vez mayor, y los que son arrojados del sistema al cuentapropismo hacen que el problema de la evasión, lejos de resolverse con un sistema u otro, vaya creciendo, como ha crecido en Chile, donde, a 12 años de aplicación del sistema, cada vez son más los que están fuera.

No obstante, las modificaciones que ha propuesto la bancada oficialista y que fueron explicadas en la faz impositiva por el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, posiblemente nos lleven a mejorar el tema de la evasión en el sector de los trabajadores autónomos.

También es cierto que hablar de sistemas puros, privados o públicos, es difícil. Aun en los Estados Unidos se reconoce que el Estado no

puede desentenderse del tema previsional. Creo que éste es un poco el espíritu del proyecto porque en última instancia el Estado es el que brinda las garantías —algunas de las cuales se han modificado ahora y se ha eliminado la tasa compensatoria— y es el que va a quedar con las obligaciones en tanto que las ganancias van a ser privadas.

En este recinto se han hecho asimismo reseñas sobre los sistemas aplicados que no es necesario reiterar: un sistema de capitalización pública a partir de 1904, la unificación de las cajas en el Instituto Nacional de Previsión Social en los gobiernos peronistas y el establecimiento del sistema de reparto público por las leyes 18.037 y 18.038, cuyas falencias todos reconocemos aunque no estamos seguros de que siga siendo deficitario después de 1991 y 1992, como lo han presentado algunos señores diputados y también los medios de prensa. En efecto, sabemos que el aumento de las recaudaciones ya está poniendo al propio sistema vigente en condiciones de dar un incremento considerable a los jubilados, que hoy padecen la situación que todos conocemos en nuestro país. Pero también es cierto que esos fondos que han ingresado y que se han escamoteado del acuerdo con las provincias — porque el 15 por ciento debía ser destinado a ellas y pasó al sistema de seguridad— están sirviendo para que el Estado constituya una reserva con el fin de paliar parte del déficit que representará la transición, déficit que en Chile todavía se está sufriendo y que en la Argentina, como se ha dicho aquí correctamente, continuará no solamente en los años que restan del siglo que fenece sino posiblemente en los primeros veinte y pico del siglo que viene.

También quiero destacar que el cambio del sistema es fundamentalmente un cambio de filosofía. El sistema de reparto se basaba en la solidaridad y en un pacto intergeneracional que aseguraba que los activos contribuyeran a pagar los haberes de aquellas personas que pasaban a la situación de pasivos y que con su esfuerzo habían propendido a la grandeza del país. El nuevo sistema considera a la prestación previsional como una condición de una transacción o contrato individual donde naturalmente van a verse perjudicados aquellos trabajadores de menores ingresos. Me refiero a los trabajadores en relación de dependencia y fundamentalmente a los autónomos.

Sabemos también que la situación de crisis por la que pasó el sistema de reparto —producto de la crisis general del país, de las malas administraciones y fundamentalmente de la gran evasión— ha hecho que se presentara un

sinnúmero de propuestas en este Congreso. Entonces, no es cierto —como se dice— que no existe una propuesta alternativa: la hay ahora y la hubo siempre a través de las iniciativas de los señores legisladores, de la propia Secretaría de Seguridad Social en los comienzos de la gestión de este gobierno y también de una comisión especial designada en 1991 donde el bloque de la mayoría se pronunció fundamentalmente por el sistema de reparto, que mantiene el proyecto del Cofepres, que es en realidad el proyecto elaborado por los presidentes de los organismos previsionales de todas las provincias argentinas.

También es cierto que en el diálogo convocado por el gobierno se han expresado todas las fuerzas políticas, así como lo han hecho las distintas entidades interesadas directamente en el tema —mayoritariamente temerosas— en las reuniones que se promovieron desde la comisión ante el nuevo sistema que se propone.

Queremos destacar algo que ya se dijo en este recinto con respecto a las condiciones que requiere el éxito del sistema propuesto, que exige una rentabilidad muy alta para brindar prestaciones acordes con el salario y acercarnos a los porcentajes que hoy se pagan, que difícilmente superan el 50 por ciento del haber del trabajador en actividad.

También se habla de que la supervisión estatal sobre las administradoras debe ser rigurosa porque cualquier falla en ella —así como cualquier conflicto social o político o aun los hechos catastróficos de la naturaleza— puede modificar las bases de la estabilidad fundamental que requiere este sistema para su funcionamiento.

Por tales razones consideramos que hacer nuestro el proyecto que es aplicado en Chile hace más de diez años significa trasladar un modelo a una realidad totalmente diferente, a condiciones políticas y sociales distintas. Esto hará más difícil su aplicación en nuestro país porque aquí será muy complejo resolver el problema del déficit de la transición y más aun el mantenimiento del pago mismo de los haberes previsionales actuales durante varias décadas, es decir, hasta que se solucione el problema del déficit.

Otra de las dificultades que ya se plantearon en Chile —y que también se esbozó en este recinto— es la enorme cantidad de recursos que representa para las administradoras este préstamo donde el que presta la plata paga la comisión. Es insólito que quien preste el dinero para la inversión encima pague la comisión. Habrá una importante masa de dinero disponible durante largos años, y será difícil que en nuestro mercado interno se den las opciones de inversión suficientes para que represente si-

quiera el 60 o el 70 por ciento de la masa recaudada. Esto haría que con el tiempo los trabajadores argentinos, y fundamentalmente el ahorro proveniente de los aportes al sistema previsional, vayan en realidad a ser causa de empresas o negocios importantes en otros países, estando lejos de producir un crecimiento económico que fundamentalmente se basaría en un crecimiento de la inversión en las pequeñas y medianas industrias, que han sido el motor de la economía argentina y que lo son actualmente a pesar de las dificultades que tienen.

Estas son las consideraciones que merece este proyecto en general, debiendo sumar las dudas que se plantean sobre el proyecto en particular, sobre todo en la discriminación que se presenta para los trabajadores que opten por uno u otro sistema, así como la dolosa discriminación que sufren los viudos o viudas jóvenes fundamentalmente las viudas -como se dijo aquí- cuando son madres de varios hijos. Y no podemos dejar de decirlo: todo ello nos lleva a entender esta cuestión en el marco del cambio que en materia de política económica se dio en el país en los últimos 50 años.

En los últimos 50 años el sistema del banco público liderado por el Banco Industrial y el Banco Hipotecario financió la acumulación de capitales que fueron pieza clave en la industrialización incipiente en nuestro país, donde el crédito no fue dejado al criterio de los directores de las entidades bancarias sino que fue correctamente orientado y controlado por el Estado para la promoción de la pequeña y mediana industria.

A partir de 1977 el crédito se utiliza para el acaparamiento por parte de grupos privados que producen el fenómeno de la especulación -fue la época de la llamada "patria financiera"- y que fueron los que manejaron los resortes políticos y económicos de nuestro país. Más tarde llegamos al nuevo proyecto de reforma del Estado donde la especulación privada es cambiada por un nuevo juego, que es el juego de la Bolsa.

De golpe nos vemos sorprendidos los argentinos, pues los informativos nos hablan de las mayores o menores cotizaciones de las acciones, cuestión que está bastante alejada del pensar, del sentir y de los bolsillos del 90 por ciento de los trabajadores argentinos. También de golpe nos vemos inundados por empresas que cotizan en Bolsa. Pero en realidad son muy pocas, no llegan a superar el número de cien. Así que en definitiva los recursos de los trabajadores van a parar a la Bolsa, por lo que la cotización de las acciones va a depender de la propia voluntad de los que manejan el juego —complicado para el pueblo—,

quienes están lejos de las necesidades populares y fundamentalmente del propio razonamiento cotidiano.

El aportante poco sabe o entiende sobre cotización de acciones en Bolsa, pero estoy seguro que los que juegan en la Bolsa serán los mismos de las administradoras, los mismos dueños de las empresas y quienes van a determinar la suba, baja o estabilización de una acción, y la orientación del crédito barato y a largo plazo que se genera a través de este ignominioso sistema.

El proyecto en cuestión persigue fundamentalmente dos objetivos: consolidar las actuales estructuras del mercado de capitales y de trabajo, signado este último por elevados porcentajes de desempleo abierto, subocupación visible y precarización laboral, que sumadas representan más del 30 por ciento de la población económicamente activa. Seguramente estas personas quedarán desplazadas de ambos sistemas. Digo ambos porque no aportan al sistema de reparto y son poco atractivos para el régimen de capitalización privada.

Por estas razones podemos decir que el sistema económico imperante ha arrancado fundamentalmente con una modificación en el equitativo equilibrio deseable entre la fuerza del capital y la del trabajo, e implica nada más y nada menos que seguir bajando el costo, pero no el costo del seguro —como se dijo aquí—; lo que se quiere seguir bajando es el denominado costo argentino, es decir, las condiciones de vida de los trabajadores, pero no solamente de los activos sino que ahora apuntamos a las nuevas generaciones de trabajadores pasivos o de jubilados, para quienes el 82 por ciento va a pasar a la historia.

Se dice que la movilidad está asegurada, pero hasta cierto punto. Lo peor es que, llegado el momento de jubilarse, no sabemos si habrá suficientes recursos en el Estado para hacerse cargo de los posibles quebrantos que pudieran sufrir las administradoras privadas. Porque el Estado responde, pero, ¿qué pasa si la mayoría de las administradoras quiebra? Quién va a responder?

Estas y otras dudas hablan a las claras de que estamos ante un sistema nuevo para pocos. La nota fundamental es la exclusión social, con un altísimo porcentaje de gente, que quedará afuera del sistema previsional. Por eso se incluyen las prestaciones no contributivas en esta norma. Es decir, tanto sabemos que esto no va a funcionar, que en la propia ley regulamos las prestaciones gratificables no contributivas o asistenciales, para paliar en parte lo que va a suceder

Como dije, ello será la enorme expulsión del sistema previsional, de innumerables argentinos cuyos derechos sociales y fundamentalmente previsionales no solamente no los garantizamos en la actualidad sino que los ponemos en duda y hasta los tornamos irrisorios, irrealizables.

Sancionaremos este proyecto de ley de manera abrupta, irresponsable y apresurada, aun reconociendo la buena voluntad de sus mentores. Consideramos que dista mucho de representar un cambio significativo. Menos aun creemos que representa una solución para los actuales y los futuros jubilados.

Con estas expresiones del análisis en general del sistema concluyo mi intervención sin perjuicio de que durante el tratamiento en particular trataré de introducir algunas modificaciones que no fueron previstas en las distintas propuestas que se han hecho, a fin de transitar por un camino más justo, razonable y, fundamentalmente, que contemple adecuadamente a los trabajadores y a sus contingencias sociales, representando así un avance y no un retroceso en el sistema previsional argentino.

Sr. Presidente (Lamberto). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires,

Sr. Mendoza (M.). - Señor presidente: no voy a analizar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, porque teniendo en cuenta las exposiciones de los señores diputados Moure, Martínez Raymonda, Fontela y la de la señora diputada que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, seguramente reiteraría conceptos que ya se han dicho.

Simplemente voy a señalar algo que es importante que los legisladores del oficialismo tengan muy en cuenta. Hace una semana los diputados que integramos los bloques de la oposición hemos estado analizando en un marco de cordialidad todos los proyectos que se han presentado sobre este tema en los últimos seis o siete meses, es decir, desde que el Ejecutivo remitiera a nuestra consideración su iniciativa.

Uno de nuestros proyectos figura en el Trámite Parlamentario N° 77, del 19 de agosto de 1992. Sin embargo, como muchos otros, fue "cajoneado". Nunca se dio la oportunidad — como ocurrió con los que presentaron otros bloques— de que fuera considerado.

Con el transcurrir del tiempo el oficialismo apeló a todos los medios a su alcance para tratar de mejorar su proyecto, que nosotros diagnosticamos -en esto coinciden los diferentes bloques y la ciudadanía en general- como nefasto porque afecta la riqueza más grande que tiene el país: el ser humano. Este debe ser privilegiado por su condición de tal, porque se trata del hombre y de

la mujer, que a través de los siglos, con su esfuerzo personal, han llevado a la situación actual al mundo donde la tecnología ha reemplazado el esfuerzo físico de las personas.

Había dicho que contábamos con dos proyectos. Uno de ellos era similar al que presentaron otros colegas y consistía en un sistema de reparto que implicaba la modificación de las leyes 18.037 y 18.038. Allí proponíamos que los únicos que deberían controlar, fiscalizar y decidir eran los propios interesados, tal como lo establece el artículo 14 bis y otros de la Constitución Nacional.

El Instituto Nacional de Previsión Social —que en un momento dado contó con la participación de la clase pasiva— hace un año y medio que está intervenido. Desde ese momento el jubilado, el trabajador, no tienen voz ni voto en las decisiones que allí se toman. Teniendo en cuenta lo que acabo de comentar, en el proyecto a que hice referencia habíamos realizado una innovación, autorizando la creación de un banco, el que debería estar controlado por la clase pasiva. Por primera vez dejamos establecido en esa iniciativa inédita, que habría un directorio constituido por 12 personas, o las que fueran, con representación además del Instituto, del ANSES o del SUSS, pero siempre con mayoría vinculada al sector pasivo. De esta forma los jubilados podrían presidir el directorio y tomar decisiones en beneficio de todos sus pares: los tres millones y medio que andan luchando desde hace casi ocho meses por los alrededores del Honorable Congreso de la Nación, solicitando lo que se les ha negado, es decir, un haber mínimo que les permita vivir.

Lo que llama la atención es que un gobierno popular y social -que no es más que la prolongación de aquel que se inició allá por el año 1945 y qué feneció en 1955 por un injusto golpe de Estado- no haya otorgado a los jubilados todos los beneficios que les corresponden — beneficios que sí contempló aquel gobierno, depuesto en 1955— a través de una transformación que incluyó la reforma constitucional de 1949 —luego derogada— y que puso en vigencia todos los derechos inherentes a los seres humanos.

Fue en ese momento cuando el trabajador pudo obtener todo aquello que desde fines del siglo pasado y hasta 1943 le había sido negado. Gracias a dos preclaros personajes - Juan Perón y Eva Perón— se consiguieron una serie de leyes que protegieron al trabajador a través del tiempo: la protección del trabajador a través de las convenciones colectivas, las comisiones paritarias y el derecho a la huelga justa.

También se entregaron las obras sociales a los sindicatos pues son sus dueños absolutos.

Ustedes podrán interpretar que lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con el proyecto en consideración. Pero yo sostengo lo contrario, porque gracias al crecimiento de todos los sindicatos se realizaron obras que los gobiernos no pudieron concretar por los déficit existentes. Me refiero a obras vinculadas con el hospital público, la educación y la recreación.

Por ello quiero recordar que el origen y las sucesivas transformaciones de la previsión social tienen una historia que comienza a fines del siglo pasado. Pero, ¿cuándo se consolidaron? Cuando en 1943 comenzó el proceso que culminó con su inserción en la Constitución de 1949. Con anterioridad muchos sectores de la sociedad argentina habían obtenido beneficios unilaterales, en virtud de la sanción de diversas leyes. Un ejemplo de ello fue la ley 1420, de educación. Tampoco podemos dejar de reconocer a aquellos gremios que entonces eran combativos —como el ferroviario, el bancario y otros— y que lograron sus cajas de previsión.

Así llega el período que mencioné antes: el que se extiende desde 1943 a 1955. Fue entonces cuando tuvo que aparecer alguien que diera a la clase trabajadora, que había estado postergada durante casi un siglo, lo que siempre se le había negado: la consideración que merece, ya que como seres humanos que piensan y razonan los obreros tienen derechos vitales como el de alimentarse, educarse y tener una vivienda. Todo esto se consigue con el advenimiento de aquella época en la que el Justicialismo de aquel entonces —no el de ahora— consiguió lo que quizás no habría podido lograr sin la aparición en el espectro político del hombre que he mencionado.

Por eso, como legislador y como ciudadano, me duele que colegas vinculados al sindicalismo y a la clase pasiva hayan aprobado el 24 de febrero último —fecha memorable para el partido oficialista, ya que ese día se cumplían 40 años de un triunfo— ese dictamen en forma irregular y bochornosa, después de haber analizado la iniciativa durante mucho tiempo. Creo que esto no le hace bien a la imagen que debe guardar esta Honorable Cámara de Diputados; cabe aclarar que hasta ahora el Poder Legislativo está indemne de toda sospecha, cosa que no ocurre con los otros poderes.

Entonces, ¿cómo puede ser que quienes han recibido un reconocimiento de la sociedad y hoy representan al partido de gobierno hayan sacado en los últimos meses ciertas solicitudes?

Tengo una aquí firmada por el secretario general de las 62 Organizaciones y su secretario adjunto

en la cual se repudia este cambio que se quiere introducir en materia de previsión social en que no se crea un sistema de reparto donde todos pongan y en forma proporcional y se distribuye lo que recauda.

Una de las declaraciones de las 62 Organizaciones expresa su intención de impedir que el sistema previsional se transforme en un gran negocio de grupos privilegiados y manifiesta que la ley debe garantizar las jubilaciones y pensiones, de las que el Estado no se puede desentender.

Hubo otras solicitudes firmadas también por esos mismos representantes gremiales que se dicen estar incluidos normativamente dentro del oficialismo. Las tengo en mi poder y están en los diarios.

Si los integrantes de la CGT y de las 62 Organizaciones marcharon junto con los jubilados el día que hicieron su protesta, ¿cómo puede ser que hayan votado favorablemente y en forma irregular esta iniciativa, circunstancia que por otra parte resultó ser un bochorno que perjudicó a esta Cámara?

Eso no le hace bien al Parlamento, porque quienes ocupamos una banca en este recinto somos representantes del pueblo argentino, sin importar la cantidad de ciudadanos que representemos; lo que interesa es que todos sean respetados por medio de nuestra representatividad.

Admito que quizá intereses sectoriales no les hayan permitido efectuar sus ponencias en beneficio de la clase pasiva, pero me pregunto si por una vez no sería posible dejar de ser verticalista, y de responder a la conducción de un sector, de un partido o de un movimiento cuando está en juego la seguridad del ser humano, en este caso cuando llega la edad de la senectud.

No voy a repetir lo que han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra; pero es importante que quede debida constancia de estos hechos y pienso que si hoy estuvieran presentes muchos de los que ya no están, no admitirían que se hayan dictado leyes como la de privatizaciones o la de convertibilidad, pues costó mucho lo que se logró en los años 49 y 50, llevar a cabo la nacionalización del Banco Central, teléfonos y otras empresas. Hoy se regala como ya se regaló, se vendió y se malvendió. Esto es producto de una imposición que viene desde el exterior porque ésa era la única manera de llegar a probar el plan Brady. El 7 de abril próximo pasado el señor Cavallo, que quizá sea un

representante de la banca extranjera, consiguió cerrar las negociaciones por el ingreso a ese plan. Se podrá decir que esto nada tiene que ver con el proyecto en discusión, pero sí guarda relación con los fondos que pueden destinarse a la previsión social.

Al haber logrado ese acuerdo para ingresar al plan Brady quedamos bien, ya estamos en el primer mundo y nos van a respetar. Sin embargo, según el arreglo al que se llegó debemos pagar 3.000 millones de dólares anuales durante 30 años, o sea, 90.000 millones de dólares. Ese lapso de 30 años es lo que requiere este proyecto de privatización del sistema jubilatorio en nuestro país.

¿Qué dirán de nosotros allá por el año 2024 las generaciones que nos sucedan, cuando muchos de nosotros quizá ya no estemos? De acuerdo con ese programa que está inserto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no se ofrece garantía de ningún tipo a los futuros jubilados.

Queremos destacar lo expresado por los señores diputados Martínez Raymonda, Moure y Fontela, aunque voy a citar un ejemplo diferente del que mencionó el primero de ellos sobre un trabajador que gana 1.000 pesos por mes. Acá se acabó el 70 por ciento móvil para el pensionado y el 82 para el jubilado al cese de su labor. Jamás se logrará una jubilación digna para los pasivos porque eso pasó a otra historia.

No cabe duda de que indefectiblemente se sancionará este proyecto de ley, que desde ya nosotros rechazamos, y se creará el aporte medio previsional obligatorio, el AMPO, que se obtendrá por una división del promedio de los aportes del sistema de capitalización -ingresando cada seis meses- por el promedio mensual de la cantidad de los afiliados que aportan de modo regular. No entiendo cómo se pueden hacer proyecciones para el futuro mediano o inmediato en estas condiciones. Se sostiene que se otorgarán 2,5 AMPO, lo cual equivaldrá a un 10 por ciento en su prestación previsional.

Quisiera citar el caso de un joven de 18 años que va a cobrar mensualmente durante 47 años 500 pesos promedio.

Cuando llegue a los 65 años, la jubilación ordinaria acumulada en su cuenta de capitalización individual se constituirá no a partir de un descuento del 11 por ciento sino de una disminución del 30 al 35 por ciento de su aporte. Mejor dicho, iba a ser así hasta antes de lo expresado por el señor diputado González Gaviola e incluso por el señor diputado Sueyro, según los cuales ese descuento será ahora del 9 por ciento -mérito de los sindicalistas, que aplaudo-, aunque

no se aclara qué interés percibirá dicho descuento.

Esta es una inquietud que plantearemos en la discusión en particular. Sabemos que internacionalmente los intereses rondan el 2 o 3 por ciento. En consecuencia, podemos hacer una proyección para este joven que se va a jubilar dentro de 47 años. Se le descuenta el 11 por ciento, pero se le quita el 3 por ciento en concepto de comisión y gastos. Entonces, en vez de quedarle 31.020 pesos le quedarán 22.560 al cabo de 564 meses. A un interés promedio del 3 por ciento llegamos a la cifra de 676 pesos de intereses. El capital más los intereses nos da 23.236 pesos. ¿Pero quién nos garantiza que no va a ocurrir nada en todo ese tiempo en materia de paridad cambiaria?

Entonces, habla bien el proyecto de una renta vitalicia que estará a cargo de las administradoras, porque el gobierno no quiere asumir ese compromiso. En este aspecto, hicimos un cálculo que arroja las siguientes proyecciones. Siguiendo con el hipotético caso de este joven que se jubilará dentro de 47 años, durante los diez primeros años su haber será de 193,63 pesos; si viviera cinco años más sería de 143 pesos y si viviera veinte años más, sería de 96,50 pesos.

¿Pero qué es lo que pasa? El Estado, de acuerdo con el artículo 124, garantiza una rentabilidad mínima calculada en dos tercios del AMPO -55 pesos-, por lo que el jubilado percibirá 201 pesos. Pero la prestación básica universal más la prestación compensatoria no podrá ser inferior al 40 por ciento del salario medio de la economía establecido por la ANSES, de modo que si el salario promedio es de 500 pesos, el haber mínimo ascenderá a 200 pesos.

Este joven que mañana será un anciano tendrá la oportunidad de optar por la jubilación que le da el Estado, es decir la jubilación de la PBU, pero para ello deberá transferir el saldo de su cuenta de capitalización individual al Estado.

¿De qué sirve que ese joven que ha aportado tanto llegue a esa situación, por más que el interés aumente, si el país no entra en la revolución productiva y en el salarizado, que fueron las banderas del señor presidente de la Nación en 1989, cuando decía que ni bien asumiera su gobierno nuestros jubilados y nuestros obreros se beneficiarían porque tendría lugar de inmediato una revolución productiva? Y hoy vemos que la industria, no la industria grande sino la media y pequeña, se ha achicado. Basta ir por el conur-

bano de la provincia de Buenos Aires para advertir que se han cerrado más de 15.000 fábricas. La inflación existe, aunque encubierta. El obrero no puede vivir con el salario de hoy. Con esto no quiero hacer una crítica a ningún sector; es una reflexión que me hago.

En 1972 fui vocal de una agrupación de las 62 Organizaciones, de profesionales y técnicos, y el señor diputado Ruckauf —en aquel entonces ministro de Trabajo— nos dio la personería gremial. Ahora me preocupa el otro trabajador, el que cuando se sancione esta ley tendrá 45 años y arrastrará 20 años de aportes; él tendrá la posibilidad de aportar otros 20 años a uno u otro sistema.

Por eso tengo que criticar el hecho de que la mayoría autora de este proyecto no nos haya hecho llegar con 24 horas de antelación estas modificaciones, porque vemos que algunas no están tan desacertadas. En sus comienzos, el proyecto del Ministerio de Economía era el de la jubilación privada. Gracias a la oposición, que con su manera lógica hizo ver que ése no era el camino —y Dios mediante ayer la CGT pudo hacer una contribución—, se introdujeron dos modificaciones muy importantes. En el futuro al trabajador le iban a considerar el 7,5 por ciento de su haber, y ahora lo han elevado al 9 por ciento; por lo menos ya es algo.

Pero repito lo que dije antes: lo que falta es completar el sistema para saber a qué interés se van a capitalizar esos fondos en las administradoras o en el Banco de la Nación Argentina. Nos parece perfecto que se haya incorporado a ese banco como una administradora más pero, para mayor seguridad, sería mucho más importante que el Banco Central, por intermedio del Banco de la Nación, sea garante ante todas las eventualidades que puedan ocurrir en las empresas privadas. Quizás muchas de ellas ya son dueñas de todas las que se han privatizado y van a tener el monopolio de todo, hasta de la sangre de los trabajadores. Por eso también se van a asociar a los intereses banqueros y extranjeros.

¿Cómo podemos estar contentos ante la perspectiva de la sanción de esta norma? Estamos resignados e indefectiblemente tendremos que aceptarla, porque no nos cabe otra posibilidad. Para fortuna o desgracia, la democracia es esto: la mayoría es la que gobierna y la minoría la debe acompañar. Pero también la minoría tiene la obligación de exponer sus propuestas y hacerle ver a la mayoría que no puede gobernar sin su aporte o su consejo, y mucho menos sin escucharla. Esto fue lo que se dejó de hacer en

ambas comisiones, donde no se escuchó a quienes tenían otras alternativas.

No sé para qué continuamos con esto porque en realidad es algo que está terminado. De todas maneras, no podemos dejar de preguntarnos cuál será el futuro de los actuales jubilados, sobre lo que ya expusieron los señores diputados preopinantes. Si tomamos en cuenta una prestación básica universal de 202 pesos y una prestación complementaria de 198 pesos —que suman 400 pesos— veremos que todo es relativo y no se sabe cómo va a terminar esto.

Hablo con todo respeto, y al mismo tiempo con dolor, en nombre del bloque del MODIN. Si tuviera que hacerlo, no me avergonzaría suplicar a la bancada oficialista para que razone y reflexione. Existen hechos en la historia que deberíamos tomar como punto de referencia.

Ya en la antigüedad los griegos fueron famosos por su estudio sobre la equidad. Entre ellos podemos mencionar a Platón, Aristóteles y muchos más. Ellos nos legaron obras tales como *La República*, y *La Ética*. Es necesario actuar con ética y con un principio moral.

A ello se suma otro hecho importante que la historia no puede olvidar: el advenimiento de Nuestro Señor Jesucristo, quien en uno de sus Diez Mandamientos —no los voy a repetir porque todos los conocen— dijo que debemos respetar a nuestros semejantes como a nosotros mismos.

Al elaborar este proyecto de ley, impuesto por el Fondo Monetario Internacional y mejorado por nosotros, se olvidaron de tener presentes las perspectivas que nos brinda la historia. Por ejemplo, no fueron tenidas en cuenta las enseñanzas que cabría recoger de la Revolución Francesa, cuando por primera vez en la historia mundial ese maravilloso país que es Francia condenó la esclavitud del hombre por el hombre. Y no podemos olvidar a quienes fueron sus ideólogos, hombres como Montesquieu y Voltaire. De *El contrato social*, de Rousseau, se valieron muchos países y repúblicas que conformaron sus Constituciones...

Me acaba de acotar el señor diputado Alsogaray que eran liberales; lo acepto, pero era otra época, porque los liberales de hoy parece que fueran del Movimiento Nacional Justicialista. (*Risas y aplausos.*)

Vale la pena recordar el esfuerzo que realizaron todos aquellos hombres que lucharon en nuestro país desde fines del siglo pasado hasta el advenimiento del Movimiento Nacional Justicialista. Estoy hablando de hombres como

Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre, a quien hace pocos días le rindieron homenaje los jubilados al sentirse defraudados por los legisladores que dieron el quórum. Pero quizá, según lo que manifestaron algunos de ellos, fueron engañados, y me congratulo de que lo digan.

También quiero mencionar a hombres como Crisólogo Larralde, quien en la Convención Constituyente de 1957, junto con otros legisladores, propició la sanción del artículo 14 bis, que no voy a leer porque todos lo conocen. Ahí se contemplan cuestiones que atañen a la protección de los trabajadores sin distinción de nacionalidad; ahí se habla de la previsión social, el derecho al trabajo, el derecho de huelga, en fin, todos los derechos que necesita el hombre para preservar su destino.

Ya expliqué lo ocurrido con el advenimiento del justicialismo. Me complace —y lo leí al pasar— que los conceptos de los incisos a) y b) del artículo 73 hayan sido modificados. En el proyecto original se decía que las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones podrían invertir el activo del fondo administrado en títulos públicos emitidos por la Nación hasta el 80 por ciento, y en títulos emitidos por las provincias hasta el 30 por ciento. Ahora lo han rebajado al 50 o 30 por ciento respectivamente. Por lo menos, algo se ha conseguido.

Como bien señalaron varios señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra, este proyecto no puede ser aprobado ahora; debe ser analizado por todos los señores legisladores, muchos de los cuales —y digo esto con el respeto que me merecen— ni siquiera lo han leído, pero sí han levantado la mano cuando fue el momento de votar la consideración del proyecto.

Pienso que si estos señores legisladores analizan profundamente el proyecto, se darán cuenta que tanto la justicia social como otros beneficios se encuentran cercenados. Se trata de la última joya, como dijo un ex presidente, que le queda a este gobierno para rematar.

Sr. Presidente (Lamberto).— ¿El orador se refiere a la misma persona que hoy elogió el buen funcionamiento del programa económico?

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Santín. - La Presidencia no puede intervenir en el debate.

Sr. Mendoza (M.).— Nosotros somos partidarios de un proyecto por el cual se dé un mayor beneficio al jubilado de hoy y al del futuro.

Además de ser nulo, este proyecto para nosotros no cambia nada con respecto a los vicios del

sistema anterior, que fue mal controlado. Sabemos muy bien que tanto la deuda externa como la de las cajas previsionales no son culpa de éste ni del anterior gobierno sino que vienen de hace mucho tiempo, aunque también ambos gobiernos han colaborado para que este proceso se acreciente.

Si los interesados son los jubilados, los trabajadores, la patronal, ¿por qué en lugar de cambiar el nombre del Instituto Nacional de Previsión Social por el de ANSES, SUSS o Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensión —lo cual provoca erogación al Estado para pagar a los funcionarios públicos— no se constituye un ente integrado por los propios interesados? Tengan la plena seguridad de que aunque se trata de personas de avanzada edad, no todas están arterioscleróticas. En la historia hubo muchos ejemplos de este tipo: De Gaulle, Perón, Lisandro de la Torre, Einstein, etcétera. Inclusive en esta Cámara hay señores diputados que tienen más de 60 años de edad y están capacitados intelectualmente para elaborar proyectos. Esta capacidad intelectual no depende de la edad de una persona; se puede ser intelectual a los 20 o 30 años y también conservar a los 80 o 90. ¿Por qué no le damos la oportunidad a la clase pasiva para que ellos controlen que los fondos no se desvíen, como ha ocurrido hasta ahora?

Consideramos que este proyecto es inconstitucional y que no tiene nada de universal. Además, creemos que la deuda previsional está relacionada con la deuda externa, como señalé anteriormente. El Estado tiene que pagar una deuda de 90.000 millones de dólares, a razón de 3.000 millones por año durante 30 años. Esto, por si alguien no se ha dado cuenta, implica una deuda de 29.000 millones de dólares. Pero queda otra deuda que no se conoce y que se está amortizando por 700 millones de pesos anuales. Esto es lo que no se dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Ir en busca de fondos que no puede obtener porque no se ven las mejoras de la pequeña y mediana industria y del campo, que podrían crear fuentes laborales y un mercado competitivo a través de la implementación de líneas de crédito.

El proyecto en consideración se refiere a un 30 por ciento destinado al otorgamiento de créditos.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Hugo Bartolomé Rodríguez Sañudo.

Sr. Mendoza (M.). — Hace pocos días nosotros presentamos otra iniciativa en la que se hablaba de un 25 por ciento para créditos a la agricultura y la ganadería, un 25 por ciento para la pequeña y mediana industria, y un 10 por ciento para los créditos para la vivienda. Si el año que viene podemos juntar 4.000 millones de dólares, habría 400 millones para comenzar a construir viviendas. Indudablemente esto beneficiaría a la clase humilde, abriría fuentes de trabajo y permitiría que el país comenzara a moverse. Pero, tal como se plantea aquí, es imposible. El dinero que va a las empresas privadas terminará rifándose, pero ¿quién lo hará?

Seguramente los financistas que -tal como lo señalé con anterioridad- son los dueños de las empresas privadas. Eso es lo que tenemos que evaluar, pero sin imputarlo a las integrantes del bloque oficialista sino al conjunto de economistas que siguen estrictamente las imposiciones del Fondo Monetario Internacional.

Como argentino siento una gran tristeza -seguramente me van a dar la razón- porque hace poco el señor Rhodes señaló que nos teníamos que apurar en aprobar este proyecto y todo el mundo se puso contento, menos el pueblo y nosotros. Para colmo se lo condecoró, cuando ése es un privilegio reservado para personas importantes que sirven a la causa patriótica. Como si todo esto fuera poco, la condecoración que se le otorgó fue la Orden de Mayo del General San Martín. Sinceramente es para llorar: ése es el premio que le dimos porque nos otorgaron un crédito. Lo cierto es que nos van a seguir estafando, y no sólo a nosotros sino a todos los países sudamericanos a los que el Fondo tiene agarrados con ese plan maldito.

El plan de convertibilidad nos ha destruido lenta y encubiertamente con esta pseudoestabilidad. Veremos qué sucede dentro de dos o tres años. Probablemente a algunos les produzcan risa estas afirmaciones, pero ya veremos cuál es la realidad. Si por una de esas casualidades pudiéramos arribar a algún acuerdo entre los legisladores, que no apoyamos esta iniciativa, probablemente podríamos remitirla a comisión, que es el ámbito en el que se lograría cierto consenso como para que esto fuera aprobado por unanimidad. Si así no ocurriera, es importante tener en cuenta que el poder económico y político en el que se sustenta este gobierno olvidó una realidad de la que los seres humanos, por más dinero que tengamos, no podemos escapar: todos vamos a morir, porque Dios nos hizo a todos mortales. Entonces, ¿de qué sirve acumular, tanto poder político y económico, si esa realidad no puede ser

modificada con dinero? De lo contrario, muchos tiranos volverían de la eternidad. La vida es finita; pensemos en eso y en nuestros semejantes.

También quiero recordar unos versos que escribió un folclorista argentino que fue velado en el Congreso y que nos honró a los argentinos por todo el mundo; me refiero a don Atahualpa Yupanqui. Tendríamos que tratar de modificar el proyecto en tratamiento para convertirlo en algo más equitativo y solidario. Si no, se cumplirá lo que don Atahualpa decía: "Las penas son de nosotros / las vaquitas son ajenas."

Tampoco puedo dejar de recordar a un extraordinario autor de letras de tango, que allá por el año 1935 vivió todo lo que significó la década infame; y así fue como escribió un tango maravilloso.

Con la autorización de la Presidencia me permitiré recordar una parte de su letra, sin que ello implique alusión personal a los señores diputados. Dice así: "Siglo XX cambalache, problemático y febril —espero que no lleguemos a eso—, "... el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Los inmorales nos han igualado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey que el que juega en la timba...". Y en la timba van a jugar las administradoras privadas.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Mendoza (M.). — Señor presidente voy a concluir citando expresiones de aquella Maravillosa jefa espiritual del justicialismo Eva Perón-, quien en 1950 dijo: "Luchamos por la independencia y la soberanía de la patria, por la dignidad de nuestros hijos y de nuestros padres, por el honor de una bandera y por la felicidad de un pueblo escarnecido y sacrificado en aras de una avaricia y un egoísmo que no nos han traído sino dolores y luchas estériles y destructivas. Mi dignidad de argentina y mi conciencia de ciudadana se subleva ante una patria vendida, vilipendiada, mendicante ante los mercaderes del templo de las soberanías y entregada año tras año, gobierno tras gobierno a los apetitos foráneos del capitalismo sin patria y sin bandera".

Si Eva Perón viviera vería que quienes son tutores de todo esto que está pasando son sus continuadores (*Aplausos*)

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. - Señor presidente...

Sr. Corchuelo Blasco. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Estévez Boero. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. -Señor Presidente: he pedido la palabra para hacer mención a lo dicho por el señor diputado Martín Mendoza, quien cerró estentóreamente su exposición aludiendo a nuestra bancada.

Nuestro bloque y nuestro partido político han venido planteando en el país la actualización de sus propios basamentos doctrinarios y de ejecución de políticas. Pero el señor diputado Martín Mendoza ha hecho referencia a Eva Perón y todos conocemos su vocación histórica justicialista.

Lo único que puedo decir es que Eva Perón nunca trató de romper el estado de derecho, la libertad y la democracia en la Argentina, como sí lo intentó el mentor del partido político al que pertenece el señor diputado Martín Mendoza.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo), - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. - Señor presidente: en primer lugar deberíamos decir que en horas matinales se trabaja por lo menos con mejor humor; pero dejemos los humores a Paracelso.

En este importante debate se confrontan distintas filosofías. Existe una que se refleja en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para la nueva sistematización de la previsión social en el país. Otra filosofía es la que hemos defendido, con puntos de vista diferentes en algunas cuestiones, y se refiere a un sistema global de reparto solidario. Esta es una cuestión drástica y moral porque nosotros no creemos que se pueda confiar el problema previsional a los mecanismos de la bolsa, esa timba bursátil que tan bien describieran literatos universales como Illia Eremburg, en *Citröen 10 HP* y nuestro Julián Martel, en *La Bolsa*.

Creemos que no corresponde las sociedades anónimas —que son las sociedades de capital por excelencia— el manejo y la custodia de la previsión para quiénes trabajan.

También quiero decir que las explicaciones e informaciones suministradas por el bloque de la primera minoría durante las últimas horas del día de ayer nos dan la razón fáctica de la necesidad de que este proyecto sea analizado con serenidad

a fin de que haya coherencia y correlación entre los diversos artículos que se han ido incorporando en este largo proceso.

Nosotros volveremos a apoyar la vuelta a comisión cuando lo estimemos conveniente, sin que esto signifique trabar el debate; éste no ha sido nunca —de esto ya hablaremos después— el objetivo de quienes integramos mi bloque y otros de esta Honorable Cámara.

Asimismo, señor presidente, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de un trabajo que hemos hecho esta madrugada, donde tratamos de analizar las contradicciones o incoherencias que existen, entre los artículos que se pretenden agregar al proyecto y los que existían originariamente.

En este debate en general sobre el tema previsional queremos plantear algunas cosas, primero, que resulta absolutamente inaceptable tratar el tema previsional bajo la presión del factor externo, canalizado a través de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Esto es de dominio público e incluso hay aseveraciones de funcionarios oficiales de alto rango admitiendo o desmintiendo la existencia de fechas topes o imposiciones de fechas para el tratamiento, por parte del Fondo, pero lo cierto es que nadie negó que el tema de la organización previsional argentina y la inclusión de las cajas Privadas para el manejo del aporte de los trabajadores sea materia de conversación con el Fondo Monetario Internacional.

También es necesario destacar que la comisión de estas entidades privadas no es de un punto, como se dice. La gente piensa que dichas entidades se van a quedar con un uno por ciento del aporte de los trabajadores, pero ese punto del 11 por ciento de la remuneración es más del 10 por ciento del aporte de los trabajadores a las cajas privadas.

Este 10 por ciento sobre los 3.500 millones de dólares que piensan que globalmente van a provenir del aporte de los trabajadores es el pingüe negocio del que exigen las compañías extranjeras apropiarse en nuestro país. A las pocas horas de que el Congreso, por decisión y exclusiva responsabilidad de la mayoría, apruebe esta iniciativa, el país se verá inundado de una propaganda que costará decenas de millones de dólares, que ya está perfectamente diagramada, que está en las "gateras" —sin aludir a la cuestión del Hipódromo de Palermo— para salir apenas se sancione la ley que posibilite el funcionamiento de estas cajas privadas.

Ellos saben que por medio de la publicidad ejercerán un efecto arrasador en la opinión del público. Fue tan arrasador en Chile que cuando se impuso el sistema, cuyas técnicas han sido estudiadas y perfeccionadas para aplicar en nuestro país, el trabajador chileno llegó a confundir al sistema con el nombre de la mayor empresa privada que se disputaba la captación de sus aportes.

En nuestro país esa propaganda también va arrasando con todo y quienes se crean de un lado y del otro que tienen aportantes cautivos están totalmente equivocados, porque van a ser barridos por la presión de quienes tienen los medios para financiar la gigantesca campaña publicitaria que se va a desencadenar de aquí a muy pocos días.

Lo que está en debate es el 10 por ciento del aporte que es una cifra altísima para quienes no invierten prácticamente nada y no corren ningún riesgo con relación al manejo de estos fondos, que no es gratuito, sino que se realiza contra el pago de gastos de administración.

Por otro lado, debo decir que nueve bloques de esta Cámara han brindado la posibilidad de un avance extraordinario en cuanto a la democracia que reina en el país al concertar un proyecto alternativo. No es cierto lo que se ha difundido incansablemente por todos los medios en el sentido de que no había un proyecto alternativo distinto del elaborado por el equipo económico. Hubo uno presentado en reiteradas oportunidades consagrando rasgos generales y otro muy concreto presentado en los últimos días. Un proyecto no demagógico, que no es cierto que sostenga que nada hay que cambiar, un proyecto que introduce severas y drásticas modificaciones al actual sistema, pero que mantiene su filosofía, basada en la solidaridad.

Esto es mucho más responsable desde un punto de vista técnico y más cierto, porque la otra propuesta en análisis nos introduce en un campo desconocido, imprevisible. Los propios partidarios del sistema en Chile manifestaron cuando se les preguntó entre bambalinas cómo iba a funcionar que harían falta veinte o treinta años para ver sus resultados, dado que antes era imposible determinarlos. Sin embargo, nosotros estamos colocando todo lo relativo a la previsión social de los trabajadores y de los sectores más necesitados del país tras un interrogante, una incógnita, y ello por satisfacer una presión de quien quiere quedarse con la comisión proveniente del manejo de estos aportes, ya que esto será lo único concreto que se va a producir con la modificación del sistema previsional

El proyecto alternativo elaborado por estos nueve bloques modifica temas muy resistidos incluso por la masa de trabajadores y de jubilados, como el de la edad. Se lleva a 65 años la edad para los varones y a 60 para las mujeres en forma gradual para acceder a la jubilación. Se mantienen los aportes e incluso se aumenta el de autónomos a 28 puntos, uno más que el proyecto oficial.

Nuestra propuesta incluía servicios de 20 años con aportes y prestaciones de jubilación ordinaria, por invalidez y pensión. Contemplaba asimismo un control mensual adicional al del Congreso que lo podía ejercer el propio trabajador o la organización gremial que lo representase; se respetaban los derechos adquiridos y se posibilitaba la capitalización privada en la medida que fuese voluntaria y complementaria. Sin embargo, se persistió en la actitud de no querer considerar ni debatir este proyecto alternativo y en analizar únicamente el proyecto oficial.

Con todo respeto quiero señalar que este proyecto oficial carece de la seriedad pontifical con que gusta vestirse el señor ministro de Economía porque sus últimas versiones son totalmente contradictorias en la forma y en el espíritu con las primeras. Se defienden con la misma convicción las primeras versiones, las segundas, las terceras, las cuartas y las quintas. Es decir, se defienden cosas absolutamente diferentes en su valoración, su esencia y su forma. Es necesario señalar que gracias a la oposición, que no está integrada por ñoquis ni máquinas de impedir, la Argentina tendrá un sistema previsional muy superior desde el punto de vista de la moral, la eficiencia, la libertad y la democracia, al del proyecto originario remitido por el Poder Ejecutivo. Gracias a esos jubilados que vienen al Congreso todos los miércoles y que están irritados con razón y explicación por la arbitrariedad de su situación y por la insistencia en no escuchar sus planteos; gracias a los trabajadores que han acompañado a los jubilados en sus solicitudes, gracias a todos nosotros que nos hemos opuesto soportando aparecer en la prensa y en los grandes medios de difusión como trabando el funcionamiento del Estado y del sistema previsional, la República Argentina tendrá un sistema previsional mucho más digno y equitativo.

Afirmo esto porque hemos logrado quitar proyecto originario de Economía su perversidad máxima, que era obligar a los trabajadores aportar en la "timba bursátil". Días pasados sostuve que se imponía a los trabajadores la obligación de ir a tirar su plata al casino una noche por mes. Ahora entrarán al casino los que quieran, pero por lo menos no los estamos obligando co-

mo sucedía en el texto originario. Esto se logró gracias a la gente que semana tras semana en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país ha juntado firmas, se ha unido y ha dado conferencias para explicar lo que se estaba debatiendo.

Esta no es una conquista de nadie ni, como lo presentaron algunos medios de comunicación de estructura futbolera, el triunfo o la pérdida de alguien: es el triunfo de la democracia, del diálogo y el consenso sobre la imposición y así lo deben computar los argentinos. (*Aplausos.*) Aquí gana el país porque hay democracia; no pierde un partido y gana otro, ni pierde el oficialismo y gana la oposición o viceversa.

Algunas de las reformas que se proponen están marcadas por la filosofía tradicional regresiva de equipo económico en materia impositiva porque aprovechando la oportunidad de dar un incentivo para los aportes de los autónomos se ha echado mano a las escalas, y de ese modo se ha marcado otra vez lo regresivo de la filosofía impositiva del equipo económico porque se ha perjudicado a quienes tienen un beneficio imponible menor de 14.400 pesos. Para ellos la cuota se ha ido al 11 por ciento, pero los que tienen un beneficio imponible entre 14.400 y 39.000 pesos, bajaron de 15 y 20 por ciento al 11 por ciento. Siempre si aprieta abajo y se libera arriba. Este es otro tema que merece un gran debate.

Pensamos que debe profundizarse el diálogo. Anoche, un grupo importante de legisladores solicitamos al bloque Justicialista que nos explicara el contenido de las últimas reformas que se introdujeron unilateralmente en el proyecto. No fue producto de una actitud subversiva o tendiente a impedir algo. Mis compañeros de bancada -los señores diputados Molinas y Bravo- plantearon en horas tempranas la necesidad de conocer esas reformas para poder avanzar en el debate; debate que tiene que ver no sólo con la previsión sino con la economía del país, porque se dice que estos fondos van a ayudar al despegue económico a que se salga de la recesión. Pero no será así, porque estos fondos en realidad van a servir para el juego bursátil y nada más. Van a saldar y ayudar a las cuentas del Estado relativamente por lo que se perdió por imposición del gran capital entre la máxima del '80 y la del '30 dispuesta en la última redacción. Esta es la realidad.

Queremos que el señor ministro de Economía, que ha aceptado estas modificaciones ante la presión de los señores diputados de la oposición e incluso del oficialismo, baje del púlpito al ágora a la plaza, para discutir algunos temas candentes que estamos viviendo. Necesitamos que venga a

este Parlamento a debatir. No va a pasar nada. El milagro de la estabilidad se está agotando en sus efectos, por lo que hay que bajarse del púlpito a discutir en democracia qué es lo que se va a hacer con la paridad fija, de donde hay que salir indefectiblemente. No estoy hablando de una devaluación —entiéndase bien—, lo que estoy diciendo es que tiene que arbitrar los mecanismos necesarios para salir de esta paridad fija, porque a la corta o a la larga se va a terminar quebrando. Esto es así mundialmente en la ciencia económica ortodoxa y el ministro no lo puede modificar. Si se quiebra se perjudicará el país y, como siempre, fundamentalmente los que menos tienen.

Tiene que venir a dialogar, a explicarnos cómo va a resolver el problema del incremento del déficit del comercio exterior. Esto no se resuelve con la supuesta incorporación de capitales, porque los capitales se incorporan a servicios, a la especulación, al negocio de hacerse cargo de empresas del Estado, y los capitales no abren fuentes de producción, mientras el déficit del comercio exterior está determinando el cierre de fuentes de trabajo.

Tenemos el dramático problema del cordón industrial de mi ciudad de Rosario, donde la política de la apertura sin gradualismo; sin contralor y sin racionalidad está dejando a la gente en las calles, y a esa gente no la alimenta el capital que viene a comprar acciones de YPF, Aerolíneas Argentinas, Telefónica o Telecom. Tenemos que estar convencidos de que la gente está en la calle, hambreada. El señor ministro de Economía no se puede negar a venir a conversar con los representantes del pueblo en la democracia.

Tenemos la crisis agropecuaria más grande de nuestra historia, como lo ha dicho el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá. ¿Qué ha contestado el señor ministro de Economía? Nada. El quebranto de los pequeños y medianos agropecuarios será atroz. Tampoco puede desconocerse la incidencia de este quebranto sobre las pequeñas y medianas empresas del interior y, en definitiva, no puede dejar de advertirse el pertinaz quebranto de la economía agropecuaria, que arrastra a la crisis el plan de ajuste y el modelo económico.

Tenemos la responsabilidad y la obligación de discutir estos temas con el señor ministro en este recinto. Creemos que estamos no para ganar o para perder. Estamos para dialogar con todo respeto, pero también debemos decir que a veces escuchamos discursos que parecen de otras latitudes, porque dicen que todo anda bien y fenómeno, y no creemos que todo ande

bien, ni que todo ande mal, Algunas cosas andan bien, otras andan mal. El pueblo no nos ha elegido para que hagamos de este recinto una cancha de fútbol en la que se gana y se pierde, sino para construir entre todos una Nación independiente y solidaria. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gatti. -- Señor presidente: como parte de mi exposición ha sido reflejada en varios de los discursos que se han desarrollado y también en el de quien me ha precedido en el uso de la palabra, el señor diputado Estévez Boero, voy a aclarar simplemente que la Democracia Cristiana no es un máquina de oponerse, como en alguna medida se ha dicho aquí señalando a todos los que no compartíamos el proyecto oficial y que, no estando de acuerdo con el procedimiento adoptado en las comisiones en las que se trató el proyecto, sosteníamos que no estaba habilitado para ser considerado en el recinto por las deficiencias que presenta.

Aclarada esa situación quiero señalar, como ha dicho el señor diputado Estévez Boero, que indudablemente la acción constructiva de los sectores que desde el inicio se opusieron al proyecto del Poder Ejecutivo y la acción positiva de los legisladores, incluso del oficialismo, que desde el vamos señalaron serias discrepancias con ese proyecto están dando la razón a quienes aquello planteáramos y hoy estamos discutiendo este asunto. En efecto, del proyecto inicial al que no se le iba a tocar una coma se ha pasado a las últimas modificaciones que se nos hizo llegar en horas de la madrugada del día de hoy con una tónica totalmente distinta a la de aquél, lo que indudablemente implica un avance en relación a los parámetros que estaban inspirados en la experiencia chilena. Esa experiencia, que es un caso paradigmático, nos está mostrando en la actualidad, después de diez años de vigencia, los claroscuros enormes y los grandes interrogantes que produce un sistema inédito.

En un artículo "The Economist" analiza lo que opina la OIT con respecto a estos diez años de experiencia chilena. Si me permiten, procederé a dar lectura de los párrafos pertinentes. El artículo, analizando este experimento, dice lo siguiente: "No todo, sin embargo, es optimismo. En el artículo también se menciona que es improbable que los fondos de pensiones repitan las utilidades de inversión que tuvieron en los años 80. En tanto las AFP se las ingenian para encontrar en dónde invertir adecuadamente su dinero; para fines de siglo fácilmente podrían estar manejando el equivalente a la mitad del PGB de Chile.

"Se añade que el gobierno está flexibilizando la autorización de las Administradoras de Fondos de Pensiones para invertir fuera del país, pero para 1996 los activos extranjeros de las AFP probablemente estarán limitados a un 10 por ciento del total. Es posible que la falta de mercados de inversión provoque una merma en las próximas utilidades reales.

"Al mismo tiempo, los gastos de operación de las AFP han aumentado. Ahora consumen, en promedio, un cuarto de las contribuciones de sus miembros. Tres AFP cubren dos tercios de los cerca de cuatro millones de trabajadores asegurados privadamente. Aunque más empresas financieras están entrando al mercado, la mayoría compite gastando pródigamente en marketing y en ventas.

"El artículo finaliza agregando que la OIT calcula que en los próximos años es probable que los trabajadores reciban pensiones menores a la mitad de sus sueldos. La mitad de la actual fuerza de trabajo tendrá pensiones bajo el nivel de subsistencia y requerirá asistencia estatal.

"En esencia, el nuevo esquema es nada más que un sistema obligatorio de ahorro, concluye la OIT. Los trabajadores podrían lograr más invirtiendo ellos mismos. Los gobiernos, por su parte, deberían encontrar un sistema estatal más justo, dirigido adecuadamente y, en el largo plazo, probablemente más barato. Argentina, Brasil, Colombia y Perú -todos contemplan el curso de Chile- deberían tomar nota."

Acá estamos viendo descarnadamente el análisis de un organismo del más alto nivel sobre cuál es la experiencia y lo que nos puede acontecer si prosperara la iniciativa del Poder Ejecutivo que, afortunadamente, en el marco del devenir, desde el momento en que fue remitida, ha cambiado sustancialmente.

Al no haber podido analizar suficientemente algunas propuestas de modificación, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de un texto que ampliará mi discurso. Pero pasando a fijar concretamente la posición del bloque de la Democracia Cristiana quiero señalar que nosotros creemos que la verdadera solución debe darse — como se dijo aquí — en el marco de un sistema jubilatorio de reparto, que es el único que contempla los conceptos esenciales de todo sistema de previsión social, es decir la universalidad, la solidaridad, la equidad, la libertad, la eficacia y la credibilidad.

Si se aprueba el proyecto alternativo que hemos presentado y se elimina la gran evasión que aún existe, estarán dadas todas las condiciones para que los actuales jubilados -que en el

marco del proyecto del Poder Ejecutivo no tienen ninguna solución así como tampoco la tienen los que se van a jubilar en el futuro—, logren una importante mejora.

Quiero señalar que hemos propuesto concretamente a la bancada oficialista la posibilidad de un diálogo fructífero, que permitiera destrabar la situación a fin de poder analizar en comisión todas estas cuestiones que ahora estamos considerando en forma desordenada en el recinto.

Aclaro que somos conscientes de que es necesario crear un mercado de capitales en el país para la inversión productiva. En ese sentido, invitamos al oficialismo para reanalizar la legislación impositiva y nuestra bancada ha presentado hace bastante tiempo un proyecto con el objeto de profundizar el análisis de todo el sistema impositivo argentino, el cual además de ser regresivo está disperso. El objetivo de esto es que mancomunadamente instrumentemos los mecanismos para que ese mercado de capitales se instale definitivamente en el país, pero no exclusivamente a costa del ahorro de los trabajadores. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). —Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. Sánchez Galdeano. — Señor presidente: voy a ser breve; por tal motivo solicito la inserción del discurso que pensaba pronunciar sobre el tema en consideración. Aclaro que mi posición es la de la aceptación general del proyecto porque da cumplimiento a los cuatro pilares fundamentales en que debe sostenerse este tipo de régimen legal que atañe a los problemas sociales, como son la libertad, la justicia, la igualdad y sobre todo la solidaridad, principios que están globalmente contenidos en el espíritu de la iniciativa.

Durante la consideración en particular, me reservaré el derecho de formular observaciones a algunos puntos respecto de los cuales tengo disidencias.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina. — Señor presidente: durante estos tres años y meses que llevo de mandato he procurado participar en todos los debates que se han producido en este recinto y en todos ellos también he intentado expresar mis convicciones. Sin embargo, en ninguno he tenido tan firmes y tan anclados mis puntos de vista como en lo que respecta a esta cuestión.

También debo señalar que no obstante que voy a procurar expresar mis convicciones, tengo la sensación de que todos los argumentos vertidos desde este lado del recinto no han llegado aún a

calar ni en la racionalidad ni en el sentimiento del bloque oficialista.

De aquel lado, del bloque oficialista, nos plantearon en un rasgo de dialéctica juvenil que de este lado estaba la "máquina de impedir". También señalo hacia aquel lado que a veces la máquina de impedir se gesta cuando en el oficialismo se instala la máquina del autismo, la máquina de la sordera, que está envolviendo a este gobierno y también a la bancada oficialista.

Quiero comenzar diciendo que con todas mis fuerzas, mi convicción y mi pasión voy a procurar que encontremos un curso de acción común. Mis argumentaciones podrán ser duras pero en modo alguno tienden a la agresión sino a la reflexión.

Desde el gobierno, desde el poder, se ha desatado una tendencia macartista contra lo social. Esto no es una expresión sino que me afirmo en hechos, algunos de los cuales voy a enumerar. Me refiero a la eliminación de las cajas de subsidios familiares -CASFEC, CASFPI y de la estiba— implementada a través de un decreto inconstitucional -el 2.284/91- que todavía no ha sido tratado por esta Cámara. El poder pretende que solamente exista relación entre él y quien lo necesita socialmente; elimina la intermediación que representaban esas cajas.

Se nos plantea la libertad de mercado —que respeto y apoyo— pero se le pone sin embargo un cerrojo cuando le llega el turno a los salarios y a los convenios colectivos de trabajo. Para ellos hay un banco de prueba: la productividad; pero para los precios no existe dicho banco de prueba ya que llevamos acumulada desde abril de 1991 una inflación del 40 por ciento. Todo puede aumentar, menos los salarios.

Cuando desde este Congreso, y particularmente desde esta Cámara, hemos querido plantear cuñas reparadoras en el campo social, especialmente para los jubilados, aparecen los vetos del Poder Ejecutivo. Ahí está aquel proyecto de ley del señor diputado Martínez Raymonda que permitía a los jubilados utilizar a la par los bonos para pagar impuestos y servicios, que fue vetado por el Poder Ejecutivo. Ahí está la decisión de destinar el 30 por ciento del producto de las privatizaciones para las cajas de jubilaciones, que fue menguada por un decreto del Poder Ejecutivo que estableció que esa disposición no se aplicaría cuando los compradores pagaran el precio con títulos de la deuda pública. Ahí está el veto del Poder Ejecutivo

a aquella cláusula de la ley de privatización de YPF en favor de los jubilados. Sin embargo, los evasores se enriquecen al poder pagar el ciento por ciento de sus deudas con el sistema previsional comprando los Bocones a mitad de precio.

Ahí está aquella ley que supimos conseguir todas las bancadas, con motivo de las privatizaciones, en forma consensuada y que tuvo origen en una iniciativa de los señores diputados Iribarne, Martínez, Espeche y quien habla, para que se aplicara el 60 por ciento del producto de dichas privatizaciones a la salud, las jubilaciones y la promoción social, y que fue derogada por un oscuro artículo del presupuesto del año pasado. Seguramente hay muchos ejemplos más en este trayecto macartista que impulsa el gobierno.

Por supuesto que el gobierno simplifica la interpretación de los hechos. Ha escuchado que el comunismo está derrotado y entonces cree que el capitalismo puede hacer ahora todo aquello que antes no hacía por vergüenza, y trata al pobre y a la pobreza como si fueran los culpables y no como si fueran víctimas.

Tampoco advierte que -tal como lo manifestó el señor diputado Balestra- cuando un muro se cae, si es una pared medianera, afecta a los dos vecinos y no a uno solo. Se ha instalado esta regla desapareja que se engarza transparentemente en este macartismo social que se ha desatado desde el poder. Esto fue posible porque desde el gobierno se ha iniciado una amplia campaña de publicidad, respecto de la cual un diputado dijo que se merecería un premio Clío. A través de ella se dice a todos los argentinos que el actual sistema jubilatorio está en quiebra, que es irremediable y que por la exigüidad de los haberes pareciera que sobre los jubilados se cierne un holocausto y que se ha instalado un cadalso para los actuales trabajadores.

A partir de ese clima, alimentado por los comentarios superficiales de algunos comunicadores sociales, así como también por el razonamiento que se ha hecho sobre el derrumbe del comunismo, el gobierno sacó el conejo de su galera; la capitalización individual. Estos corifeos de cambios indiscriminados y el apoyo que han brindado algunos comunicadores sociales han dado a entender que la libertad de optar es la consigna que permite la defensa de esta propuesta.

Anoche, a requerimiento de todos los bloques, el oficialismo nos informó sobre las últimas novedades. Destacó como la conquista más importante el hecho de haber sustituido el concepto de la obligatoriedad por el de la opción del trabajador. Es decir que se va a poder optar

entre el sistema de reparto y el de capitalización individual. Creo que este es un agravio del justicialismo, ya que se sustentan en la ignorancia de los trabajadores para tomarlos por sorpresa. Digo esto porque al plantearse la posibilidad de optar se está dando a entender qué existe libertad, pero para ejercerla hace falta saber de qué se trata, porque si no no hay libertad ni opción.

Quiero preguntar con absoluta honradez intelectual si este proyecto que ha ido pergeñando el oficialismo -un proyecto enmarañado por todas las innovaciones que se le han hecho, las últimas hace pocas horas- puede ser comprendido por cualquiera o si será una ley para entendidos. ¿A dónde va a ir el trabajador para determinar su capacidad de libertad? ¿Con la simple lectura —si es que se tiene acceso a ella— es suficiente para entender el contenido de la norma? Personalmente, creo que no. El trabajador va a tener que ir a ver a su patrón, al asesor previsional de su sindicato o a algún gestor de su pueblo, porque esto no es para determinados trabajadores, sino para todos los trabajadores, sean de Santa Rosa de Calamuchita, de Santa Rosa de La Pampa, de Donato Álvarez y San Martín o de Florida y Lavalle. Todos van a tener que recurrir inexorablemente a que los orienten y les definan su opción.

Pongámonos del otro lado: del lado del asesor del sindicato, del gestor o del patrón. ¿Qué pueden responder para definir sensatamente esta libertad que concede este sistema opcional? Lo que van a decir —porque no tienen otra cosa para decir— es lo siguiente: el sistema de reparto garantiza 200 pesos y 0,5 por ciento por cada año de servicio, o sea, en el mejor de los casos un 20 por ciento del sueldo. Le van a decir al trabajador que es saludable que se pase al sistema de capitalización, porque a lo mejor se producen 30 años de holgura y jolgorio financiero en la Bolsa y puede llegar a conseguir un haber importante. Entonces, no existe opción ni libertad, sino un sistema de capitalización obligatorio e individual, tal como figura en la propuesta que recibimos anoche. Se trata exclusivamente de una propaganda de un mecanismo opcional que en realidad encierra un sistema de capitalización individual obligatorio.

¿Qué les dicen el gobierno y la futura norma al trabajador? Que los que están jubilados ya no tienen salvación, que lamentablemente se los ha involucrado en el holocausto, pero que el

trabajador activo se va a salvar del incendio y va a poder aportar para él mismo y no para otro. Claro que de entrada en lugar de aportar un 10 por ciento aportará un 11. O sea que el trabajador ingresa al sistema perdiendo un 1 por ciento que se le escapa de su bolsillo. Sin embargo, se le dice que esa plata la va a ir depositando en su propia cuenta y que mes a mes sabrá cuánto ha estado ahorrando. El sistema es transparente, pero le dicen que el dinero va a ser administrado por las AFJP, que son sociedades anónimas que van a aportar un capital y que —no tenemos por qué dudarlos— estarán constituidas por gente decente.

El 1 por ciento que se le sacará al trabajador equivaldrá a una cifra que oscilará entre los 25 y 27 millones de pesos por mes, y serán comisiones que van a ser destinadas a los bolsillos de las sociedades anónimas que administrarán los recursos del trabajador. Se trata de 27 millones de pesos que van a cambiar de dueño obligatoria o confiscatoriamente por esta propuesta. Esa gente será capaz de sacarle el jugo al dinero de los trabajadores a través de su inversión.

Pero, además, como el sistema que se proyecta no cubre ni la invalidez ni el fallecimiento, habrá que sustraer otro 2 por ciento —o menos, ya que depende de lo que ocurra con esta novedad de la pensión—, o sea, otros 58 o 60 millones de pesos por mes para que esa administradora, constituida por gente conocedora del mercado, contrate por cuenta del trabajador pólizas por invalidez o fallecimiento, con una compañía de seguros.

De manera que si tenemos un 1 por ciento en concepto de comisión -25 millones de pesos por mes- y un 2 por ciento en concepto de seguro -50 millones de pesos por mes- estaremos mercantilizando la seguridad social en mil millones de pesos por año.

Además, las Administradoras van a decir a los trabajadores que están invirtiendo en el mercado de capitales. Pero la ley es previsoray dice al trabajador que si no le gusta la administradora que eligió —la que será elegida por su exclusiva voluntad y libertad y no por la coerción que genera toda publicidad— se podrá cambiar hasta dos veces por año. Lógicamente, esto le va a costar unos pesos más, porque deberá pagar a la administradora que reciba los recursos la comisión que ella fije, ya que no está fijada en la ley.

Así deberán transcurrir 5, 10, 40 o 45 años, hasta que el trabajador se pueda jubilar. También habrá que aclarar a este último, cuando vaya a realizar las consultas respectivas, que el dinero que tendrá al final de su vida activa dependerá de si hoy tiene 18, 25, 35 o 40 años, y de si estuvo desocupado durante algún período de su vida laboral. Lo que

cuenta aquí es el dinero y no la oferta de trabajo, la relación laboral o el sueldo; en otras palabras, lo que importa es el capital acumulado.

Pero supongamos que en la Argentina todo marche bien y que el trabajador haya tenido el instinto de elegir bien a la administradora que manejará su capital, o sea que tenga la suerte de que ésta esté integrada por gente de una alta condición ética y moral, que no se deje subyugar por las travesuras cotidianas que informan los diarios y que además tenga la idoneidad de invertir como corresponde para que durante treinta o cuarenta años obtenga en forma constante una renta anual del 3 por ciento por encima de la inflación. Si todo esto transcurre sin tropiezos, al final de su vida activa el trabajador tendrá su dinero.

Pero la libertad lo persigue hasta el momento de decidir qué va a hacer con esa plata, porque la ley dice que tiene dos opciones. Una de ellas es contratar una renta vitalicia, y aquí aparece de nuevo la pregunta: ¿qué es una renta vitalicia? ¿Con quién la contrato? Con una compañía de seguros. Por supuesto, un seguro cuesta dinero, hay que pagar la prima y además la compañía de seguros tiene que ganar con eso, porque de lo contrario quiebra y no puede pagar el seguro. Esto es razonable.

¿Y qué es la renta vitalicia? Quiere decir que por su capital a usted le van a pagar mensualmente tanto. El "tanto" es la incógnita. La necesidad de los trabajadores está sometida a la incógnita del "tanto". ¿Por qué? Porque la compañía de seguros asume el riesgo de pagarle mensualmente mientras viva ese trabajador una cantidad de dinero. ¿Pero lo hará por el solo hecho de contar con la fotografía del trabajador? No; no se puede proceder así, le van a hacer todos los análisis debidos, todas las encuestas necesarias, si es soltero, si es casado, si tiene hijos o no, si bebe o fuma, para hacer los cálculos actuariales respecto de los años que va a vivir.

La conclusión es que en la capitalización existe una regla de oro, porque ese hombre va a cobrar mucho más si tiene poca expectativa de vida y mucho menos si posee una gran expectativa de vida. Vale decir que la regla de oro de la capitalización indica que se debe acumular mucho dinero de joven, mientras trabaje, y se debe llegar muy achacado a la edad de jubilarse, soltero, sin hijos y si es posible enfermo, porque será la única manera de recibir un aporte importante, ya que si tiene mucha expec-

tativa de vida el aporte será insignificante y si en el camino lo agarra la inflación, que le vaya a preguntar al gobierno, porque aquí no hay movilidad del haber, sino un seguro que determina que va a cobrar tanto en virtud de que tiene una expectativa de vida de diez o quince años después de que se jubile.

Lo expuesto es una opción. Pero como la ley es generosa le plantea al jubilado otra alternativa: el retiro programado. ¿Qué es el retiro programado? En este caso ya no interviene la compañía de seguros. El jubilado posiblemente se formule el planteo de que vivirá unos quince años más y convenga con la administradora de fondos de pensión el retiro mensual de una determinada cantidad de dinero que le permita vivir.

Aquí hay dos incógnitas más. Si en el camino hay inflación, no hay movilidad del haber y tendrá que "comerse" más capital; que le vaya a reclamar al gobierno; y si por casualidad vive más de lo que él ha previsto, que le vaya a reclamar a Dios.

Esta es la seguridad social que encarna el proyecto gubernamental. Me pregunto si no estaremos pasando de la seguridad social a la incertidumbre social, si no estaremos generando una propuesta en la cual el trabajador no está computado, pues lo que está computado es lo que se va a hacer con su dinero, que es muy distinto.

Voy a citar las apreciaciones o afirmaciones que realiza Lester Thurow en *La guerra del siglo XXI*. Se refiere allí a las deudas y los problemas que le dejó Reagan a Clinton y expresa: "A esos totales deben agregarse las elevadas sumas que serán necesarias si se quiere que la Benefit Guaranty Corporation, el fondo oficial que garantiza a las jubilaciones, cumpla sus obligaciones, es decir proteja los fondos de las jubilaciones privadas. Los fondos de jubilación retienen el 30 por ciento de esos dudosos bonos 'basura' y las quiebras que provienen de los excesos financieros de la década de 1980, exigirán miles de millones de ayuda oficial para asegurar que las jubilaciones privadas que fueron prometidas sean pagadas realmente. Los fondos de jubilación de las líneas aéreas que ya habían quebrado hacia mediados de 1991 exigirán por sí solos mas de 2 mil millones de dólares de dinero de los contribuyentes". Esta es la experiencia estadounidense.

Cabe mencionar que el proyecto contiene dos buenas originalidades. Una de ellas es que se dice al trabajador y a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones lo siguiente:

"Despreocúpense de la recaudación, esa tarea sucia e infame la hago yo, el Estado. A ustedes el dinero les va a llegar limpio, lustrado, directamente del banco."

La otra novedad, la otra creación es que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, la que debe vigilar, ejercer el control de gestión y precaver que no haya travesuras en el camino, estará subvencionada por las administradoras. Los controlados financian a los controladores; es una innovación. Imagino que no habrá dependencia económica de los controlados sobre los controlantes por el flujo de dinero que mensualmente tendrán que depositarles para que puedan funcionar. No hay, dependencia económica. (*Risas.*)

Se sostiene que el sistema está quebrado. Me voy a referir a esto muy rápidamente porque ha sido muy bien explicitado por los señores diputados Moure y Martínez Raymonda. En realidad, ni el gobierno ni los comunicadores sociales dicen por qué se ha llegado a esta situación. En ese sentido, cabe mencionar a los depredadores de distinto signo político que han sustraído dinero a los trabajadores. Ello ocurrió por primera vez en 1954 e involucró 270 millones de dólares de las cajas superavitarias. Esa cantidad era equivalente por entonces al 18 por ciento del producto bruto interno, de manera que teniendo en cuenta que en la actualidad el ministro Cavallo dice que el PBI es de 220 mil millones de dólares, el 18 por ciento significaría un monto de 40 mil millones de dólares.

Pareciera que en esta cuestión se ha reinstalado un síndrome del Justicialismo y el ministro de Economía va a "manotear" también estos 4.000 millones de dólares por año para financiar su economía si llega a sancionarse este proyecto de ley. Se trata de un viejo síndrome del Justicialismo, aunque evidentemente no es el mismo gobierno. Muchos hicieron travesuras sacando dinero, o como Estado empresario no depositando los aportes y contribuciones, lo que también constituye un modo de sacar dinero.

También se señala que se va a terminar con la evasión. Aquí se ha hablado mucho en ese sentido, pero lo que no se ha dicho es que el ministro de Economía y el distinguido secretario Tacchi levantaron la recaudación impositiva con la brigada de intocables que ya lleva dos años funcionando en el país. Sin embargo, en seguridad social no he visto ninguna brigada de intocables. Espero y deseo que a partir de ahora, cuando se ha hecho cargo Tacchi y para proveer

de fondos el nuevo sistema, se supere la altísima evasión que ha tenido en el país el sistema de seguridad social.

La depredación de los gobiernos y la evasión han sido causas exógenas al sistema de seguridad social. La tercera causa exógena ha sido la amputación de la economía argentina, la paralización del PBI desde 1974 hasta ahora, el achicamiento de la industria que es la que demanda mano de obra y constituye la base de sostenimiento de un sistema previsional de reparto. En su origen, había ocho trabajadores por cada pasivo; ahora estamos en 1,7.

También hay que mencionar la permisividad del sistema, que está atendiendo necesidades que no son contingencias de la seguridad social, como la vejez. Esto es lo que debe ser objeto de atención por la seguridad social: la vejez. Pero se están pagando jubilaciones a docentes que pueden jubilarse a los 50 años por vejez, no por problemas de la educación, y las paga el sistema jubilatorio, no "Rentas generales". Los choferes se están jubilando por vejez, no por seguridad de tránsito, y sus haberes no los paga "Rentas generales" sino el sistema jubilatorio. Y así podemos seguir señalando numerosos de estos sistemas que conocemos como especiales.

Claro, ni el jubilado ni el trabajador tienen la voz suficiente para evitar que se manoteen recursos de sus cajas, y esto no se ha dicho. Lo que se dice es que el sistema está quebrado irremisiblemente.

El sistema de reparto no sólo expresa la trama social argentina sino que genera una relación intergeneracional que es la base sustancial de la vida social nacional. Cuando el hijo aporta para que su padre o abuelo pueda cobrar la jubilación, o para que la cobre el padre o abuelo de un amigo, está contribuyendo al fortalecimiento de la trama social. ¿Es que nosotros creemos realmente que el problema de la seguridad social se puede solucionar a partir del individualismo —que no es liberalismo sino individualismo— que significa que cada uno aporte para sí mismo?

Quisiera saber qué efectos sociológicos sufrirá la familia argentina cuando el hijo se acostumbre a decir a su viejo: "No apporto más para vos, apporto para mí; vos jorobate con otros viejos; reclamales a ellos". ¿Qué efectos se provocarán en la vida social argentina? ¿O acaso no nos damos cuenta de que la posibilidad de haber sobrellevado en nuestro país crisis tremendas y severas en forma pacífica -con excepción de un período ideológico- estuvo dada por esta trama social que ha ido generando la seguridad social no sólo en el campo jubilatorio sino también en el de la salud, o con el salario familiar? ¿Hoy creemos realmente que la intermediación social, en estos tiempos

modernos, la va a ejercer la sociedad anónima que otorgará las jubilaciones? ¿Es la sociedad anónima la expresión más prístina de lo mercantil en el campo jurídico del derecho societario? ¿Es ella la expresión genuina de la intermediación social? Hemos sustituido lo que tradicionalmente fue considerado como expresión de la intermediación social: me refiero a la cogestión empresario-sindical de la que nos hablan no sólo la experiencia argentina sino también los consejos apropiados que da la Organización Internacional del Trabajo y la doctrina social de la Iglesia. Ahora la sociedad anónima sustituye a la cogestión empresario-sindical en el campo de la intermediación social.

¡Vaya innovación!

Teniendo en cuenta el ejemplo de Chile que se cita, respetuosamente debo manifestar que ese país no tenía seguridad social ni antecedentes en la materia. La Argentina es el único país en Latinoamérica que a partir del movimiento obrero y de la política de justicia social -que reconozco en el gobierno justicialista- gestó una trama que permitió este desarrollo social que, como alguna vez alguien señalara, es mucho más importante que el desarrollo económico, y ello es cierto. Pero esto que nos ha mantenido en convivencia y cohesión, ahora lo delegamos en las sociedades anónimas. Deseo formular algunos otros comentarios, pues creo que dispongo de tiempo suficiente para hacerlo.

Este proyecto de ley genera una gran trampa escondida o semiescondida en lo relativo a la libertad de opción; se trata nada más y nada menos que del gran olfato que, debo reconocer, tiene el señor ministro de Economía. Él posee un gran olfato por el dinero, no para sí mismo sino para su política. En este caso no se trata de un olfato de perro perdiguero que descubre una debilucha perdiz chacarera, pues aquí ha descubierto una bandada de faisanes: 4.000 millones de pesos por año renovables. Hay que reconocer el olfato del señor ministro, pero no lo disfracen, digámoslo.

¿Por qué hacen falta estos 4.000 millones de pesos? Porque todo plan de estabilidad que no se sostiene con el crecimiento permanentemente va requiriendo de oxígeno y de ruedas de auxilio. La primera, en todos los casos, ha sido el ajuste. Hoy en día no hay posibilidad de agregar agujeros al cinturón de la gente. La segunda es la política impositiva que, debemos decirlo, está muy bien llevada y ejecutada por el gobierno. La tercera, en el caso argentino, ha sido

la venta -no la privatización- de empresas del Estado, pues nunca termina de alcanzar el dinero. Esto ha acercado al Tesoro importantes cantidades de dinero; pero tampoco alcanza porque no llegan las inversiones ni se pudo disminuir el gasto en el tiempo deseado ni se ha aumentado la producción. Entonces, falta más dinero. El ministro Cavallo ahora ha echado mano a otra rueda de auxilio, no de un Fiat Uno sino de un tractor Caterpillar: 4.000 millones de pesos gratuitos que provienen del ingreso del trabajador y se destinan a la economía tanto estatal como privada.

Esa situación nos hace pensar que legislativamente estamos creando un nuevo gigoló, y legitimándolo. El empresario del mercado de capitales que recibirá el dinerito de su trabajador lo va a invertir en su empresa sin que le cueste nada, porque lo que aquí se aumenta es el aporte del trabajador y no el del empresario.

¿Cómo se llama esto en la jerga de la calle? *Gigoló*; estamos creando un *gigoló*. ¿Es complicidad la nuestra con una figura que en otros rasgos de la vida cotidiana tiene carácter delictivo? ¿Estamos decidiendo una ley jubilatoria? Yo digo que no. Estamos decidiendo algo mucho más trascendente. Esta es una ley política, económica, social y quizás jubilatoria. Básicamente estamos definiendo una política de país, implementaciones económicas, orientaciones sociales y quizás -si nos da el cuero- una ley jubilatoria.

El momento difícil va a ser el del voto. Quienes crean que es legítimo confiscar el 1 por ciento del aporte del trabajador para subsidiar sociedades anónimas, que voten a favor; yo voy a votar en contra. Los que crean que es correcto que esas administradoras sigan cobrando comisión cada vez que haya movimiento de dinero, que voten a favor; yo votaré en contra. Quienes crean que es justicia social sacarle este 2 por ciento al trabajador -50 millones de pesos por mes- para contratar seguros con compañías, que voten a favor; yo votaré en contra. Los que crean que desde el bolsillo del trabajador estamos creando una nueva elite de poder que va a manejar en 20 años, como en Chile, el 50 por ciento del producto bruto interno -120.000 millones de pesos-, que voten a favor; yo lo haré en contra.

Estamos sancionando la feudalización del país porque quien tenga aquí tres, cuatro o cinco mandamás de la administradora y maneje la capacidad discrecional de invertir 100.000 millones de dólares, será el dueño del país. Quienes no sean hijos o entenados de esta administradora no figurarán más en el país. Es claro que algunos, por vía de esta ley, obtienen una especie de renta vitalicia porque apoyan la iniciativa en

consideración. Ellos van a figurar en el marcador, nosotros no; nosotros, nada. Figurarán los mandamás del país; de ahí saldrán los presidentes y los diputados. (*Aplausos.*)

Utilizando una expresión del general Perón, que reconozco válida, estamos gestando una nueva oligarquía en el país. Reconozcámoslo, pongámosle un techo, una variante. No dejemos solamente a los trabajadores el mochuelo de no tener jubilación. No dejemos al país una concepción feudalista.

Seguramente ni ustedes se dan cuenta de algo. Queridos amigos justicialistas —saben que los aprecio—: ¿qué rol creen que estoy desempeñando aquí a las 14 y 10? Soy el "Chirilota" de ustedes. Sé que quisieran decir esto y también mucho más, pero a veces la disciplina partidaria no lo permite. (*Aplausos.*)

No estoy haciendo ninguna imputación. Simplemente quiero que tomemos un camino de conjunto porque estoy seguro de que todos aspiramos a la mejor ley jubilatoria y también a lo mejor para el país.

Quien crea que es legítimo que con el esfuerzo del trabajador se alimente a la economía, que vote a favor. Quien crea que es justo instalar en el sector más débil del país una nueva contingencia, además de la que significa la vejez, como es la del riesgo empresario, es decir de cómo le va a ir con su administradora, que vote también a favor. Frente a esta circunstancia no hay garantías siquiera para la jubilación.

Quien crea además -pienso que esto sí resulta compartido por el 95 por ciento de este recinto- que es legítimo en la Argentina por construir que el Estado resigne definitivamente la orientación del ahorro, dejándolo en manos de Sociedades anónimas, entonces, que vote a favor.

La orientación del ahorro nacional es una prioridad del Estado y no se arregla con este menú de inversiones. No serán los quioscos los que reciban el crédito, tampoco las pequeñas empresas ni los emprendimientos regionales. Lo va a recibir el mercado de capitales, y quien crea que es legítimo declinar esta responsabilidad histórica de todo Estado, tanto de este como de cualquiera del primer mundo, de orientar el ahorro nacional, reitero, que vote a favor.

Quién suponga que es bueno que en la Argentina se sepulte definitivamente la solidaridad social, gestando por vía de esta ley el individualista que dé su voto positivo.

Quién imagine también que es positivo para el país volver a endeudarlo en 22 mil millones

de pesos, según el gobierno y 44 mil millones de peso según el Cofepres —en ambos casos sin computar la financiación— que vote a favor.

Finalmente, quien crea que es legítimo incorporar el riesgo de la inseguridad de los actuales jubilados al sustraerles los aportes de los trabajadores y el derecho a percibir regularmente sus haberes, que vote a favor. Lo mismo, el que piense que es legítimo sustituir el sistema de movilidad de los jubilados, vigente ahora, por el sistema del salario del trabajador y lo difiera a un AMPO —sigla que ni siquiera sé cómo se puede pronunciar y mucho menos lo sabe el trabajador— insisto en que dé el voto positivo.

Entiendo que los dirigentes políticos debemos hacer un acto de contrición. Los políticos hemos "timbeado" durante décadas con la esperanza de los jubilados. Tenemos que decirlo; no incorporemos a esta "timba" la esperanza de los trabajadores. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Sánchez Sañudo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (L.F.) – Señor presidente: en primer lugar quiero plantear una cuestión previa que tiene que ver con afirmaciones hechas por la Presidencia de esta Cámara, ocupada interinamente por el señor diputado Martínez, en las postrimerías de la sesión de anoche. Por lo menos en tres oportunidades señaló que el trámite que se le dio a la sesión después del cuarto intermedio había sido resuelto por todas las bancadas. Quiero dejar sentado —como lo saben todos los presidentes de bloque y los señores diputados que participaron de esa reunión durante el cuarto intermedio— que mi bloque no sólo se opuso a dicho acuerdo sino también a cualquier otro tipo de consenso que le facilitara al gobierno y al bloque oficialista sancionar este proyecto, y mucho más a llegar a acuerdos con quienes habían atropellado los derechos democráticos elementales y los mecanismos parlamentarios y reglamentarios. Inclusive recordarán los legisladores que estuvieron presentes que por esta razón tuvimos un incidente con el presidente del bloque Justicialista.

Hecha esta aclaración, quiero hacer otra también de carácter previo, pero que está vinculada al debate en curso. Como lo hemos señalado en varias oportunidades mediante carta enviada al presidente Pierri, en las reuniones con los bloques que no daban quórum para esta sesión y en las celebradas por la Comisión de Labor Parlamentaria y por la pseudocomisión de Labor Parlamentaria, o comisión ad hoc, no sé cómo denominar a aquella que se reunió el 21 último, nosotros rechazarnos ese intento de consenso

que se buscó a través del bloque oficialista y de los que finalmente apoyaron un proyecto alternativo que nosotros no firmamos porque no lo compartíamos. Y lo rechazamos por varias razones. La primera, porque justamente el proyecto era el que había que consensuar y el contenido de nuestra iniciativa no tenía ningún punto en común con el del oficialismo, al contrario de los restantes proyectos presentados.

La segunda razón, porque el proyecto del gobierno está al servicio de un plan económico que no queremos respaldar sino derrotar definitivamente. Cuanto antes logremos este objetivo mayor posibilidad habrá de que la Argentina salga de esta situación de ricos cada vez más ricos, de pobres cada vez más pobres, de colonia saqueada por los mismos que luego el gobierno condecora como próceres con la Orden de Mayo.

La tercera razón por la que rechazamos esta búsqueda de consenso es porque el debate que se pretendía partía de aceptar mecanismos que nosotros cuestionamos. No voy a extenderme —como lo hicimos en otras oportunidades— respecto del método fraudulento con que se aprobó el dictamen en comisión, porque ya me he expresado en las observaciones al Orden del Día N° 922. Se pretendió consensuar un dictamen aprobado mediante un método fraudulento y, a pesar de que el oficialismo declinó algunos aspectos en busca de dicho consenso, éste finalmente no se concretó. Ese dictamen fue considerado por nosotros como un despacho conseguido en base a un fraude. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical lo consideró acertadamente como ilegítimo. Contradictoriamente, lo ilegítimo, que tendría que ser desconocido y que sólo podía ser saneado corrigiendo dicha ilegitimidad, fue aceptado a pesar de que la ilegitimidad continuó mediante los pasos que luego siguió el oficialismo desesperadamente para logran la sanción de este proyecto. Por ejemplo la vergonzosa demora en la votación de una moción de orden para que los diputados justicialistas, que tanto quieren trabajar; que cuestionan a la máquina de impedir, pudieran venir corriendo —corren bastante lentamente porque tardaron una hora— para dar el número suficiente y ganar la votación.

Estos son los atropellos en los que incurrieron en contra de un reglamento que ustedes mismos redactaron. Lo contradictorio es que la posición de los bloques que califican a este dictamen de ilegítimo, o el propio comité de la Unión Cívica Radical que se ha expresado en ese sentido, están lejos de advertir que lo van a desconocer y que si llegan a ser gobierno lo van a anular. Al contrario,

los principales dirigentes nacionales de ese partido han dicho lo opuesto, con lo cual pierden seriedad las argumentaciones que puedan hacer respecto de este tema. De este modo, lamentablemente se va a terminar avalando algo que es profundamente ilegítimo.

A pesar de ello nosotros continuaremos desconociendo este proyecto y haremos lo imposible para que el pueblo también lo desconozca, a fin de que este proyecto nunca sea considerado como una ley, es decir, como algo que el pueblo respeta y trata de cumplir.

Principalmente cuestionamos esta iniciativa por su contenido. En reiteradas oportunidades hemos dicho en este mismo recinto que el gobierno con su plan económico de hambre, de entrega y de corrupción generalizada ha atacado conquistas elementales del pueblo trabajador, especialmente de los asalariados, de los trabajadores del movimiento obrero industrial y de vastos sectores populares que no se desempeñan en relación de dependencia. Se ha atropellado el derecho a trabajar, con una desocupación que ha crecido; el derecho de tener un salario digno, con un virtual congelamiento de los haberes; y los derechos sindicales.

En ese sentido, aquí se encuentran presentes legisladores que además son representantes gremiales, que saben que dirigentes sindicales de sus gremios han venido a decirnos cómo se atropellan en los lugares de trabajo los derechos de la clase obrera, como por ejemplo el derecho a tener un delegado en un barco. También se atropelló el derecho de huelga y ahora, con esta aberración que se pretende aprobar, se quiere atacar una de las mayores conquistas de la clase obrera argentina: el derecho a la jubilación. No deseo exagerar, pero en un sistema capitalista...

Sr. Castillo (J. L.). - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Zamora (L. F.). - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). — No sé qué trabajador marítimo se entrevistó con el señor diputado Zamora, pero seguramente él debe saber que por la cantidad de tripulantes que tiene un barco y la cantidad de sindicatos que cohabitan en él, es prácticamente imposible que cada gremio tenga un delegado sindical.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo)- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (L.F.) - Señor presidente: el señor diputado Castillo —que obviamente se dio por

aludido— acaba de confirmar lo que manifesté anteriormente. Es cierto que de acuerdo con la cantidad de tripulantes que tiene un barco se determina si puede tener o no un delegado, pero lo que no ha dicho es que este gobierno, a través del dictado de los decretos 1.772 del año 1991 y 817 del año 1992, dispuso reducir la cantidad de tripulantes en los barcos, otorgándoles así a los armadores el argumento necesario para negarles a los obreros el derecho a tener un delegado. Esta es la queja que me han transmitido los trabajadores del gremio al cual pertenece el señor diputado Castillo.

—Ocupa; la Presidencia el señor presidente de la Comisión de justicia de la Honorable Cámara, doctor Francisco de Durañona y Vedia.

Sr. Castillo (J. L.). —¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Zamora (L. F.). - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). - Señor presidente: respeto al señor diputado Luis Zamora por su continua defensa de los derechos de los trabajadores, pero no quisiera que cometiera un error o una falsa interpretación. Le pido entonces que revise las resoluciones votadas por esta Cámara, donde advertirá que quien habla ha suscrito un proyecto que propone la derogación del decreto 1.772.

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (L. F.). -Señor presidente: el señor diputado Castillo no ha hecho más que reafirmar lo que yo sostengo: que el decreto 1772 -dictado por Menem-, significa un ataque a los derechos de los trabajadores. Me alegra que el señor diputado Castillo convalide mis palabras en este recinto.

Ahora se está atacando el derecho a la jubilación, que es una conquista histórica. Esto es lo que yo sostenía sin pretender utilizar frases grandilocuentes. En el sistema capitalista el hecho de poder arrancar a la patronal un aporte — aunque sea pequeño— para solventar el sistema previsional significa una conquista extraordinaria.

Esto qué hoy parece una cosa habitual, a principios de siglo significó una pelea extraordinaria, como ocurrió en las luchas que se produjeron para obtener la jornada laboral de ocho horas. Esto era algo que parecía imposible, como cuando nosotros planteábamos el no pago de la deuda externa.

Lo que ahora está atacando el gobierno es una conquista histórica, aunque esté solventada por una pequeña parte de las ganancias patronales, que a su vez provienen de la explotación de los trabajadores.

Esto proyecto —como todos los de este gobierno que son defendidos por el bloque justicialista y otros bloques aliados— no tiene en cuenta las necesidades de los jubilados. Ni siquiera ha tomado en consideración las encuestas ni se ha puesto en contacto con numerosos jubilados para escuchar cuáles son sus preocupaciones: que una parte de los 3.800.000 jubilados cobra en promedio un haber de 200 pesos, y el 60 por ciento percibe el haber mínimo de 150 pesos. No es que a partir de estos datos decidieron modificar el sistema. Tampoco leyeron las encuestas del diario "Página/12" que reflejan que el 80 por ciento de la población considera que el gobierno trata mal o muy mal a los jubilados. Entonces, a partir de allí decidieron cambiar el sistema pero no fue por las necesidades de los jubilados ya que el primer objetivo ha sido el de cumplir con lo acordado en la carta de intención firmada con el FMI en 1991, cuando se comprometieron a efectuar una reforma previsional. Esto lo hemos denunciado en varias oportunidades en proyectos que hemos presentado.

Voy a repetir conceptos incluidos en varios proyectos que hemos presentado, porque sé que en la Comisión de Previsión y Seguridad Social —no digo ya en los bloques— ni siquiera los leen. Por lo menos acá están obligados a escucharme ya que no quieren leer ni discutir los proyectos que he presentado.

Con el Fondo Monetario Internacional acordaron —porque a ustedes nadie los obliga sino que coinciden con dicho organismo internacional— incluir cláusulas de este tipo y, es más: el Fondo Monetario Internacional les ha puesto plazo para aprobarlas.

En la primera página del diario "La Nación", —que es un diario de extracción liberal—, del 17 de febrero se dice que el Fondo Monetario Internacional puso como plazo para aprobar la ley previsional el 31 de marzo; se dice que hubo un atraso, que Cavallo tuvo que pedir una prórroga y que se fijó como plazo esa fecha. De

ahí la desesperación de ustedes. De manera que no era que ustedes veían la indigencia de los jubilados sino la exigencia de los inspectores del Fondo Monetario Internacional; en realidad, ustedes ni los ven porque el que lo hace es Cavallo y éste les trasmite esas exigencias.

El segundo objetivo de esta reforma...

Sr. Bordín Carosio. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado con el permiso de la Presidencia?

Sr. Zamora (L. F.). — Señor presidente: no quiero eludir el debate, pero teniendo en cuenta que son más de cien los diputados justicialistas, si cada vez que digo algo que les parece controvertido me van a interrumpir no podré completar mi exposición en la hora de que dispongo para hacer uso de la palabra.

Ya he concedido algunas interrupciones, pero —repito— sólo dispongo de una hora; si el bloque oficialista me acompaña en un pedido de prórroga de una hora más concederé todas las interrupciones que los señores diputados crean conveniente solicitarme.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). — La Presidencia ruega a los señores diputados que respeten al orador que está haciendo uso de la palabra, quien ya aclaró que no concederá interrupciones.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (L.F.). — El segundo objetivo de este proyecto que rechazamos en el debate que estamos haciendo tiene que ver con favorecer en forma directa a un puñado de aseguradores, banqueros y grandes empresarios y en forma no directa ni específica pero más global, a toda la gran patronal que opera aquí, ya sea multinacional o con origen en nuestro país. Esto es un gigantesco negociado, y tan gigantesco que hasta la propia patronal se relame esperando que este proyecto finalmente se apruebe. Luego me referiré a esto y a algunas declaraciones, pero ahora quiero pasar al tercer punto.

El tercer punto consiste en hacer una operación salvataje, porque la desesperación del FMI y del gobierno no tiene que ver con el problema previsional en sí sino con un plan económico que está cayendo por el tobogán, que está trastabillando. Este plan económico se cae; haciendo una comparación un poco antojadiza, podemos decir

que se parece al plan Austral de 1986. Recuerdo cuando en 1986 nosotros decíamos que al plan Austral se lo veía como a un chiquito que estaba cayendo por un tobogán, o sea que se lo veía alto, pero cayendo. Ya sabemos que el plan terminó en el piso.

Sr. Fernández (R. E.). — Señor presidente: el señor diputado por Buenos Aires no se está refiriendo al tema que nos ocupa, que es el jubilariorio y no el plan económico.

Sr. Zamora. (L. F.) — Señor presidente: si el diputado Fernández me prestara atención se daría cuenta de que me estoy refiriendo al tema en debate. La otra posibilidad que cabe es que el señor diputado no conozca el tema que estamos tratando y entonces crea que estoy hablando de otra cosa.

El tercer objetivo es salvar este plan económico, que está mal, que está mostrando signos profundos de deterioro. Esto es público y notorio; hasta los inspectores del FMI están preocupados. La presión de las grandes empresas para que este proyecto se apruebe, unida al intento esclavista de la flexibilización laboral, tiene que ver justamente con dar oxígeno a este plan económico.

Acá no estamos hablando de un plan económico que va a llegar hasta el 2030, como algunos -pesimistas o ilusos- creen. Se trata de un plan económico que el pueblo trabajador está resistiendo e impidiendo que se lleve hasta el final, lo que está produciendo una crisis en el plan. De allí esta búsqueda desesperada del mercado de capitales. Las inversiones extranjeras no vienen, y las que vinieron fueron para especular. Algunas inversiones no significan nuevas fuentes de trabajo sino que son inversiones en servicios de empresas privatizadas. Todo este plan económico y el tipo de cambio atado necesitan que vengan capitales -aunque sean golondrinas- porque hay que solventar pagos muy importantes en concepto de deuda externa y tiene que haber reservas suficientes para mantener el dólar. Pero los capitales no vienen más, no tienen proyectos serios de inversión en el país; la crisis del capitalismo internacional así lo demuestra. ¿Acaso creen que Italia, que se está hundiendo, va a mandar capitales, más allá de aquellos vinculados a hechos de corrupción? ¿Creen que España, en la situación en la que se encuentra Felipe González, va a realizar inversiones en nuestro país? ¿O que de Francia vendrán inversiones? ¿O Alemania, con los líos que tiene, que afronta una huelga general de empleados estatales y obreros metalúrgicos después de 40 años? Doscientos mil mineros marchan sobre Londres. ¿Creen que Inglaterra va a mandar

dinero hacia aquí? ¿Creen que Yeltsin nos va a mandar algo? Los señores diputados lo saben bien: el 70 por ciento de los rusos se negó a apoyarlo. ¿Ustedes creen que con una crisis económica de cien mil millones de dólares va a pensar en inversiones aquí? Los Estados Unidos tuvieron que mandar tropas para controlar la rebelión latente, amenazante, de los negros en Los Angeles, ¿y piensan que pueden realizar inversiones aquí? Sólo pueden entrar capitales golondrina, y si llegara a subir un punto la tasa de interés internacional, aquí no va a quedar nadie. El único que va a quedar será Cavallo, que podrá decir que fue una suerte el haber firmado el Plan Brady con tasa fija, en vez de tasa flotante, porque la tasa se mantendrá sin cambios. No sé cómo va a poner un cerrojo en el Banco Central para impedir que se vayan las reservas que hoy sostienen en forma artificial y coyuntural este plan.

Se supone que el capitalismo se sostiene con inversión de capital proveniente de la explotación obrera, pero aquí no hay. Entonces viene esto de crear un mercado de capitales, pero sin pedirles capitales a los empresarios -éstos los fugan-, sino a los trabajadores, que no sólo ponen su esfuerzo, su dedicación, dejan la vida en la fábrica sino que ahora se les pedirá que pongan dinero para crear un mercado de capitales para que lo exploten los capitalistas.

Esto es un robo escandaloso tan transparente y cristalino desde el punto de vista de las ganancias que se van a llevar las grandes empresas que participarán, que ha suscitado confesiones como la de González Fraga, que todos sabemos que representa a la usura internacional; donde hay usura él está allí para ser uno de sus voceros más preclaros; también lo es de los grupos que operan con la actividad bancaria.

Dice González Fraga: "Si consideramos, de acuerdo con los términos del proyecto oficial, que las prestaciones comenzarán a hacerse efectivas a partir de los quince años de la puesta en vigor de la legislación propuesta, es fácil estimar que la masa de fondos será de una magnitud superior a los 140.000 millones de dólares..." -dos veces la deuda externa argentina- "...partiendo de la base de que la recaudación previsual de abril de 1992 fue de 810 millones"

Sigue diciendo González Fraga que es extraordinario lo que está haciendo este gobierno. ¿Y cómo quieren que se apruebe rápido en el Congreso esta iniciativa para que se embolsen esos millones de dólares?

Pero hay otros elementos que apuntan y alientan para que este negocio se concrete. Está el sector específico que se beneficia, que es el bancario y el asegurador. Los nombres los conocemos todos. Está la Banca Nazionale del Lavoro —acusada de corrupción en los Estados Unidos—, uno de los tantos grupos que, según el diario "Clarín", está en las gateras. Este es uno de los sujetos a los que se les va a entregar el ahorro de los trabajadores. Se les meterá la mano en el bolsillo a los trabajadores para dárselo a los ladrones de la Banca Nazionale del Lavoro, del Banco Mercantil, del Banco de Galicia, del Banco Francés, del Banco de Crédito Argentino, del Citibank, del Banco Río de Pérez Compagnon, del Banco Boston, del Grupo Roberts, Fiorito, etcétera. El diario "Clarín" dice que ya hay muchos en las gateras y que apenas se apruebe la reforma previsional, apenas ustedes levanten las manos comenzará una lucha feroz por un bocado de 3.500 millones de dólares anuales. En esos términos se refirió al tema un periodista del diario "Clarín" que defiende el sistema capitalista, no es socialista ni tiene nuestra concepción: "una lucha feroz por un bocado". Ciertamente, están en las gateras porque, ¿quién se va a perder un bocado de éstos? Es como poner caviar en una villa de emergencia. Por razones de brevedad no voy a mencionar otras empresas, aunque puedo citar a La Estrella, Mariva, Grupo Juncal, etcétera.

Otro resultado secundario de esta iniciativa que no se ha señalado y en el que nosotros hemos tratado de hacer hincapié aprovechando los pocos medios de comunicación con los que podemos contar, es que esto significa indultar definitivamente —para seguir con el beneficio patronal— a los grandes grupos económicos que evadieron durante décadas al sistema previsional.

Este proyecto significa hacer un borrón y cuenta nueva. Esto ya sucedió con el proyecto de ley de empleo: unos entraron, otros no y algunos piden una ley de flexibilidad superior. Estos grandes grupos económicos evadieron al sistema durante décadas no sólo pagando en negro sino reteniendo los aportes sin depositarlos en las cajas. Sin embargo, nadie dice nada al respecto. Los ladrones del dinero del pueblo argentino son recibidos como grandes personajes en la Casa Rosada, en la quinta presidencial de Olivos y aquí mismo.

Los grandes grupos económicos significan deuda externa, capitalización, subsidios, promoción industrial, evasión patronal, etcétera. ¿O piensan que hicieron la plata trabajando? ¿Pérez Compagnon llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo trabajando? Eso lo logró gracias a medidas como las que se pretenden aprobar hoy.

El sistema previsional está vaciado desde el punto de vista de su capacidad de respuesta, más allá del recurso polémico de decir que como ahora hay superávit entonces no está vaciado. ¡Vayan a explicar a una jubilada que gana 150 pesos mensuales que el sistema no está vaciado! Está vaciado y hay que decir por qué, pues para corregirlo y reformarlo hay que analizar las causas por las cuales hoy no sirve para pagar jubilaciones dignas.

Es necesario decir que durante 40 años de gobiernos radicales, justicialistas y militares se desviaron fondos. Aquí hay que investigar desde el año 1950. He seguido las intervenciones del señor diputado Fescina sobre este tema y se aprecia que ha realizado una investigación en serio de este aspecto que estoy mencionando. En su exposición citó datos relativos al año 1954 y en especial a partir del golpe "gorila" de 1955, en el que intervino ese individuo que acaba de morir, celebrado como un prócer, ese personaje funesto de la política argentina que fue el almirante Rojas. Alsogaray, Aramburu y Rojas encabezaron el golpe gorila de 1955, y en particular a partir de ese momento todos los gobiernos desviaron fondos de las cajas. ¿Ellos no tienen ninguna responsabilidad? ¿Allí también hay un borrón y cuenta nueva?

Otro dato que mencionó el señor diputado Fescina en algunas de sus intervenciones que yo he estudiado como parte de la investigación de este tema, es que sólo la dictadura de Onganía se llevó de las cajas más de 20.000 millones de pesos en 1967.

El gobierno de Alfonsín y el actual desviaron fondos para comprar dólares y con ello pagar intereses de la deuda externa. Tengo en mi poder citas del ex diputado Budiño correspondientes a la sesión celebrada el 27 y 28 de diciembre de 1989, cuando se consideró el proyecto de ley sobre el Instituto de Jubilados Pensionados, en las que reconoció que efectivamente se destinaron fondos del sistema previsional para pagar deuda externa. Esto es un delito que hoy se pretende blanquear por medio de este proyecto de ley. Unido eso a la evasión patronal que he señalado, nos podemos explicar cómo está actualmente el sistema. La evasión ha ascendido a 50.000 millones de dólares en los últimos diez años, 5.000 millones de dólares por año, gran parte de ella por los grupos económicos, y ahora no se propone ningún método serio para controlar la evasión para el futuro.

No hablemos del pasado. Al pasado se lo premia con la impunidad ya habitual del gobierno: impunidad para los genocidas e impunidad para los evasores, que encima tienen estímulos para que saquen más ganancias. Esto que señalamos es el robo del siglo: lo dicen los jubilados y es a realidad.

Utilizando el desastre de un sistema previsional que la mayoría de los que sostienen su reforma coadyuvaron a vaciar, se intenta imponer este proyecto de reforma que terminará por destruir el sistema. El gobierno se desliga de su responsabilidad de garantizar una jubilación digna para todos los trabajadores argentinos, más allá de que se propongan algunos mecanismos que intenten demostrar que no es así. Esto es tanto más grave cuando su política de ajuste, salvaje y permanente está arrojando a la calle millones de desocupados. No es casual que a partir de ahora el Estado se haga el burro con este proyecto de reforma, porque cada vez hay más exigencias y demandas del pueblo. Estamos hablando de un pueblo que está siendo arrojado de las fábricas y que cuando pone un quiosco ambulante viene la policía y lo echa. Estamos hablando de jóvenes trabajadores con contratos temporarios, que trabajan tres meses en una fábrica y después los echan, luego en otra y los echan, y así ininterrumpidamente.

De esa realidad estamos hablando. ¿Qué año en aportes se les podrá computar a esos trabajadores? ¿Qué se les dirá? Hasta aventuro a decir que se alegrará que son vagos, que no trabajaron y no aportaron. Y los de mayor edad son despedidos con retiros voluntarios, indemnizaciones y otros mecanismos inventados no por Menem sino por los capitalistas del mundo pues hay planes de ajuste por todos lados. ¿Quién consigue trabajo a los 45 años? Quieren tomar los últimos diez años como base del cálculo del haber, pero en muchos casos no existirán esos últimos años porque no habrán trabajado.

Ya hablé de lo que significan el indulto y la amnistía encubierta a los empresarios que provocaron el desastre del sistema previsional. Y, cosa extraordinaria, se premia a los empresarios dándoles la posibilidad de deducir los aportes patronales del IVA. No sólo no hay control para los que evaden sino que encima se los premia admitiendo la deducción de los aportes patronales en el sector impositivo. ¿Por qué no se da a los trabajadores la posibilidad de deducir de impuestos los gastos de la construcción de su vivienda o el pago de la educación de sus hijos porque en la escuela pública ahora hay que pagar la cooperadora obligatoriamente?

Estos grandes empresarios y los dirigentes sindicales que han logrado ser parte de este negocio -luego me referiré en especial a aquel acta-acuerdo del año anterior- encima se quedan con un porcentaje importante de lo que aportan los trabajadores, pues a éstos no todo el dinero que aportan se lo reconocen como capitalización. En el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 922 se hacía referencia al 35 por ciento, pero ahora es muy difícil saberlo. No quisiera decir una cosa por otra porque quizá algún diputado podría señalarme que de acuerdo al último borrador acordado con algún dirigente empresario, con el ministro Cavallo o con Brunelli ese porcentaje ha sido modificado. De todas formas, estaremos hablando del 25, 28 o 30 por ciento; ello está ligado al tema de las comisiones y del seguro, así como también a otras situaciones denunciadas por otros señores diputados. Lo cierto es que la tercera parte de lo que aporten los trabajadores no será reconocida como monto a ser capitalizado y, por lo tanto, como parte del haber que les correspondería percibir cuando se jubilen. Es decir que los empresarios no sólo manejarán sumas millonarias, sino que también podrán quedarse con una parte de ellas.

La gente se pregunta: ¿esto perjudica a los jubilados y a los trabajadores? Esto perjudica a todos, menos a los grandes grupos empresarios. Estas son cuestiones de sentido común. En la pseudorreunión que la Comisión de Labor Parlamentaria llevara a cabo el día 21 del corriente un señor diputado oficialista cuyo nombre no recuerdo dijo que el proyecto había sido malvendido y que era fácil "pegarle". Lo que ocurrió no es que fue malvendido, sino que es tan "gorila" que no se puede vender bien; el tema es muy sencillo de explicar a los trabajadores, a los jóvenes, al pueblo en general, que tienen una gran confusión y un desconocimiento del asunto porque el gobierno no los informó y tampoco permitió nuestro acceso a los medios de comunicación para explicar el tema desde distintas ópticas.

Lo mío es lógica formal y no dialéctica marxista sino premarxista. Si un sistema que paga 150 pesos miserables de haber jubilatorio -o 200 pesos miserables promedio- está siendo mantenido por los aportes patronales y obreros, y éstos últimos dejan de ir hacia el sistema estatal para pasar a capitalizarse en el sistema privado, aquél se deteriorará pues se quedará sin una parte importante de recursos. ¿Esto es cierto? En respuesta, el gobierno dijo en una primera instancia que iba a estudiar la cuestión.

Ustedes recordarán que se hablaba de pedir prestado el dinero a las empresas privadas o de emitir títulos. Al respecto se manejaron distintos porcentajes; se habló del 60 por ciento, y ahora parece que es el 30 por ciento. Entonces, el gobierno propone pedir prestado a las empresas privadas lo que antes cobraba directamente. Así, en la Argentina crearemos nuevos parásitos que vivirán de una intermediación que no se justifica. Pero, ¿y si esto no alcanza? Ya lo dijo el ministro Cavallo: crearemos impuestos. Es decir que, el funcionamiento del sistema estatal dependerá de seguir metiendo la mano en el bolsillo del trabajador o de engordar parásitos. ¡Esto es así! ¡No busquemos más vueltas!

¿Qué ocurre con los trabajadores menores de 45 años, a quienes originariamente les querían robar sus aportes? Recuerdo las declaraciones del secretario Schulthess, que es un personaje menor del equipo económico aunque ha actuado como vocero en este tema. A esos trabajadores se les quería robar abiertamente, diciéndoles que sus aportes no existen, que se gastaron, que no los tenemos. Ahora eso se modificó. A esos trabajadores los mandan a un sistema de capitalización privada. Luego discutiremos las modificaciones que existen al respecto. ¿Y qué garantía les van a dar? Ocurre que serán empresas muy importantes: Pérez Companc o el banco de no sé dónde. Pero, ¿qué pasó con aquel que el año pasado fue a comprar un pasaje de avión a Pan American? Recordemos que era una de las líneas de aviación de mayor prestigio, una de las más poderosas del mundo, pero el año pasado quebró y dejó pasajeros en Ezeiza, en Frankfurt, en Nueva York, etcétera: toda esa gente estaba lista para tomar el avión. Pero una cosa es perder un avión; y otra, 30 años de aportes. Esto es lo que estamos discutiendo ahora. ¿Acaso el gobierno va a devolver esos 30 años de aportes? Ya conocemos lo que hace el gobierno. ¿Qué haría Alfonsín en este caso? Hablaría de emergencia previsional, de que no podemos pagar y propondría una postergación. ¿Qué haría Menem? Emitir bonos; una burla...

Sr. Herrera Arias. — ¿Y ustedes qué harían?

Sr. Zamora (L. F.). - También está la posibilidad de que estemos nosotros en el gobierno y entonces se pagaría e irían a la cárcel los...,

-Varios señores diputados hablan a la vez

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). — Ruego a los señores diputados que respeten a quien está en uso de la palabra.

Sr. Zamora (L. F.). - Señor presidente: agradezco su llamado de atención. Aunque se trata de una

interrupción, me alienta pensar que estoy yendo en el camino correcto cuando provocho esta repercusión en el campo oficialista. Si aplaudieran, tendría que corregir mis apuntes. *(Risas y aplausos.)*

Estas cosas las denunciábamos en 1991 por escrito cuando presentamos un proyecto en la Cámara. Como el gobierno impidió el debate nacional sobre este tema, también lo impidió entre cuatro paredes. Esto ya lo señalábamos en 1991.

Volviendo al tema -en atención a la hora que avanza-, cuando hicimos la campaña de firmas con otros sectores políticos y gremiales, las preguntas de la gente eran variadas. Ya firmaron un millón y medio de personas. Unos decían: "¿Es contra Menem? ¿Dónde firmo?", y otros: "Yo no sé nada de la jubilación", y querían conocer el tema. Cuando les explicábamos, firmaban indignados.

Habían un punto muy importante que acá se dejó de lado porque la mayoría coincide —creo que exclusivamente mi bloque está en desacuerdo con la medida—, y es el aumento de la edad. Cuando a un trabajador se le dice que el proyecto de reforma que se propone para beneficiarlo aumenta la edad para jubilarse, se escandaliza. Sí, le agregan cinco años, y no hay que descartar que sean más, porque a último momento puedo aparecer cualquier cosa.

Esto es algo muy serio. En primer lugar, se rompe con un contrato de hecho entre el trabajador y el Estado. Este Estado capitalista no es creíble para nada; ya lo sabemos, son años de historia. De golpe se le dice al trabajador, a quien empezó a trabajar a los 18 años y ahora tiene 30, que tiene que llegar a los 65 para poder jubilarse porque así lo dispone un bando. En este caso no se trata del bando del aspirante a emperador Menem -porque todavía no recurrió al decreto-sino del Congreso, pero tiene característica de bando porque se trata de una imposición a la población.

¿Existe o no un contrato de hecho? ¿Quiénes somos todos los que estamos aquí para decir a los trabajadores que van tener que seguir trabajando durante cinco años más? Por más que se utilice cualquiera de los argumentos que aquí se han esgrimido, nosotros los rechazamos; y si el gobierno insiste, ¿por qué no consulta al pueblo?. Pero hay algo más grave aún, en lo que respecta al aumento de la edad. Se dice que esa decisión proviene de cálculos que se hicieron. Y eso es lo grave porque tiene la frialdad del cálculo. Con el sistema previsional tanto estatal co-

mo privado está mal, para que dé mayores ganancias han considerado que tiene que haber más aportantes y menos jubilados que cobren. Esa es la síntesis, pero con un agravante: están especulando con la vida y la muerte de los trabajadores y les están negando el derecho a descansar, en el ocio creativo, en el trabajo o en lo que sea, pero en forma voluntaria y no obligatoria, para quienes durante toda una vida han laborado construyendo un país que otros destruyen.

Con el propósito de sustentar la argumentación, se dice que ha crecido la expectativa de vida. Si alguien puede vivir hasta los 80 años, se arguye que no es lógico que se jubile a los 55. Yo digo que es lógico que así ocurra, porque si trabajó durante 30 años y puede vivir 20 o 25 como jubilado, ¿por qué se le va a negar ese derecho? Si el hombre se ha pasado la vida manejando un torno o metido en un barco, como es el caso de los conductores navales, cumpliendo su función durante las 24 horas del día —doce al lado de la máquina y otras doce a la expectativa porque incluso si hay que arreglar la máquina, lo sacan de la cama— ¿cómo podrá soportar la posibilidad de postergar su jubilación por cinco años más?

Puedo citar el caso de un maquinista naval quien me señalaba que trabajaba en esa actividad desde los 14 años. "Ahora tengo 40 y no quiero trabajar más", me decía. Quizás un trabajador intelectual pueda resistir mejor que se le aumente la edad para jubilarse, pero la realidad es que los demás trabajadores no admiten lo mismo. Esta es la cuestión, y no los números que manejan los tecnócratas para beneficiar a los grandes empresarios.

Tengo sobre mi banca un informe del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el que se señala que en el Gran Buenos Aires los habitantes tienen un promedio de vida 17 años menor que el resto del país. El promedio de vida en la provincia es de 65 años —reitero que éste es un informe de la gobernación— y esa edad es exactamente —y casualmente— la misma que hace falta para jubilarse según el proyecto. Pero en cualquier partido del conurbano el promedio de vida es menor. En Almirante Brown es de 59 años; en San Isidro, 55 años; y en Merlo y Moreno 20 años menos que en cualquier otro lugar del interior del país; ello, según "La Nación" del 16 de octubre de 1990.

Aquí se está especulando con la vida y quisiera discutir con todos aquellos tecnócratas que dicen que la expectativa de vida ha crecido.

¿Quién ha hecho esos estudios? Pero aún así hay toda una serie de elementos que resulta necesario discutir.

¿Cuál es la expectativa de vida de un colectivo que después de un determinado tiempo de trabajo termina con los riñones reventados y con la psiquis destruida por el estrés? ¿Hay que manejar 10 o 15 años un colectivo para darse cuenta de lo que significa! ¿Ese colectivo está en condiciones de trabajar cinco años más? De ninguna manera; está deseando irse; odia el colectivo. Tal vez prefiera jubilarse para seguir trabajando manejando un *remise* pero haciéndolo con tranquilidad y en forma voluntaria.

Esto proyecto es antiobrero y antipopular y está bien para un empresariado a favor de la usura. Voy a saltar el caso chileno porque es suficientemente conocido. Ya hablé de que el dinero del trabajador va a quedar librado al arbitrio de las grandes empresas. En ese sentido han operado las últimas maniobras de Menem y de Cavallo, aportando este maquillaje. También la cuestión del robo de los aportes de los menores de 45 años. Hasta ahora ha habido un largo camino que ha seguido la misma dirección; la ruta no cambia. Tengo aquí prueba de todas las modificaciones que fueron haciendo.

Después aparece la idea de incorporar al Banco de la Nación Argentina como administrador y brindar así una garantía estatal. Aparece esta gran panacea para decirles a los que no quieren ir a una administradora privada, que pueden concurrir ante el Banco Nación. Pero aquí hay un peligro y es que la mayoría de la población entonces irá al Banco Nación. ¡Qué problema! Por más que se desviven en mostrar qué grandes son las privatizaciones, la empresa privada, el capitalista serio y coherente, la gente ve Aerolíneas Argentinas, Pan American, El Hogar Obrero, Industrias Sal-Lari (ex Citroën), y por otro lado sabe que el Banco Nación hace muchos años que está en el mismo lugar y que podrá pagar aunque sea en bonos, pues allí se puede reclamar. En cambio, al dueño de Pan American no se lo vio más. No defendemos la ineficiencia estatal —que sería superada con el control de los trabajadores—, pero denunciemos la inseguridad que significa darle plata a los capitalistas que luego se la roban.

Como lo mencionó el señor diputado González Gaviola; el señor Peruzotti —de la banca privada— y el representante de los bancos extranjeros reunidos en ADEBA salieron a reclamar un veto. Se pretende mostrar que este proyecto es progresivo y que va en contra de los banqueros. Pero fíjense lo que aparece pu-

blicado en el diario "Clarín" el día 28 de febrero de 1993, en un artículo sugestivamente titulado "Ahora el negocio es sólo para grandes".

Se expresa lo siguiente: "Los bancos, compañías de seguros y grupos económicos están rehaciendo los números. Se estima que operadores pequeños y medios podrían desistir de entrar en el negocio. Los más grandes, en cambio, consideran que hay mucho mercado para ellos..." y como anticipa uno de sus voceros "la garantía estatal es económicamente insostenible, porque en la catástrofe, como una hiperinflación o una maxidevaluación, si no se está posicionado en activos extranjeros, no hay seguro de cambio que valga. Es una concesión 'poco seria' para que saliera el dictamen de la Comisión".

Esto lo escribí en el proyecto que presenté hace un mes y medio, donde señalaba que a último momento podía cambiar todo. Y así ocurrió: no sabemos cuáles son las modificaciones porque todavía se están introduciendo. De esta manera atropelló el bloque justicialista al resto de la Cámara. Cavallo señaló que con el pacto con la CGT acordó la supresión de la garantía del Banco Nación, e incluso algunos señores diputados hicieron declaraciones que confirman los alertas que señalé en mi proyecto hace un mes y medio. En realidad —dicen— no se sumó la garantía del Banco Nación; hay que estudiar la posibilidad de suprimir directamente el Banco Nación como administrador de los fondos de pensión, porque si ahora hay un sistema de reparto, ¿para qué queremos al Banco Nación? Como antes se hablaba de un sistema de capitalización privada era necesario tener una garantía estatal, pero ahora dicen que esto no hace falta. Aquí se nos advirtió que se estaba estudiando la posibilidad de suprimir al Banco Nación y quedaría esta burla del sistema de reparto.

La CGT cumplió un rol nefasto ya que fue una de las herramientas fundamentales para que se pudiera discutir este proyecto de ley. Y digo que cumplió un rol nefasto porque no peleó, no se movilizó, dio quórum, firmó el dictamen y asistió ayer a la sesión, pero no a costa de conseguir alguna mejora para sus mandantes si no de participar en el negocio y quedarse con el dinero proveniente de los trabajadores. La CGT consiguió una gran conquista pedida por los empresarios, y es que los trabajadores de pocos recursos se incorporen al sistema de reparto porque tendrán cierto atractivo al cobrar el 80 por ciento del haber jubilatorio, mientras que los de medianos y altos recursos cobrarán un porcentaje inferior, ya que bajará al 60 por ciento y aun menos.

Todo esto lo decimos con la imprecisión a que nos lleva la irresponsabilidad en que el gobierno y el bloque oficialista han presentado este tema. A los sectores de medianos y altos recursos se les pagará un haber inferior en el sistema de reparto, con lo cual se los está empujando a ingresar al sistema de capitalización.

Las grandes empresas no quieren a los que ganan poco sino a quienes ganan mucho ya que el aporte será superior. No desean complicarse con empleados estatales que ganan 300 pesos, con mucamas del Hospital Italiano que ganan 350 pesos, con trabajadores de la municipalidad que ganan 400 pesos ni con los bancarios que en promedio perciben también 400 pesos. Eso no lo quieren; pretenden llegar a quienes perciben de un salario medio para arriba, porque ahí está el negocio. ¿Quién consiguió eso? La CGT y el ministro Cavallo. Mientras tanto, los mejores aportes se van del sistema estatal, que se confirma que no tendrá recursos y quedará desmantelado.

Esa es la razón por la cual señalamos que hubo una traición por parte de la CGT al no defender los intereses de los trabajadores. Además, siempre tuvo una posición oportunista, porque durante el desarrollo de un seminario que se realizó el año pasado, se pronunció en contra de este proyecto. Así, apoyó y retiró el apoyo mil y una vez buscando entrar en el negocio. Por su parte, Lorenzo Miguel dijo que éste era un plan económico antiobrero —lo escribió y fue publicado por los diarios— y ahora apoya una de las medidas que se pretenden tomar para poder salvarlo: la reforma previsional.

El 9 de noviembre pasado hubo un "parazo" en las fábricas argentinas, a pesar de que había sido impulsado por una CGT a la que la mayoría de los trabajadores le tiene bronca y una gran desconfianza. Muchos trabajadores dudaron en adherirse o no al paro, ya que si lo hacían perdían el premio por presentismo para que la CGT en definitiva, terminara arreglando con el gobierno. Pero el paro fue tremendo, por más que el justicialismo estuvo en contra, el radicalismo miró para otro lado, el MODIN y el centroizquierda dijeron que no había que parar, Mary Sánchez salió a "carnerear", Solanas también se pronunció en contra y parte de la izquierda —salvo nosotros— tampoco apoyó. A pesar de todo eso en las fábricas igual se paró; ¡miren la bronca que le tendrán al gobierno!

¿Qué hizo la CGT con ese triunfo? Firmó el famoso acuerdo con el gobierno por el cual se incluye a los sindicatos como posibles administradoras de fondos de pensión. Si hubiese adoptado nuevas medidas de fuerza, hoy no estaríamos discutiendo este proyecto ni el plan económico en ejecución.

Por otro lado, algunos legisladores señalaron lo que puede llegar a ocurrir en el año 2030. Desde mi punto de vista, si seguimos con gobiernos como éste, con Cavallo o con los que firmaron el plan Brady, vamos a estar 50 veces peor que ahora. Pero tengo confianza en los nuevos dirigentes obreros de base, en organizaciones que están surgiendo y en la lucha popular. No es casual que los otros proyectos de privatización hayan sido aprobados en un día y que éste les esté costando tanto.

Además, la CTA de De Gennaro y de Mary Sánchez para ser coherente con su discurso pseudocombativo salió a juntar firmas y a realizar marchas pero en plena pelea modificaron sus estatutos para incluir la facultad de que los gremios afiliados a ella pudiesen conformar administradoras de fondos de pensión, si es que la ley se llega a probar. ¡Qué manera de pelear!

Pelean contra las administradoras de los fondos de pensión y ponen en sus estatutos que en caso de aprobarse el proyecto quieren participar del negocio!

Eso es totalmente diferente de lo que ocurrió a principios de siglo, cuando Alvear impulsó la sanción de una ley por la que se ponía en marcha el sistema previsional, ya que en ese entonces no existía un sistema jubilatorio. Así fue como centrales como la USA, la FORA, los anarquistas y los socialistas se manifestaron en su contra, proponiendo que únicamente pagasen los patrones. Lucharon con huelgas y manifestaciones y derrotaron el proyecto. Decían "queremos la jubilación pero que aporten los patrones". Nosotros coincidimos en que la jubilación es un salario diferido.

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). - La Presidencia informa al señor diputado que ha vencido el término del que disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. Zamora (L. F.) — Señor presidente: quizá por cortesía debió haberme avisado cuando faltaban cinco minutos para que concluyera; solicito entonces que me conceda una prórroga por un tiempo equivalente.

Sr. Presidente (Durañona y Vedia). - La Presidencia le ruega al señor diputado que redondee su exposición, por haber vencido su tiempo.

Sr. Zamora (L. F.). - Le agradezco, señor presidente.

El problema de la edad constituye el punto central -además de otros- por el cual no aprobamos el proyecto de alternativa y cuestionamos los proyectos del radicalismo, del MODIN, de centroizquierda y del señor diputado Fontela.

¿Qué significado se quiere dar a entender cuando se habla de aumentar la edad mínima para jubilarse? Que en el sistema no hubo un mal manejo de los grandes grupos económicos ni de los gobiernos que desviaron fondos, sino que la culpa es de los trabajadores que trabajan poco y se jubilan muy temprano. Por eso se dice que hay que aumentar la edad para jubilarse, y por eso se buscó el consenso con el gobierno. Si tanto el radicalismo, como el MODIN, como las fuerzas de centroizquierda y otros iban a estar de acuerdo con el gobierno en un proyecto que tomara exclusivamente esta medida tan antiobrera como es la de aumentar la edad para acceder a la jubilación.

Nosotros nos hemos opuesto a todo esto, y para ello hemos presentado nuestro propio proyecto. Para nosotros los recursos tienen que provenir del cobro de la evasión que durante décadas efectuaron los grandes grupos económicos por la irresponsabilidad de los funcionarios que permitieron el desvío de los fondos, y de un aumento del aporte empresario con la correspondiente supresión de lo que se descuenta a los trabajadores ya que se trata de un salario diferido que tiene que pagar la parte patronal.

Los recursos deben provenir de un aporte que debe efectuar la patronal en relación proporcional a su patrimonio y a sus ganancias, el que debe ser inicialmente de un 16 por ciento, incrementándose a un 19 por ciento en el caso de las medianas empresas y a un 26 por ciento para los grandes grupos económicos. Todos se llenan la boca hablando en contra de los grandes grupos económicos, pero cuando nosotros proponemos medidas para recortar su poder acontece algo similar a lo que pasaba con la deuda externa: cuando hablamos de suspender su pago parece que, a radicales, al MODIN y al centroizquierda se les afectara el honor de la madre por la forma en que se niegan.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Hugo Bartolomé Rodríguez Sañudo.

Sr. Zamora (L. F.).— Nuestro proyecto tiene que ver con un sistema único y estatal, y controlado por los trabajadores y los jubilados para evitar el desvío de los fondos y la evasión.

Estoy convencido más que nunca de que hemos asistido a un tratamiento fraudulento del proyecto en consideración, ya que hubo numerosas iniciativas que el oficialismo se negó a debatir, incluida la nuestra que fue ignorada totalmente. Con nosotros no se buscó el consenso por parte del oficialismo, como se lo hizo con el radicalismo y otras fuerzas políticas, porque sabían que reclamábamos debate y consulta popular; no consenso.

Teniendo en cuenta que la futura norma iba a afectar la vida de los argentinos, pretendíamos que se hiciera una discusión a nivel nacional por medio de una consulta popular y no entre cuatro paredes. Estamos seguros de que todo esto se hubiese logrado si hubiese habido un proceso constante de movilización.

Muchos de los que se llenaron la boca, declamando su oposición a este proyecto -más allá de haber encabezado alguna marcha el 10 de marzo, como la Unión Cívica Radical y el centroizquierda- después desaparecieron del mapa y se dedicaron a buscar consensos por un lado y trabas por el otro entre estas cuatro paredes del recinto. Si este proyecto resultara aprobado sería como consecuencia de todas esas cosas que se hicieron para impedir la movilización que lo derrotara.

Más que nunca vamos a defender nuestra iniciativa contenida en el expediente 5.286-D-93, y reclamamos la realización de una consulta popular para que se decida cuál de todos estos proyectos -el oficial o uno alternativo- será el nuevo régimen previsional. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). - Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Zamora (L. F.). --- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Hardy. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo).-Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (L. F.). --- Simplemente quiero que quede constancia en la versión taquigráfica de que hubo aplausos del bloque Justicialista al término de mi exposición. (*Risas.*) Ello demuestra que el bloque Justicialista no sólo ha hecho gala de los atropellos que lo han caracterizado en los últimos tiempos sino también de una cierta ironía.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Puricelli. ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Hardy. -- Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Puricelli. — Señor presidente: interpretando el pensamiento de mi bloque quiero expresar, a fin de que también quede registrado en el Diario de Sesiones, que los aplausos se debieron a la finalización de la exposición del señor diputado por Buenos Aires más que a su contenido, que no compartimos y que no tiene ningún grado de racionalidad. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Formosa.

Sr. Hardy. — Señor presidente: trataré de ser breve. Mi primera preocupación con respecto al proyecto en debate es que pareciera que algunos señores diputados no son conscientes de que estamos frente a un problema de enorme trascendencia. Estamos tratando una cuestión que quizás grave en el destino de varias generaciones, y no es posible abordarla con ligereza; ligereza al aceptar sin más las razones del Poder Ejecutivo y ligereza al producir un despacho que no guarda las formas y los procedimientos, lo que nos ha privado de un debate en comisión que era insoslayable para tratar nada más ni nada menos que el sistema previsional.

Atento a que restan más de cincuenta señores diputados para hacer uso de la palabra, voy a resumir la posición de mi bloque y solicitar que se inserte el resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Este proyecto, antes que al interés de los trabajadores, apunta al interés del propio modelo económico en aplicación. Apunta al objetivo cada vez más difícil de lograr que cierren las cuentas fiscales. No en vano fue incluido en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y ha trascendido que el apuro para que los legisladores lo aprobemos proviene de esos compromisos asumidos y de las exigencias del citado organismo internacional para que se cumplan.

Al margen de la opinión que me merece esta actitud del Poder Ejecutivo, que asume compromisos suponiendo que el Parlamento va a decir amén, destaco el carácter cortoplacista de ese objetivo. Cuando no hay ingresos a raíz de privatizaciones, cuando hay dificultades para que cierren las cuentas públicas y cuando

hay rigidez en la oferta de capitales externos para cubrir el déficit de cuenta corriente del balance de pagos se quiere echar mano a los aportes de los jubilados.

Por último, señor presidente, quiero manifestar que voy a apoyar la vuelta a comisión del proyecto tal como lo hiciera en votaciones anteriores, fundamentalmente porque estamos tratando un proyecto híbrido y sin justificación. Creo que es necesaria una reformulación total, es decir, elaborar un proyecto nuevo.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabio. — Señor presidente: finalmente los diputados de la Nación tenemos la oportunidad de discutir y analizar este régimen previsional que se refiere específicamente a los actuales trabajadores, que serán los jubilados del futuro. Nuestra opinión habrá de ser dada sin la presión de los autócratas que sólo creen en sus propias opiniones, en sus propias convicciones, sin tener en cuenta que hay otros que tenemos derecho a tener la misma o diferente opinión.

Me refiero más precisamente a la circunstancia de que un diputado acusó a quien habla de haberse prestado a una maniobra para la aprobación de este proyecto, incluso acusó a varios legisladores porque no estábamos presentes durante la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social. Pero esto no es así, es una burda mentira.

No termina allí el tema, porque también dijo públicamente que quien habla había vendido su voto. Eso es una burda acusación por la que tendrá que rendir cuentas y aunque hoy no lo pueda hacer una querrela criminal dado que se escuda en sus fueros parlamentarios, he hecho una presentación para que las comisiones competentes de esta Cámara se expidan al respecto, sosteniendo que si lo que afirma el señor diputado Carlos Alberto Álvarez es verdad se me expulse del cuerpo y si no lo es que se lo expulse a él. No se puede tolerar que se afecte el nombre y el honor de las personas en la forma que lo hizo este señor diputado; porque no es la primera vez que ocurre esto; ya en otra oportunidad sucedió lo mismo con otro legislador, el señor diputado Niño, quien lo intimó para que se aviniera a dejar de lado sus fueros, del mismo modo en que lo haría él, sin obtener respuesta.

Además, en tres o cuatro oportunidades he leído en los diarios que este señor diputado ha hecho diversas denuncias con una liviandad y un desprecio absoluto del honor de las personas.

No quiero referirme más a esta cuestión porque ésta no es la ocasión, pero oportunamente, con los antecedentes que tiene la comisión, se podrá abundar sobre el particular.

Con relación al tema que nos ocupa debo señalar que el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo mereció nuestro rechazo. Fuimos uno de los principales adversarios de esa iniciativa, pero no porque disintieramos en su esencia, sino porque considerábamos que de acuerdo con su redacción no estaban dadas las garantías necesarias para su aplicación.

El proyecto en debate ha sufrido más de cien modificaciones en los 172 artículos que lo componen. Consecuentemente, podríamos decir que se trata de un nuevo proyecto en el que sí están dadas aquellas garantías. Hemos propuesto una serie de modificaciones de las cuales algunas fueron aceptadas y otras no. De allí que hayamos apoyado parcialmente el dictamen correspondiente y durante la discusión en particular habremos de plantear nuestra opinión referente a la modificación de diversos artículos formulando en la oportunidad las razones que nos llevan a exponerlas. Era necesario que alguien tomara cartas en el asunto de la reforma previsional.

La ley 18.037, que corresponde a los trabajadores en relación de dependencia, y la ley 18.038, vinculada con los trabajadores autónomos, fueron acogidas en sus comienzos con beneplácito, porque en ese momento la relación de los trabajadores en actividad con respecto a la clase pasiva era de cuatro a uno. Es decir que había cuatro trabajadores que aportaban por cada jubilado que cobraba.

Desde hace tiempo esas leyes han causado muchos problemas ya sea al gobierno radical como a la actual administración. Tanto es así que el gobierno radical tuvo que dictar un decreto de emergencia previsional, que llevó el número 649. No culpamos ni al gobierno radical ni a la actual gestión por las dificultades previsionales. Sólo decimos que resultaba necesario que alguien tomase cartas en el asunto y fuese al fondo de la cuestión. En este momento se está haciendo algo. Es evidente que no es lo mejor, pero la iniciativa podrá sufrir modificaciones ahora o en el futuro, ya que una ley siempre se puede modificar por otra.

Todos los que no están de acuerdo en este momento tienen derecho a presentar otro proyecto. Si esta norma que estamos considerando

no da resultados, nosotros mismos habremos de pensar en nuestro propio proyecto. Nadie nos lo podrá impedir, y lo haremos en el momento en que lo consideremos oportuno.

En la actualidad se cuenta con el aporte de 4.182.000 trabajadores en relación de dependencia, que podemos relacionarlos con los 2.078.000 pasivos que existen. El cociente entre ambas cifras es de 2,01, que si bien no alcanza el ideal que he mencionado de cuatro a uno, tiene algún sentido y permite resolver algunas situaciones.

El problema se agrava con los trabajadores autónomos. Lamentablemente en este caso aportan 791.000 trabajadores en actividad, existiendo 1.071.000 pasivos. Es decir que la relación es de 0,73, lo que significa que existe menos de un aportante por cada jubilado.

En resumen, la cantidad de trabajadores que aportan en el país —sumados los que se encuentran en relación de dependencia y los autónomos— es de 4.973.000, la que se compara con los 3.149.000 jubilados y pensionados que existen. La relación entre ambos arroja un valor de 1,57 aportantes por cada jubilado. Evidentemente, es la mitad de los aportantes que debería tener el sistema para que los jubilados pudieran percibir lo que establecen las leyes.

Además, los jubilados actuales están sufriendo no sólo por la relación que mencioné entre aportantes y beneficiarios, sino también porque las cajas fueron saqueadas. Como lo ha mencionado el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra se han desviado fondos de las cajas; él mencionó la cifra de 20 mil millones de dólares, pero yo digo que son 25.000 millones de dólares, hablando por supuesto de cifras actualizadas.

En este sentido también hay que señalar que en entidades de bien público cuyos estatutos preveían que en caso de disolución sus fondos pasaran a las cajas de jubilaciones, éstos fueron expropiados por gobiernos militares. Me refiero concretamente a los bienes de lo que fue la Fundación Eva Perón. Si esos fondos hubieran pasado a las cajas de jubilaciones, como era obligación hacerlo porque así lo preveían los estatutos, significarían hoy aproximadamente 30 mil millones de dólares.

Entonces si sumáramos esos 30 mil millones de dólares más los otros 25.000 millones que fueron sacados de las cajas, contaríamos con 55.000 millones de dólares para satisfacer las necesidades de los jubilados y para cumplir las leyes que establecen el 70 y el 82 por ciento móvil. Pero lamentablemente esos fondos no están; tendríamos que duplicar o triplicar los impuestos

para poder rehacer ese patrimonio y volcarlo a las cajas de jubilaciones. ¿Estamos dispuestos todos los argentinos a hacerlo? Ese es el interrogante, señor presidente.

Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo por el sistema aprobando este proyecto de ley que, como ya lo señalé anteriormente, si no es el mejor, lo podemos modificar, hoy o más adelante. No todo está terminado cuando se aprueba un proyecto de ley; nosotros o quienes nos sigan podemos seguir insistiendo a posteriori. Tal como ya se ha señalado en este debate, ciertamente este proyecto no tiene antecedentes; no existe la convivencia de dos sistemas como es, por un lado, un régimen de capitalización como el chileno, y por el otro un sistema o reparto, que es el que actualmente existe en la República Argentina. Se trata de un hecho inédito que es necesario destacar. Los trabajadores tienen dos sistemas: el de reparto y el de capitalización. El de reparto es el sistema que va a administrar el Estado, el que establece la prestación básica universal y la prestación compensatoria.

Como no quiero abundar en consideraciones que ya han formulado otros señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, solicito la inserción en el Diario de Sesiones del texto completo de mi discurso.

En la consideración en particular propondremos algunas modificaciones que entendemos pueden mejorar el proyecto en consideración.

Los integrantes del interbloque, al que pertenezco, y quienes me acompañaban en las bancas ubicadas a mis costados saben que hace dos o tres años el bloque que integro y el partido al que pertenezco, que desde el año 1988 viene analizando la triste situación que viven los jubilados, había elaborado un proyecto de creación de un banco nacional de previsión y seguridad social, que iba a recibir en aquel entonces el aporte del 10 por ciento y del 11 por ciento por parte de los trabajadores y empleadores, respectivamente, lo cual sería capitalizado por ese banco, que abriría una cuenta para cada trabajador.

La conducción del banco iba a estar en manos de los trabajadores en actividad, de los jubilados y de los empleadores, y los fondos que recibiera serían destinados al otorgamiento de créditos a corto, mediano o largo plazo para la construcción de viviendas en el caso de los trabajadores en actividad y jubilados, y para la creación de nuevas fuentes de trabajo en el caso de los empleadores.

Ello de alguna manera está contemplado dentro del proyecto de ley en tratamiento. Como sostuviéramos en oportunidad del diálogo político que tuvo lugar en el salón de actos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nosotros entendemos que en relación con el sistema de capitalización es necesario crear un cuerpo integrado por jubilados, trabajadores en actividad y empresarios para que controlen el uso de esos fondos. Eso está contemplado aquí, pues uno de los artículos del proyecto de ley determina la creación del Consejo Nacional de Previsión y Seguridad Social que precisamente integran los sectores que acabo de mencionar, con la presidencia del señor ministro de Trabajo y Seguridad Social y la vicepresidencia del señor secretario de Seguridad Social. Pero hay otros aspectos que deseamos que se incorporen a esta iniciativa.

Así como se otorgarán créditos a largo plazo con una baja tasa de interés a los empleadores y empresarios, creemos que los trabajadores también son merecedores de ese tipo de préstamos, aunque más no sea para consumo, para equipar el hogar o para comprarse una casa. Es por ello que nosotros vamos a tratar de mejorar este proyecto. No disintimos en lo esencial, pero sí en este tipo de cuestiones. Trataremos de que no haya quien no tenga la oportunidad de proponer las mejoras necesarias para que este proyecto sea no digo el mejor pero sí lo que mejor podamos hacer nosotros.

Otros artículos, como el 100 o el 101, establecen que el afiliado podrá destinar la acumulación de capital para una pensión vitalicia, determinándose a la vez que el resto —teniendo siempre en cuenta un mínimo— podrá retirarlo. Esto es inédito. Quienes hoy aportamos a las cajas de jubilaciones vemos que nuestros aportes van a un agujero negro que consume todo, sin saber para qué se destinan. En este proyecto de ley en el que las administradoras de fondos van a tener que comunicar como mínimo cada cuatro meses a sus afiliados —es decir, tres veces por año— cuáles son los fondos que tienen, los descuentos que serán efectuados por los distintos conceptos —comisiones, seguros, etcétera— y los saldos correspondientes, la disposición que he citado es inédita. También es inédito que cuando el trabajador cumpla 65 años de edad y complete los años de aporte necesarios para jubilarse, pueda elegir que determinada administradora sea la que le pague la pensión vitalicia hasta equis monto, llevándose el resto.

Estas son algunas de las cosas que nos han convencido para dar parcialmente nuestro respaldo al proyecto de ley en consideración.

Tal como ya ha sido expresado, entiendo que restan 59 señores diputados para hacer uso de la palabra, por lo que oportunamente utilizaremos un tiempo más prolongado en, la discusión de la inclusión de algunos. ...

Sr. Mendoza (M.). - ¿Me permite una interrupción señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Sabio. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mendoza (M.). - Señor Presidente mi interrupción será breve. El señor diputado Sabio es un verdadero representante de los jubilados: se encuentra aquí como legislador nacional representándolos desde hace tres años. He conversado con jubilados que representan a varias instituciones y ellos consideran que la actitud que asumió quien debía defender hasta último momento el quedarse en el modelo de reparto no ha sido la correcta.

Sabemos muy bien que cuando los bloques traen un proyecto, éste previamente es consensuado por la conducción de cada partido político o sector gremial. Por ello, con todo el respeto que me merece el señor diputado Sabio quiero expresar que ante este cambio no ha estado a la altura de las circunstancias. Siendo el único representante de tres millones y medio de jubilados que están esperando hace mucho tiempo que los defiendan parlamentariamente, no ha sabido hacerlo.

No voy a cuestionar la actitud del señor diputado en la comisión. Eso es algo que sólo su conciencia puede decirle si estuvo bien o mal. Lo que sí es importante destacar es que tiene la representación de un grupo de la comunidad que lo ha elegido para defender sus derechos inalienables en materia de previsión social y no lo ha hecho. El sistema que nos rige desde hace 20 años es el que sostienen actualmente todas las agrupaciones de jubilados, a las cuales el señor diputado no supo defender hasta las últimas consecuencias.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabio. - Señor presidente: agradezco al señor diputado Martín Mendoza que me haya dado la posibilidad de hacer una referencia que inicialmente pedí incluir en el Diario de Sesiones como una inserción. Hace falta que diga algo respecto

del error de los demás. En primer lugar, represento a un partido político que se llama Partido Blanco de los jubilados, que en la provincia de Buenos Aires ha obtenido casi 300.000 votos, los que sumados a los del resto del país alcanzan aproximadamente el medio millón de votos y es a ellos a los que se debe este señor diputado. No obstante ello, invito al señor diputado preopinante a que pida los proyectos que he presentado a los efectos de constatar si es cierto o no que he defendido a los jubilados.

En las distintas oportunidades en que se han tratado estas cuestiones en el recinto -cualquier señor diputado puede recurrir a los Diarios de Sesiones- he defendido los intereses de los jubilados. Como ejemplo —sólo cito uno aunque si lo desean puedo mencionar más casos— quiero recordar que cuando se trató el tema de los bonos nosotros propusimos que sirvieran para que los jubilados pudieran pagar -no dentro de diez años sino aquí y ahora- todos los servicios que el Estado o las empresas del Estado prestan, ya sea el gas, la luz, el transporte, etcétera.

Quisiera saber si el señor diputado que se siente molesto ha presentado algún proyecto de igual tenor. Pero, además de eso, quiero referirme estrictamente al proyecto que estamos considerando. Pienso que hay un error de enfoque, pues si bien es cierto lo que dice el señor diputado Mendoza de que hay algunos jubilados que entienden que yo no di cumplimiento a sus expectativas, quiero aclararle que solamente en dos artículos este proyecto se refiere a los actuales jubilados.

Con el permiso de la Presidencia, me voy a permitir la lectura de esos dos artículos. Uno de ellos es el 138, que dice en su segundo párrafo: "El Estado nacional garantiza el cumplimiento de los derechos previsionales adquiridos con anterioridad a la vigencia de la presente ley." Con esto quiere decirse que a todos aquellos que se jubilaron por la ley 18.037 -o sea los trabajadores en relación de dependencia- a los que se jubilaron por la 18.038 —es decir los autónomos— se les va a respetar todo lo que establecen esas leyes; si dicen que hay que pagarles el 82 por ciento, habrá que abonarlo. Eso está garantizado en el proyecto que estamos considerando.

El otro artículo que habla de los actuales jubilados —y reitero que de los 172 artículos sólo dos lo hacen— es el 139, que dice: "El derecho de los trabajadores autónomos regidos por la ley 18.038 (texto ordenado 1980) y sus modificatorias, que a la fecha de entrada en vigor de la presente fueran acreedores a esa prestación de conformidad con las disposiciones de la citada

ley, se regirá por las normas de la misma, aunque a dicha fecha no hubieran solicitado la presentación."

Consecuentemente, no solamente se van a respetar los derechos de los que ya están jubilados sino también los de quienes, estando en condiciones de jubilarse, aún no hubieran iniciado los trámites respectivos.

Estos dos artículos solamente son los que aluden a los actuales jubilados. ¿Cuál es la razón para que no analicemos la situación de los futuros jubilados y tratemos de darles la mejor ley posible?

Ya dije anteriormente que con esto no se satisfacen todas las demandas de la clase pasiva. Los jubilados siguen ganando 150 pesos como mínimo y nosotros creemos que tienen que ganar -como mínimo- el 82 por ciento del salario medio de la economía que hoy es de 500 pesos; es decir que tendrían que ganar 410 pesos.

Vamos a luchar hoy, mañana y siempre, por que no hemos bajado nuestras banderas de lucha. Salvo en estos dos artículos que mencioné, no se hace referencia a los actuales jubilados; es como si estuviéramos tratando la ley de trasplantes o cualquier otra ley; ¿los jubilados se van a enojar si tratamos otras leyes? Entiendo que no, porque sus derechos están garantizados. De lo contrario, estaríamos traicionando no una obligación sino un deber de conciencia.

Sr. Mendoza (M.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Sabio. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mendoza (M.). - Señor presidente: si bien sé que el señor diputado Sabio ha peleado desde el comienzo, quiero decirle que nosotros presentamos dos proyectos, uno que tiene fecha 19 de agosto de 1992 -que figura en el Trámite Parlamentario N° 77-, y otro presentado hace pocos días y que está publicado en el Trámite Parlamentario N° 236.

En otra oportunidad, hace seis o siete meses, mientras se discutía un proyecto en este recinto se produjeron algunos problemas y disturbios con los jubilados, y en un gesto digno de mencionar el señor diputado Sabio se ofreció a tratar de resolver la situación. Indudablemente, esta actitud lo exalta como ser humano y representante de los jubilados, pero quiero aclararle que no puede legislar para tres millones de

jubilados de la provincia de Buenos Aires. Este es el Honorable Congreso de la Nación, donde se sancionan leyes para todos los jubilados del país.

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Sabio.— Señor presidente: no quiero entrar nuevamente en el diálogo con el señor diputado, por el respeto que me merece. Simplemente deseo aclarar que cuando yo presento un proyecto no lo hago para la provincia de Buenos Aires. No sólo soy presidente del Partido Blanco de los jubilados de la provincia de Buenos Aires sino también diputado y presidente a nivel nacional del partido. Por lo tanto, hay otras provincias que están involucradas dentro de nuestra estructura partidaria, y por consiguiente no puedo trabajar para una sola sino para todo el país.

Termino diciendo que nos reservamos el derecho de proponer las modificaciones que consideramos necesarias durante la discusión en particular del proyecto.

2

MOCION DE ORDEN

...

Pasa a 7058

3

**SISTEMA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL
(Continuación)**

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Prosigue la consideración del dictamen sobre modificación del Sistema Nacional de Previsión Social.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Achem. — Señor presidente: lo más someramente posible voy a explicar por qué el bloque Cruzada Renovadora apoya la vuelta de este asunto a comisión.

Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones de las que habla el proyecto son empresas con fines de lucro que confiscarán el dinero de los trabajadores argentinos —que, desde los gerentes de las trasnacionales hasta los más humildes trabajadores, suman aproximadamente cinco o seis millones— durante más de treinta años.

En las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social obran desde hace más de un año varios proyectos, pero no fueron tratados exhaustivamente ya que al oficialismo sólo le interesaba el suyo, como si quienes firmamos las otras iniciativas fuéramos extraterrestres o incapaces de pensar. En la reunión del 24 de febrero se consiguió la firma de 29 señores diputados que no votaron en la comisión. Por lo tanto, reglamentariamente el dictamen no es válido, por lo que, de aprobarse esta ley, sería inconstitucional.

En segundo lugar, se nos ofendió gratuitamente diciéndonos por todos los medios posibles que nos negábamos a dar el debate, cuando el oficialismo se negó durante más de un año a discutir el tema en el seno de las comisiones, que es el lugar adecuado previsto por este honorable cuerpo para hacer los debates. Más aún, se nos difamó por boca de un señor ministro, quien aseguró que chantajeábamos —éstas fueron sus palabras— al Poder Ejecutivo para conseguir beneficios para nuestras provincias.

Esto no es así. Los principios no se negocian y nosotros basamos en ellos nuestro accionar. Este proyecto garantiza por el Estado la prestación básica universal a los que tengan treinta años de aportes como una forma indigna de subsistencia, ya que llega al 27 por ciento del sueldo, lo cual no cubre ni el 10 por ciento de la

canasta familiar. Es el mayor fraude que varios a cometer con los desposeídos.

La propuesta complementaria es sólo un paliativo para quienes aportan mayor capital, y lo llevarán a casi el 45 por ciento, ya que la jubilación será acorde con el rendimiento real del fondo de capitalización, que está condicionado a los vaivenes del mercado de capitales.

Por eso anoche, cuando pedimos la vuelta a comisión, la bancada justicialista propuso una prestación adicional que permitirá llegar al 60 por ciento. Indudablemente, la privatización del sistema previsional fue acompañada tanto en Chile como en nuestro país por la venta de las principales empresas públicas,

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Luis Alberto Martínez.

Sr. Achem. - El porcentaje que queda en manos del Estado como resultado de una privatización como la de YPF, ENTEL, Gas del Estado, SEGBA, etcétera, debe ser puesto a la venta en la Bolsa de Valores.

Este mecanismo financiero requiere de grandes montos para poder funcionar y son entonces las administradoras de pensión las que dispondrán de esos fondos, que se calculan en 250 millones de dólares mensuales.

Esta operatoria es tan claro ejemplo de que la privatización del sistema previsional no se basa en argumentos sociales ni políticos ni ideológicos sino económicos. Prueba irrefutable de ello es que la reforma previsional es un compromiso asumido por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos con el Fondo Monetario Internacional, como lo señala el diario "Clarín" en su edición del 30 de diciembre de 1992, ya que sin la venta de las acciones en manos del Estado y de las empresas privatizadas sería imposible cumplir con los compromisos pactados con motivo del ingreso del país al Plan Brady, sobre todo teniendo en cuenta el fuerte déficit de la balanza comercial, que ya supera los 3.000 millones de dólares anuales.

¿De quién es este proyecto? ¿Del Poder Ejecutivo, de la bancada oficialista o del Fondo Monetario Internacional? ¿O será como el proyecto de privatización de Gas del Estado, que le llegó al secretario García firmado por Louis Alexander, representante del Banco Mundial?

Las comisiones que percibirán las administradoras de fondos serán libres y podrán consistir en un porcentaje fijo del salario. Se estima que las comisiones podrán rendir entre el 3 y el 4 por ciento del salario, por lo cual la capitalización efectiva del trabajador, es decir, lo que ahorro para su jubilación, será del 8 por

ciento. Es la primera vez en la historia financiera del mundo que uno le deja dinero a un banco, le cobra un interés previo por ese dinero y le capitaliza un 3 por ciento menos de lo que pone.

Sin embargo, una variante sería analizar que esas comisiones fueran un porcentaje del rendimiento del fondo, lo cual obligaría a las administradoras a maximizar las inversiones de eso mismo fondo, a mejorarlas; es decir, transferir a las administradoras la responsabilidad de efectuar inversiones rentables con los fondos de los trabajadores.

La privatización del sistema previsional constituye uno de los más atractivos negocios en la Argentina actual, situación que se pone de manifiesto por medio del notable interés que ha despertado en bancos y compañías de seguros.

La aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo implicaría que las administradoras manejen un fondo anual del orden de los 3.500 millones de dólares, de los cuales alrededor del 30 o 35 por ciento —o sea, mil millones dólares— corresponderán a comisiones y, primas de seguro por invalidez o muerte.

De las propias estimaciones de la Secretaría de Seguridad Social se desprende que para el año 2000 contarán con un patrimonio de 22.000 millones de dólares, alcanzando una cifra de 65.000 millones al cabo de diez años. Cabe señalar que estos valores se han obtenido considerando un aporte capitalizable del 8 por ciento sobre el salario actual medio de 500 pesos, lo cual indica a las claras la magnitud del negocio previsional.

Esto último se pone de manifiesto en el siguiente hecho: para el período que se extiende desde 1994 al año 2000 se calcula que las administradoras de fondos recibirán 7.000 millones de dólares en conceptos de primas de seguros y comisiones, asumiendo que la comisión estimada sea del 3 por ciento del salario.

Del análisis de los grupos económicos interesados en el negocio previsional se desprende que son los mismos que han participado activamente en las privatizaciones y los que adquirieron la deuda externa privada, que después la asumió todo el país. Ellos son ahora los que compran las compañías que están regalando el Poder Ejecutivo y este gobierno, con el aval de la Cámara de Diputados y de su bloque. Se trata de Pérez Companc, del Banco Río asociado al Citibank, de Techint, de Astra, de Comercial del Plata, etcétera.

Indudablemente, la privatización del sistema previsional constituye, junto con YPF, el plato fuerte. En particular, cabe resaltar el tema de

la jubilación, puesto que implica un ingreso mensual asegurado del 11 por ciento del salario del trabajador sobre una masa laboral de casi seis millones de argentinos.

De todas maneras, existen dos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, mientras la administradora tiene la seguridad de percibir o captar el 11 por ciento del salario en forma mensual —con el consiguiente ingreso constante de fondos—, el Poder Ejecutivo no puede garantizar en su proyecto una rentabilidad real promedio de al menos el 2 por ciento. En sus propias declaraciones, el secretario de Seguridad Social, Walter Schulthess, dice que la economía argentina no es fácilmente predecible. La rentabilidad, la seguridad y el destino de los fondos previsionales son de importancia fundamental. Por ello debe dejarse expresamente señalada en la iniciativa la responsabilidad de las administradoras en estos aspectos.

La segunda cuestión a tener en cuenta reside en las finanzas del Estado nacional, que sufrirán un fuerte impacto durante la transición del sistema público al privado. Ello se debe a que los haberes de los actuales jubilados provienen del aporte de los trabajadores activos, que según el proyecto de ley deberán ser girados a una administradora privada, en el caso de ser un sistema jubilatorio que contemple la obligatoriedad de los aportes, lo que, después de un año de oposición al proyecto inicial, aparentemente se cambiaría, según lo expresado anoche. Esa oposición realizada por el pueblo por medio de todas sus organizaciones y todos los miércoles por los jubilados frente al Congreso, y por los legisladores que fuimos permeables, permitió que en esta semana se acepte la posibilidad de optar entre los dos sistemas. En ese sentido, aun con las objeciones que muy bien marcó el señor diputado Fescina, en estas condiciones este proyecto podría haber sido aprobado un año atrás. Como bien lo señaló el señor diputado Fescina, esta "máquina de la sordera" demoró un año en curarse y no por decisión del bloque justicialista sino del Poder Ejecutivo nacional.

Las finanzas del Estado nacional sufrirán un fuerte impacto durante la transición porque en un lapso de 20 años habrá una erogación de 43.300 millones de dólares.

En este punto quiero hacer una reflexión. Entendemos que cada vez tendremos menos aportantes porque hay menos trabajadores. En este recinto se acaba de hacer una moción de orden sobre los 27.000 ferroviarios que van a ir a la calle; por eso sostengo que no tenemos fuentes

de trabajo. ¿Con qué se va a mantener este sistema que se está proponiendo?

Creemos que a este programa que nos dio la estabilidad —estabilidad que hemos conseguido entre todos— le falta el desarrollo: sin él va a fracasar. A su vez, el desarrollo necesita un aporte de capital. En ese sentido, ese aporte de capital lo debemos exigir —por medio de este proyecto de ley que estamos terminando de elaborar— a las empresas privadas, privatizadas y públicas —si nos queda alguna— para que inviertan en el país el 100 por ciento de las ganancias que logren durante los primeros seis meses, y luego cada seis meses puedan llevarse fuera del país el 10 por ciento hasta que esa ganancia nos permita superar esta gran crisis de fuentes de trabajo. De ese modo no se necesitaría una ley de inversiones extranjeras otorgando prebendas y privilegios para el capital venga a trabajar.

Este proyecto de ley no fue propuesto por ningún partido ni en ningún programa, de manera que los señores diputados que lo aprueben estarán dando la espalda a quienes los votaron.

Rara vez distraigo la atención de esta Honorable Cámara, pero voy a pedirle que me dispensen estas últimas reflexiones que no están referidas específicamente al proyecto en consideración, respecto del cual voy a apoyar el criterio de que vuelva a comisión a fin de que se ordenen las nuevas enmiendas que se introdujeron y que se explicaron anoche. La idea es que el texto sea confiable y contemple los otros proyectos que se presentaron sobre el mismo tema. De este modo, quizá dentro de 15 o 20 días, podremos tener un proyecto de ley que sirva no sólo a los jubilados sino al país en general.

Las últimas reflexiones serán muy breves y pertenecen a quien —como yo— vivió permanentemente sufriendo sus ansias de participación, ya que durante 30 años vivió amordazado por los sucesivos gobiernos que desde 1955 hasta 1983 no nos permitieron vivir en democracia. Ahora que podemos participar de esta incipiente pero real democracia, con cinco elecciones consecutivas desde 1983, que es un don de Dios y un esfuerzo compartido por todos los que la conseguimos y la defendimos, no la perdamos. Cuidémosla. Demos el ejemplo con el funcionamiento de los tres poderes, que deben ser complementarios, independientes y soberanos entre sí; que cesen las interferencias entre ellos y demos la imagen que corresponde de respeto a la Constitución Nacional y de austeridad republicana. Seamos responsables en nuestro accionar, capaces y eficientes en nuestras obligaciones. Tengamos por sobre todo una gran fuerza moral para poner lo mejor de nosotros

misimos en la defensa del patrimonio económico, cultural y social de la Nación.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Gómez Centurión.— Señor presidente: solicito permiso a la Cámara para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones. No obstante, deseo manifestar algo que ya he dicho en este recinto en cuanto a la posición de mi bloque en este controvertido proyecto de reforma previsional.

Estamos en contra de la aprobación de este proyecto...

Sr. Presidente (Martínez). — El señor diputado Novau le solicita una interrupción, señor diputado.

Sr. Gómez Centurión. - No tengo ningún inconveniente, señor presidente.

Sr. Presidente (Martínez). —Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Novau. — Señor presidente: sólo deseo saber si aún se continúa llamando para lograr el quórum, porque no he escuchado el timbre en los alrededores del recinto.

Sr. Presidente (Martínez)- Se va a verificar su información, señor diputado.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Gómez Centurión.— Señor presidente: decía que la posición del bloquismo ya ha sido expresada en otra oportunidad en el sentido de votar en contra de este proyecto de ley. No compartimos aspectos filosóficos ni técnicos. Para llegar a estas conclusiones nos hemos nutrido de la información que nos han brindado en forma permanente todos los centros de jubilados de la provincia de San Juan, por lo que este proyecto no cuenta con la aceptación de la gran mayoría de los jubilados.

En consecuencia, habiendo adelantado el sentido de nuestro voto, me resta sólo expresar que realizaremos observaciones durante el tratamiento en particular.

Sr. Presidente (Martínez), — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli. - Señor presidente: deseo iniciar mi exposición -con la anuencia de la Presidencia- leyendo un párrafo de un discurso pronunciado por el general Perón el 30 de noviembre de 1973. Dijo en ese momento: "No quisimos hacer un sistema previsional estatal, porque yo conocía — lo he visto ya en muchas partes— que estos servicios no suelen ser eficaces ni seguros. Preferimos instituirlos administrados y manejados por las propias fuerzas que habrían de utilizarlos, dejando al Estado libre de una obligación que

siempre malcumple... y las cajas se capitalizaron de una manera extraordinaria."

Siguió diciendo el general Perón: "Bien señores ¿Qué pasó después? En 1955 el Estado, acuciado quizás por las necesidades, echó mano de los capitales acumulados por las cajas. Es decir, se apropió de ellos. Para mí, eso es simplemente un robo, porque el dinero no era del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y organizaciones. Claro que las descapitalizaron... Es decir, se las asaltó, porque fue un asalto."

Con estas palabras el general Perón describió la situación del sistema previsional argentino en 1973. Desde esa época hasta aquí han pasado varios gobiernos, incluyendo una gestión del peronismo hasta 1976.

No viene al caso buscar hoy a los responsables de esa situación, que si la analizamos en 1993 —es decir, veinte años después— seguro que es mucho más seria y mucho más grave. Y al peronismo, que fue inspirador y creador de ese sistema y que comenzó a instituir la jubilación y el régimen de previsión en la Argentina cuándo éste sólo existía para un pequeño grupo de trabajadores, le toca hoy la alta responsabilidad de asumir lo que el general Perón decía en el sentido de que el toro debe ser tomado por las astas. Entonces, o tratamos de resolver el sistema previsional o seguimos haciendo lo que por lo menos desde el año 1973 a esta parte han hecho todos los gobiernos, lo cual significó aumentar abruptamente —o pudo ser una posibilidad— la edad de las jubilaciones, reducir los porcentajes de los haberes jubilatorios, incrementar los aportes y contribuciones, crear nuevos impuestos, suspender por decreto los derechos de los jubilados, prohibirles la posibilidad de litigar ante la Justicia.

Seguramente habrá muchas otras maneras del asumir la actitud de cambiar el horario a esta bomba de tiempo que desde hace veinte años está por explotar, para que estalle luego en otro gobierno, después de nuestra gestión. Pero hemos asumido la responsabilidad histórica de desactivar definitivamente esta bomba de tiempo, y lo hacemos con orgullo y convicción. Estamos absolutamente convencidos de que la reforma forma estructural del sistema de previsión que hoy proponemos a esta Cámara obedece a estos claros principios de nuestra doctrina y accionar políticos.

Sabíamos muy bien lo difícil que resultaba comprender este tipo de decisiones. Por ello, sin lugar a dudas este proyecto de ley tuvo muchos avatares, y cuando comenzó a plantearse recibió por parte de la gente una respuesta adversa.

Eso fue así porque estábamos proponiendo un cambio estructural. Nosotros mismos, el bloque Justicialista, también tuvimos muchas dudas y nos planteamos varios interrogantes —lo decimos con orgullo— cuando comenzamos a analizar estas nuevas ideas. Pero muchas de esas dudas e interrogantes los fuimos resolviendo mediante modificaciones al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo. Por ello, hoy nadie puede decir que ésta es lisa y llanamente la jubilación privada, que esto es entregar un negocio a un grupo económico determinado, que esto significa olvidarse de los actuales jubilados que no se piensa en las nuevas generaciones; todo lo contrario.

Muchas de las observaciones y propuestas que se hicieron en su momento hoy están contenidas en este dictamen de comisión; y en el tiempo que resta hasta la sanción definitiva del proyecto de ley, sin duda alguna habrá otras modificaciones. Ello, porque este bloque Justicialista ha demostrado mediante su actitud que de ninguna manera se cerró frente a las diferentes objeciones o aportes.

Desde la oposición alguna vez se nos dijo: primero trabajen ustedes en la homogeneización de un proyecto, y después propónganlo al resto. Hoy decimos con todo orgullo que la casi totalidad del bloque justicialista está detrás de esta reforma estructural del sistema previsional. Eso es lo que está permitiendo —también lo decimos con mucha satisfacción— que esta Cámara esté funcionando y que hoy analicemos este proyecto de ley.

Decía, señor presidente, que teníamos dos posibilidades: realizar algunos parches o asumir esta responsabilidad histórica de modificar estructuralmente el sistema. Hemos optado por la segunda que sin lugar a dudas es la más difícil. Nos ha exigido a todos estudiar, pensar, consultar y escuchar también la voz de muchos de los que nos criticaban. Y lo hemos hecho pensando siempre que este proyecto de ley de reforma previsional viene a solucionar el problema de fondo. Por eso decimos que de ninguna manera esto es un sistema privado; se trata claramente de un régimen previsional que pone la decisión en la gente y no en nosotros. A nadie estamos obligando a recurrir a una administradora privada ni a ir a capitalizar sus ahorros, sino que estamos dando claramente la opción de seguir en el Estado.

Además de la prestación básica universal y de la prestación complementaria —que fue una de las primeras críticas que recibió este proyecto porque no reconocía los aportes efectuados con anterioridad, lo que hoy se ha logrado—, ahora

hemos agregado la opción de que cada uno de los trabajadores diga que quiere hacer. Les estamos ofreciendo la posibilidad de decidir si quiere continuar en el sistema de reparto, donde sin duda tendrá mayor seguridad, o ingresar en un sistema de capitalización individual con la posibilidad de obtener mayor rentabilidad. Dentro de este sistema de capitalización individual tendrá además la opción de elegir una administradora del Estado, privada, de algún gremio, de una cámara empresaria, de una cooperativa o de una mutual, con el derecho de cambiar de una administradora a otra cada seis meses sin tener que pagar por ello —está expresamente prohibido en el proyecto— y elegir aquella que le garantice mayor rentabilidad, le cobre menor comisión o, en definitiva, le proporcione mayor seguridad.

Sr. Martínez Raymonda. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Parrilli. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Martínez Raymonda. - Señor presidente: simplemente quisiera que se clarificara algo. Si bien ayer se explicó cómo funciona este sistema, algunos aspectos no han sido remarcados en los últimos minutos. El trabajador tiene libertad para quedarse en el sistema de reparto o entrar en el de capitalización; nada lo obliga, nada lo empuja, salvo el sistema impositivo que vamos a modificar. ¿A quien se queda en el sistema de reparto le vamos a quitar las deducciones por cargas de familia y le vamos a disminuir el monto no imponible?

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. Parrilli.— Señor presidente: la inquietud que plantea el señor diputado la aclararemos con mayor precisión en el debate en particular. No obstante, por el momento quiero decirle que esta modificación del sistema previsional argentino persigue dos objetivos. Uno de ellos es la reforma estructural a la que aludimos, es decir, cambiar este sistema de reparto por otro donde la responsabilidad de cada uno de nosotros y de los aportantes tenga que ver con el haber previsional que corresponderá al momento de la jubilación. En segundo lugar, creemos que ésta es una manera correcta de ordenar el ahorro interno a los efectos de garantizar que esta masa de dinero permita lograr uno de los objetivos económicos de este gobierno, que precisamente es generar un mercado de capitales que nos po-

sibilite crear fuentes de trabajo y financiar inversiones y crecimiento, porque a partir de esto seguramente será posible solucionar no sólo la situación de los actuales jubilados sino la de aquellos que vayan en el futuro entrando en la pasividad.

Un aspecto fundamental de este proyecto de ley que cabe destacar es que no se le promete a nadie lo que no se puede hacer. No estamos haciendo propuestas demagógicas ni promesas electoralistas; estamos dando un claro mensaje a la sociedad: cada uno de los que aporta tiene que ser responsable por lo que en su momento va a cobrar como jubilación. ¿O acaso no sabemos que hay muchos jubilados que tienen 50 o 55 años, que aportaron durante 10 o 15 años y que a veces lo hicieron por el mínimo, pero buscaron luego alguna ley de privilegio para jubilarse con montos que nada tenían que ver con el aporte efectivo que realizaron? ¿O acaso no conocemos que en nuestras provincias hay muchos profesionales como nosotros que han usado las cajas previsionales, aportando el mínimo y buscando tener en los últimos años salarios altos para después beneficiarse con una jubilación elevada? Es decir que perciben jubilaciones que nada tienen que ver con sus aportes.

¿Qué clase de justicia social es ésta, de sacarle a los de abajo para darle a los de arriba? Esta no es la justicia social que pregonaba el general Perón en 1945 y que instrumentamos con las leyes previsionales. (*Aplausos.*)

También quiero señalar que en este proyecto que estamos considerando y que nuestro bloque ha modificado, hemos hecho una mejora sustancial del texto enviado por el Poder Ejecutivo cuando elevamos la prestación básica universal. Según nuestro criterio, el Estado sin duda tiene la obligación de atender a los niños, a los ancianos, a los discapacitados y a todos aquellos que necesitan de su protección. Pero asimismo pensamos que en función de decir que los protegemos a ellos, muchas veces lo estuvimos haciendo con aquellos que no necesitaban la protección estatal.

Por eso en la ecuación económica del haber previsional, con este proyecto de ley elevamos sustancialmente los mínimos. Si un trabajador se jubila y al momento de hacerlo está cobrando el salario medio de la economía —por ejemplo 500 pesos— va a percibir un haber previsional muy importante en relación a esos 500 pesos, que sería de aproximadamente un 80 por ciento.

Lo ha dicho el señor diputado Zamora en este recinto y yo sostengo que tiene razón. La CGT defiende los derechos de los de abajo, no los de los de arriba. Y esto es lo que estamos haciendo.

Los que cobran sueldos altos tienen capacidad de ahorro y el Estado no tiene por qué garantizarles nada. El Estado tiene que dar una garantía a los que no tienen capacidad de ahorro. Por eso, la prestación básica es elevada y también por eso aparece una prestación complementaria del 1,5.

Aquí han cambiado las reglas de juego; existe una diferencia y es la que estamos planteando. Con la proposición hecha por la CGT de agregar la prestación adicional por permanencia beneficiamos a los trabajadores de menores ingresos y de mayor edad, ya que los de mayores ingresos y menor edad van a tener, con el funcionamiento de este régimen, la posibilidad de contar con una jubilación que no surja de la promesa electoral de algún candidato; o sea que tendrán una buena jubilación en función de lo que aporte cada uno durante toda su vida.

Aquí se dijo también que el Estado se desentiende del sistema previsional y en la realidad es exactamente lo contrario. Con este proyecto hemos mejorado mucho —lo digo con orgullo— al crear un ente regulador, por llamarlo de alguna manera, dentro de una función que el Estado tiene que cumplimentar con mayor precisión y de mejor manera que en el caso de los entes reguladores del gas y de la luz. Posiblemente, en el futuro tengamos que mejorar la redacción de estas leyes.

¿O acaso alguien puede decir con total honestidad que conoce la receta sobre cómo hay que organizar la nueva política económica que estamos llevando adelante? Si alguien la tiene, sinceramente se la recibiremos con todo gusto para tomar de ella todo lo que sea posible.

Por ello en esta ley, cuando creamos la Superintendencia Administradora de Fondos de Pensión y asignamos funciones a sus responsables, tipificamos los delitos en forma muy severa. Hay propuestas para que reduzcamos las penas, pero no lo queremos hacer, porque ese ente que va a tener la función de fiscalizar a la administradora del Banco Nación y a las administradoras privadas, en caso de que éstas realicen acciones tendientes a perjudicar a los fondos de pensión y a la confianza de los trabajadores, no sólo les aplicará multas sino que les revocará la autorización para funcionar. Además, se prevé la aplicación de pena de prisión.

Por primera vez en un marco regulatorio se tipifican como delitos las omisiones y los in-

complimientos de aquellos que tienen la obligación de preservar esto que hoy estamos sancionando como ley.

También se dijo que este sistema puede eclosionar y puede suceder como ocurrió con el sistema financiero: que nos saque la plata. Esto de ninguna manera es así. Está perfectamente establecido en la ley y separado el patrimonio del fondo de pensión de lo que es el capital de la administradora, de fondos de pensión.

Por otro lado, en otro momento se señaló que no había garantía del Estado, pero esto tampoco es cierto y está expresamente establecido en la norma. Hay garantías del Estado para asegurar una rentabilidad mínima promedio del 70 por ciento. Esa garantía no solamente está dada por el capital que se exige a la administradora sino también por el Estado. Si esa administradora se funde, el Estado aporta los recursos, pero se trata de una garantía limitada en el monto y el tiempo, para que los argentinos no terminemos pagando los negociados como los que ocurrieron con la patria financiera.

El Estado interviene dándole al trabajador lo que le corresponde y le dice que se busque otra administradora porque la que tenía se fundió, es decir, que le ofrece una garantía durante ese tiempo, que es lo que corresponde.

Hemos mejorado notablemente el proyecto de ley en todo lo relativo a los mecanismos de fiscalización y control. Para los funcionarios que van a tener la misión de controlar a las administradoras hemos establecido pautas objetivas y claras partir de las cuales tienen que resolver los problemas. Eliminamos el término "podrá". Creemos que los funcionarios "deben" hacer tal o cual cosa, "deben" autorizar o no a una administradora, "deben" revocar una autorización o no, "deben" imponer una multa o no. Queremos terminar con la facultad de los funcionarios de utilizar el término "podrá" que puede interpretarse de distintas maneras, a favor o en contra de una persona.

Con estas modificaciones que introdujo el bloque Justicialista consideramos que le damos mayor transparencia a la iniciativa y también mayor garantía y seguridad al funcionamiento del sistema. Hay muchos otros aspectos para remarcar en esta norma, que seguramente serán planteados por mis compañeros de bancada durante el debate en particular.

Para terminar quiero señalar algo que dije ayer. En algún momento nos criticaron por no escuchar las propuestas. Lamentablemente, hoy algunos legisladores están sosteniendo que el bloque Justicialista está modificando el despacho de comisión. Esta situación me recuerda el refrán

que dice "palos porque bogas, palos porque no bogas". En definitiva, aquellos que tienen la intención de evitar el tratamiento de esta ley, así como nos criticaron porque no aceptamos las propuestas, hoy nos critican porque estamos modificando el despacho. *(Aplausos.)*

En esta oportunidad, como en muchas otras en las que dictamos leyes trascendentales para el país, los peronistas estamos trabajando con la firme convicción de que construimos una Argentina nueva. De ninguna manera, aceptamos que estos principios puedan ser patrimonio de alguien especial. A quienes nos critican les decimos con toda humildad: nadie es dueño de los ideales, nadie es dueño de las convicciones y nadie es dueño de los principios. Nosotros también trabajamos por ideales y por principios. *(Aplausos.)*

4

PRONUNCIAMIENTO

...

5

CUESTION DE PRIVILEGIO

6

**SISTEMA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL****(Continuación)**

Sr. Presidente (Martínez). — Prosigue la consideración del asunto en tratamiento.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Armendáriz.— Señor presidente: estamos tratando uno de los grandes temas que hacen a la orientación cultural, política, económica y social de los países. Se trata nada menos que de la seguridad social, una materia que tiene concepciones diversas y modos y formas variados, dependiendo éstos de las tendencias y de las corrientes ideológicas imperantes.

Vamos a intentar una definición tomando algunos conceptos del profesor Etala, pero haciendo una definición propia, considerando que es una rama del derecho que, en función de los elementos y los medios técnicos necesarios, busca dar satisfacción y bienestar general a la sociedad en la persona de sus integrantes, los que deben estar protegidos frente a las distintas contingencias sociales, tanto aquellas que limiten o anulen su actividad como las que provoquen costos económicos complementarios.

Pero para poder llegar al fondo de la cuestión, y aunque tenga que remontarme un poco hacia atrás, quiero referirme a las utopías, que es donde debemos rastrear los orígenes de la seguridad social. En este sentido, me voy a permitir recordar que ya en la antigüedad, en *La Ciudad Perfecta*, Aristóteles reclamaba que hubiera más justicia en las constituciones políticas de entonces. Pero sin duda es en la *Utopía* de Tomás Moro, donde tenemos que centrar nuestra mirada; allí encontramos las voces de Rafael Hitlodeo, el personaje ideado que iba a mostrarnos la ciudad donde la gente vivía en paz y felicidad permanente, tal vez como una reacción frente al duro reinado de Enrique VIII.

Muchas veces no se entienden las utopías pero si no las hubiera, seguramente no habría instituciones políticas y sociales. Una utopía es tal porque la idea está alejada de la realidad, pero cuando ambas se acercan y armonizan, las utopías dejan de ser tales para convertirse en principios jurídicos.

Al respecto, Pérez Leñero dice que las utopías no son fantasías sino que son verdades prematuras llevadas a la práctica por un corazón optimista y una inteligencia visionaria.

En este ligero *racconto* histórico también debemos recordar a la beneficencia privada, aquella que se brindaba sobre todo en la antigüedad, en que los siervos y villanos obtenían algún tipo

de cobertura, porque los señores feudales se encargaban de cuidar de su precaria salud y de su escasa alimentación.

Ocurre entonces que llega el cristianismo y apoya decididamente esta actitud por medio de la caridad. Sin duda, la pobreza era uno de los caminos para alcanzar la gracia y la limosna era un acto meritorio. Se trataba de un concepto moral, no de un principio jurídico, y es en aquel concepto en el que se funda la doctrina social de la Iglesia que a partir de León XIII y sus sucesores ha sido plasmada desde la *Rerum novarum* hasta la *Centesimus anno* de Juan Pablo II.

Cuando declina el feudalismo, cuando la ciudad cerrada llega al ámbito nacional, ocurre un fenómeno curioso y no querido; al obtener el siervo la libertad se transforma sin querer en un inseguro, porque no tiene cobertura ni salario que le permita obtenerla.

Debo señalar que también en la antigüedad aparece la previsión a través de las asociaciones de socorros mutuos y de ayuda, luego las cofradías, la hermandad de socorros y el montepío. En el siglo XVIII se produce un hecho fundamental: la aparición de la máquina. El capitalismo ya había avanzado considerablemente y entonces se transforma en industrialismo, dando pie a la aparición del protestantismo y el calvinismo en Alemania, con sus frenos morales para tratar de mostrar una concepción distinta del trabajo, que deja de ser el de reposo y descanso interior para transformarse en un fin.

Así están dadas las bases del capitalismo y surge en la historia el hombre económico, para el que no interesaba el ser humano como persona, quedando relegado este aspecto al ámbito de los guerreros y de los sacerdotes, porque para este hombre económico lo que interesaba era el dominio de las cosas.

La expansión de la economía fue casi explosiva, pero había una flagrante contradicción en todo esto, porque mientras sectores importantes ganaban dinero fácil y considerablemente, las condiciones de trabajo y el escaso salario constituían una situación de injusticia social manifiesta.

A fines del siglo XVIII se produce la Revolución Francesa y tanto en las declaraciones de principios del año 1789 como en la Constitución de 1793 aparece por primera vez una defensa de los derechos sociales. Es este un punto de partida importante. Este hombre individualista que nace de la Revolución Francesa y al que Ortega y Gasset llamaría el "hombre masa", es decir, el hombre vaciado de sus entrañas y parecido en todas partes —yo diría con aspiraciones parecidas en todas partes—, va abriendo caminos en su

lucha y posibilitando otras concepciones y nuevos planteos.

Aquella situación de injusticia que habíamos señalado y este nuevo hombre jurídico individualista permiten la aparición de Carlos Marx para decir, con bastante claridad por cierto, que en realidad el trabajador producía mucho más de lo que necesitaba para vivir y que esa plusvalía no se incorporaba al salario. Por lo tanto, consideraba que se adulteraba la esencia misma del trabajo.

En la Revolución Francesa y en *El capital* de Marx encontramos raíces importantes de la seguridad social. Es así, sin prisa y sin pausa, que va avanzando el capitalismo y llega a la superabundancia, a la superproducción, que no logra solucionar este problema ínsito que posee. Todo esto iba a provocar lo que ha dado en llamarse el gigantismo, donde todo queda sometido a las leyes aritméticas del precio de fábrica o del costo, predicado como es sabido por destacados economistas como Adam Smith y David Ricardo.

Así nació una nueva generación de hombres, representada por el hombre empresario. Esta capa social tuvo un gran protagonismo durante la revolución industrial, pero estaba totalmente ajena al medio en el que se desarrollaba y no quería ver las necesidades de los trabajadores y las injusticias de tipo social.

Por eso muchas veces recurrió a la represión, a las leyes y a la policía para combatir a los sindicatos obreros, considerando en determinados momentos que cualquier aumento de salarios iba a afectar las ventas y, por lo tanto, las nuevas inversiones.

La cultura y la educación constituyeron un factor importante en esta cuestión, porque el complejo de inferioridad en el que se debatían las masas —muchas veces, analfabetas— les hacía sentir un estado de resignación e inconformismo frente al poder absoluto de los dueños de la economía. Entonces, la enseñanza obligatoria tuvo un valor extraordinario, porque permitió a los de abajo —a las clases trabajadoras— tomar conciencia de su poderío. Al mismo tiempo el sufragio universal, que se convirtió en un reclamo en todas las partes del mundo, permitió a estos sectores luchar por el poder político en las distintas naciones.

Habíamos dicho que el capitalismo llegó en su vértigo a ese gigantismo y superproducción. Alcanzó límites tan grandes que desembocó en 1929 en la crisis representada por el estallido

de la bolsa de Nueva York. De todos modos, ya habían existido orientaciones hacia los derechos sociales.

En 1918, cuando se firma el tratado de Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo, estampándose en ese acuerdo importantes declaraciones en favor de los trabajadores. En aquel momento, 1918, hacía un año que se había sancionado la constitución de México.

Un año después aparece la de Weimar. Estas dos constituciones tienen importancia porque significan la incorporación del constitucionalismo social. Cambian el concepto de las naciones, haciendo que la democracia política avance hacia la democracia social. Es evidente que el hombre abstracto, se va a convertir en el hombre situado, como decía George Bourdeau, cuando señalaba que este hombre ubicado en su medio participaba, se absorbía y se interrelacionaba con las angustias, las necesidades y las soluciones a los problemas de ese medio.

Este constitucionalismo social permitió un cierto freno al capitalismo sin límites. De esta manera, las libertades, que en gran parte eran ilusorias, podían mejorar, porque se contrabalanceaban la libertad y la justicia. En definitiva, se trató de la aparición del estado social de derecho, que muchas veces ha sido cuestionado y, que, sin embargo, está claramente resaltado en las consideraciones que he hecho.

Por si faltará alguien, quiero traer una expresión de mi colega, el señor diputado Vanossi, cuando dice que este estado social de derecho se nutre de varias corrientes de pensamiento contemporáneo que vuelcan los aportes filosóficos políticos del neoliberalismo, de la social democracia y de la doctrina social de la Iglesia. Pero sin duda la seguridad social encuentra su base doctrinaria en 1936, al publicarse *Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero*, el libro máximo de John Maynard Keynes, donde sostiene que los problemas del capitalismo se solucionan en gran medida por medio de la intervención del Estado con un programa de inversiones públicas.

En Inglaterra, en plena guerra, el plan Beveridge influye favorablemente en la moral de los combatientes y la Carta del Atlántico en 1941 proclama la necesidad de garantizar un mejor régimen de trabajo y la seguridad social.

La I Conferencia Interamericana celebrada en 1942 en Santiago de Chile, aprueba la conocida Declaración de principios de la seguridad social, y un año después el presidente Roosevelt envía al Congreso el "Bill of rights".

Así, año tras año los organismos internacionales y las distintas naciones empiezan a afirmar en la letra estos conceptos que avanzan, porque los

integrantes de las sociedades van tomando conciencia de que sólo urdiendo un adecuado y armónico tramado de la sociedad podrán superar los problemas de entonces, de hoy y del futuro.

También tenía la intención de hacer una síntesis de la historia previsional de la República Argentina, pero como ayer el señor diputado Cabrera efectuó una exhaustiva exposición al respecto me limitaré a señalar a grandes rasgos las que yo creo son cuatro etapas perfectamente definidas

La primera de ellas es la de la beneficencia pura, cuando la Primera junta de gobierno otorgó el primer retiro a don Juan de Almagro. Asimismo poco después se determinó el otorgamiento de pensiones a inválidos, huérfanos y viudas de los combatientes de la Reconquista y la Defensa de la Capital.

Con respecto a la segunda etapa cabe mencionar la sanción en 1877 de la primera ley nacional de jubilaciones, que comprendía a los miembros de la Corte Suprema y los jueces de sección. Poco tiempo después se promulgó la ley 1.420, que en su artículo 31 contempla la jubilación de preceptores y subpreceptores, luego ratificada un año después por la 1.909.

Entrando ya en nuestro siglo podríamos señalar otro período en el que gravitan sin lugar a dudas dos nombres casi excluyentes dentro de una pléyade que conocía la materia y se preocupaba por estas conquistas de tipo social. Me refiero a la presencia de Alfredo Palacios en el Parlamento y de Hipólito Yrigoyen en el gobierno argentino en 1916. Teniendo en cuenta el planteo formulado por el señor diputado Novau deseo mencionar que en 1915 se sancionó la ley 9.653, de jubilación de los ferroviarios. Con esta mención aprovecho para rendir mi homenaje a tantos hombres que hoy han recibido el telegrama de despido. En esta etapa obtienen la jubilación los tranviarios, los telefónicos, los trabajadores de Gas del Estado, de la energía, los bancarios y los que laboraban para compañías de seguro. Después viene una época de poco movimiento. Sólo los gráficos, los de aeronáutica civil y los periodistas, en 1939. Así llegamos a 1944, cuando había seis cajas y nada más que 420.000 afiliados frente a una población activa de 5.500.000 trabajadores. Es decir, sólo el 7 por ciento de la población tenía este tipo de cobertura.

En 1944, el entonces coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión impulsa esta mecánica para los empleados de comercio y dos

años después para las de la industria, reparándose así un error que se había cometido en 1923, cuando los propios sindicatos se negaron a aceptar la jubilación porque consideraban que no debían participar con aportes los propios trabajadores.

Luego aparecen las cajas rural y de independientes, empresarios y profesionales. Se crea también el Instituto Nacional de Previsión Social. Se trata de entes del Estado pero con participación de los representantes de los interesados.

La última etapa se inicia con la llamada revolución argentina y en ella se produjeron importantes avances con la sanción de las dos leyes que nos rigen actualmente, las 18.037 y 18.038. Pero además se crea la Secretaría de Estado y Seguridad Social y se reducen las cajas existentes de 13 a 3, que son las que están en vigencia.

¿Cómo se financian estas cajas? Con el aporte del trabajador, con la contribución patronal y con el subsidio o complemento por parte del Estado por razones de solidaridad.

¿Qué ha pasado con este sistema? ¿Por qué hoy se lo muestra como fracasado? Algunos dicen que está en terapia intensiva. Yo digo que está enfermo y que hay que curarlo, pero no mandarlo a la Chacarita. En 1950 había 10 aportantes por cada jubilado, relación que hoy es de 1 a 1,7. Es decir que es imposible el sostenimiento del sistema sólo con los aportes y contribuciones.

¿Pero qué ha pasado? Ha habido retiros de fondos por parte de los gobiernos. Esto es cierto. El primero fue a principios de la década del 50, y el segundo tuvo lugar a fines de la década del 60. Hubo una gran permisividad. Todos sabemos que ha habido gente que se jubiló justificando con dos testigos la prestación del servicio o que había profesionales que certificaban una enfermedad inexistente o alguna dolencia ficticia.

También está el problema de la evasión, que como bien ha dicho el señor diputado Moure, conocemos que está disminuyendo, aunque sabemos que todavía se está lejos de alcanzar la solución definitiva.

Muchos de los señores diputados que nos hemos incorporado a esta Cámara en diciembre de 1991 teníamos la idea de presentar proyectos que trataran de salvar la situación de este sistema previsional deteriorado. Ocurrió que el Poder Ejecutivo consciente de la situación que se vivía comenzó a hacer anuncios, que luego materializó por medio de este proyecto.

El proyecto en tratamiento ha tenido un dilatado trámite, lo cual ya ha sido mencionado aquí. Los evidentes errores que contenía hicieron que

tuviera frecuentes modificaciones y consiguientes postergaciones en su tratamiento. El Poder Ejecutivo tuvo que ir cambiando muchas normativas sobre la marcha, a veces por sugerencias de los propios legisladores. Es así como dejó en el camino el IEPE, ya que la experiencia extranjera y las consultas hechas en el país aconsejaban su no aplicación. Tampoco se pudo llevar a la práctica aquello que decía el señor presidente de la Nación de que si se aprobaba la privatización de YPF se iba a solucionar el problema de los jubilados, porque el propio Poder Ejecutivo vetó la segunda parte del artículo 23 de dicha ley que era la que iba a permitir aumentar desde el año pasado les haberes de los actuales jubilados; sin duda ésta ha sido una cuestión lamentable.

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia recuerda al señor diputado que le restan tres minutos para que finalice su tiempo.

Sr. Armendáriz. -Gracias, señor presidente; voy a tratar de redondear mi exposición.

También el Poder Ejecutivo tuvo que dejar en el camino otras cosas. Hemos mantenido muchas reuniones que ya son conocidas por los señores diputados porque han sido comentadas. Finalmente llega este dictamen que evidentemente ha sido excesivamente -o medianamente según otros- cuestionado por la poca transparencia que tuvo todo su trámite. No me voy a referir a esta cuestión porque no tengo tiempo, pero sí voy a entrar a hablar directamente del proyecto.

Somos conscientes de que este proyecto entraña un ahorro forzoso; es un ahorro forzoso que no tiene nada que ver con la seguridad social. Hemos tratado de explicar qué es la seguridad social. Vemos también que, este proyecto entra en contradicción con lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que manda que sea el Estado el que brinde los beneficios de la seguridad social. Como este proyecto no cumple con esa prescripción está sospechado de inconstitucional.

Se ha hablado en forma reiterada de las garantías. Lo que no podemos saber todavía es qué va a pasar si a alguna de estas administradoras de fondo de pensión le sucede lo que le ocurrió a tantas entidades financieras como el BIR, el Banco del Oeste, y otras de las casi 200 entidades financieras que quebraron y dejaron a mucha gente sin cobertura, mientras que muchos de sus directivos andan en el exilio paseando y disfrutando del dinero de los pequeños ahorristas. La presencia del Banco de la Nación incorporado en los últimos tiempos al artículo 39

asegura a quienes concurran allí la garantía del Estado más el interés de la caja de ahorro o bien la transferencia en dólares más la tasa LIBOR. Si nos preocupa si va a haber un veto a la segunda parte del artículo 39 porque la Asociación de Bancos lo pidió y porque en algún momento el ministro de Trabajo transmitió una idea en ese sentido. Sabemos que el Poder Ejecutivo tiene la pluma fácil para observar parcialmente las leyes.

Quiero señalar -rápidamente porque se me acaba el tiempo— que este proyecto de ley nació mal. Muchos señores diputados trabajaron con ahínco y con tesón para tratar de mejorar o consensuar algunas ideas. Y en ese sentido valoro el esfuerzo que realizaron algunos señores diputados del bloque Justicialista; pero creo que no pudieron llegar a satisfacer las aspiraciones de la mayoría de trabajadores y jubilados ni del millón de personas que firmaron un petitorio para que se realizara una consulta popular.

Es evidente que mediante este proyecto se está empujando a la gente joven a que no ingrese en el sistema público sino que opte por el privado. Esto es así. Si ponemos como ejemplo el caso de una persona de 45 años, ocurre que si sumamos los porcentajes de las tres prestaciones, es decir, la BU, la PC y la PA...

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia ruega al señor diputado que redondee su exposición pues el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra ya ha vencido.

Sr. Armendáriz. - Redondearé, señor presidente. Continuando con mi ejemplo, ese trabajador se jubilará con el 67,6 por ciento; el de 35 años lo hará con el 57,5 por ciento, y el de 25 años, con el 47 por ciento. Es decir que al actual joven de 25 años le conviene mucho más optar por el sistema privado que mantenerse en el público. Entonces, este proyecto se transforma, utilizando una expresión que mucho le gusta al señor presidente del bloque oficialista, en una máquina de impedir. A los trabajadores menores de 45 años se les está impidiendo permanecer en el sistema público y se los obliga a optar por el privado. Al respecto, me permitiré adelantar una propuesta que tal vez formulemos en oportunidad del tratamiento en particular.

Me animo a decir que si en lugar de establecer el 1,5 y el 0,5 por ciento para la PC y la PA las unimos, y a la vez fijamos el 1,36 por ciento para los aportes ya realizados y los que surjan en el futuro —con lo cual llegamos al 54,4 por ciento—, sumando a esto el 27,6 por ciento correspondiente a la PBU, llegaríamos al 82 por ciento para todos los trabajadores de 25, 35, 45 y 55 años.

Para finalizar, recuerdo que en la Convención Constituyente de 1957 se dispuso que se sancionara el Código del Trabajo y Seguridad Social. Gente de mucha capacidad trabajó en torno de esto, pero el golpe militar del año 1966 impidió que esto se concretara. Entonces, si hoy avanzamos y este proyecto se convierte en ley, aspiro a que en el futuro sigamos trabajando para dictar las normas que la complementen y tengamos realmente un Código del Trabajo y Seguridad Social, pues con él vamos a dar satisfacción a la gente frente a las contingencias y a aquellos ilustres patriotas que integraron la Convención Constituyente de Santa Fe.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny. - Señor presidente: en esta discusión en general quiero aprovechar para dejar consignadas algunas certezas y algunas dudas que hemos tenido en nuestro bloque. Las certezas no van a ser compartidas por todos, de acuerdo con lo expuesto en las horas de debate que llevamos, y las dudas serán menores frente a algunas otras que también hemos escuchado. Pero vayamos a las certezas que compartimos con el partido gobernante.

Es obvio que el sistema actual no funciona; ello no sólo está ocurriendo en la Argentina, pues también es un secreto a voces comentado en los foros internacionales que esa situación se está dando incluso en Europa. Allí, y en muchas cajas en donde la evasión es mínima, se sabe que frente a la evolución de las tasas de crecimiento y natalidad, los sistemas de reparto no tienen futuro. Entonces, o buscamos otro sistema o directamente pensamos en mecanismos impositivos que suplan esa diferencia que va apareciendo según el país de que se trate.

Es interesante el recordatorio que hiciera el señor diputado por Buenos Aires, porque en diversos países después de la última guerra mundial, e incluso luego de la crisis de 1929, no quedaron fondos para poder atender a los jubilados ni para satisfacer las necesidades sociales mínimas. Entonces, se tuvo que recurrir a lo que el aparato productivo iba logrando; crecer y poder atender las urgencias sociales elementales. En un caso así aceptamos que el reparto fue una necesidad. Todos los bloques han reconocido que en la Argentina, con 1,7 aportantes, en vez de 4, por cada jubilado el sistema nunca va a cerrar.

De no aceptarse lo que se está proponiendo, lo que estaríamos diciendo, en otro lenguaje, es que hace falta otro replanteo. Si no queremos más impuestos -y nosotros daremos al partido

gobernante un consejo muy sincero no sólo en tal sentido sino sobre la disminución de la carga impositiva luego de observar que en algunas partes del aparato productivo ya existen rigideces—debemos hacer un replanteo de cómo efectuar los gastos del Estado. Tenemos que analizar cómo reacomodaremos las prioridades que como cuerpo social aceptamos atender en este momento por la vía estatal. Entonces, ¿construimos diques, hospitales, caminos, damos mejores sueldos a las fuerzas armadas o atendemos a los jubilados? Este replanteo se encuentra pendiente y es algo que nosotros vamos a aprovechar en este momento en que el país entra en una acta final política a fin de que la opinión pública se interiorice sobre el tema.

También se trata de erradicar la corrupción en la Argentina como sistema, cambiando los factores que la hacen posible, volviendo a hacer viable aquello que siempre existió en una república y que se resume en dos palabras que van juntas: austeridad republicana. Pensamos que queda mucho por caminar en esta materia, y éste es uno de los temas que nosotros vamos a poner en debate. Entretanto los actuales jubilados han sido despojados —como bien se dijo aquí— una y otra vez. Debemos aceptar que ese despojo, equivalente al producido en el ejemplo que di sobre las guerras, debe ser atendido. Pero, ¿y a los jubilados futuros? ¿Los forzamos a continuar con un sistema que muchos de nosotros vemos que no tiene viabilidad o planteamos algo como lo que aquí se está proponiendo?

Nosotros vamos a apoyar en general esta iniciativa por el aspecto que hemos señalado, pero con algunas dudas de las que quiero dejar constancia no sólo para que figuren en el Diario de Sesiones sino por si resultan necesarias algunas modificaciones ulteriores, porque en realidad ahora uno va a empezar a aportar para sí mismo, va a abrir una cuenta personal. Pero, ¿qué es lo que se anota para cada uno de los aportantes? Habrá un mecanismo mixto de bonos y diversas inversiones, y esto constituye parte de nuestra duda. Ahora bien, en un siglo tan fluido como es el siglo XX, ¿existen mecanismos que aseguren que la inversión que hacemos en este momento mantenga su valor cuando uno se jubile? Y aquí nosotros tenemos algunas dudas que incluso alcanzan al tema de la garantía estatal o bancaria. ¿Sirven en realidad las garantías del Estado? Este mismo Congreso ha tomado una decisión sobre los depósitos a plazo fijo que me permite —y lo digo con toda sinceridad— albergar mis serias dudas en el futuro sobre la garantía del Estado si la realidad económica resbalase hacia una catástrofe. Ocurre lo mismo con los bancos. Los

bancos en su momento podrán emitir bonos —al igual que el Estado—, que podrán ser de la máxima calidad, pero lo que no sabemos es qué ocurrirá en el futuro.

En algún momento pensé en un mecanismo mixto, dejando que algún ahorrista decidiera en qué forma va a garantizar sus ahorros. Por ejemplo, podría solicitar que se inviertan en oro o en francos suizos, y que esos fondos queden a su disposición para el momento en que se jubile.

Aclaro que coincido con lo que se dijo aquí: se trata de ahorros compulsivos y ya que estamos hablando de ahorros compulsivos el ahorrista debería tener de alguna manera el derecho de decidir al respecto.

Estos son los interrogantes que en realidad sólo tendrán respuesta a través del tiempo. Algunos esquemas que se discutieron y que veremos en la consideración en particular, en el sentido de que se desvíe parte del porcentaje para atender las economías regionales o a diversas provincias, son temas que realmente estimulan el desafío, pues quizás uno podría decir que los fondos se inviertan en las provincias de donde provienen o en las áreas cercanas a las grandes ciudades, donde están los verdaderos bolsones de pobreza. Pero estamos hablando de dinero ajeno; que pretendemos tenga una renta que no esté bajo ninguna posibilidad de riesgo de mala inversión.

Cuando estos temas se debatan en particular, anticipo que terminarán siendo discusiones ociosas, cuando lo que tendríamos que privilegiar en todo momento es que la inversión sea realizada en forma segura.

Asimismo, tengo algún interrogante sobre el costo de administración; no me gustaría que en este Congreso terminemos siendo ingenuos en cuanto al nivel del costo y espero que los miembros de la comisión den los motivos por los cuales los valores sugeridos de comisiones y todos los gastos son los que corresponden, y no son ni altos ni bajos. Sin embargo, es uno de los puntos sobre el que realmente debemos focalizar la atención con mucho cuidado.

En resumen, de alguna manera estamos bastante de acuerdo con muchas de las opiniones que hemos escuchado de ambas posiciones, ya fuesen a favor o en contra. Lo que hay que tomar en cuenta realmente es que en estos momentos no existe en el mundo un sistema seguro.

Aclaro que sólo he leído los títulos del trabajo que he preparado y cuya inserción voy a solicitar en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Martínez), — Oportunamente la Cámara resolverá acerca de lo peticionado por el señor diputado por la Capital.

Corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado Ruckauf, quien en estos momentos no se encuentra presente en el recinto.

En consecuencia tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Gallo.— Señor presidente: si bien la posición de nuestro bloque ya fue suficientemente expuesta por el señor diputado Martín Mendoza, por un imperativo moral y de conciencia me veo obligado a hacer ciertas apreciaciones personales que por lo menos justifiquen ante la historia y ante mis hijos la oposición a este proyecto inicuo y perverso de modificación al sistema previsional.

Por supuesto que el sistema previsional necesita una reforma, ya que es marcadamente injusto el modo en que se están repartiendo en estos momentos los fondos vaciados del citado sistema. Por eso hemos presentado tres proyectos que tienen que ver con la reforma del sistema previsional: uno del doctor Martín Mendoza otro firmado en conjunto por los tres miembros de nuestro bloque, y finalmente un tercero propuesto por quien habla, con fecha 29 de diciembre de 1992, que se encuentra incluido en el Trámite Parlamentario N° 170, por el cual, ante una ausencia de acuerdo entre los distintos bloques y a fin de superar la trabazón en que se encontraba el dictamen de comisión, solicitábamos como paso previo que se convocara a un plebiscito a los fines de consultar a los ciudadanos sobre un tema tan trascendente que afectaba a tantas generaciones y cuyo resultado se iba a ver recién después de cuatro o cinco lustros. Destaco que mi proyecto fue el primero por el que se solicitó un plebiscito con motivo de este proyecto de ley. Sin embargo, en ningún momento hemos hecho una oposición irracional. Antes de oponernos lisa y llanamente al proyecto de dudoso dictamen del oficialismo, hemos preferido —y así lo hicimos en dos oportunidades— solicitar que vuelva a comisión, a fin de sanearlo y porque considerábamos que ése era el ámbito natural donde debía lograrse el consenso y debatirse en profundidad, no sólo éste sino todos los proyectos presentados: me refiero al nuestro y al presentado por otros bloques del conjunto del arco opositor, que se basó en el del Cofepres.

En definitiva, nuestra primera objeción es de tipo procesal. A nuestro entender hay un dictamen de

comisión que es obviamente nulo. Muchas veces, el apasionamiento propio de la política parece que impide ver claramente a la mayoría de los legisladores. Esperamos que no debamos arrepentirnos de esto.

La tortuosidad del procedimiento siguió al iniciarse la reunión celebrada el 14 de abril último, cuando se obtuvo un quórum al que nosotros inicialmente no nos prestamos y que se logró en forma amañada, con la promesa de que se iba a salvar la honorabilidad de los distintos bloques y se iba a formar una comisión ad hoc para lograr un mayor ámbito de consenso. Nada de eso ocurrió. Entre la reunión del 14 de abril y esa suerte de comisión ad hoc, inexistente en la votación de ese día, hubo dos proyectos uno presentado por el MODIN bajo expediente 5.919-D.-92 y otro, por el conjunto del arco opositor tomando como base el proyecto del Cofepres. Sin embargo, en la reunión de esa presunta comisión ad hoc que se celebra en el salón de la Comisión de Labor Parlamentaria, sólo oímos palabras y discursos. Es decir que fue un artificio para lograr quórum, obtener un cuarto intermedio y permitir la continuación del debate. Mientras tanto se siguió negociando, mediante tortuosas gestiones en los pasillos, porque no se lo hizo en el ámbito que correspondía, que era el de la comisión. A dicha negociación —de la que nos enteramos recién en la medianoche de ayer— me voy a referir al final de mi discurso.

Quiero puntualizar, aun a riesgo de ser reiterativo, las objeciones de fondo que tenemos respecto de esta iniciativa. La crítica fundamental y de fondo es a la finalidad de la ley, que no está hecha teniendo en cuenta los intereses de los jubilados ni los del sistema previsional ni los de quienes ahora están jubilados o los que lo estarán más tarde; está hecha en función de los intereses del sistema financiero o de un plan económico, para dar aire durante unos meses o años a la economía.

Se trata de fondos que se intenta volcar sea a los títulos de la deuda, sea al mercado bursátil, y que en definitiva se transformarán en una nueva deuda de todo el sistema previsional, una deuda para el Estado que terminaremos pagando con impuestos. Pero todo esto ocurrirá dentro de 20 o 30 años y, por lo tanto, aquí a nadie le interesa, porque lo único que importa es la coyuntura y la posibilidad de una reelección.

Tampoco se ha meditado sobre la inconstitucionalidad de este sistema. Se olvidan lisa y llanamente del artículo 14 bis. ¡Qué sabio es este

artículo 14 bis introducido en la Constitución Nacional en la reforma del año 1957!. No existe control más seguro que el de los propios interesados, justo en este momento en que la clase pasiva ha tomado conciencia de la dimensión y la importancia que tiene el hecho de controlar los fondos. Esto lo hemos propuesto en el proyecto alternativo que acabo de citar. Sin embargo, no ha sido tenido en cuenta en el dictamen de comisión ni tampoco en esta negociación que se hizo entre gallos y medianoche,

de la que tomamos conocimiento hace pocas horas.

Quiero poner de manifiesto que este engendro del que recién nos enteramos está constituido por la reforma de casi una cincuentena de artículos, que fueron expuestos anoche y entregados en la madrugada de hoy. Ese engendro parece un nuevo intento de composición entre lo reclamado por sectores importantes de la vida nacional como los del trabajo. Todo esto parece una tímida imitación de la redacción de algunos proyectos presentados con posterioridad, como el del MODIN, aunque ella es más aparente que real, ya que nada tiene que ver con nuestro proyecto alternativo y menos con las aspiraciones de los trabajadores.

Si existe buena fe por parte de los representantes en este recinto -de lo que no tengo derecho a dudar- es obvio que les han vendido pescado podrido ¿Por qué digo esto? Porque las dos reformas que a nuestro juicio son las fundamentales —ya que respecto al resto mi caletre no alcanzó para comprenderlas ni estudiarlas— se refieren: una, a las jubilaciones optativas, o sea, a la voluntariedad del régimen; y la otra, al destino de los fondos.

La voluntariedad del régimen es tan sólo aparente porque se crean condicionamientos de todo tipo que de hecho obligan al trabajador a apuntar sin más remedio al sistema de capitalización. Obviamente van a existir incentivos fiscales para todo esto, los que aún no están adecuadamente explicitados ni estudiados.

En la reforma que se propicia se pone de manifiesto un incentivo que, a poco que se analice el artículo 29, surge claramente. En efecto, debido a ese incremento del 0,50 por ciento anual de no se sabe qué cosa -suponemos que será de la remuneración del trabajador-, los que se queden en el sistema de reparto van a obtener al cabo de treinta años de aportes -que es un tiempo más que razonable- apenas un 55 por ciento de su haber remuneratorio, y quienes se jubilen dentro de veinte o treinta años estarán mucho peor que los jubilados actuales. Pero, ¡que se arreglen!

señor presidente, porque pareciera ser que a esta Cámara al bloque oficialista sólo les importa la coyuntura.

En cuanto a la segunda reforma importante, que es la del artículo 73, parece bajar de un 80 a un 30 por ciento el guarismo de fondos destinado a la compra de bonos "basura" o, para llamarlos de otra manera, títulos del Estado. Sin embargo, eso es más aparente que real porque, a través de la reforma de los incisos *b)* y *j)*, se deja prácticamente sin efecto esa modificación y mediante lo que se denomina inversión en obras públicas de interés nacional o regional de infraestructura y servicios públicos, se posibilita un nuevo vaciamiento de las cajas de previsión, ya que los fondos se podrían destinar a otros fines.

Lo que se ha hecho en el proyecto inicial del Poder Ejecutivo -el cual se ha maquillado en este presunto dictamen de comisión que consideramos nulo- es insistir en la ineficiencia e incapacidad del Estado para la administración y el manejo de los fondos previsionales. No como decíamos en nuestro proyecto, en nuestras observaciones y se ha repetido en más de una oportunidad por los distintos bloques de la oposición, las cajas no fueron vaciadas por un imperativo de la ley vigente sino por el mal manejo de los fondos y por la ausencia de control. El dictamen de comisión que se nos presenta ahora para su consideración, que contiene reformas elaboradas en los pasillos, no brinda seguridad en el control ni garantiza que mejorará la situación de los jubilados actuales o la de los futuros; tampoco garantiza que no se vaya a continuar con las viciosas prácticas de vaciar las cajas para atender otros fines.

Por eso, señor presidente, quiero hacer un llamado a esta alicaída audiencia para que reflexione sobre el engaño que se hace a las generaciones presentes y la traición que eso significa para las generaciones futuras. Este proyecto de ley no asegura nada sino tan sólo la coyuntura de sortear uno, dos, tres o media docena de años para que la política monetarista del gobierno siga con su maquillaje.

Por último creo que con la sanción de este proyecto de ley se estaría engañando y mintiendo a la opinión pública y traicionando nuevamente el mandato para el que hemos sido elegidos.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. - Señor presidente: me corresponde hacer uso de la palabra cuando todavía pesa sobre mí la presión de la vergüenza por el espectáculo brindado por esta Honorable Cámara.

Esta mañana, en presencia de delegaciones extranjeras del Parlamento Europeo a cuyo primer mundo estamos queriendo entrar aunque sea con fórceps, mientras un diputado exponía su opinión había 25 legisladores en el recinto. Estamos conspirando contra la vigencia de las instituciones democráticas en un país donde la clase política está muy criticada —y no sin razón— y donde el Parlamento no goza de gran prestigio; pareciera que este espectáculo quisiera invocar las ideas de Fujimori.

Por eso, a esta altura de la vida en que uno está más cerca del arpa que de la guitarra, quiero hacer un llamado a mis pares y reclamarles que cumplan con responsabilidad el mandato conferido por el pueblo y que asistan a las sesiones no sólo en el momento de votar —porque esto no es una máquina de votar: para ello no haría falta el Parlamento, sino voluntades por escrito—, sino que contribuyan a participar de la discusión. Que nadie sea tan soberbio o fatuo que crea que lo que pueda decir otro diputado no tiene importancia o carece de trascendencia.

Formulo este llamado porque quiero velar por el prestigio del Parlamento, porque quiero reivindicar las instituciones democráticas y porque pretendo que de una vez por todas el estado de derecho se consolide en la Argentina.

Hasta ayer este debate parecía realizarse entre sordos. Cada uno hablaba sin prestar atención al que hacía uso de la palabra. Quizás se está hablando para el Diario de Sesiones. Pero sucede que también es un debate de ciegos, porque hace 24 horas que está reunida la Cámara para considerar un despacho que todavía está inconcluso. Hemos escuchado los informes del miembro informante del despacho, pero ¿cuál es el despacho?

Ayer a las 19, después de cuatro horas de sesión, quise hacer uso de la palabra. El señor presidente no me lo permitió y lo interpreté en principio como un acto de autoritarismo, por lo que pido disculpas. Pero lo que sucede en realidad es que el despacho no era el que se suponía porque se continúa haciendo, y a la medianoche el legislador que expresaba la opinión de la Confederación General del Trabajo manifestó que incluso traería el resultado del estudio que se estaba haciendo sobre la contribución del 2 por ciento, si sería al 0,5 por ciento, etcétera.

Quiere decir que estamos discutiendo un proyecto que no existe. O sea que estamos debatiendo en el aire. Es un diálogo de ciegos y

de sordos; como no me resigno a ello, quiero que quede debida constancia.

Además es cierto que el proyecto ha cambiado. Se le ha quitado el carácter obligatorio y se habla de libertad. Pero es una libertad bajo fianza porque el Estado por medio de esta norma, estará conminando a la gente para que acuda a las administradoras de fondos privados pues así tendrán un incentivo, un beneficio que es el régimen impositivo, mientras que quien se quede en el régimen estatal tendrá un castigo. Se trata de una libertad que a quienes somos mayores nos recuerda una anécdota de la guerra civil española, en que Mussolini le mandó la primera división a Franco y le dijo: "Allí le mando a los voluntarios; devuélvame las manecas".

Eso es lo que estamos por sancionar: una norma en virtud de la cual prácticamente estamos obligando o incitando a la gente para que se vuelque hacia las administradoras privadas.

Este proyecto ahora cambia y da gusto ver cómo los que hasta ayer defendían a ultranza el régimen privado, hoy ya no les parece tan bien y actúan con la fe ardiente del converso. Estamos ante una liquidación muy cara a este gobierno. Ya no queda casi nada por vender y regalar. Ahora vamos a rifar el sistema previsional. En la Argentina existen la lotería, el Prode, el bingo, el casino y otros juegos; lo único que faltaba era que la plata de los jubilados también vaya a la timba de la Bolsa, y no para financiar el desarrollo del país o la creación de empleo, sino los negocios de quienes vienen exclusivamente a obtener una ganancia.

El sistema —según se ha sostenido— violaría el artículo 14 de la Constitución Nacional. Como consecuencia, esto originará más de un pleito y de un recurso de amparo. Vamos a ver cuáles son los efectos que se consiguen. El sistema de previsión vigente desaparece, transformándose en un contrato individual y egoísta de ahorro y préstamo. En estas condiciones también desaparece, a nuestro juicio, el sentido de la solidaridad social.

Además presenta un carácter abusivo porque las administradoras cobrarán un uno por ciento de la plata que recibirán, sin pagar intereses. No hay ningún banquero que cobre a su cliente por tenerle la plata que va a utilizar en su beneficio. Se ha establecido esa comisión, más un dos por ciento para financiar seguros de invalidez y fallecimiento, que contratarán las propias administradoras de fondos jubilatorios con sus compañías de seguros. Por otro lado, el Estado dejará de percibir la contribución del empleador;

por consiguiente, tendrá mayores gastos con menores ingresos. Si queremos sanear el régimen previsional, no hagamos la barbaridad de quitar aportes al sistema, obligando al Estado a realizar un mayor esfuerzo.

Con los cálculos actuariales se han presentado algunos estudios que muestran que - incluso aceptando que todo va a seguir perfectamente como hasta ahora- la capitalización del 7 por ciento del aporte permitirá cobrar la prestación durante siete años. Por consiguiente, se eleva la edad mínima jubilatoria a los 65 años, hay que advertir a las personas de 72 años que deberán buscar un pariente o un geriátrico que los ayude, porque la jubilación se les habrá acabado.

Este régimen sólo ha sido defendido por el Estado, que será un gran beneficiario. Se ha demostrado que seguirá siéndolo, más allá de que se limite el porcentaje del beneficio jubilatorio a otorgar a los trabajadores. A su vez, las empresas también harán un gran negocio porque manejarán sumas fabulosas, sin ninguna responsabilidad u obligación, salvo el supuesto control que se ha mencionado.

Cuando he pasado siete años en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y he visto lo que han hecho las compañías financieras en el país, ¿qué garantía o expectativa puedo tener, como no sea la de que algunos dueños de estas agencias de préstamos terminen como profesores de ética en la Universidad de Guadalajara u ocupando una banca legislativa?

Sr. Bravo. - Quizás como senador de la Nación.

Sr. Molinas. - Por eso el único caso que existe es el de Chile. Hace un mes y medio he estado en ese país, donde se están pagando jubilaciones de 80 y 90 dólares, según el valor en esa moneda del peso chileno. Para colmo el sistema jubilatorio chileno se crea en base a una ley dictada por el gobierno militar. Seguras de que el sistema iba a funcionar mal, las fuerzas armadas se autoexcluyeron.

Es decir que no sólo estamos condecorando a los dictadores como Pinochet, sino que estamos tratando de imitar su sistema jubilatorio. Evidentemente nadie puede dudar de que el Estado fue un mal administrador de fondos, pero cuando existe un enfermo, el problema no se resuelve matándolo sino curándolo.

Eso no significa que haya que entregar el destino de los jubilados a grupos empresarios movidos exclusivamente por el afán de lucro.

Recuerdo que en una determinada oportunidad solicité un informe a la Secretaría de Seguridad Social para saber quiénes eran los deudores o evasores previsionales, y tuve la amarga sorpresa de recibir como respuesta -después del tercer

oficio bajo amenaza de desobediencia- que no tenían un registro de deudores y que la lista se iba confeccionando en base a la presentación espontánea de quienes se acogían a una moratoria. Todas estas maniobras las realizaron las grandes empresas que ahora serán beneficiarias de este sistema, a las que se le vuelve a dar el dinero que sustrajeron. Nosotros no podemos aceptar que se privilegie a los defraudadores y se castigue a los que cumplen.

El caso de los bonos de consolidación de la deuda previsional es matemático. Se entrega los jubilados un bono a cobrar dentro de 19 años, pero la gente de edad avanzada no espera y lo vende al 40 o 50 por ciento, o ahora al 60 con motivo del caso de YPF. Sin embargo, el Estado acepta que los evasores y defraudadores cancelen deudas previsionales al ciento por ciento, con lo cual se está fomentando la evasión en lugar de combatírsela.

Por medio del decreto 159/92 se dan por terminados los acuerdos de quienes no cumplieron, los que cumplieron, que se embromen y sigan pagando, mientras que los que defraudaron tendrán una liquidación que podrán pagar con bonos de 40 o 50 pesos, que se computan a valor 100. Lo mismo sucede con el problema de las empresas que tenían personal en negro y fueron liberadas. Las que tenían personal en negro y lo confesaron, y ahora no pueden cumplir con las correspondientes cuotas, serán ejecutadas. Por eso sostengo que el Estado es el que más incentiva, facilita o promueve la evasión fiscal.

Sr. Parada: - Me permite una interrupción señor diputado, con el permiso de la Presidencia

Sr. Molinas. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Parada. - Señor presidente: quisiera que el señor diputado Molinas ratifique si efectivamente dijo que en Chile la jubilación privada es de 80 dólares.

Sr. Presidente (Martínez).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. - Señor presidente: en Chile se habla de jubilaciones de 80 y hasta 100 dólares. En febrero estuve un ese país y su moneda equivalía al 25 por ciento del valor de un dólar.

Sr. Presidente (Martínez). — Señor diputado Molinas: el señor diputado por Chubut desea formularle una nueva interrupción.

Sr. Molinas. - Bien, señor presidente.

Sr. Parada.- Señor presidente: quiero hacer una simple comparación. Si se dice que en Chile la jubilación es de 80 dólares, cabe mencionar también que el sueldo promedio de un obrero en ese país es de 80 a 100 dólares. Tomando ese ejemplo y si esas son las consecuencias que acarrea la jubilación privada, en la Argentina no tendríamos que discutir más.

Sr. Presidente (Martínez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: el sueldo promedio de un empleado de cafeterías o bares en Chile es de 150 dólares, pero además la situación es muy distinta pues allí no existía una gran cantidad de jubilados con respecto a la masa de activos.

Volviendo a mi exposición, ¿qué garantías hay del resultado de la aplicación de estos fondos? Admito que todos estos financistas hayan pasado por el Jordán y que podríamos compararlos con Juan XXIII o Juan Pablo II; pero ¿cuál es la garantía si se equivocan en la colocación en acciones o sucede otro martes negro en la Bolsa? ¿Vamos a ir a buscar al extranjero al que se fue o haremos que el Estado pague?

Creo que los únicos beneficiarios de este sistema serán los administradores, que harán una gran fortuna, e inclusive el mismo Estado, que colocará dinero para satisfacer las necesidades fiscales y terminará haciendo obras públicas con la plata de los jubilados.

No es casual el reclamo que formulan todas las entidades serias que opinaron sobre este tema. El Consejo Federal de Previsión Social, que agrupa a las cajas de jubilaciones de las provincias -que en su gran mayoría son justicialistas-, se ha opuesto a este sistema. Lo propio ocurrió con diversos pronunciamientos de la OIT y de otras asociaciones.

Pero nada tiene importancia. Tampoco el hecho de que se hayan obtenido un millón y medio de firmas en contra de este proyecto de ley. Lo que aquí hace falta es juntar plata para pagar la deuda externa, para satisfacer las necesidades del Estado. Mientras tanto, el SIDA, el cólera y otras enfermedades que habían desaparecido siguen creciendo cuando queremos ingresar al primer mundo.

¿Quién nos garantiza que esta entidad que se crea no será objeto de un veto por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la vetomanía a la que estamos acostumbrados? Además, nadie nos ha asegurado que la bancada justicialista —ante

esa eventualidad— nos acompañará en la insistencia.

Pero en realidad no es necesario que el Poder Ejecutivo veto el artículo 39. Bastará con que no le dé fondos al Banco Nación, que depende del Ministerio de Economía, o que no reglamente la ley, con lo que se verá neutralizado el accionar de dicho banco oficial, de las entidades gremiales profesionales o de otras que se puedan crear.

Todo queda en manos del Poder Ejecutivo. No dudamos de la buena fe de los legisladores que creen en la palabra empeñada y por eso nos manifiestan que no habrá veto. Yo tengo mis grandes dudas, aunque quisiera equivocarme. Además, nadie debe engañarse y hacerse el distraído, porque lo cierto es que esta ley terminará como quiere el Poder Ejecutivo, sin reacción de esta Honorable Cámara. Nadie puede suponer seriamente que no se impondrá otra vez el autoritarismo y que no estaremos frente a una sanción enervada. Recordemos que ayer el presidente del bloque Justicialista nos resaltó la facultad constitucional del presidente de la República de vetar una ley, dejando abierta la posibilidad de que esto ocurra.

Lo concreto es que este proyecto todavía sigue sufriendo correcciones en los pasillos y en conciliábulos. Por todas estas razones, creemos que debe volver a comisión para ser seriamente estudiado. No se puede decidir sobre un proyecto traído ayer a la una de la madrugada, con la obligación de hacernos presentes en el recinto a las 9 y media de la mañana. No hay tiempo material ni siquiera para hacer un control en determinadas cuestiones. Es poco serio que sigamos avanzando sobre el particular.

En consecuencia, si bien entiendo que el proyecto debería ser rechazado o por lo menos devuelto a comisión, no haré moción en ese sentido. Pero tendría que volver a comisión, para que se estudien las objeciones que se le han hecho, las que habrán de surgir en una segunda o tercera lectura de estas cinco primeras páginas, de las siete siguientes, o de las que vendrán, pues puede que lleguemos a un momento en el que votemos un despacho que ni siquiera está terminado.

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. López de Zavalía.- Señor presidente: en los años de mi juventud asistí a la formación del derecho laboral como disciplina científicamente estudiada en las facultades de derecho de las universidades argentinas.

Por aquel entonces ese gran maestro del derecho del trabajo que fue Mario Deveali, pronunció una profecía: "El derecho laboral concluirá retornando al añejo tronco del derecho civil, siendo satisfechas sus nobles aspiraciones por el derecho de la previsión social". Sigo creyendo que eso acontecerá en el futuro. Pero si se sanciona este proyecto, acontecerá en un futuro lejano, tan lejano que no lo veremos nosotros, no lo verán nuestros hijos ni tampoco nuestros nietos, porque con esa sanción no estaremos fortaleciendo el derecho de la previsión social sino que estaremos alumbrando la injusticia del abandono social.

El oficialismo, transitando por el abandono del derecho parlamentario, por el abandono de los principios que rigen la división de poderes y por el abandono de las técnicas jurídicas, exhala un espíritu de abandono social. Digo que hay abandono del derecho parlamentario. Ya se ha abundado mucho sobre ello y se ha discutido demasiado. Hubo dos votaciones y no voy a reiterar los argumentos.

Me voy a referir a otro aspecto porque anoche los diputados de la oposición recibimos el más grande de los elogios del seno del oficialismo y, al mismo tiempo, la mejor de las pruebas de la justicia de nuestra posición. Digo que recibimos el más grande de los elogios porque desde la bancada oficialista se dijo que se oponían al proyecto los hombres pequeños. Me enorgullezco de pertenecer a los hombres pequeños; de estar al lado de los pequeños, que son los débiles; de estar al lado de los pequeños jubilados; de los pequeños que no tienen la fuerza ni disfrutan de las caricias del poder; de los pequeños que no están en los grupos bancarios; de los pequeños tan pequeños que todavía tenemos la inocencia de creer que algún día en un debate la razón prevalecerá sobre el número.

Y les digo que también nos ha dado el oficialismo la mejor de las pruebas de la justicia de nuestra posición cuando queríamos que el asunto volviera a comisión, porque de golpe ha surgido que el proyecto que se suponía querían debatir no era el de la comisión. Ya todo había cambiado. Yo no estoy haciendo un debate por puro amor a las formas del procedimiento parlamentario, que fueron violadas. Lo hago por otras razones; para que haya seriedad en el debate, para que ésta no sea una discusión en la que nadie esté dispuesto a cambiar nada, en que nadie esté dispuesto a oír:

los del oficialismo, porque tienen su voto, y los de la oposición, porque sabemos que en nada influirá lo que digamos si el asunto no vuelve a comisión para trabajar serenamente.

En vano se nos dirá desde el oficialismo que en la discusión en particular estarán dispuestos a modificaciones. En los años que llevo de diputado ya me he cansado de oír la melodía de las sirenas que culmina con la frase terminante: "La comisión no acepta modificaciones". Lo que sí pido que se tenga presente es que cada vez que el señor presidente pregunte a la comisión qué opina, sepa que implícitamente estoy protestando porque pregunta a una comisión que no es tal. A fin de ahorrarme constantes interrupciones, pido que se recuerde ésta. Siempre implícitamente estaré diciendo que se está violando el reglamento.

He dicho que también se están abandonando las reglas y los principios de la división de poderes. Sabemos muy bien, aunque se trate de disimular, que hay una tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que se manifiesta en dos aspectos. Por un lado, el Poder Ejecutivo hace uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, y por el otro, el Congreso permanente impávido. Hay varios proyectos mediante los que se reglamentan esos decretos, sobre los que la comisión respectiva no se encargó de dictaminar. Si no quieren, no reglamenten los decretos de necesidad y urgencia; pero ahora, a través del proyecto en tratamiento, se están multiplicando los reglamentos delegados hasta límites inconcebibles, contra el sabio principio *delegata delegare esse non potest*.

Este afán de multiplicar los reglamentos delegados comienza en el artículo 9º, donde por primera vez aparece el misterioso AMPO. Cuando leí esta palabra, sinceramente no sabía qué significaba. Un chusco me explicó que era la sigla que significa la expresión "angustia motivada por oportunismo". Cuando fui a la definición del AMPO en el artículo 21 —pues a él me remitía el artículo 9º— terminé dándole la razón al chusco, porque a su vez aquel artículo me remitía al 38, y este al 11. Esto será lo que se le ocurra al Poder Ejecutivo.

Ese afán de delegar facultades reglamentarias aparece a cada paso: en el inciso f) del artículo 12, en el inciso b) del artículo 13, en los artículos 24 y 35, en el inciso h) del artículo 75 y en los artículos 73 y 107, por limitarme a nombrar algunos que rápidamente he encontrado. Pero no se trata sólo de los decretos de necesidad y

urgencia, pues aquí hay algo más: la tendencia del Poder Ejecutivo a hacer promulgaciones parciales o veto parcial. Acá hay una confusión.

Se habla de lo que el Poder Ejecutivo ha prometido no vetar. El veto parcial es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo, y por lo tanto éste jamás puede renunciar a ella. Si realmente fuera cierto que el Poder Ejecutivo ha prometido no vetar parcialmente diría que ha cometido un tremendo error, que ha abdicado de facultades de las que no puede abdicar, pues emanan de la Constitución. Pero no me preocupa el veto parcial; lo que me preocupa es la promulgación parcial de una ley. Eso es lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo.

Como tengo la seguridad de que por lo menos el oficialismo nos acompañará en esto si en definitiva se sanciona el proyecto de ley en consideración, solicito que se agregue un artículo que sirva de garantía de que se respetarán los textos constitucionales. El artículo cuya inclusión propongo dice lo siguiente: "Los distintos artículos de la presente ley forman una unidad. El veto a cualquiera de ellos, inclusive al presente, implicará la devolución del texto íntegro al Congreso para su examen en los términos de la Constitución."

No necesita explicar la razón de esto frente a cierta jurisprudencia que distingue entre lo separable y lo inseparable, lo divisible y lo indivisible, según la voluntad del Congreso. Con esta redacción estaríamos afirmando la indivisibilidad del texto.

Ha habido abandono de las reglas de la técnica jurídica. No digo que no deba utilizarse la ampulosa división en libros, títulos y capítulos, cosa que es de práctica para los grandes cuerpos legislativos. Después de todo, las Pandectas del emperador Justiniano están divididas en libros, y me imagino que los juristas del oficialismo han de pensar que se encuentran en el mismo nivel que Papiniano, Justiniano, Ulpiano y demás. Sinceramente en este terreno me alegra que sólo hayan conseguido formar seis libros, porque si hubieran tenido algunos artículos más para llegar al séptimo libro -recordando al rey Alfonso el Sabio- hubieran hecho la Ley de las Siete Partidas. *(Aplausos)*.

Al hablar del abandono de las reglas de la técnica jurídica me refiero a otros aspectos que en realidad no debieran sorprenderme porque en reiteradas oportunidades he dicho que el oficialismo tiene la curiosa tendencia de elegir la vía impropia cada vez que puede tomar la prolija.

En una intervención pasada ya aludí a esa extraña figura de la tipificación penal con puntos suspensivos. Me refiero al artículo XI, contenido

en el artículo 133 del proyecto, que veo que no ha sido corregido. En la discusión en particular veremos múltiples remisiones de este tipo. Sin ir más lejos -y si mal no recuerdo- el artículo 145 se remite al anterior, que nada tiene que ver porque se relaciona con un texto diferente que estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo y no en éste.

Pero más me preocupa todo este curioso régimen de vigencia de la ley. Veamos, por ejemplo, el artículo 142: nos explica que la recomposición de haberes va a regir al mes siguiente al de la promulgación de esta ley y de la ley de privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima, con lo cual llego a la conclusión de que el oficialismo se prepara para enfrentar una nueva dificultad para conseguir el quórum encantado para otra ley de privatización de YPF porque no gustó la anterior.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. López de Zavalía. — También podemos citar el artículo 171, que dice que esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. En un primer momento me he preguntado por qué se dice "de su promulgación" y no se toma en cuenta la fecha de la publicación, siendo que ésta es la que hace cognoscibles las leyes. Pero en esta parte le daré la razón al oficialismo. No hace falta que se conozca esta ley porque aunque se conozca nadie la terminará de entender. Yo he leído el texto treinta veces, llegando a la conclusión de que hace falta un congreso de juristas para desenredar tanta maraña.

Luego tenemos el artículo 130, que resulta curioso porque mientras la ley entra en vigencia a partir de la fecha de su promulgación no ocurre lo mismo con el libro I. Este libro I entrará en vigor en la fecha en que fije el Poder Ejecutivo, que no podrá ser establecida en un plazo menor a nueve meses ni mayor de dieciocho contados a partir de la promulgación de esta ley. Luego seguimos con este juego de vigencia inmediata, instantánea y diferida, y quizás algún jurista del oficialismo me explique el intríngulis que crean los artículos 138 y 147.

Creo haber dado a entender que no me agrada la filosofía de este proyecto. ¿Cuál es la finalidad que se persigue? ¿Se persigue un flujo de dinero o se busca proteger la vejez y la in-

validez? ¿Se procura solucionar la tragedia que en la familia produce la muerte de una persona? O para decirlo en otras palabras: ¿Tiene esta ley una finalidad crematística o una finalidad social? La crematística está fuera de toda duda; en cuanto a lo social se nos aseguró que los beneficios de esta ley serán vistos dentro de treinta años por nuestros hijos.

En lo personal creo que dentro de treinta años lo que veremos será la guadaña de los bonos de consolidación que ya se anuncian en el artículo 45, donde se habla genéricamente de bonos a emitirse. Sinceramente no puedo compartir esto de ninguna manera. Estoy seguro de que dentro de treinta años cuando este sistema empiece a aplicarse y simultáneamente fracase, el Poder Ejecutivo de entonces nos echará las culpas y los jubilados nos buscarán en nuestras tumbas y nos maldecirán. Ya sabemos que las primeras palabras de todos los discursos políticos hacen hincapié siempre en las culpas heredadas. La Nación no hereda culpas y la actuación de un gobierno carga sobre sus espaldas las culpas del pasado. No puede eludirlas; no puede trasladarlas dentro de treinta años. Debe tratar de corregirlas y de enmendarlas.

Los señores diputados Fontela y Fescina han hecho un análisis económico de este proyecto y el señor diputado Martínez Raymonda brindó un análisis jurídico y filosófico. No voy a insistir sobre esto. Ante las amables risas que se observan desde la Presidencia me voy a limitar a decir que este proyecto se define así: *Omnis calliditas, falatio, machinatio, ad fallendum alteram aut decipiendum adhibita*.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: como en la conocida película *Solos en la madrugada* en el día de hoy un grupo de diputados escuchamos con atención y con indisimulada sorpresa el informe del bloque Justicialista respecto de la última versión del proyecto de ley sobre la reforma previsional. El mismo proyecto de reforma previsional sobre el cual se nos dijo en junio del año pasado que debía ser aprobado sin modificarse una coma.

Escuchamos ayer que las reformas eran circunstanciales y que se ocupaban de problemas laterales. No es así; se están modificando ejes centrales del proyecto previsional. Se ha modificado el criterio de obligatoriedad cambiándolo por el de opcionalidad. También se altera la mezcla de inversiones que pueden realizar las administradoras de fondos de pensión. Además se incorpora un adicional por permanencia en el régimen estatal y se introduce

un sistema de incentivos fiscales, cuya oscura redacción nos ha impedido evaluarlo suficientemente.

Por otra parte, y para ser sintéticos, ayer se nos dijo que no iba a haber modificaciones al artículo 39. Sin embargo, en los diarios de hoy nos encontramos con declaraciones contrarias a esta afirmación por parte de funcionarios públicos de primer nivel.

Los cambios que se han introducido y se están introduciendo a este proyecto hacen que ningún cálculo actuarial o económico-financiero realizado hasta la fecha tenga hoy validez. Anoche recibimos algunas notas por parte del bloque justicialista informándonos del contenido de algunas reformas. No obstante, no hemos recibido ningún análisis sobre las consecuencias económico-financieras de esta nueva reforma adicional. No hemos recibido una reflexión sobre los efectos de la bipolarización que habrá de tener el sistema como consecuencia de las últimas modificaciones introducidas.

Tampoco hemos recibido el recálculo del déficit durante el período de transición, los cálculos actuariales sobre la viabilidad de los nuevos regímenes estatal y privado, las nuevas fuentes de financiación del déficit fiscal ni la cuantificación respecto de la mentada neutralidad fiscal del sistema de incentivos que ahora se incorpora.

Las últimas reformas que se han introducido — no sabemos si efectivamente es así porque existen versiones insistentes de que se sigue trabajando en el proyecto — son confusas y han impedido una cuantificación de nuestra parte, aunque fuera superficial, en este breve plazo que ha transcurrido desde la madrugada de hoy hasta ahora. Sobre la misma pregunta tributaristas de reconocido prestigio nos han dado respuestas distintas. Esto significa que la confusión es grande. La importancia y complejidad de los temas exige una reflexión pormenorizada sobre estas cuestiones. No se puede construir seriamente un nuevo sistema previsional sobre las tinieblas y la incertidumbre. Llamo a la reflexión al justicialismo sobre la necesidad de encauzar sensatamente y en el ámbito adecuado esta delicada legislación. Si faltaba una razón para que este proyecto vuelva a comisión, la reformulación que se efectuó anoche en su redacción es más que suficiente.

Más de una vez he escuchado decir que un caballo dibujado, por una comisión resulta un camello. ¿Se imaginan, estimados colegas, el tipo de animal que podría surgir del diseño de

la Cámara en plenario, con 250 diputados y sin que exista el filtro de las comisiones especializadas?

Hoy me decía un distinguido colega que seguramente de ese trabajo surgiría un ornitorrinco. Le pregunté por qué. Y me contestó que es el único mamífero que no nace de un parto natural, no nace del vientre de su madre sino de un huevo. Lo único claro es que a ese mamífero que habita en Australia y Tasmania vamos a tener que agregarle el aditamento de patagónico, porque lo que podemos asegurar es que ese animal va a ser autóctono. Nuestra gente no se merece tanta improvisación.

Más allá de las reformas que se introdujeron esta madrugada, pienso que en la discusión del sistema previsional se ha perdido objetividad. Hemos sido abrumados por una campaña oficial de prensa y por las continuas dificultades del oficialismo para lograr consenso en su propuesta. Entonces, han quedado en la penumbra algunos puntos básicos que yo llamaría fundacionales toda vez que se analiza la cuestión previsional.

A la sociedad le debemos un debate esclarecedor sobre esta materia. Hay cuestiones sobre las cuales no ha habido discusión ni debate. No es que pretenda hablar de la cara oculta de la Luna. Simplemente deseo referirme a algunos puntos que están manifiestamente en la zona de la penumbra.

En primer lugar, debo manifestar que la opción, dado lo limitado de los recursos, es un sesgo del sistema previsional hacia la universalidad o la proporcionalidad. En segundo lugar, no se sabe cuáles serán los escenarios de los próximos años y su influencia sobre la viabilidad del sistema previsional que nos ocupa.

También voy a hablar brevemente sobre las actitudes culturales que prevalecen hoy en la Argentina y sobre la posibilidad de que con estas conductas pueda ejercerse efectivamente una supervisión de este sistema.

Por fin, me voy a referir a los mecanismos de ahorro. Hemos escuchado mucho sobre esta materia, pero nos olvidamos de lo fundamental: universalidad o proporcionalidad.

La intervención del Estado es imprescindible y constituye una premisa de cualquier sistema previsional. Es obvio que hay personas previsoras que pueden ahorrar para la vejez, porque sus conductas y hábitos así se lo aconsejan.

Además, pueden hacerlo porque tienen recursos suficientes. Pero hay otros grupos de individuos tan valiosos como los primeros que no están en condiciones de ahorrar.

Por ello es indispensable prever la emergencia de grupos humanos desvalidos en la ancianidad. Es necesario establecer sistemas que prevengan y planifiquen la atención de la vejez. Sin duda, en este punto hay que preguntarse cuál debería ser la naturaleza de la intervención del Estado, y uno advierte aquí dos orientaciones: la de asegurar la universalidad o la de garantizar la proporcionalidad cuando estudie los sistemas previsionales comparados.

La universalidad es pregonada y defendida por quienes sostienen que hay que rescatar la dignidad de la persona humana y que la sociedad en su conjunto debe responder solidariamente ante las emergencias de aquellos que ya no pueden trabajar. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre dice que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.

La proporcionalidad aspira a que los jubilados perciban haberes similares o cercanos a los que estaban acostumbrados a percibir cuando se desempeñaban en la vida activa.

Nuestro sistema previsional ha hecho una combinación de ambos objetivos, y la limitación de recursos ha puesto de relieve que no es posible atender ambos simultáneamente. Así, hoy nuestro sistema previsional es bastante universal, pero esa cobertura amplia significa que gran parte de los jubilados perciban haberes por debajo de los niveles de subsistencia.

Entonces -creo que esto debería haber formado parte del debate que no fue-, me pregunto si hay que optar por la proporcionalidad imposible o por la universalidad solidaria; si hay que limitar los beneficios previsionales a los que aportan o si deben extenderse -por razones que exceden las meramente económicas- a todas las personas, y cómo debería financiarse este sistema universal. En este sentido, está claro que la universalidad no va de la mano de la financiación a cargo exclusivamente de los trabajadores.

También me pregunto algo que no puede omitirse en un debate sobre el sistema previsional: si la prestación debe tender a ser igualitaria o tiene que ser diferenciada.

Quiero decir dos palabras sobre los escenarios futuros y la viabilidad de esta reforma. Se nos ha dicho insistentemente que ésta es impostergable para recrear el mercado de capitales que motorice el desarrollo, pero intuyo que se ha alterado el orden de causalidad. Antes de preguntarnos si habrá o no crecimiento sin la reforma, la inquietud, es -si apuntamos a resol-

ver el problema previsional- esta reforma es realmente viable en condiciones de baja tasa de crecimiento económico.

Sabemos que existirá un período de transición con un serio desfinanciamiento del Estado. Este período será tanto más prolongado en relación inversa a la tasa de crecimiento de la economía: a menor tasa de crecimiento más difícil será financiar la transición.

Por otra parte, la viabilidad de los sistemas de capitalización depende de una rentabilidad razonable, la que está subordinada, entre otras cosas, a la estabilidad de la economía. Pensemos qué ocurrió en la Argentina de no hace muchas décadas, cuando la inestabilidad produjo serios desajustes en la financiación del sistema previsional. Me pregunto si estamos definitivamente alejados del peligro de un rebrote inflacionario, si podemos seriamente dar por garantizada la estabilidad en la Argentina.

Quiero hacer una pequeña reflexión sobre el contexto ético de la sociedad en la que deberá aplicarse esta reforma previsional. La inquietud radica en si el contexto de la actual Argentina contribuye a la viabilidad de esta reforma. Son demasiados los ejemplos de nuestra historia reciente de conductas antisociales por parte de los agentes económicos. Esas actitudes son, por supuesto, el reflejo de profundas fallas en nuestra cultura, pero constituyen también el reflejo de un Estado débil, con un poder erosionado para garantizar el cumplimiento de las normas.

Existe aquí una relación inevitable. A mayor anomia mayor dificultad por parte del poder administrador para supervisar y controlar escrupulosamente el manejo de los fondos de los cuales depende la tranquilidad de nuestros ancianos.

Se afirma insistentemente que es necesario reconstruir el Estado. En la eventualidad de que algunas administradoras tengan dificultades en la colocación de los fondos y de ello deriven incumplimientos a los aportantes, me pregunto si el Estado podrá alegremente desentenderse de la suerte de las personas que han depositado en ellas sus ahorros.

También deseo hacer algunas reflexiones sobre el ahorro. Se dijo que es necesaria la reforma para estimular la tasa de ahorro en nuestra economía y financiar el proceso de desarrollo. Quisiera saber si es cierto que la única manera que tenemos los argentinos para generar un mercado de capitales aún es a costa de un crecimiento del déficit fiscal, me pregunto si el único camino para solucionar los problemas de la Argentina es recurrir a este tipo de actitudes temerarias que pueden significar un salto al vacío, o si el camino más directo no es

adoptar un sistema previsional financieramente más viable en el largo plazo y con un costo menor en el período de transición.

Por otro lado, tengo serias dudas de que esta clase de regulación influya seriamente sobre la decisión individual en materia de ahorro. La decisión de ahorrar en el mercado financiero argentino, cualquiera sea su expresión, depende de la reconstrucción de los canales financieros y fundamentalmente de una perdurable estabilidad económica y jurídica pero, por sobre todo, del respeto a los derechos de propiedad en el marco del estado de derecho.

Es esencial el respeto a la seguridad jurídica, y en este sentido debo decir que el gobierno ha adoptado conductas altamente inconvenientes para la generación de un mercado de capitales.

Estas reflexiones me llevan a delinear algunos aspectos que considero fundamentales para la definición de un sistema previsional. Si el Estado tiene que intervenir en materia previsional, elijo un sistema estructurado sobre el principio de la universalidad, aun sacrificando parcialmente la proporcionalidad. La realidad de la escasez de los recursos nos obliga a ello. Por otra parte, cajas o fondos complementarios pueden atenuar las deficiencias del sistema.

Si la estabilidad económica es aún un valor que debe ser garantizado, elijo para el sistema previsional una modalidad donde la integridad de los aportes previsionales esté menos comprometida por la suerte de la evolución económica. Si todavía se precisan años para cambiar la actitud ético-cultural de los argentinos y si el poder de supervisión es el de un Estado débil, elijo un sistema donde se minimicen los riesgos ante conductas antisociales de los agentes económicos.

Si es necesario generar ahorro, elijo que ello no sea a costa de un mayor endeudamiento del Estado, sino por medio de un manejo más responsable del presupuesto, generando las condiciones de estabilidad económica y jurídica que se manifiestan en el respeto escrupuloso de la ley. De esta manera se contribuirá eficazmente a canalizar el ahorro en nuestra República.

Por otra parte, para el sistema previsional elijo reglas que cumplan escrupulosamente con los preceptos constitucionales. Los oradores que me han precedido en el uso de la palabra se han extendido con mucho conocimiento sobre el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y lo que ello significa en términos de encauzar el sistema previsional. Yo también recuerdo la existencia de nuestro venerado artículo 14 -el an-

tiguo y tradicional artículo 14-, que entre otras cosas consagra el derecho de no asociación a entidades privadas, según lo ha interpretado la jurisprudencia en forma reiterada.

En conclusión, adelanto mi oposición al proyecto del oficialismo, reclamando una vez más que la iniciativa vuelva a comisión, de donde no debería haber salido en las condiciones en que lo hizo. Encuentro que, más allá de la insensatez de pretender aprobar hoy las sustanciales reformas que se introdujeron esta madrugada, los proyectos presentados por la oposición procuran modernizar el sistema de reparto, haciéndolo más viable en términos de equidad y desde el punto de vista financiero. Complementan el sistema estatal de reparto con regímenes complementarios de libre elección por parte de los trabajadores.

Esas iniciativas opositoras recogen la experiencia que predomina en el orden internacional y en países con sistemas previsionales maduros. Reformemos el sistema de reparto a efectos de mejorar su equidad y consistencia financiera. Avancemos decididamente hacia un sistema que asegure la universalidad de las prestaciones previsionales. Analicemos seriamente si no deberían tender a emparejarse con un incremento de los haberes mínimos y una limitación para los individuos con otros ingresos.

Invito al justicialismo a abandonar el intento de convertir el proyecto oficial en el mito de la panacea universal.

Sr. Amadeo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Olivera. - No, señor diputado, porque ya finalizo mi exposición.

Todos sabemos que no hay soluciones mágicas para esta cuestión y que es arriesgado someter a la sociedad a experimentos sin viabilidad previamente verificada. Me preocupa de modo especial la mitificación de las soluciones para este complejo problema de la reforma previsional impulsada por publicidades costosas e irresponsables. El presidente Kennedy decía que a veces el enemigo de la verdad no es la mentira sino el mito, por su contenido de manipulación y engaño y por la inevitable decepción que trae aparejada. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pierri). - Corresponde que haga uso de la palabra el señor diputado Cafiero pero, como no está presente, se continuará con la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Topa. - Señor presidente: durante el desarrollo del debate se han hecho innumerables objeciones de fondo y de forma al proyecto originario y al novísimo texto producto de las

modificaciones presentadas en esta madrugada por el oficialismo. Quizá sea utópico creer que se trata de cuestiones salvables; de todas maneras, en mi humilde concepto, el apartamiento inicial de las prescripciones del artículo 14 bis de la Constitución Nacional -que no se compatibiliza en manera alguna con la norma hoy en tratamiento- torna imposible una discusión posterior ordenada.

Tal vez algún hermeneuta poco ortodoxo intente explicar que no es tal deber excluyente e inoslayable de tutelar ordenado al Estado por un precepto constitucional. Al respecto, debe destacarse que esta iniciativa ni siquiera fue remitida para su consideración a la Comisión de Asuntos Constitucionales a fin de que emitiera un dictamen previo sobre este punto. De allí en menos son innumerables las cuestiones de fondo y de forma que se pueden criticar al proyecto en consideración. Otros señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra han efectuado esas críticas con mucha mayor enjundia que la que yo podría tener, de manera que en virtud de ello adelanto mi voto negativo en general y solicito que se inserte en el Diario de Sesiones el texto completo de mi discurso.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Vázquez (R. H.). — Señor presidente: todos sabemos que el tema previsional es una deuda que tiene la sociedad argentina con los jubilados y consigo misma, en el sentido de que la profunda crisis que durante mucho tiempo ha venido soportando este sistema debe merecer una especial atención, fundamentalmente de los sectores políticos.

La Unión Cívica Radical ya había advertido durante su anterior gobierno sobre la necesidad de decretar la emergencia previsional como una forma de alertar sobre las consecuencias profundas que afectaban el normal funcionamiento de este sistema.

Todos sabemos que más allá de los problemas propios del sistema, también lo afectan problemas estructurales relacionados con la caída de la participación del salario en el producto bruto interno; con el aumento de la desocupación, con el subempleo y con la creciente situación de las denominadas economías informales.

Sin embargo, el propio sistema también fue afectado por las contradicciones existentes, como ser el desacompañamiento institucional entre la realidad económica, social y política, y las

normas que lo rigieron. Todos sabemos que este problema no fue sólo de la Argentina. Otros países que han tenido sistemas de reparto —aun los más desarrollados— debieron ajustar en forma periódica este marco institucional para adecuarlo a la realidad de su crecimiento y desarrollo. Pero podemos precisar —y tenemos la obligación de hacerlo— cómo este sistema agravó la crisis. Muchas veces el mismo Estado fue artífice del agravamiento en las condiciones al intentar resolver el problema de los jubilados. El mismo Estado instauró los famosos pagos no remunerativos para eludir precisamente las erogaciones necesarias para abastecer el sistema de la seguridad social. Hoy mismo estamos presenciando el dictado de numerosos decretos que afectan el funcionamiento de las cajas, no sólo la de los estatales sino también la de los empleados de comercio y la de autónomos.

Hace muy poco tiempo —vale la pena recordarlo— el propio ministro de Trabajo y Seguridad Social dictó el decreto 333, que exime del pago de los aportes previsionales a los empresarios, aun cuando la jurisprudencia en forma reiterada había determinado que se trataba de una remuneración y que correspondía en consecuencia un aporte y contribución patronal. Pensemos por ejemplo en la casa habitación de los trabajadores, en el beneficio que se les otorga para que almuercen en el período de trabajo o en los adicionales que se establecen para determinadas tareas. Todas estas cuestiones fueron precisamente soslayadas por imperio del Estado. Más de veinte incisos demuestran la contradicción entre la necesidad de combatir la evasión y una actitud dispendiosa por parte del Estado vinculada a fortalecer el sistema previsional.

También se lo utilizó para resolver problemas de carácter asistencial mediante el otorgamiento indiscriminado de las llamadas pensiones gratificables. No estoy denunciando esto como una forma de negar la realidad social, donde hay muchos sectores que necesitan del apoyo del Estado para igualarse en oportunidades. Lo cierto es que el sistema previsional debe tener la garantía de que esos fondos forman parte de una política social del Estado y provienen, por lo tanto, de aportes del Tesoro nacional y no de contribuciones genuinas de los trabajadores y empleadores.

Entre 1966 y 1983 se sancionaron más de diez moratorias, que posibilitaron que centenares de miles de trabajadores autónomos accediesen a la jubilación sin haber aportado nada o casi nada al sistema.

De 1.700.000 beneficiarios en 1973 se pasó a 3.350.000 en 1992, mientras que en el mismo período la población económicamente activa sólo se incrementó en un 20 por ciento. Este desfase naturalmente ha provocado la crisis grave por la que atraviesa nuestro sistema previsional.

Es indudable, y en esto todos coincidimos, que la reforma al sistema era imprescindible. Sin embargo, ¿cuál era la actitud a asumir a partir de esta realidad? La Unión Cívica Radical buscó la fuente principal de solución en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad indelegable del Estado por aquellas contingencias que podrían sufrir nuestros mayores y también en los de invalidez o muerte. Buscamos el necesario consenso que debe tener toda norma y fundamentalmente la que estamos tratando, y creo que lo hemos logrado con los distintos sectores políticos y sociales, con los pequeños y medianos empresarios tanto de la ciudad como del campo, con los trabajadores y con las organizaciones de jubilados. Pretendimos así satisfacer esa necesidad de consenso, que también el oficialismo tendrá que asumir y que debe basarse en el respeto de nuestro ordenamiento constitucional.

Lamentamos que ello no haya ocurrido así y que se haya sucedido una serie ininterrumpida de reuniones de comisión que desconocían las iniciativas de otros sectores políticos. La Unión Cívica Radical presentó un proyecto alternativo en junio de 1992. Pero no tuvimos la oportunidad de debatirlo en comisión, ni pudimos discutir el proyecto oficial. Solamente se escucharon informes para cumplir un ritual que en definitiva no enriqueció la propuesta oficial, que sólo se fue modificando sucesivamente en los despachos del Poder Ejecutivo y en reuniones secretas, a punto tal que hoy no sabemos cuál es el texto definitivo del proyecto que estamos discutiendo.

Nos preguntamos acerca de algunos objetivos que debería perseguir el sistema previsional y si la reforma propuesta podría solucionar la afligente situación de los jubilados. Y por lo que conocemos hasta hoy podemos decir que la situación de los actuales jubilados no cambiará en cuanto a los magros ingresos que vienen percibiendo. Todos conocemos los problemas de las cajas de jubilados, que apenas cumplen o mal cumplen lo preceptuado en las leyes 18.037 y 18.038. Nos preguntamos qué pasará cuando el 11 por ciento de aporte del trabajador sea destinado a las administradoras privadas. ¿Quién financiará el mejoramiento de la situación de los actuales jubilados? ¿Cuál es la alternativa que se plantea? Como dijo el señor diputado

Olivera, hay que ver cuáles son los cálculos del déficit del Estado que tendrá lugar en la transición del sistema.

Asimismo nos preguntamos si el sistema va a beneficiar a los futuros jubilados. Los cálculos actuariales indican que el sistema de capitalización sólo hará posible un haber del 82 por ciento al cese a partir de una tasa real de crecimiento del 5 por ciento anual, y no hay ningún país en el mundo que haya contabilizado en el largo plazo una tasa de crecimiento como la que se está mencionando; sin embargo, se insiste con este proyecto. Nada se dice del déficit de más de 26.000 millones de dólares en los próximos treinta años, como se ha calculado a través del trabajo realizado por el bloque de la Unión Cívica Radical, o de 48.000 millones de dólares que afirman otros sectores.

Sin embargo, anoche hemos asistido a una nueva reformulación que es coherente con la marcha global del proceso económico en la Argentina y con la importante transferencia de ingresos que se viene produciendo desde los sectores más humildes hacia los sectores de capital concentrado. Entonces, es lógico que ahora se intente inventar un nuevo capitalismo basado no en el ahorro del empresario sino en el descuento compulsivo de los haberes de los trabajadores.

Son éstas las preocupaciones de la Unión Cívica Radical. Por ello, a partir de los magros datos que hemos recibido ayer estamos intentando ver si la alternativa de una jubilación optativa puede significar en el fondo alguna solución. Según las cuentas que hemos hecho, no funcionará ni el sistema de reparto ni el de capitalización.

Todas las dudas que hoy asaltan al Congreso de la Nación acerca de un tema que no conocemos y sobre el que sólo existen suposiciones, hacen necesario -reitero la posición de todos mis compañeros de bloque- que este asunto vuelva a comisión para ser debatido intensamente, a fin de que esta ley que merece la Argentina —y que debe surgir del mayor consenso posible— pueda tener una flexibilización que hoy por hoy entendemos que no tiene.

En definitiva, debemos tratar que el sistema jubilatorio y la reforma del régimen vigente sirvan a los jubilados. Hoy creemos que esto sirve solamente a las necesidades del ministro Cavallo para seguir adelante con su plan. El mercado de capitales no se formará a partir del descuento compulsivo a los trabajadores sino sobre la base de las posibilidades reales de inversión de los propios empresarios argentinos y de aquellos que quieran invertir en este país.

El sistema jubilatorio debe responder a los criterios de universalidad y de integralidad, de los que hablaba el señor diputado Olivera.

Nuestro compromiso es con los jubilados, y en ese sentido vamos a seguir trabajando para llegar a modificar todo el marco legislativo de tal manera que podamos saldar la deuda social que hoy tenemos con todos los argentinos. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). Corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado Brunati, quien no se encuentra presente en el recinto.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Marcó. - Señor presidente: en oportunidad de formular la observación publicada como Suplemento N° 78 al orden del día en tratamiento, hicimos el cuestionamiento de la validez del presunto despacho de comisión en análisis. Este cuestionamiento se vinculaba a distintas fallas de procedimiento: la forma de integración de la comisión por la ausencia de reemplazo de un legislador lamentablemente fallecido días antes de la reunión; el procedimiento de aprobación del presunto dictamen con omisión de la votación que el reglamento requiere, y la falta del giro a comisiones que tienen una indiscutible competencia en el tema.

Todos estos elementos, que ameritaban la vuelta a comisión del proyecto de ley en discusión, se han visto enriquecidos -como reiteradamente se ha dicho esta tarde- por múltiples improvisaciones y reformas hechas sobre el pupitre. Esto demuestra que se está trabajando sobre un proyecto de ley que ni siquiera está terminado, sobre el que no hay datos serios ni información fidedigna y en torno del cual se ha operado sin conocer las verdaderas consecuencias, que en caso de ser sancionado, lamentablemente producirá sobre la operatividad futura de la ley.

Decía hoy un legislador que, gracias a la oposición y al reanálisis que se ha efectuado desde el momento de emisión del pretendido dictamen hasta la fecha, íbamos a tener una ley mejor, pero dudo que sea así. Quizás haya algunas mejoras si tomamos el proyecto de ley desde el punto de vista de lo que ideológicamente o por nuestra forma de pensar hubiéramos querido. Es evidente que existen en este texto concesiones que pueden estar mucho más cerca de nuestro deseo, pero a la vez está tan plagado de improvisaciones que la coherencia interna que pudo lucir el proyecto original se ha perdido totalmente

Ello -como se dijo hasta el cansancio en esta tarde- amerita que en un rasgo de responsabilidad la Cámara decida que el proyecto sea remitido nuevamente a las comisiones respectivas para su análisis.

Quiero referirme en especial a uno de los temas que motivaban el pedido de vuelta a comisión: el aspecto constitucional, la absoluta falta de congruencia entre el proyecto en análisis y el texto constitucional de 1853/60, reformado en 1957. Entiendo que sería redundante pretender la lectura del texto constitucional porque se supone que los señores legisladores aquí presentes lo deben conocer con total precisión. Pero pareciera, por la simple lectura de ese texto, que quienes redactaron el proyecto en consideración ni siquiera se han tomado el trabajo de repasarlo.

La parte pertinente del artículo 14 bis dice lo siguiente: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes...", y seguidamente agrega que se deberá respetar el principio de las "jubilaciones y pensiones móviles".

Este artículo tan flagrantemente contradicho por el proyecto en análisis fue incluido por la Convención Reformadora de 1957, pero recoge principios que ya había establecido la Constitución de 1949, la que ponía a cargo del Estado las prestaciones tendientes a compensar la pérdida de la capacidad de trabajo de las personas, ya fuera por vejez, invalidez o muerte, autorizando al Estado a promover a ese mismo fin regímenes de ayuda mutua obligatoria. Es decir que los textos de la Constitución de 1949 y de la reforma de 1957 son perfectamente congruentes en este aspecto.

En consecuencia, el proyecto en consideración va a contramarcha de la obligación, que la Constitución Nacional impone a los legisladores, de promover un proyecto de seguro social integral o acercarnos a ello.

Dice Mc Donald, refiriéndose al sistema de seguridad social argentino, que la diferencia entre el seguro privado y el social consiste en el procedimiento adoptado para obtener los recursos destinados al pago de las prestaciones. Mientras el sistema privado se basa en la capitalización de fondos, el seguro social se apoya en el reparto de una parte del ingreso de la población hacia sus miembros inactivos. Es claro entonces que estamos ante un proyecto que va a

contramarcha del camino hacia el seguro social que nos indica la Constitución.

Un prohombre del justicialismo, fallecido pocos días atrás, a quien el presidente de la República visitara en su lecho de enfermo, eminente constitucionalista, senador de la Nación y constituyente de 1949, como era el doctor Pablo Ramella, decía que era absurdo el sistema jubilatorio tendiente a formar un capital con cuya renta satisfacer las prestaciones, lo que obliga a los patrones y a los presuntos beneficiarios a desembolsar cuantiosas sumas mensuales. Lo lógico es que no se descuente sino la cantidad estrictamente necesaria para satisfacer las prestaciones actuales. Eso se conforma con los principios de la justicia social; y cuando pensamos en el seguro social no suponemos una inmensa acumulación de capitales sino una rápida y eficaz caja distribuidora de lo que día a día se necesita para satisfacer las necesidades de los asegurados. Esto dice el doctor Ramella en su *Derecho constitucional*, página 429 y siguientes.

El proyecto en consideración contradice el precepto constitucional de establecer un seguro social obligatorio; además, dicho proyecto, con la opción establecida en el artículo 29 bis de esta reforma apresurada -de la cual tuvimos conocimiento anoche y que fija la continuidad de un sistema de reparto sujeta a una opción irrevocable por parte del beneficiario-, no se adapta tampoco, ni aun con este régimen y sus modificaciones, al concepto de seguridad social, ya que quiebra los principios de universalidad y de solidaridad, que son esenciales para que podamos encontrarnos frente a un verdadero seguro social como planifica y prevé la Constitución.

Es obvio —como se dijo esta tarde— que quienes tengan mayores ingresos van a emigrar al sistema de capitalización, quedando en el sistema de reparto sólo aquellos de escasa capacidad contributiva, aumentando en definitiva las penurias de estos futuros jubilados.

El proyecto en análisis afecta además el texto constitucional de 1957 en cuanto da una indebida intervención en el manejo del tema de los fondos de jubilación y pensión a entidades privadas. Se contradice expresamente el texto constitucional que pone en cabeza del Estado la obligación de asegurar la asistencia social y establece que deberán ser entidades nacionales o provinciales las que tengan a su cargo la institución de este seguro. Este mandato constitucional es imperativo, y coincide con el de prácticamente todas las Constituciones latinoameri-

canas, con la sola excepción de la Constitución chilena, que autoriza la intervención del sector privado en la administración del sistema previsional. No casualmente el texto constitucional chileno, alineado con su legislación vigente, establece y contempla esta posibilidad de la intervención privada.

En nuestro país quienes pretenden imitar el modelo chileno ni siquiera se tomaron el trabajo de analizar la viabilidad de esta modificación ante el texto vigente de nuestra Constitución.

Tampoco se cumple el mandato constitucional de entregar a los interesados la administración de los fondos reunidos en participación con el Estado. Este principio de participación resulta esencial para garantizar la fiel aplicación de los fondos recaudados.

De ninguna manera puede pretenderse que el Consejo Nacional de Previsión Social que el proyecto establece cumpla este requisito de administración por parte de los interesados con participación del Estado. El Consejo Nacional, por imperativo del artículo 148 del proyecto, tiene sólo funciones vinculadas con la supervisión, la planificación y la sugerencia, pero de ninguna manera tiene una injerencia directa sobre la administración y la aplicación de los fondos que son de los trabajadores y que se destinarán ya sea al sistema de reparto, al sistema de prestación básica universal, al sistema compensatorio y muchísimo menos al sistema de capitalización individual.

En un punto se torna gravísima esta incongruencia entre el proyecto en consideración y el texto constitucional: es el referido a la movilidad de las jubilaciones y pensiones, mandato expresa y taxativamente establecido por el artículo 14 bis de la Constitución. En economías como la argentina, que han sufrido históricamente los embates inflacionarios, la defensa de la intangibilidad de las prestaciones jubilatorias es esencial, ineludible e irrevocable. Ha sido muy triste en la historia de nuestro país la pérdida -a la que tantas veces se hizo referencia- de los capitales acumulados en otros tiempos dentro del sistema estatal. Paralelamente a este sistema estatal rigió en la Argentina durante muchos años un sistema de ahorro de naturaleza privada, que bastante parentesco tiene con lo que se está impulsando a través de este proyecto de ley y que sufrió el mismo proceso de desvalorización.

Cualquiera que tenga algunos años de vida puede recordar -y si no, puede hacerlo a través de sus padres o abuelos- que se pretendía, a través del sistema de capitalización y ahorro o a través de los seguros dotales, garantizar el futuro de su familia y el de sus hijos.

¿A dónde fueron a parar estos fondos administrados por empresas privadas? Se evaporaron por obra de la inflación; no por los hechos difícilmente previsibles, como el "rodrigazo", la ruptura de las tablitas de Martínez de Hoz, la hiperinflación de 1989 y de fines de 1990 y principios de 1991. Se volatilizaron por la inflación normal, pequeña y constante que sufrió la economía argentina en los años 30, 40 y principios de los 50.

En 1957 ya se tenía clara conciencia de cuál era el efecto que iba produciendo el fenómeno inflacionario en los fondos acumulados, y por eso se impuso este principio constitucional de la movilidad de las prestaciones, que por otra parte está recogido con absoluta claridad en las Constituciones de otros países de América latina. No puede pretenderse que el sistema de movilidad en base a la variación del aporte medio previsional pueda satisfacer el requerimiento constitucional, siendo que esta actualización se refiere sola y únicamente a algunos supuestos como los de la prestación básica, la prestación complementaria o, en el caso de la opción, la continuidad del sistema de reparto que impone la reforma recientemente conocida.

La cláusula constitucional requiere que esta actualización se mantenga en línea con las remuneraciones de los jubilados cuando estaban en actividad a fin de que conserven el poder adquisitivo. Y de ninguna manera esto puede hacerse a través de un procedimiento que sólo lejanamente refleja el poder adquisitivo del jubilado y tiende a proteger a las cajas del Estado. Si ese sistema de movilidad es siempre insuficiente, la insuficiencia aparece con mayor razón cuando nos trasladamos al sistema de capitalización individual.

En la Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones del Banco de la Nación se establece una garantía que de alguna manera puede compensar la pérdida de valor de los capitales acumulados, pero sólo durante la etapa de acumulación, ya que desde el momento en que está cumplimentado el proceso de acumulación y el de acceder al beneficio jubilatorio, mediante el sistema de renta vitalicia o cualquiera de los otros sistemas como el retiro programado y fraccionado, esta garantía de intangibilidad del capital podría evaporarse y desaparecer. En el sector privado no existe ninguna garantía de intangibilidad del capital.

Cuando se incorporó la modificación del artículo 39, los propios sectores interesados en operar como administradores de fondos de pensión reconocieron que en los largos plazos era imposible otorgar una garantía de intangibilidad del capital porque iba a estar sometido a los múltiples avatares de una economía con las debilidades estructurales que tiene la nuestra.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara, doctor Hugo Bartolomé Rodríguez Sañudo.

Sr. Marcó. — Un legislador decía ayer que si garantizábamos por treinta años la continuidad del ministro Cavallo, la relación uno a uno entre el peso y el dólar estaría asegurada. Tenemos el deber de evitar que el presidente se ponga celoso; creo que para lograr eso habría que reformar la Constitución suprimiendo cualquier limitación para la reelección a fin de garantizar que durante estos treinta años esta política económica, que no es del ministro Cavallo sino del presidente Menem, se mantenga.

Es imposible mantener el poder adquisitivo del producto del trabajo en un período de veinte o treinta años. Es decir, al violarse el principio de la movilidad, que necesariamente debe entenderse vinculado a la continuidad de la paridad entre los ingresos activos y los pasivos, o entre los ingresos pasivos y los índices de precios, estamos seguramente violando la más importante de las garantías que la Constitución establece para proteger al sector pasivo..

Como es excesivamente larga la lista de oradores, voy a abreviar mi intervención. Quiero resaltar entonces que la contradicción entre el texto propuesto y la normativa constitucional es flagrante y absolutamente imposible de restañar.

No existe compatibilidad entre el proyecto político, de la Constitución y esta iniciativa que se pretende plasmar en ley. Esto no solamente tiene consecuencias teóricas sino que podría tener consecuencias prácticas que resultarían catastróficas para la estabilidad del sistema.

Para compatibilizar todo esto —que evidentemente requiere un cambio sustancial en la concepción del proyecto en análisis— entendemos que habría que girarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que, junto con otras comisiones, pueda sanear los déficit que han existido en la tramitación anterior, a fin de que con el concurso de todos —especialmente de los bloques que han hecho un esfuerzo por consensuar proyectos que sin un ápice de demagogia contemplaban con realismo la situación del sistema y los mejores caminos

respetando en un todo la normativa constitucional— podamos sancionar una norma que los jubilados presentes y futuros requieren, respetando las instituciones de la República. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna.— Señor presidente: voy a hacer una incursión breve en este largo debate, por que me voy a ceñir estrictamente a una cuestión formal y procedimental. En el día de ayer, en una primera intervención del señor presidente del bloque justicialista, se pretendió apartar de cuajo y minimizar el planteo de nulidad del dictamen en consideración. Se lo hizo sobre la base de que el pedido de nulidad encubría una chicana política. Esto no es así.

Entonces quiero concretar específicamente ese planteo de nulidad de este dictamen que está en tratamiento para que conste en el Diario de Sesiones, ya que todos debemos preservar el procedimiento y las formas, sin caer en el ritualismo ni pretendiendo que la política sea encofrada en el procedimiento. Pero si la organización que surge del poder político no cumple con las formas que ella misma se ha dado, será imposible detener la arbitrariedad y el atropello, porque hoy unos pretenden no aplicar el reglamento contra otros. Y quizás mañana otros quieran aplicar a esos unos la arbitrariedad del reglamento.

No cabe duda de que todo poder político pretende ser legítimo; al poder político no le interesa mostrarse como un usurpador o como que forma parte de algo ilegal. Y ese poder político entonces segrega un régimen jurídico, un sistema de derecho. Crea un mecanismo jurídico donde pueda funcionar su organización. Y esa organización para funcionar necesita de las formas, porque el derecho, en definitiva, tiene una propensión hacia las formas, como el pato la tiene hacia el agua. El derecho necesita de las formas como un sistema de garantía para la libertad y la seguridad de los individuos. Esto es válido para los procedimientos administrativo y judicial, pero también lo es para el legislativo, porque esa garantía que constituye las formas funciona para preservar la libertad y la seguridad de los bloques. El procedimiento es una serie de actos encañados o coligados entre sí, en el que cuando uno de los pasos no se cumple caen todos los posteriores. Esto es lo que ha ocurrido con el dictamen que nos ocupa. El segundo párrafo del artículo 92 del reglamento establece cuál es el mecanismo para que un dictamen llegue regular o legítimamente al seno de este recinto.

Ese procedimiento parte de un pase de lista previo para saber si la comisión está funcionando con el quórum debido. A partir de ahí se ponen a disposición de ella los distintos proyectos para que se produzca el debate. Una vez que se produce el debate debe realizarse una votación para determinar cuál es el dictamen de mayoría y cuál el de minoría, luego de lo cual se colocan las firmas en los despachos correspondientes.

Pero ello no ha ocurrido con este dictamen, señor presidente. Los que concurrimos a la cuestionada reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social sabemos que más allá de no haberse pasado lista —fue una omisión involuntaria— había quórum, según lo dice el presidente del bloque justicialista. Pero el señor diputado Matzkin omite decir que los proyectos no se pusieron en consideración, que no hubo debate y que tampoco hubo votación, sino que solamente se procedió a la firma.

Por ende, el procedimiento está viciado de nulidad. Solicito que la Cámara resuelva esta cuestión, ya que la nulidad también se aplica al procedimiento parlamentario. Así lo ha demostrado este cuerpo hace muy poco tiempo, cuando dejó sin efecto la sesión bochornosa del 26 de marzo de 1992, en la que ocurrió el problema del diputado intruso.

Tal como lo decidiera la Corte Suprema de justicia de la Nación, el sistema de las nulidades es válido tanto en el derecho público como en el privado. Así lo estableció en el caso de los lagos, en 1941. De manera que —repito— la nulidad también es válida en materia parlamentaria.

En consecuencia, voy a formular una moción de orden en el sentido de que, atento a esta nulidad absoluta que afecta al dictamen, éste vuelva obligatoriamente a comisión. Pero como no quiero perturbar este debate, solicito que esta moción se vote en el momento de la votación en general del tema en tratamiento. Además, quiero aclarar que no formulo esta moción por un apego al ritualismo ciego ni por entender que la política debe encorsetarse en las formas, sino porque considero que si nosotros mismos no respetamos nuestro propio reglamento ni las formas, quedaremos sumidos en la arbitrariedad y en el atropello, cosa que no deseo para ningún sector de esta Cámara. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. Alvarez García. — Señor presidente: voy a ser breve. Simplemente quiero plantear algunas dudas que creo son compartidas por la mayoría de los argentinos, sin que esto signifique jactancia

de intelectual, como dijo un famoso pensador argentino.

Creo que todos estamos de acuerdo con que es necesario mejorar o modificar el régimen previsional. Inclusive, en 1984 el gobierno del doctor Alfonsín decretó una emergencia previsional, con las lógicas respuestas enojadas, de todos los opositores. Asimismo, en un informe el BID dice que en un buen número de países los servicios de seguridad social han experimentado un gradual deterioro, y habla del caso chileno.

Es imposible analizar este proyecto si no hablamos del caso chileno, puesto que es el único país en el que está vigente un régimen como el que se quiere implantar aquí.

En Chile los trabajadores tenían la opción de permanecer en el sistema público. Además, se incentivó el pase a la órbita privada con un aumento para quienes así lo decidieran. Pero creo que Chile y la Argentina son dos países totalmente diferentes en ese aspecto. Sabemos cuál fue el resultado de la reforma financiera que se produjo en la Argentina, pero no se hizo un estudio sobre cuáles fueron los resultados de la reforma financiera en Chile, si ocurrieron casos como el del BIR, como el del Banco de Los Andes, como el del BIBA, de los Bulgheroni, el del Banco Iguazú, de la familia Figueroa; en los que miles de argentinos quedaron entrampados en virtud de que en estos bancos se volatilizaron sus depósitos.

Evidentemente, somos dos países distintos y es aquí donde se plantean las dudas, no sólo nuestras, sino de millones de argentinos. No se ha hecho un estudio profundo sobre el resultado futuro de este sistema. Se habla de treinta o cuarenta años, pero no hay duda de que se lo hace con poca seriedad. Creo que sólo se piensa en las inquietudes empresariales, y de los banqueros y aseguradores. Sólo se dice que hay importantes fondos y enormes ganancias; pero no se atienden las inquietudes de los aportantes que procuran que se les responda si el país está en condiciones de asegurar la colaboración de las provincias en materia de recaudación privada y control legal para que no haya otro Robert Maxwell, como ocurrió en el país primermundista de Inglaterra, donde miles y miles de aportantes quedaron defraudados.

Nosotros debemos evitar que los argentinos corran ese riesgo. Los norteamericanos dicen que negocios son negocios. Esa puede ser una buena divisa para los banqueros, pero no para los aportantes o los trabajadores. La única divisa para ellos debe ser la protección social, el resguardo de su futuro y el de sus hijos.

7088

Muchas veces se ha aludido en esta Cámara a la máquina de impedir y me considero un miembro asumido de ella, porque creo que el pueblo nos ha elegido para impedir que se sancionen leyes tramposas, mamarrachos de privatización, ampliaciones de la Corte Suprema y privatizaciones como las de Aerolíneas Argentinas o Altos Hornos Zapla. Estamos para impedir eso porque somos la oposición. El pueblo pide porque está descreído de muchas cosas, entre las cuales está el engaño del famoso salarizado jubilatorio.

De allí que expreso que no sólo estoy dando una oposición personal a esta iniciativa, sino que asumo la de miles de jubilados que en este momento están realmente inquietos por su futuro y la de miles de jóvenes que directamente no pueden pensar en esta jubilación porque no tienen trabajo ni pueden conseguirlo, como ocurre en mi provincia, donde hay miles de desempleados de los ingenios azucareros, de las tabacaleras, y de Altos Hornos Zapla.

Por ello reitero que soy miembro declarado de la máquina de impedir, porque eso es lo que el pueblo está esperando, que se lo defienda como lo está haciendo en esta oportunidad la Unión Cívica Radical. (*Aplausos*).

7

MOCION DE ORDEN

Pasa a 7091

8

**SISTEMA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL
(Continuación)**

Sr. Presidente (Pierri). - Prosigue la consideración del dictamen sobre modificación del Sistema Nacional de Previsión Social.

Corresponde que haga uso de la palabra el señor diputado Carlos Alberto Alvarez; pero habida cuenta de que no se halla presente, se continuará con la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: solicito la inserción en el Diario de Sesiones de mi discurso y aprovecho esta oportunidad para convalidar lo expresado hasta el momento por mis compañeros de bancada y lo que dirán hasta que termine la sesión. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bravo. — Señor presidente: honestamente no sé cómo iniciar mi exposición...

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio y que respeten al orador que está haciendo uso de la palabra.

Sr. Bravo. — Decía que honestamente no sabría cómo comenzar mi exposición y tal vez debería hacerlo...

Sr. Carreras. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Bravo. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Carreras. - Señor presidente: simplemente deseaba saber, ya que el oficialismo se negó a tratar el tema del diputado "trucho", por qué no consideramos la reincorporación al cuerpo del ex diputado Luque.

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Presidente (Pierri). Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bravo. - Señor presidente: estaba diciendo que me resultaba bastante difícil encontrar la manera de iniciar mi exposición. No sé si debería referirme a los aspectos técnicos del proyecto de ley que estamos considerando; aunque desconocemos su redacción integral, o si debería referirme una vez más a su nulidad formal. Si lo hiciera desde un punto de vista técnico, no aportaría demasiadas precisiones además de las que formularan diputados opositores que me precedieron en el uso de la palabra y que demostraron todas las falencias que contiene el proyecto. En cambio, si me ocupara de cuestionar el trámite seguido en las comisiones, que oportunamente denunciara, estaría prolongando esta sesión. Convencido de que ambos procedimientos resultarían inútiles para modificar la unívoca postura de los diputados oficialistas, digo que no tengo interés en utilizarlos.

Por otro lado, es sabido lo difícil que resulta hacerse oír en esta Cámara. Ya la Presidencia

pidió silencio en dos o tres oportunidades debido a la permanente conversación que mantienen varios señores diputados poco acostumbrados a escuchar y a atender.

Durante el período en que me vengo desempeñando como diputado, he observado cómo la bancada oficialista le ha dado a las sesiones una particularidad muy especial: la que resulta de aplicar una metodología a la que considero perversa y que consiste en preestablecer la hora de votar. Como consecuencia de ello, hay diputados que se retiran del recinto, dejando a las bancadas reducidas a una mínima representación, para luego retornar y emitir su voto. Este es el mecanismo de la máquina de votar, ese aparato, con el cual se aprueban proyectos y se desvirtúa el rol y la función de los legisladores.

Consciente de ello, pido autorización a la bancada oficialista para tomar prestada una expresión muy cara a su sentir partidario: "Quien quiera oír, que oiga".

Señor presidente: hoy se cumplen 1.390 días de la asunción presidencial del doctor Carlos Saúl Menem. Durante ese tiempo fuimos bombardeados por consignas destinadas a convencernos de lo buena que resultaría la privatización del patrimonio nacional, objetivo que era y es presentado con el pomposo título de "reforma del Estado". Tras esos 1.390 días, sólo tenemos ante nuestros ojos el excelente negocio que hizo el capital monopólico extranjero, asociado con quienes aquí se enriquecieron al amparo de las prebendas que les otorgaba ser parte de la patria contratista y/o de la patria financiera.

Mientras tanto, el pueblo argentino, presunto beneficiario del proyecto privatizador, ve cómo se deterioran los sistemas de salud, de educación, de seguridad, de justicia, de previsión social, en fin, como se deteriora su calidad de vida.

Todos mis colegas recordarán declaraciones de funcionarios del Ejecutivo y disposiciones de esta Honorable Cámara según las cuales el dinero que se obtuviera con estas privatizaciones se destinaría a solucionar paulatinamente los graves problemas que sufren los jubilados, los sectores de la educación, de la salud, etcétera. Pero todos hemos presenciado cómo esos dineros pasaron a constituir el respaldo que el gobierno necesitaba para allanarse a las condiciones que le imponían los acreedores de la malhabida deuda externa; esa misma deuda externa que el actual ministro de Economía, doctor Domingo Felipe Cavallo, engrosó cuando en 1982 presidía el Banco Central y estatizaba la deuda privada.

Continuar con los logros que este doblete constituido por un buen negocio para el capital monopólico y por el sometimiento a los acreedores, es el verdadero objetivo de esta reforma previsional que hoy se nos propone aprobar.

Se nos propone privatizar el sistema previsional argentino y yo le digo rotundamente no a esa propuesta. Mi rechazo está avalado por la voluntad de los ciudadanos y habitantes de esta República que, implícita o explícitamente, están de acuerdo con los hacedores de su propio destino.

Mi rechazo se respalda en las firmas que, superando el millón, han solicitado una consulta popular sobre la cuestión y en las cada vez más numerosas concentraciones de los miércoles, que ya suman 55 y que han venido reclamando a este Congreso. A este Congreso, señor presidente, al que las arbitrarias medidas de seguridad convirtieron en un búnker propio de los regímenes totalitarios, para los cuales nada significa la voz del pueblo ni sus inquietudes ni sus necesidades.

Mi rechazo no ha de sorprender a los señores diputados. En cuanta ocasión tuve, hice pública mi oposición tanto al contenido del proyecto que nos remitiera el Ejecutivo, como el trámite antirreglamentario que se le diera en las comisiones y que impidió el tratamiento y la votación de proyectos alternativos. Pero, tal vez, mis colegas merezcan que les aclare que con la misma fuerza con que me opuse al proyecto inicial, ese al que -según se dice- se le ha introducido un centenar de reformas, ahora me opongo al que se está tratando.

Y me opongo, señor presidente, de la misma manera en que lo hice hace un momento cuando la bancada oficialista y sus aliados con su voto archivaron el dictamen que sancionaba al responsable de que en esta Cámara haya habido un diputado "trucho".

Para que no quepan dudas, reafirmo que el proyecto en consideración difiere sustancialmente del anterior y, por lo tanto, según mi criterio, pesa sobre ambos nulidad reglamentaria.

Para no extenderme más en una exposición de cuyos efectos dudo, solicito al señor presidente que se incluya en el Diario de Sesiones el resto de mi discurso y dejo un poco librada la angustia que me suscita este autoritarismo legislativo a la reflexión de saber qué voy a hacer como diputado en el día de mañana.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Gargiulo. - Señor presidente: el bloque de la democracia cristiana ya ha dejado fijada la posición por intermedio del señor diputado Gatti. De manera que simplemente voy a solicitar la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Algaba. — Señor presidente: si bien voy a solicitar la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones, quiero hacer algunas reflexiones, ya que creo que es una obligación de todos los miembros de esta Cámara expresar una opinión y, sobre todo, fundamentar su voto.

A través de todos estos meses durante los que hemos estado debatiendo el tema, aquellos que no somos especialistas en la materia hemos podido interiorizarnos sobre ciertos aspectos, lo que ahora nos permite expresarnos.

En primer lugar quiero manifestar que este proyecto que viene precedido de un tratamiento totalmente irregular, ya que no se ha puesto en práctica la vocación democrática de consensuarlo con las minorías, no es una iniciativa que genuinamente responda a los intereses del pueblo de la Nación Argentina. Se trata de un proyecto que responde a intereses sectoriales internos y externos, que no son precisamente coincidentes con las necesidades del pueblo argentino. El régimen previsto no va a solucionar el problema de los jubilados actuales ni el de los futuros; por el contrario, constituirá un verdadero problema para aquellos que en un momento determinado puedan depender de este tipo de capitalizaciones ya que en todo el articulado de la ley no se manifiestan garantías reales para las capitalizaciones que allí se ofrecen.

Desde otro punto de vista, es contrario a la filosofía de la Unión Cívica Radical. Tiene un sesgo netamente anticonstitucional y está a contramano del artículo 14 de la Constitución Nacional.

Por estos fundamentos, por los que figuran en el resto de mi discurso y por los que han manifestado y van a manifestar otros miembros de mi bancada es que voy a votar negativamente este proyecto.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. - Señor presidente: la Cámara está considerando un proyecto que obviamente tiene expectante a toda la sociedad argentina. Mantiene expectantes a sectores que tienen intereses contrapuestos y a aquellos que también tienen distintas herramientas para poder llevar adelante una vida con un mínimo de calidad.

Tiene expectantes a los operadores bursátiles y a los lobbies financieros, que obviamente han

estado presentes al menos en el debate periodístico y también en alguno de los pasillos de la Casa de Gobierno.

Los tiene expectantes y sensibilizados. Las subas y las bajas de las acciones están vinculadas con el resultado que pueda tener este proyecto mal llamado de reforma previsional y que bien especificado es la privatización del sistema jubilatorio argentino.

También tiene expectantes a los jubilados y trabajadores argentinos, quienes en el sentido social de la previsión están mucho más desprotegidos. Los tiene expectantes fundamentalmente porque los que ya son jubilados o los que lo serán en el futuro están resolviendo o condenando para siempre sus posibilidades de supervivencia, su salud y su alimentación.

Este proyecto viene precedido de una gran sospecha social respecto a su debate, porque no tuvo un trámite regular, porque se originó en una iniciativa que se presentó como social pero que solapadamente pretendía armar sobre la base del esfuerzo y el futuro de los sectores más desprotegidos del salario un mercado de capitales al cual, como se dijo, no nos oponemos, pero respecto al que creemos que el error del gobierno y del bloque del oficialismo es pretender mezclar la política económica de mercado con la política social.

Podemos ir desgranando las conclusiones a partir de cómo se inicia el tratamiento de este proyecto que se presentó a esta Honorable Cámara con un presidente de la Nación que decía que a esta norma no se le modificaba ni una coma y resolvía el problema previsional.

La realidad nos indica que eso no es cierto. El bloque del oficialismo debió realizar un proceso de travestismo económico con impacto antisocial para poder consensuar aun puertas adentro de su propio bloque, ya que no ha habido otro marco para poder consensuar –lamentablemente– que no fuera el proceso de búsqueda de ese consenso para la acumulación de votos dentro del mismo bloque.

Así es como se fue modificando la iniciativa original y en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en conjunto con la de Previsión y Seguridad Social del 29 de diciembre del año pasado, donde todavía las cuentas no daban para emitir un dictamen favorable, se pidió una prórroga para la búsqueda de consenso. Luego se emite este despacho tan comentado no sólo por los legisladores, sino también por los medios periodísticos y por los restantes sectores sociales y gremiales, que tiene como conclusión el cierre de la posibilidad de encontrar una solución

a la profunda problemática del sistema previsional argentino, circunstancia que nadie desconoce.

Con este trámite y aun después de la sanción de ese dictamen comenzaron a aparecer las dudas de los que daban fundamentos para un intento de discurso con cariz social, dudas sobre si se vetaba o no el artículo 39, que crea la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en el ámbito del Banco de la Nación Argentina, dudas con respecto a si se mantienen o no las cláusulas de garantía para el rendimiento de los depósitos realizados en esta administradora, dudas que hoy subsisten, porque mientras hay diputados del oficialismo que se rasgan las vestiduras diciendo que esto se mantiene, mientras hay diputados que no lograron que el presidente de la Nación explicitara que esto no se vetará, hay otros que en los medios periodísticos de hoy han admitido que no se sabe si el artículo 39 se mantiene y en qué condiciones.

Después cabe comentar lo que ocurrió anoche en este recinto. Se hizo alusión a un conjunto de modificaciones que en definitiva vienen a sacarle la careta de cariz social que tiene este proyecto para intentar venderle a la sociedad lo que se decía era una solución al sistema previsional.

En realidad, se trataba del intento de armar una timba bursátil sobre el esfuerzo de los que menos tienen. Corren con los riesgos quienes integran el sector del salario, mientras que quienes administran los fondos se encargan de la apropiación de la renta y no asumen ningún riesgo.

El sistema se hizo optativo. Si no se producía esta modificación me parece que el proyecto ni siquiera iba a ser aprobado por la bancada del oficialismo. ¿Qué se resuelve con el hecho de que los aportes sean optativos? Entendemos que con la introducción de la opción en el sistema se profundiza el déficit del sistema estatal.

En este sentido, estuvimos preguntando qué se iba a hacer para financiar los tres mil millones de dólares originarios que se quitaban al sistema por la eliminación de una de sus tres patas de financiamiento. Nadie contestó a esta pregunta. Si bien así se profundiza el déficit, también reconocemos que se atenúa porque necesariamente van a quedar en el sistema estatal los sectores de menores salarios de la Argentina; los otros, indudablemente, van a pasar a la capitalización privada.

Nadie dice cómo se va a financiar ése déficit. ¿Acaso se está asumiendo de hecho que el desfinanciamiento del sistema previsional estatal, al que están anclados los jubilados actuales, queda condenado a la imposibilidad de solucionarse, lo

que también ha asumido el conjunto de esta Cámara? Aun con posiciones tomadas, es un problema que debe solucionarse.

También se han planteado modificaciones que están destinadas, según se dice, a que las inversiones se dirijan a las economías regionales. Es inviable y tragicómico que esta iniciativa se use como fundamento para apoyar las economías regionales, dado que este programa económico se ha caracterizado principalmente por devastar el conjunto de las economías regionales de la Argentina. Esto no es lo que dice este legislador de la oposición o de la mal llamada máquina de impedir, sino que se ha manifestado en este recinto cuando hemos coincidido en la necesidad de sancionar proyectos de declaración destinados a frenar un poco este proceso de devastación de las economías regionales, que se expresa en el tabaco, en el azúcar, en la promoción industrial, en la venta de Yacimientos Carboníferos Fiscales y en la venta de YPF. En esto hemos coincidido en el pasado, y ahora me parece que solapadamente se está obviando, aun en muchos colegas de la oposición, en la toma de posición con respecto a este proyecto.

¿Cómo se va a financiar la inversión en las economías regionales? Sólo se puede direccionar el crédito del Banco Nación, porque cuando se dice que se aumenta el porcentaje destinado a las economías regionales, me pregunto qué calificadora de riesgos va a aceptar que los recursos de la administradora de fondos de jubilaciones y pensiones vayan a las economías regionales, que necesitan créditos blandos para poder desarrollarse.

También se introducen modificaciones al sistema impositivo argentino, que anoche no entendíamos. Hoy, en el marco de la celeridad de esta sesión, las hemos analizado, llegando a la conclusión de que tornan mucho más regresivo el sistema tributario argentino, porque se disminuyen las escalas de imposición del impuesto a las ganancias, favoreciendo a los sectores que tienen mayor renta mediante la deducción que se establece.

Entonces, este conjunto de modificaciones no mejora —por el contrario, agrava— el actual estado del sistema previsional argentino. No se lo va a hacer a menos que se cambie la propuesta formulada por el oficialismo. Incluso, si ello se instrumentara, se lo haría a riesgo del financiamiento futuro del Tesoro nacional, porque el Banco de la Nación Argentina no es más que el agente financiero del Estado nacional en el tema de las economías regionales. Pero si se profundiza la regresividad del sistema tributario, ¿para qué sirven las modificaciones? Yo creo que

estas modificaciones sirven para que los propios legisladores del oficialismo traten de no seguir encontrando fundamentos en sus convicciones para votar en contra de esta iniciativa.

Considero que a esta altura de las circunstancias se ha defraudado ya hasta el maquiavélico objetivo original de este proyecto que era crear un mercado de capitales. Además, tampoco se resuelve el problema del sistema previsional.

Teniendo en cuenta la extensión de la lista de oradores, deseo puntualizar que es necesario que asumamos la responsabilidad de encontrar las soluciones que requiere el sistema previsional estatal. Porque no es cierto que ese sistema no funciona; tiene vicios que deben corregirse y que se originaron en las sucesivas irresponsabilidades políticas de algunos gobiernos, democráticos algunos y antidemocráticos otros. Pero en modo alguno se puede convertir al sistema previsional argentino buscando profundizar el camino hacia una sociedad que se torna cada día más individualista. Por el contrario, nosotros tenemos la convicción de que los problemas no se resuelven con políticas de mercado sino profundizando la solidaridad. También entendemos que es necesario aplicar un mecanismo de proporcionalidad entre el aporte y la retribución de la jubilación, pero ello debe hacerse en el marco de la Constitución, la solidaridad y la responsabilidad, presentando un proyecto que realmente atienda el problema de los jubilados y no el objetivo originario de este proyecto.

Para finalizar quiero plantear que desconfiamos del oficialismo por el proceso que se ha seguido en la consideración de esta norma, por los antecedentes que existen en esta Cámara del "diputrucho" y las expresiones de algunos colegas durante la consideración del proyecto de ley sobre marco regulatorio para la privatización de YPF, cuando hubo claras denuncias de señores diputados de la Nación respecto de supuestos cohechos de algunos legisladores.

Además, en este marco todavía no ha sido disipada la duda en relación con el posible veto de determinadas disposiciones de esa norma.

Desconfiamos del oficialismo por la aplicación de los decretos, de necesidad y urgencia que terminan desvirtuando el espíritu de las leyes que sanciona este Parlamento.

En estos términos, planteada la desconfianza no como una falta de respeto sino en función de datos de la realidad, llamamos a la reflexión para que este proyecto vuelva a comisión. Allí

podrá encararse en serio la solución del problema previsional para que cuando éste se resuelva nos permita hacer un ahorro, y entonces sí podremos discutir la necesidad de crear un sistema de capitales, pero no a expensas de los sectores asalariados.

Los llamamos a la reflexión para no tener que crear el pensamiento del gran político inglés Bedjam, ese tratadista experto en la técnica del sofisma político -aquello que pretenden cambiar con la palabra lo que no se puede hacer en los hechos-, quien sostuvo que "cuando no se puede pasar por entero la legislación que se desea, hay que hacerlo por partes". Quizá después llegará la desvirtuación por la vía de decretos. Para que esto no sea así, para que podamos confiar en que esto no va a seguir siendo así, llamo a la reflexión al oficialismo para que el proyecto vuelva a comisión. Si así no se procediera, adelanto mi voto negativo, sin delegar en modo alguno la responsabilidad de conjunto de resolver el problema de las jubilaciones en la Argentina. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierni). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Seguí.— Señor presidente: voy a hacer algunas reflexiones para demostrar más o menos el terreno en el que se van a desenvolver gran parte de las inversiones de los trabajadores de hoy, jubilados del mañana.

Reconozco la necesidad de contar con vigorosos mercados de capitales; los países líderes del mundo tienen desarrollados fuertes mercados de capitales, pero la concurrencia a ellos es libre y no compulsiva ni semicompulsiva, como se está proyectando en esta norma que estamos debatiendo.

Es importante señalar que la inversión bursátil - como se la prevé en el proyecto- implica un serio riesgo: riesgo que hubiera sido necesario que fuera cubierto por alguien, pero es obvio que no lo quieren afrontar quiénes van a hacer de esto el más importante negocio.

En una publicación de la Fundación Mediterránea de septiembre de 1992 se reconoce que éste es un sistema de alto riesgo. Allí se dice que el "proyecto pretende estimular la diversidad de opciones en la composición de la cartera del fondo, minimizando así el riesgo asociado. A tal efecto, se prevé el establecimiento de un amplio menú de alternativas de inversión, y la fijación de porcentajes máximos a la colocación en un único activo. En general, los porcentajes más altos corresponden a los activos que en principio aparecen como de menor riesgo. La diversidad de

opciones, además de minimizar riesgo, pretende evitar posibles presiones sobre los mercados de activos financieros, dada la magnitud de los fondos que se canalizarán hacia ellos."

Es decir que en el pensamiento de quienes inspiraron este proyecto de ley estuvo impregnado siempre el principio de que los fondos aportados por los trabajadores de hoy, jubilados de mañana, irían a un campo de alto riesgo; y ese campo de alto riesgo es nada más ni nada menos que los mercados bursátiles, necesarios —vuelvo a repetir— cuando a ellos se accede libremente para buscar una especulación financiera, pero no en forma forzada.

Maggie Fox, especialista en temas financieros, en un trabajo publicado el año pasado sobre el mercado de capitales de Londres, dijo lo siguiente: "El espíritu de libre mercado impulsado durante el gobierno de la ex primera ministra Margaret Thatcher está cediendo paso gradualmente a un estilo más intervencionista y estricto. Cada nuevo escándalo provoca renovados llamamientos en favor de la reforma del sistema, a pesar de que tiene sólo cuatro años de antigüedad.

"El escándalo de Maxwell ha motivado reformas en la Organización Regulatoria de Administración de Inversiones, un organismo que concedió licencia a tres firmas de Maxwell, dos de las cuales manejaban fondos de jubilación. Los planes de jubilación de Maxwell fueron saqueados antes de su muerte." Ciento ochenta mil inversores quedaron en la calle.

La cuestión figuró nuevamente en los comentarios del mundo financiero de Londres, cuando nada menos que Mick Newmarch, el principal ejecutivo del grupo de seguro Prudential, propuso que el sistema británico de autorregulación fuera sustituido por un régimen obligatorio conducido por el gobierno.

En los Estados Unidos de América, en Wall Street, el índice *Dow Jones* se multiplicó por tres. Hubo una verdadera explosión de las finanzas en el régimen reaganiano, que parece que estamos copiando como un calco. Fue el triunfo de las finanzas sobre las industrias. Allí aparecieron las grandes estrellas del mundo financiero. Vamos a mencionar algunas de ellas, Michael Milken, el rey de los *junk bonds*, los bonos basura, ahora en prisión con una condena de 10 años y una gran cantidad de inversores defraudados. Ivan Boesky, árbitro de la filial Rolls Royce en Estados Unidos, ahora condenado a tres años de prisión y 100 millones de dólares de multa. Donald Trump, que construyó un imperio financiado por los *junk bonds*, el cual está

cayendo estrepitosamente día a día. Carl Icahn, que manipuló las acciones de la TWA -una compañía aérea de los Estados Unidos-, terminó posesionándose de ella y luego la desmanteló haciendo un pingüe negocio que dejó en la calle a los fondos mutuales de inversión. Muchos inversores pagaron con su ruina lo que hizo este mafioso en el hampa de Wall Street.

En esos mercados bursátiles se señala habitualmente que las ganancias están más dadas por las plusvalías que se obtienen con las sumas en la cotización de las acciones que por los verdaderos ingresos que generan las empresas que cotizan en bolsa. Hoy los valores de las acciones están muy por encima de lo que valen las empresas.

Sobre Japón un reciente visitante de nuestro país, Donald L. Calvin, en una conferencia que dictó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, dijo: "Las recientes noticias provenientes del Japón hablan de un proceso recesivo. Si bien las casas de bolsa..." las administra-doras— "...dieron ganancias de más de un billón de dólares cada una en 1990, la situación dio un vuelco en 1991.

"De todas las principales compañías japonesas sólo una no reportó pérdidas en el año fiscal que finalizó el 31 de marzo, y la Bolsa de Tokyo lleva perdidos 9 millones de yenes en 1992.

"Todo esto se debe, básicamente, a que la 'burbuja económica' explotó. Las acciones habían subido mucho, pero los bienes raíces y el capital eran baratos. Hace dos años el Banco de Japón comenzó un programa para aumentar las tasas de interés, lo que ha provocado que se rompa un ciclo en la 'burbuja' de crecimiento bursátil."

Este fenómeno también se da en Chile. Hernán Büchi, inspirador de los fondos privados de inversión en Chile, se manifestó preocupado por el tema de la inflación. Señaló que en la reforma previsional argentina hay que cuidar este tema y que, aunque es cierto que se ha hecho un tremendo esfuerzo por la estabilidad económica, desde que se estableció la convertibilidad hasta la fecha hemos tenido una inflación del 23 por ciento. Mirada desde adentro ésta es una tasa pequeña de inflación. Pero señaló que es una inflación en dólares. Entre los años 1980 y 1992 los Estados Unidos de América tuvieron una inflación del 21 por ciento en dólares. Esto es lo que hace que Hernán Büchi, refiriéndose a nuestro proyecto, manifieste: "No sé si están confiando para siempre en la convertibilidad, pero me parece que en la reforma previsional hay que cuidar este tema porque he visto que el sistema de fondos de pensión no está exento de ser expropiado por la inflación". Naturalmente, se muestra favorable a dar solución a la crisis del sistema estatal de jubilación a través de los

fondos privados de pensión. Pero dijo que el sistema tendría que prever alguna defensa contra la inflación, y este proyecto no prevé absolutamente ninguna defensa contra ella.

El mercado de valores de nuestro país también ha sufrido estrepitosas subas y bajas. Por ejemplo, en noviembre de 1991 el índice Merval fue 840; en diciembre de 1992 cerró a 360. El índice general, que en noviembre de 1991 fue de 1.500, en octubre de 1992 llegó a 2.500 y en diciembre de ese año bajó a 1200. Y qué decir de las acciones telefónicas. Por ejemplo, Telefónica de Argentina en mayo de 1992 cotizó a 4,70, y en diciembre de ese mismo año a 1,50. Quedó el tendal de perdedores; hoy hubieran sido perdedores los fondos de las administradoras de pensión. En mayo de 1992 Telecom marcaba en pizarra 4,50, y en diciembre, con una disminución de aproximadamente el 50 por ciento; se ubicó en 2,20,

Esta caída de la bolsa ha sido analizada como realmente estrepitosa, aunque no conocemos con exactitud su dimensión. Era una irrealidad; habíamos hecho una publicidad en el sentido de que venían capitales del mundo a invertir, pero eran capitales pasajeros, "golondrina". Como vinieron se fueron, pero provocaron una pérdida espectacular. Voy a señalar algunas cifras que se relacionan con lo que sucedió.

Antes del "desplume" la Bolsa alcanzó un volumen de 35.000 millones de dólares, pero luego bajó a 14.000 millones de la misma moneda, lo que equivale —dicho esto por financistas que estudiaron el sistema— al total de las inversiones brutas del país en un año, a una cantidad mayor que la exportación anual y al 10 por ciento del producto bruto interno. Y qué fue esto? Esto no fue, como dijo el señor Martín Redrado en el diario "Clarín" del 16 de agosto de 1992, el "efecto Perot", sino que obedeció a que se operó irresponsable y enloquecidamente: se otorgaron préstamos en los bancos para comprar acciones, se operó de pase y de caución, pero luego salieron a decir que la bolsa es así, que unos ganan y otros pierden.

Me pregunto en qué lugar van a estar los fondos de pensión, porque quienes los administren siempre van a ganar la comisión, el problema lo ten-

drán los titulares de esos valores. A través de ese mundo va a transitar gran parte de la inversión de los trabajadores argentinos, que serán los jubilados del mañana. Por ello, solicito que reflexionemos un poco más acerca de este tema y lo analicemos con mayor tranquilidad. No nos dejemos llevar apresuradamente por los que esperan con los brazos abiertos una gran afluencia de capitales al mercado. Los que se están preparando para esa afluencia que va a hacer subir estrepitosamente los valores que se cotizan en bolsa, los harán bajar de la misma manera. Es importante que analicemos cómo invierten los chilenos, que se están alejando del sistema de inversión en bolsa para volcarla sobre los bancos y letras hipotecarias porque no quieren correr estos riesgos.

El radicalismo no ha sido una máquina de impedir sino, en definitiva, una máquina de reflexionar y valorar la labor del legislador. (*Aplausos*).

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. Rodrigo. — Señor presidente: todos los que de alguna manera fuimos siguiendo el proceso de esta iniciativa que hoy estamos tratando, podernos dar testimonio -a esta altura toda la sociedad puede ser testigo- de que desde que el gobierno propuso la reforma previsional se alzaron muchas voces coincidentes -creo que todas- que señalaban que sólo se podía conseguir un régimen de seguridad social como fruto de un acuerdo político y social. Y esas voces venían del oficialismo, del gobierno, de la oposición y de los distintos sectores sociales. En muchos casos aparecieron en estos últimos los primeros nubarrones y esas voces ya venían con un tono de súplica.

Es más, nuestro miembro informante ya señaló con bastante claridad lo que fue esa mesa de diálogo político convocada por el gobierno hacia fines del año pasado. Se lograron importantes coincidencias en esta comisión específica encargada de llevar a cabo la reforma de la seguridad social. Estas coincidencias se expresaban muy claramente y lo decíamos con algún grado de satisfacción.

Estamos convencidos de que, un año atrás, la premisa del consenso era la verdadera vocación del gobierno. Si alguna sospecha podía haber — que podría ser lógica frente a los antecedentes de la oposición en la Argentina— debía partir del gobierno hacia la oposición, que en nombre de las coincidencias podría estar ocultando actitudes obstruccionistas. Podemos citar como antecedentes algunos gobiernos que llevaron

adelante propuestas que fueron negadas y hasta boicoteadas cuando a sus miembros les tocó desempeñar la responsabilidad de la oposición. Sin embargo, para esta oportunidad —y frente a lo que estamos comentando de lo que fue ese diálogo político— valía la pena, y mucho, un acta de fe porque había un hecho nuevo.

Estos acuerdos que se estaban logrando en la mesa del diálogo político no fueron conformados por dirigentes que jugaban con cartas marcadas sino, que todo salía a la luz del día y eran expresiones claras, sin ambages, que venían de los dos lados del mostrador: tanto del oficialismo como de la oposición.

Yo tengo memoria y alguna experiencia de lo que ha sucedido cuando la oposición pagó costos políticos junto con el gobierno, cosa que se da habitualmente en administraciones de Estados más chicos como las provincias. Lo que no conocía —o, por lo menos, no estaba registrado en mis libros— era que con tanta antelación la oposición pudiera comenzar a pagar costos políticos a cuenta de lo que podría venir. Nosotros no dudamos en anticipar nuestras posiciones al explicar, por ejemplo, que íbamos a aumentar la edad de retiro. Se imaginan lo que era para nosotros, opositores, llegar a nuestros pueblos un año antes, de tratarse el proyecto en este recinto para decirle a esa franja de trabajadores que ya tenían cercana y programada su jubilación, que se les iba a modificar la edad de retiro y que nosotros íbamos a votar esa modificación junto al oficialismo.

Teníamos que explicar todo lo referido al incremento de la expectativa de vida y a la disminución de la pirámide poblacional. Es decir, teníamos que dar una serie de explicaciones. Pero los que tenían armada su jubilación difícilmente nos entenderían.

También decíamos que íbamos a votar junto con el oficialismo para que se determinara el cálculo del haber jubilatorio de una manera distinta, a fin de que fuera más equitativa y más justa; que no se tomaran los últimos años y que sí se tomara una especie de haber técnico en función de los aportes realizados.

A su vez decíamos que a través de una ley muy rigurosa íbamos a impedir el aflojamiento de las exigencias para el otorgamiento de las jubilaciones por invalidez, las de oficio y las jubilaciones casi sin aportes previos, como ocurrió en el caso de los autónomos. Asimismo sosteníamos que íbamos a impedir que se utilizara el sistema para la promoción de actividades artísticas, culturales, científicas. Decíamos que daríamos herramientas muy rigurosas para el control y para la recaudación.

Todo esto está volcado en la propuesta que hizo la Unión Cívica Radical y en las de distintos partidos o diputados en forma individual.

Quiere decir que íbamos a poner toda la fuerza de la oposición convencida y dispuesta a acompañar al gobierno en el intento de despojar a este sistema, que tanto éxito tiene en el mundo, de todos los vicios y de todas las iniquidades que impiden alcanzarlo en la Argentina y convertirlo en la mejor herramienta de integración que existe en el país.

La sanción de una ley en estos términos, con semejante contenido social, utilizando todos los cañones del oficialismo y de la oposición, volteando facilismos que desvirtúan el sistema, además de lograr un objetivo que se está buscando desde hace mucho tiempo se convertiría de esta manera en una plataforma para una nueva cultura argentina capaz de resolver los grandes problemas nacionales.

Luego vinieron las dificultades. El gobierno se aferraba a una propuesta que nosotros habíamos desechado desde el comienzo. Pero nuevamente nos sentimos alentados cuando a fines del año pasado las autoridades de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y hacienda nos propusieron una tregua, procurando el logro de esa coincidencia a fin de que la ley - además de la legalidad que seguramente tendrá ahora- tuviera la legitimidad que solamente otorga el consenso.

Tiempo después nos encontramos con que esto ya no era posible y esta diferencia evidentemente llevó a la existencia de dos proyectos: uno que pretendía producir -como lo habíamos marcado antes- una profunda transformación en el sistema de la seguridad social, que debe seguir basándose en el principio fundamental de la solidaridad, y otro —que fue rechazado por los organismos rectores en materia de seguridad social— cuyo objetivo era reactivar un mercado de capitales y, en nombre de la seguridad social, obtener una fuente de ahorro para financiar inversiones, reconversiones, déficit fiscales, etcétera.

Estos regímenes financieros de ahorro individual capitalizado se convirtieron en un condicionante, como en todo proyecto inspirado desde afuera.

Y este proyecto fue el que de alguna manera llevó al embajador de los Estados Unidos a saludar la reforma que se estaba implementando en el Estado porque estaba alentada por lo que se dio en llamar la Iniciativa para las Américas, propuesta por el ex presidente Bush para toda Latinoamérica.

Pero éste no ha sido el único condicionante, ya que empezaron las presiones que han sido alentadas, incluso en el ámbito de las comisiones,

por aquellos intereses poderosos vinculados a la patria financiera que de ninguna manera han desaparecido. Es justo reconocer acciones positivas del gobierno frente a algunos embates de la patria financiera; pero equivocados están los que piensan que ha desaparecido. En estos últimos días hemos notado que ha estado agazapada, porque apenas los diputados justicialistas hicieron pública una propuesta que podía afectar sus programas de ganancias, la patria financiera pegó el grito porque no quería que se le modificara ni una sola coma a dicho programa de ganancias. Me estoy refiriendo a la famosa modificación del artículo 39, que si bien no altera demasiado, sí modifica las ganancias de estos sectores.

La desesperación los llevó a reclamar al gobierno que sancionara un decreto, porque según dicen "es preferible un buen decreto a una mala ley". Los defensores de la patria financiera siguieron gritando; hay declaraciones de los banqueros que sostenían que la modificación del artículo 39 propuesta por el peronismo elimina las posibilidades del negocio en escala. Utilizaron esta expresión para amortiguar ese duro golpe al núcleo del predicado que es el negocio. Se estaba hablando del sistema previsional y de la seguridad social, pero aquí se mostraba el negocio, y además lo querían hacer de una manera amortiguada, como acabo de señalar. También sostenían que esto dejaba en manos de cuatro o cinco funcionarios la decisión de las inversiones, como si esto fuera un pecado. ¿Cómo se le va a ocurrir al Estado orientar las inversiones? Esto, con un tono de amenaza, puede desembocar en conductas especulativas. Cuando el Estado interviene y orienta a los poderosos de las finanzas, todo se convierte en acciones especulativas.

Estamos tratando un proyecto que, como se ha dicho, contempla compromisos que vienen de afuera, creando no solamente para la Argentina sino para América un mercado de capitales con parte del salario de los trabajadores, para satisfacer las apetencias de estos grupos económicos concentrados que manejan las finanzas. Se excluye, pese a la opinión de algún señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, a los actuales jubilados y se los condena a enterrar sus expectativas de mejores condiciones de vida. Y esto es así porque con la sanción de este proyecto de ley se sacará del sistema el aporte que

hasta ahora han venido realizando los trabajadores, muchos de los cuales quedarán en la incertidumbre.

Habría que releer las expresiones del señor diputado Seguí para darnos cuenta de que si del 10 por ciento que aportan los trabajadores, las financieras se van a manotear un 30 por ciento, difícilmente a un trabajador que haya aportado durante 50 años le va a alcanzar su renta por mucho tiempo si no es mayor del 80 por ciento de lo que estaba cobrando al cese de su actividad. Se excluye y se deja sin norma legal a una legión de trabajadores que son los rurales, quienes están incluidos en lo que hoy se ha dado en llamar un convenio de corresponsabilidad, que no cuenta con el aporte del trabajador ni con la contribución patronal y que se financia con impuestos específicos aplicados al agro. De sancionarse este proyecto de ley, les tendremos que decir a esos trabajadores que ese convenio no rige más y que van a tener que empezar a aportar, aunque no surja con claridad cómo deberán hacerlo.

Tampoco se ha explicado cómo se van a implementar los convenios de reciprocidad que existen con las cajas que continúan con el sistema de reparto como base ni qué va a pasar con las cajas provinciales.

Podría señalar otras dudas como las que ha mencionado el señor diputado Ceballos y que posiblemente en lo que resta del debate tendrán alguna aclaración. Pese a todo soy un integrante más de este Parlamento que va a batir un récord: va a ser el primer Parlamento del mundo que va a votar un sistema compulsivo o semicompulsivo de capitalización individual conformado con una parte del salario de los trabajadores. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. Koth. — Señor presidente: hace un año y medio que he llegado a este Parlamento arrastrando muchas ilusiones. Decía en mi provincia que iba a llegar al Parlamento nacional, que es una de las células de la democracia, el templo de la democracia.

Creí que los 257 diputados éramos los representantes de los 33 millones de habitantes de esta querida Nación Argentina. Pero estaba equivocado; en esta instancia no somos los representantes de los 33 millones de habitantes de nuestro país, porque han existido un millón de firmas y les hemos dicho que no.

Ni siquiera hemos intentado ver qué se podía hacer con esto. A lo mejor estoy equivocado, señor presidente, pero creo que es más fuerte un grupo de aseguradores de bancos que ese millón de firmas que ha llegado a este Parlamento para

que nosotros, los diputados, estudiemos y sancionemos una ley previsional para los próximos treinta años.

Ayer, cuando se empezó a debatir el tema, se dijo que ya hubo más de cien reformas al articulado de este proyecto; posteriormente, a la madrugada, llegaron más reformas, y en el día de hoy nos enteramos de otras.

Se dice, por ejemplo, que tendremos capitales para las economías regionales, las que realmente están atravesando una situación bastante difícil. En este sentido voy a citar lo que ocurre en mi provincia: en la ciudad de Posadas, que tiene doscientos mil habitantes, desde el año 1991 hasta la fecha se han cerrado 4.850 negocios. Además, en el día de hoy me he enterado por medio de la prensa de que el señor ministro de Economía dijo que también se retiraría del sistema el Banco de la Nación Argentina.

Por eso, soy muy escéptico cuando escucho decir que con este proyecto se va a ayudar a las economías regionales. ¿Quién va otorgar créditos a dichas economías, en las que los obreros actualmente no tienen trabajo? Están desapareciendo las papeleras, la industria yerbatera, la celulósica, etcétera. Por ello -repito- soy escéptico en el sentido de que con esta reforma previsional se pueda ayudar a las economías regionales.

Creo que los diputados tenemos que reflexionar y pensar en nuestras respectivas provincias y no en nuestros partidos políticos. En mi provincia la gente me preguntaba si era cierto que hubo "apriete" para conseguir el quórum y poder iniciar el debate de esta ley, a lo que yo respondí que no creía que eso fuera cierto. Personalmente, no creo que en el Parlamento argentino ocurran estas cosas.

Por eso ruego a los señores diputados que reflexionemos, que aprobemos la vuelta a comisión de esta iniciativa y que consensuemos entre todos una ley para los próximos treinta años, o quizás más.

¡Qué lindo hubiera sido que hoy nuestro Parlamento se hubiera engalanado con la presencia de los jubilados en los palcos bandejal, pero están ausentes. ¿Por qué? ¿Acaso tenemos miedo de que los jubilados estén presentes y nos digan algo? ¿No estamos haciendo para ellos esta ley?

Una vez más llamo a la reflexión a mis pares para que votemos una ley acorde con las necesidades del pueblo argentino. Sé que se hicieron muchas cosas y que esto se ha hecho con mucha habilidad. Se ha traído a figuras mundiales para hacer propaganda; a algunos se les pagó con

dólares, a otros se les concedió la Orden de Mayo.

Por eso, señores diputados, soy escéptico acerca de que esta ley sirva para treinta años y por lo tanto voy a votar en contra. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Raimundi. — Señor presidente: creo que estamos próximos a que las cartas estén definitivamente echadas, de manera que haré uso de la palabra sin ningún tipo de especulación política y con la mano en el corazón, porque en los tres años y pico que tengo como legislador nacional esta es mi segunda noche triste.

La primera fue cuando se consideró el aumento de integrantes de la Corte Suprema, porque percibí que se eliminaba la principal garantía de imparcialidad jurídica que debe guardar el Poder Judicial y que es propia del sistema republicano. La segunda será seguramente esta noche, porque puede llegar a coronarse un modelo que junto con la transferencia de los recursos energéticos del país termine de cerrar un traspaso de ingresos realmente extraordinario hacia los sectores más concentrados del poder económico.

Ese era el sentido de lo que hemos tratado de impedir. No queríamos impedir por haraganería sino que pensábamos que el proyecto que nos ocupa defiende determinados intereses que no son precisamente los de los sectores sociales que han votado por los partidos mayoritarios.

Por eso quiero despejar en primer lugar ese interrogante. No es que de un lado esté la máquina burocrática de impedir sino que del otro lado está la máquina autoritaria de imponer, porque cuando el bloque mayoritario tuvo que impedir, también lo hizo; se postergaron cuartos intermedios, se levantaron de sus bancas algunos legisladores para que no hubiera quórum, etcétera, es decir, todo lo necesario para llegar a imponer esa mayoría parlamentaria que le puede dar legalidad formal al proyecto pero que no cubrirá las expectativas vinculadas a su legitimidad moral.

Se ha dicho que debemos dejar de perder tiempo en lo accesorio para discutir lo principal. Reitero que todos los mecanismos que permite el reglamento, todas las situaciones legislativas que se vivieron y que se podrán seguir viviendo hasta la culminación de esta sesión, todos los pedidos de vuelta a comisión, mociones de orden o cuestiones de privilegio han tenido como objetivo no precisamente privilegiar lo accesorio sino impedir que se sancione lo principal, que son los efectos económicos y políticos que tendrá a partir del mediano plazo la iniciativa que se apruebe.

Los objetivos que encierra un proyecto no dependen únicamente de su contenido o de las intervenciones de los legisladores para asumir su defensa sino del marco conceptual y político en el que se esté desarrollando el debate.

No nos podemos desligar del hecho de que no sólo lo económico está guiado por la ideología de mercado. Lamentablemente, hora tras hora y minuto tras minuto me confirman que la propia política desarrollada por el oficialismo está impregnada por la ideología del mercado. Por definición, un mercado es un espacio donde se compra y se vende y donde no importan los principios sino la capacidad de acumular fuerza a cualquier precio. Así se llega a un recinto para imponer la fuerza acumulada, donde no es necesario escucharse ni estar abierto para convencer o ser convencido. Sólo se trata de utilizar el espacio de la política para imponer un criterio sobre la base de haber acumulado fuerzas en defensa de determinados intereses.

El propio procedimiento de esta Cámara confirma lo que he expresado. Aquí no importó que lo que ocurrió anoche fue un papelón. Por ejemplo, se hicieron circular fotocopias que ni siquiera tenían el texto definitivo de las reformas que se proponían, se habló en tiempos verbales potenciales y se derivaron explicaciones a las exposiciones que luego harían otros legisladores durante el debate. Así se iban creando sobre la marcha los argumentos para defender el proyecto que se estaba improvisando.

Todo ese mecanismo justificaba plenamente los fundamentos de quienes solicitábamos que el proyecto fuese girado nuevamente a comisión; cuando se tiene tal grado de incertidumbre sobre el texto definitivo de un proyecto y cuando se le introducen modificaciones que sus propios defensores califican como sustanciales, a partir de un proceso que se había iniciado en las últimas horas, queda justificado que el mecanismo a utilizarse es el ámbito en el que las iniciativas pueden debatirse a fondo, donde se pueden dilucidar con los sectores involucrados y donde se puede invitar a debatir a los propios autores. Ese ámbito, precisamente, es la comisión respectiva y no este recinto, que improvisadamente y de hecho se ha constituido en comisión.

Aquí no importa si los argumentos son mejores de un lado o de otro. Aquí no importan los principios, a pesar de que un legislador preopinante dijo que seguía legislando sobre la base

de la convicción y de los principios. Sinceramente, no le creo. No puede ser que un legislador o un puñado de ellos, que responden a un determinado sector político y que sostienen una cantidad de principios antes de hablar con un ministro o con un secretario de la Presidencia, luego sostienen principios completamente distintos cuando salen de la reunión con esos funcionarios. (*Aplausos.*)

Seguramente, aquí no están jugando tanto los principios sino algún otro tipo de interés económico o de transacción, por no utilizar otras palabras más duras; no quiero correr el riesgo de usarlas ya que no tengo pruebas jurídicas para sostenerlas, aunque aquí no se trata de las pruebas jurídicas sino de la demostración política y de la ilegitimidad moral que tiene todo un proceso al cabo del cual se puede llegar a aprobar este proyecto.

La tergiversación de la verdad y la falsedad con las que se han argumentado las bases de esta iniciativa también forman parte de un concepto muy amplio de corrupción. No podemos detenernos en la frialdad de introducir un discurso en un Diario de Sesiones sin sacarnos de adentro lo que realmente sentimos.

Sólo faltan pocas horas para que venza el plazo para tratar un hecho delictivo en el que está íntimamente involucrada esta Cámara; no toda ella porque no todos tenemos la misma responsabilidad aunque sí la Cámara como cuerpo legislativo que está brindando una imagen a la sociedad. Sin embargo, se está impidiendo tratar definitivamente el problema, suscitado un año atrás, del diputado fraudulento, con tal de aprobar este proyecto de ley en el que se están jugando muchos intereses económicos muy fuertes.

Si esta iniciativa se sanciona no tendrá la legitimidad que se reclama porque, como ya se ha señalado insistentemente, se trata de un tema que tendrá vigencia por lo menos en los próximos 50 años en nuestro país. No se puede improvisar un sistema jubilatorio y cambiarlo en muy poco tiempo. Un proyecto que debe tener vigencia por semejante cantidad de tiempo y que es de tal envergadura que involucra nada menos que los intereses del conjunto de la población económicamente activa de un país, tiene dos alternativas para convertirse en un proyecto legítimo. Tal legitimidad se logra por el consenso de las mayorías populares en el ámbito natural del Parlamento, y si ello no es posible, debe derivarse el logro del consenso al debate popular sobre los alcances de ese proyecto. Ni una cosa ni la otra fueron permitidas por el bloque oficialista porque la

aprobación resulta más sencilla cuanto más cerrados son los ámbitos de debate. Cuanto más cerrado es el debate mayor es la posibilidad de imponer una mayoría numérica sin atender a la legitimidad y la veracidad de los argumentos.

Aquí se ha expresado que se trata de un régimen integrado por un sistema de capitalización individual y por uno de reparto solidario. Queremos hacer hincapié en esto porque no es una capitalización a secas por un lado ni un sistema de reparto a secas por el otro. Es necesario destacar los adjetivos que acompañan a uno y otro sistema. El primero es el de capitalización individual, en el que la relación entre el aportante y su jubilación es mera y exclusivamente individual, como puede llegar a ser individual el resultado de los convenios en materia de derecho laboral si llegara a prosperar el espíritu de cierta filosofía de las próximas reformas laborales que se pretenden concretar.

Esto también confirma que el marco conceptual que guía al proyecto del oficialismo es el de la ideología del mercado, porque se intenta reemplazar por un sistema individual el sistema de reparto solidario -distinto desde el punto de vista filosófico- que está en quiebra, que no funciona, que tiene fallas y que es necesario modificar estructuralmente.

Pero lo que no se puede modificar estructuralmente es el carácter solidario del sistema de reparto porque es lo que provoca ese pacto intergeneracional en el que los hijos aportan para que se jubilen los padres, del mismo modo que los padres aportaron para que se jubilaran los abuelos. Eso es lo que da continuidad moral a una nación que quiere preciarse de tal, y no de ser una sumatoria de relaciones individuales, que es lo que propone la lógica del mercado.

Seguramente alguien dirá aquí que el sistema de reparto solidario no desaparece porque figura como optativo, como escuché decir a la mayoría de los legisladores oficialistas no sólo en este recinto sino también en los distintos medios de comunicación: es decir, se ha dicho que se da la opción a la gente. Pero no es así; este sistema, tal cual está planteado, tiene un efecto. El proyecto original conseguía ese efecto inmediato, que era la capitalización obligatoria. Este proyecto, así modificado, posterga los efectos buscados pero no los elimina.

La crisis por la que atraviesa el sistema de reparto del Estado no se modifica sino que se profundiza. La crisis del sistema es de legitimidad, porque la gente no cree en él. Es una crisis de financiamiento porque no está capitalizado lo suficiente como para responder a las demandas de los jubilados actuales y futuros.

También es una crisis de gestión, porque la propia gestión administrativa del sistema le impide desarrollarse en función de sus objetivos.

Me pregunto si este sistema que está en crisis va a sufrir una mayor descapitalización porque van a ser cada vez menos los que aporten en él. ¿Se va a morigerar esta crisis de desfinanciamiento o se va a profundizar? ¿Un sistema que está en crisis puede dar opción a la gente? ¿Quiénes van a ser los que no tendrán más remedio que ir al Estado? Acudirán a él los que tengan menor poder adquisitivo, los que tengan menor poder de capitalización. El resto de la gente irá a los sistemas de capitalización privada que, como indican los ejemplos internacionales, en una primera etapa, como son sólo de capitalización y no de prestación, ofrecen siempre las mejores posibilidades, con lo cual se va a seguir ampliando la brecha.

Los más pobres van a someterse al sistema de reparto estatal, que al mismo tiempo será cada vez más pobre, mientras que el otro sistema será cada vez más rico. Entonces, se profundizará cada vez más la brecha social que ya está planteada como consecuencia de las primeras etapas de este modelo de política económica que se impulsa desde el gobierno. En síntesis se va a profundizar la transferencia de recursos.

Lo que nosotros queremos impedir —si es que todavía quedan posibilidades después de todas las barbaridades que se han aprobado en esta Cámara— es que un puñado de sectores económicos, que son los más concentrados, se quede con una friolera de miles de millones de dólares.

La participación del Banco de la Nación no impide esto, porque si dicho banco oficial no es lo suficientemente competitivo, ¿qué costará dentro de dos años privatizar la cartera de aportes a la administradora de fondos de pensión del Banco de la Nación, si total la primera etapa de este proyecto ya se habrá cumplimentado?, ¿qué costará después privatizar la última etapa del sistema y terminar cumpliendo en el mediano plazo con lo previsto en el proyecto original para el corto plazo? Esto es lo único que se consiguió con la modificación introducida.

Este sistema no ha prosperado en ninguna parte del mundo; ya ha sido eliminado de todas partes desde hace 20 años. En Chile consiguió aumentar el déficit estatal, y paradójicamente el sector que impulsó la capitalización privada —que tanto se pone aquí como ejemplo— fue el de las fuerzas armadas, que permanece sometida al sistema estatal y no al que ellos mismos impulsaron.

Se ha dicho que ésta es una reforma estructura del sistema jubilatorio. También esto es falso. No es una reforma estructural sino un mecanismo

para permitir la creación de un mercado de capitales, ¡Enhorabuena! Todos los países serios y desarrollados pretenden tener un mercado de capitales. Pero estamos en desacuerdo en que el mercado de capitales se forme con el aporte de quienes no poseen más que su fuerza de trabajo y sólo tienen el 24 por ciento de la riqueza nacional, en lugar de formarse con el aporte de quienes concentran los capitales y poseen el 75 por ciento del ingreso nacional.

Comprendemos la necesidad de crear un mercado de capitales, pero ese objetivo no implica una transformación estructural. Lo que importa es si los capitales acumulados se canalizarán luego a la inversión productiva. La política impositiva que acompaña esta reforma tampoco induce a esa canalización sino a continuar en la especulación, la fuga de capitales y el mantenimiento de un sistema de acumulación de rentas. Además, teniendo en cuenta que la Argentina se ha comprometido a pagar puntualmente 3.200 millones de dólares por el Plan Brady, y que para lo que resta de 1993 se pronostica un déficit en nuestra balanza comercial de 5.000 millones de dólares, es lógico que el oficialismo necesite constituir un mercado de capitales; pero hubiéramos preferido estar discutiendo aquí la esencia de una reforma estructural que parta de la base de subsanar ese déficit con mecanismos productivos y no con mecanismos financieros.

Por esa razón apelo una vez más a la reflexión de todos los señores diputados. Es cierto que tratamos de impedir. Más aún, si en el resto de la jornada o en el día de mañana tuviéramos la posibilidad de impedir que se sancione este proyecto, y de lograr que regrese a su ámbito natural para que lo sigamos estudiando, no dudaríamos en valernos de esa posibilidad, y echaríamos mano de todos los mecanismos a nuestro alcance para obtener tal objetivo, no por haraganería ni para escondernos detrás de la cortina, sino para impedir que votemos contra nosotros mismos.

Porque estos grupos económicos que van a absorber la friolera de muchos millones de dólares, que significa la acumulación del 11 por ciento del salario de cada trabajador argentino, controlarán así un gran poder de renta con el que podrán nombrar al presidente de la Nación, elegir a sus ministros y también a 108 legisladores. Como queremos seguir siendo representantes del pueblo, vamos a tratar con todo

nuestro fervor que no se sancione este bochornoso y terrible proyecto que tal vez estemos en vísperas de sancionar. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri): - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Señor presidente: voy a pedir que se inserten en el Diario de Sesiones las observaciones puntuales que hemos realizado a este proyecto¹. Simplemente voy a expresar algunas reflexiones de tipo político que, por razones de serenidad espiritual, no puedo dejar de hacer en esta sesión.

Mi capacidad de asombro no tiene límites. No logro explicarme cómo es posible que los *lobbies* de esta nueva patria financiera que viene entronizándose en nuestro país tengan una influencia capaz de conseguir otra marca histórica. En diez años de vida parlamentaria nunca pude ver en ese tablero 244 diputados; ni cuando se debatieron cuestiones trascendentales que afectaban el interés del pueblo, relacionadas con temas como la salud, la economía, la guerra del Golfo, la cuestión Malvinas o el tema de los hielos continentales patagónicos, que no llegó al plenario de esta Cámara. ¿Qué razón poderosa puede haber influido para lograr quebrar esa resistencia que fue casi mayoritaria en la votación de ayer, que sólo por casualidad arrojó el resultado de 123 votos para seguir la consideración y 119 votos para que el asunto volviese a Comisión?

Sr. Manny.— ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Bisciotti. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Manny.- Señor presidente: hace muchos años que nos conocemos con el señor diputado por Buenos Aires, y creo que hemos tenido mucha identidad de miras. En lo que a nosotros respecta, descarte que estemos sentados aquí por influencia de algún *lobby*. Eso lo digo sinceramente por la amistad que me une con el señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Señor presidente: me alegra enormemente lo manifestado por el señor diputado, pero no sé si todos podrán decir lo mismo.

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Bisciotti.- Me refiero a la resistencia a los *lobbies*. ¿Cómo se va a explicar al pueblo argentino este cambio de posición?

Sr. Presidente (Pierri). - El señor diputado Corchuelo Blasco le solicita una interrupción por intermedio de esta Presidencia, señor diputado.

Sr. Bisciotti.— No permitiré interrupciones porque mi discurso será breve.

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado: también le están solicitando que retire el concepto.

Sr. Bisciotti. - ¿Que concepto? ¿Los *lobbies*? ¿Por qué no voy a hablar de la influencia de los *lobbies*...?

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado Corchuelo Blasco: el diputado por Buenos Aires no le ha permitido la interrupción.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. Señor presidente: ¿cómo va a poder explicar la bancada oficialista al pueblo argentino esta vuelta de campana, este giro para justificar la aprobación del proyecto de ley? ¡Uno no puede salir de su asombro! Yo quisiera saber cómo van a hacer los representantes gremiales, que son los defensores de la clase activa y de la pasiva, para explicar que han abandonado a sus patrocinados. ¿Qué va a decir, por ejemplo, la CGT?

Sr. Borda. - Le vamos a preguntar a Bisciotti

Sr. Bisciotti. ¿Y las 62 Organizaciones? Solicito la inserción en el Diario de Sesiones de la Declaración del Congreso Nacional de las 62 Organizaciones que apareciera publicada el día 23 de febrero del corriente año. En el punto 3 se declara la necesidad de "impedir que el sistema previsional se transforme en otro 'gran negocio' de grupos privilegiados y que la ley garantice jubilaciones y pensiones como un derecho de toda sociedad moderna, que a través del Estado no puede desentenderse de sus mayores", ni de sus menores ni de sus niños, porque aquí se va a desentender de todo. Esto lleva la firma de Saúl Ubaldini y de Lorenzo Miguel.

Me imagino, cuando esta noche salga para mi casa, a Lorenzo Miguel y Saúl Ubaldini en la plaza del Congreso dando marcha atrás luego de haberse rasgado las vestiduras en esa gran manifestación de los jubilados en rechazo de la sanción de este proyecto de ley. Es difícil entenderlo, como tampoco se puede entender que Pedraza tal vez esté descorchando la botella de champán frente a las sepulturas y epitafios que están escribiendo de 15.000 ferrovía-

¹ Véase el texto de la observación en el Diario de Sesiones del 28 y 29 de abril de 1993, página 8907.

rios. Esto es muy difícil. Yo, que soy, un hombre que me manejo con respeto, digo que no se puede tensar tanto la soga porque llega un momento en que ésta se corta. No se puede presionar tanto.

¿Qué le van a decir al futuro argentino cuando el desmantelado aparato de la solidaridad social, que por la Constitución Nacional es facultad y obligación del Estado, caiga en manos de lo que van a ser las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones?

Usted, señor presidente, no estaba presidiendo la sesión cuando el señor diputado Andrés Fescina pronunció su brillante discurso, oportunidad en la que dijo que las administradoras de los fondos de jubilaciones y pensiones van a ser los nuevos "gigoló" de la Argentina. Van a ser nuestros "cafishios" porque nos van a explotar; van a manejar 4.000 millones de dólares por año; se van a enriquecer. ¿Por qué creen que juegan esta apuesta fuerte? Porque este negocio es mejor que la venta de Gas del Estado y de YPF; es un negocio redondo para la Bolsa; entramos en la especulación, en la timba financiera. Lamentablemente había muy poca gente en el recinto cuando el señor diputado Fescina pronunció su discurso, pero va a quedar registrado en el Diario de Sesiones.

Entonces, ¿por qué esta claudicación? ¿Por qué esta entrega? ¿Por qué vamos a aceptar que se abandone este negocio en manos de los capitales privados que no garantizan ni la seguridad ni la mejora ni el reaseguro permanente? ¿Qué les van a decir los amigos justicialistas a los futuros o actuales jubilados cuando alguna de las administradoras quiebre o invierta sus fondos en una forma no rentable o asegurable? ¿Qué les van a decir cuando dentro de unos años el Estado argentino tenga un endeudamiento de 20.000 millones de dólares? ¿Cómo van a responder cuando estemos tomando a las administradoras de fondos la misma plata que el trabajador argentino -no el empresario- está depositando en estas arcas?

Esta es una auténtica claudicación. Estamos sepultando una etapa de la vida argentina que podíamos haber encauzado -como muy bien dijo el señor diputado Raimundi- con una ley bien implementada, aunque se diga que el sistema es malo. Pero este proyecto de ley es un verdadero mamarracho; ni siquiera está articulado en su conjunto. ¿Cuál será entonces su resultado? ¿Adónde nos va a llevar?

Frente a esto digo lo siguiente: cuidado con llevar....

Sr. Bordín Carosio. ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Bisciotti. — No, señor diputado; ya concluyo.

Decía que tengamos cuidado con tanto desmantelamiento, tanta entrega, tanto vaciamiento del patrimonio nacional. ¿Por qué razón los amigos gremialistas no se paran, como lo hacían antes en la Comisión de Legislación del Trabajo, cuando no reincorporábamos a un cesanteado de la época de la dictadura y nos hacían paro? ¿Dónde están los defensores de los trabajadores? ¿Dónde dejaron su vieja investidura?

Sr. Bordín Carosio. - ¡Siento vergüenza ajena!

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Presidente (Pierri).— Ruego a los señores diputados que guarden silencio.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bisciotti. — Señor presidente: creo que deberíamos propiciar que antes de que la Cámara vote esta iniciativa haga un retiro espiritual para que la bancada justicialista analice seriamente la razón de sus dichos y su proceder, porque si no, la conciencia les va a remorder y esto es terrible. Van a pensar tanto que no lo van a poder olvidar nunca. La serenidad de espíritu durante el retiro espiritual... (*Aplausos.*)... va a permitir que reflexionen y así pueden cambiar el sentido de la votación y volver a ser los viejos defensores de los trabajadores. ¿Por qué no?

No se pongan del lado de la entrega; no destruyan el patrimonio nacional; no desmantelen el país. Hace unos minutos recordaba el libro fantástico de Gabriel García Márquez *Cien años de soledad*, donde el autor decía algo muy importante que yo rescato para los amigos justicialistas.. .

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Presidente (Pierri).— Diríjase a la Presidencia, señor diputado.

Sr. Bisciotti. - Lo estoy haciendo, señor presidente.

Como en el Senado de la Nación se prendieron los verdes que indican un paso favorable a una relación institucional, nosotros hacemos un saludo venturoso a lo que está ocurriendo, así como saludamos a un ministro de Economía que enfrenta a un vergonzante fiscal que quie-

re utilizar la Justicia para intentar aplicar sanciones que verdaderamente son una vergüenza.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Bisciotti. — En el día de ayer, cuando en esta Cámara se pretendía hacer estirar el reglamento como un chicle, la Presidencia actuando con tino, con serenidad y en forma reflexiva dio muestras de su capacidad, y en ese sentido tengo que felicitar al señor presidente porque actuó verdaderamente como corresponde al titular de la Cámara de Diputados de la Nación. El señor presidente mostró serenidad, racionalidad y ecuanimidad. Pienso que ésta va a ser la actitud de la Presidencia de aquí en adelante. Tengo que confesar que a veces lo he criticado y que no sé si en realidad la actual actitud del señor presidente no se debe al hecho de que se perfila como primer candidato a diputado nacional, o porque quizás se cayó la postulación del doctor Menem y entonces se está candidateando para otro cargo para 1995. No sé cuál será la razón, pero por lo pronto las cosas vienen así. *(Aplausos.)*

Y termino con *Cien años de soledad*: se lo digo a los justicialistas, no vaya a ser que un día estén parados en la puerta de vuestras casas y por haber tensado tanto la sogá vean pasar su propio entierro. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pierri). Corresponde a continuación dar el uso de la palabra a la señora diputada Guzmán, quien no se encuentra en este momento en el recinto.

Sr. Puricelli. - Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Puricelli. — Señor presidente: solicito que en uso de sus atribuciones y fundamentalmente teniendo en cuenta lo prescrito por el artículo 165 del reglamento -que dice que "son absolutamente prohibidas las alusiones irrespetuosas y las comparaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia las Cámaras del Congreso y sus miembros"- ordene testar del Diario de Sesiones las imputaciones que se hicieron a quienes hoy con toda honradez y sinceridad venimos a dar quórum, y que no somos objeto de manipulación de ningún *lobby* ni de ningún interés que no sean aquellos que pretendemos defender —y que de hecho lo hacemos—: los de los trabajadores.

Por eso solicito a la Presidencia que disponga testar esas imputaciones.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia entiende que en lugar de aplicar el artículo 165 del reglamento, el señor diputado Bisciotti puede acceder a testar las expresiones por las que se

siente agraviado el legislador del bloque Justicialista. Se me ocurre que es preferible que sea por la propia voluntad del señor diputado Bisciotti que resuelva la situación.

Sr. Bisciotti. Señor presidente: sólo me he interrogado qué poderoso factor ejerce tanta influencia para que la Cámara de Diputados pueda tener 244 miembros en el recinto. Yo no he dicho que algún señor diputado peronista haya venido por haber recibido alguna suma de dinero. Pregunto dónde está el agravio y además me extraña la actitud del señor diputado Puricelli, quien después de no haber sido aceptada la propuesta de considerar el tema del diputado "trucho" pretende hacer una cuestión de tipo ético. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pierri). Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Guerrero (A. I.). — Señor presidente: en realidad estaba dispuesto a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de un trabajo que realicé hace mucho tiempo, cuando comenzó la discusión de este proyecto. Voy a tratar de ser breve, pero los dos señores diputados preopinantes me llevan a tener que hacer algunas consideraciones, si bien no me siento tocado por sus expresiones.

Como bien dijo el señor diputado Bisciotti, siempre existió el trabajo de los *lobbies*; ahora se los llama así y antes eran corporaciones interesadas sobre determinados temas.

Estamos conscientes y tranquilos por haber trabajado en este proyecto con absoluta convicción, algo que por lo menos quien habla lo ha manifestado desde un comienzo.

De todas maneras la reflexión del señor diputado Bisciotti me hace acordar de algo que sufrí íntimamente cuando mi partido no era gobierno. Debo recordar que quien habla fue diputado hasta 1976 y que luego sufrió tres años y dos meses de cárcel tras el derrocamiento de aquel gobierno. Más tarde en forma esperanzada acompañé el esfuerzo del pueblo argentino para la reinstalación de la democracia. Me dolió bastante cuando un buen día el Parlamento aprobó la Ley de Punto Final. Yo tampoco aprobé que *lobbies* extraños hubiesen influido sobre el Congreso para que con la democracia se tomara esa actitud. Yo sufrí en carne propia ese cambio. Sin duda alguna, son las circunstancias del hombre los que hacen que se decida sobre cada situación.

Creo que la que estamos tratando hoy obviamente es una ley trascendental que conocemos perfectamente bien. Sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo: acompañar lo que nosotros consideramos una transformación que otros gobiernos no tuvieron el coraje de encarar. Felizmente hemos coincidido con la Confederación General del Trabajo, lo cual para nosotros no es extraño sino histórico. Una vez más hemos coincidido; es cierto que ello implica un acuerdo que pudimos lograr y por eso estamos sentados aquí en nuestras bancas y somos mayoría. Naturalmente no creo que estemos haciendo algo inconsciente; todos los aquí presentes tenemos algunas historias en las cuales nos sostenemos, que van al compás de esta Argentina contradictoria a la que algunos ven de una manera y otros de otra.

Apostamos a la transformación de la República Argentina que queremos concretar con coraje. Por lo tanto, lo que he escuchado de los señores diputados preopinantes es un tema bastante controvertido. Quien tenga la conciencia transparente y limpia -muchos creen tenerla— que arroje la primera piedra.

Para finalizar solicito que se inserte en el Diario de Sesiones el trabajo pormenorizado que realizara para el análisis del proyecto que estamos considerando.

Sr. Raimundi. - Por haber sido aludido pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Puricelli. — Señor presidente: voy a solicitar que se inserte en el Diario de Sesiones mi discurso sobre el tema en tratamiento. Pero no puedo dejar pasar por alto las graves imputaciones que se han hecho a todos los miembros de mi bancada, en orden a que hemos sido objeto de manipulaciones de *lobbies* de distinta naturaleza para sancionar este proyecto. Aquellos que tienen miedo a quienes puedan manejar los fondos de pensión, porque pueden perder sus bancas o los espacios de poder político, les decíamos que dichos ámbitos de poder político se ganan con cosas concretas que resuelven los problemas de la gente, mucho más que con manipulaciones de leyes. También les decimos que no se ganan espacios de poder político si se pierde el tiempo en indecisiones que llevan al país al nivel de desastre en el que estaba en 1989. No se ganan espacios de poder político ni se dejan consolidar corporaciones, *lobbies* o grupos de poder económico si no se tiene la valentía de tomar las decisiones que la Argentina requiere.

Sr. Presidente (Pierri). - Señor diputado Puricelli: los señores diputados Di Tulio y Baylac le solicitan sendas interrupciones.

Sr. Puricelli. - No voy a conceder ninguna interrupción como no me han sido concedidas en otras oportunidades.

Decía que no se ganan espacios de poder político cuando no se tiene el valor de tomar las determinaciones, que corresponden. Nosotros hemos venido acompañando medidas trascendentales en la transformación del país que nos ha hecho llegar el Poder Ejecutivo. Precisamente una de ellas es este proyecto de reforma del sistema previsional. No queremos más un sistema previsional que no da respuestas a los jubilados, como ocurre en la actualidad.

Tampoco nos vamos a detener en vacilaciones o discusiones de semanas, meses o años, que ponen a los jubilados cada vez más lejos de la posibilidad de recibir lo que han aportado a lo largo de su vida. Las administradoras de fondos de pensión van a administrar los fondos de los trabajadores. Si es cierto que el Estado tiene que pedir plata a las administradoras, va a tener que pagar por eso, para poder garantizar a quienes más aportan, que son los trabajadores: ése es el aporte que les va a dar una rentabilidad final.

¡Se terminó el jolgorio de la Argentina de la política fácil y del manipuleo de los presupuestos para las campañas electorales en el comité! ¡Queremos una Argentina genuina que se cimente en la producción y en el trabajo! Entendemos que el ahorro que se va a generar a través de estos aportes posibilitará el desarrollo de la producción y del trabajo.

Además va a haber alguien que administre estos fondos, que puede no tener nada que ver con el Banco de la Nación Argentina; serán los propios jubilados los que decidirán quienes van a administrar esos fondos.

No estamos para hacer rico a nadie, porque no hemos claudicado en nuestra postura de distribuir el 50 por ciento del producto bruto para el capital y el otro 50 por ciento para el trabajo. Pero el país que nos dejaron es el del cero por ciento, y queremos transformarlo en un país del ciento por ciento. Para ello deseamos sentirnos acompañados por el pueblo, para decirle desde estas bancas que cuando se reconstruya la riqueza el 50 por ciento corresponderá al trabajo.

Esas y otras son las motivaciones que nos han llevado a estar sentados aquí. Nosotros venimos de muchos años de militancia y de trabajo en la política, más allá de los cargos y de las posibilidades que tengamos de definir el destino del país. Muchos compañeros han sufrido cár-

cel en nombre de la defensa de ideas que hoy no estamos rifando.

Nosotros queremos construir una Argentina grande, y si algo nos ha dado el peronismo es la capacidad de transformación a la que no vamos a renunciar, porque sería algo así como renunciar a nuestra propia naturaleza. No tenemos miedo de que el capital trabaje y crezca, porque estamos convencidos de sentir el calor del pueblo a nuestro lado. Estamos dispuestos a decir a ese capital que venga a contribuir con su riqueza...

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sra. Piccinini. - ¡A ese pueblo le ponen la policía!

Sr. Presidente (Pierri). —La Presidencia ruega a la señora diputada por Río Negro que respete al orador.

Sra. Piccinini. — No tienen vergüenza! ¡Se trata de ancianos y les ponen la policía!

Sr. Romero (C. A.). - ¡Ahora se ocupan de los viejos!

Sra. Piccinini. - ¡No están presentes porque no los dejan entrar!

Sr. Presidente (Pierri). - Una vez más la Presidencia se ve en la obligación de solicitar a los señores diputados que respeten al orador.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. Puricelli. — Señor presidente nosotros escuchamos los gritos que han proferido algunos señores diputados porque no pueden entender nuestra conducta y nuestra actitud: no pueden comprender que estemos acompañando este proceso de transformación. Esa es la razón por la cual los ayer 245 diputados no nos pusimos de acuerdo. Realmente los justicialistas, más allá de opinar como opinemos, estamos decididos a transformar esta Argentina. Lo vamos a hacer porque es el único camino para que realmente a nuestros ancianos se les pueda pagar su jubilación.

Ojalá que nunca tengamos un país que impida a sus ciudadanos disfrutar los beneficios obtenidos después de años de esfuerzos y trabajo.

Estamos aquí precisamente para garantizar que sean los propios trabajadores los que definan si quieren que este 11 por ciento siga siendo administrado por el Estado en el sistema de reparto. Si no prefieren esto último, tienen la posibilidad de la capitalización, que podrá estar en manos del Estado o de las empresas privadas. Entonces confiemos en la gente y dejémosla elegir.

Nosotros debemos cumplir con nuestro deber de sancionar una ley que transforme el sistema

previsional para evitar que nos pase lo que ocurría en 1989, cuando cada jubilado podía elegir entre obtener a lo sumo veinte dólares o asaltar un supermercado.

Sr. Presidente (Pierri); - Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Raimundi. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Parola. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Raimundi. — Señor presidente: he solicitado una interrupción por haber sido aludido. Lamento que se haya desvirtuado el curso del debate, pero dado que el diputado Guerrero se refirió en su exposición a los dos diputados preopinantes quiero hacer uso de mi facultad parlamentaria para poder contestarle.

El señor diputado Guerrero dijo que actúa con absoluta convicción. Creo que nosotros no hemos utilizado ningún término agravante; simplemente describimos la realidad y nos remitimos a las noticias de los diarios. Hemos leído que un grupo de legisladores de extracción sindical se reunió con la cúpula de la CGT —después de que ésta se reuniera con los ministros de Trabajo y de Economía, a raíz de lo cual tuvo la posibilidad de insertar una propuesta— y que el presidente de la Nación se reunió con representantes de algunos partidos provinciales frecuentemente aliados con el oficialismo en las votaciones.

Esto justifica que algunos funcionarios estén en los cargos tan importantes que ocupan, ya que realmente tienen una extraordinaria capacidad de convicción. Digo esto porque primero plantean una realidad, y después de hablar con ellos, plantean otra. Esto es de dominio público y no es agravante.

Sr. Amadeo. - Esas son las cosas que preocupan a los oligarcas, diputado.

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Raimundi. — Solicito a la Presidencia que llame al orden a los señores diputados a fin de que me permitan hacer uso de la palabra.

Nosotros nos referíamos a ciertos hechos que son exclusivamente datos de la realidad.

Una ley de esta naturaleza tendría que haber sido celebrada por el pueblo argentino, tal como debió haber ocurrido una semana atrás con la sanción de la Ley de Educación, la que surgió del voto de la mitad de la Cámara y no del conjunto de las mayorías populares que desde

hace más de 100 años no tienen una ley de educación.

Por otra parte, el diputado Guerrero habló de la necesidad de tener coraje. Estoy de acuerdo en que en política hay que tener coraje, pero se refirió a un tema que a mi juicio era el menos indicado para exponer como señal de coraje: la comparación entre la política de derechos humanos de una época y otra. Quiero aclarar al señor diputado por Tucumán que si bien a él le dolió que se hayan sancionado las leyes de punto final y de obediencia debida, a mí también me dolió profundamente. Además, como presidente de la Juventud Radical en la Convención donde se aprobó finalmente la sanción del punto final por parte de nuestro partido, fui uno de los encargados de levantar la voz opositora a ese proyecto y luego hicimos lo propio con el tema de la obediencia debida.

Pero si tengo que comparar en lo que a coraje se refiere diría que el gobierno iniciado en 1983, en la mayor parte de los casos con aprobación del bloque justicialista, creó una comisión nacional para el estudio del problema de las personas desaparecidas, modificó el Código de Justicia Militar e identificó la pena del torturador con la del homicida en el Código Penal; y hoy estamos a un paso de que sea propuesto como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en un determinado partido un hombre que ha confesado públicamente que torturó para poder dilucidar un delito. ¡Fíjense qué diferencia! Porque es factible que esa persona integre un bloque que en lo que le resta de gestión al actual gobierno vote frecuentemente siguiendo el criterio del sector oficialista.

Nosotros vemos muchas cosas que se pasaban por televisión. Le pido al señor diputado Guerrero que recuerde cuando estuvo preso. Tuve la fortuna de no haber pasado por esa situación; pero tengo amigos que sí han estado presos y algunos de los que figuran en la foto del colegio secundario ya no están. Todo eso me duele. Como dije, hemos visto por televisión restos de los lugares donde hombres como el señor diputado y tantos otros estuvieron presos, tratando con esas imágenes de crear una conciencia popular sobre lo que había sucedido en materia de derechos humanos. Por eso también ratificamos la adscripción de la República Argentina al Pacto de San José de Costa Rica.

Quiere decir que si comparo el dolor de la obediencia debida y el punto final con el coraje de un conjunto de medidas que crearon una conciencia popular para hacer irreversible el respeto por los derechos humanos, con el dolor y

la falta de coraje para dictar las medidas más inmorales que recuerde la historia por parte de este gobierno, como fueron los indultos de los mismos comandantes que el gobierno radical había mandado a juzgar... (*Aplausos*)... me parece que no era aquél el ejemplo más indicado para hablar del coraje que se debe tener en materia política.

Además esto no es parte del pasado, no se hizo para pacificar al país...

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado no está contestando la alusión del señor diputado Guerrero, sino que está efectuando un nuevo discurso.

Sr. Raimundi. — He sido aludido respecto a determinados puntos, tal como consta en la versión taquigráfica.

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado debe hacer referencia a lo expuesto por el señor diputado Guerrero.

Sr. Raimundi. — Es lo que estoy haciendo, señor presidente. Estoy hablando del coraje y de la política en materia de derechos humanos.

Luego habló el señor diputado Puricelli diciendo que no se podían realizar discursos como producto de las indecisiones. La Unión Cívica Radical ha presentado un proyecto en octubre de 1992. Y si nos ponemos a hablar de indecisiones y analizamos a partir de cuándo está impreso el Orden del Día N° 922 y cuánto tiene de fresca...

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado ya ha respondido la alusión por la que pidió la interrupción.

Sr. Raimundi. — Señor presidente: estoy haciendo uso de las facultades que me otorga el reglamento para contestar cada uno de los puntos en los que fui aludido.

Sr. Presidente (Pierri). — Por haber sido aludido dispone de un breve término para responder, pero no para introducir un discurso.

Sr. Raimundi. — Sólo quedan dos puntos más por responder y concluyo. Resumiendo, debo decir que con relación a los diputados que gozan del calor del pueblo...

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado Guerrero no dijo eso.

Sr. Raimundi. — Lo dijo el señor diputado Puricelli.

Sr. Presidente (Pierri). — El señor diputado no puede responder respecto a lo que dijo el señor diputado Puricelli, sino sólo sobre aquello que motivó el pedido de interrupción y que fue la alusión efectuada por el señor diputado Guerrero.

Sr. Raimundi. — El señor diputado Puricelli dijo...

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Raimundi. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado Parola?

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia no lo autoriza, señor diputado.

Sr. Raimundi. - Es una facultad del orador conceder o no la interrupción referida..

Sr. Parola. - Concedo la interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia no la autoriza, señor diputado, y le ruega que comience su exposición.

Sr. Parola. — Señor presidente: las últimas modificaciones efectuadas al proyecto y el hecho de que algunas de ellas llegaran hace pocas horas nos llevan a expresarnos con cierta precaución sobre la iniciativa, ya que no se nos ha permitido discutirla en comisión, como hubiésemos querido.

De todos modos hay ciertas partes de este proyecto que nos permiten aseverar -además de que se lo trata de imponer por la fuerza de los números y no de la razón- que avasallan la norma madre y fundamental de los argentinos, como bien fundamentó recientemente el señor diputado Marcó.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional nos manda crear un seguro social integral e irrenunciable, administrado por sus propios interesados con la participación del Estado. Estamos hablando de la seguridad social, que es un concepto amplio, abarcativo y enunciativo de cuál ha sido la verdadera intención del constituyente.

Hablamos de la seguridad social bajo la luz de un precepto constitucional, donde el Estado no debe perder la oportunidad de brindársela a sus ciudadanos desde el ámbito de la previsión social. Mientras esta norma fundamental no se reforme, su mandato es claro y concluyente. Debemos mantener la responsabilidad del Estado, introduciendo las correcciones que sean necesarias, pero respetando los principios de solidaridad, integralidad y universalidad que la conforman.

Por eso hemos tratado durante estos meses y estas últimas horas de hacer un aporte serio y responsable, introduciendo las correcciones que fuesen menester, pero respetando ciertos principios fundamentales, de los cuales sólo voy a mencionar a algunos por consideración a los demás oradores.

Entre ellos se encuentra: mantener el sistema contributivo y solidario administrado por el

Estado, profundizando el pacto intergeneracional y equitativo; controlar estrictamente la evasión, aplicando a ella mecanismos actuariales y computarizados que incorporen tecnología y métodos no tradicionales; poner en vigencia la ley penal tributaria para los deudores previsionales; aumentar progresivamente la edad jubilatoria, atendiendo al aumento de la expectativa de vida; asegurar la universalidad del sistema, limitando los egresos bajo pautas estrictas de control de aportes y contribuciones; ajustar los mecanismos de otorgamiento de las jubilaciones por invalidez y evitar la acumulación de beneficios.

Reconocemos las múltiples causas que han tornado deficitario el régimen previsional argentino. Muchas de ellas están estrechamente vinculadas con la realidad política económica, social y demográfica. Pero también sostenemos que la decisión política a adoptar para modificar el régimen vigente debe garantizar la suficiencia de las prestaciones a un costo razonable para la comunidad, atendiendo dos puntos insoslayables: contribuir al crecimiento económico de toda la sociedad argentina y no privar de la protección a quienes más necesitan de ella.

Consideramos que los problemas que afectan a este sistema no se resuelven solamente cambiando de régimen financiero. Creemos que en el actual sistema el sector dependiente puede autofinanciarse y que ajustando sus mecanismos de fiscalización posee los medios para lograr la protección social. Si sostenemos que se debe diseñar un régimen de financiación diverso para el sector de autónomos.

Porque creemos que este sistema de reparto basado en el principio de la solidaridad es perfectible, propiciamos su mantenimiento y entendemos que no se debe cambiar por un régimen de capitalización que hasta pocas horas atrás era compulsivo y ahora es optativo, inducido por desgravaciones que calificamos de perversas e injustas.

Como este régimen de capitalización que pretende impulsar el Poder Ejecutivo nacional crea un seguro privado que viola el principio de la seguridad social y de las prestaciones definidas, que es lo recomendado por todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, hemos arribado a las siguientes conclusiones. Este proyecto no cumple con los preceptos por los cuales fuimos convocados ya que no soluciona la angustiosa situación de los actuales jubilados; no achica el Estado ni elimina organismos burocráticos sino que por el contrario los agranda; parte del aporte de

nuestros obreros, en lugar de ir a la capitalización, se destinará a pagar costos administrativos; no ofrece garantías totales a las generaciones futuras -muchos miembros del Poder Ejecutivo han anunciado que se vetará el artículo 39, que es la única garantía cierta de esta norma-, y nos aleja del Primer Mundo, pues no se aplica en ningún país desarrollado y termina por responder al interés de los poderosos, la banca, la Comisión Nacional de Valores, las compañías de seguros, la Bolsa de Comercio, etcétera, o sea, la patria financiera, que no corre riesgo alguno. El único que corre un riesgo cierto es el pobre trabajador al cual tan solo le debe quedar la ayuda piadosa de Dios.

Por lo tanto, en una apretada síntesis de las conclusiones a las que hemos arribado, muchas de las cuales han sido perfectamente fundamentadas por los miembros de mi bancada que me precedieron en el uso de la palabra, diré que no nos queda en claro que este régimen financiero que se trata de impulsar -para reactivar el mercado de capitales y apuntalar el plan de ajuste- sea verdaderamente un régimen previsional.

Tampoco nos queda en claro que se diga que va a contribuir al crecimiento de la sociedad en su conjunto. Lo que sí está claro para nosotros y para la sociedad es que este régimen financiero que se trata de impulsar va a sacrificar en el altar de la economía de mercado la seguridad social de las generaciones futuras argentinas. Si este régimen financiero se materializa, para estas generaciones la seguridad social será una verdadera utopía en lugar de un instrumento de política social para combatir la pobreza y garantizar la paz del país.

Algunos consideramos que hay dos formas de hacer política: la más fácil pasa por abrazarse al poder y al dinero; la otra, la más difícil, pero la más loable, por abrazarse con la causa del pueblo. Como los radicales hemos elegido este último camino, abrazados con nuestro pueblo diremos que "no" al mercado de capitales que se piensa forjar con el salario de los trabajadores, con el sudor, lágrimas y frustraciones de la familia obrera argentina. Votaremos por la solidaridad, por la justicia social y por el bienestar de los jubilados y trabajadores argentinos. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires,

Sr. Green.— Señor presidente: solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones la parte de mi discurso que se refiere a las garantías propuestas en el artículo 39 del proyecto y a la participación del Banco de la Nación Argentina

como administrador de fondos de jubilaciones y pensiones.

Estoy convencido de que estamos frente un proyecto de ley transformador que lleva insertas las garantías solicitadas por el conjunto de la sociedad. Se busca obtener un sistema previsional que atienda el hoy y el mañana de nuestro sector pasivo y que conlleve la posibilidad seria y concreta de conformar un fondo de capital de inversión que permita el crecimiento de la economía a través del crédito justo y equilibrado.

Por un problema de conciencia no podríairme esta noche sin dejar asentado que no tengo temor alguno ante las acusaciones falsas y vacuas de una oposición que, día a día, se diluye en un discurso de desesperanza y resentimiento que la aleja cada vez más de nuestro pueblo. Y si algún temor pudiera poseerme es que ese discurso, de falsa democracia que significa querer imponer una voluntad de minorías que se creen ilustradas, pueda algún día desplazar a nuestra propuesta creadora y de crecimiento, volviendo a vivir los aciagos días de la hiperinflación, de los saqueos a los supermercados y de las asonadas carapintadas. Todo eso hoy nos parece muy lejano. Pero no nos equivoquemos; fue ayer, cuando gobernaba la Unión Cívica Radical -la oposición de hoy- que no pudo o no supo resolver este gran tema nacional, como tampoco no supo o no pudo resolver los grandes temas nacionales que todavía aquejan a nuestro pueblo. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia exhorta a los señores diputados a abreviar sus discursos, ya que son muchos los anotados en la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.,

Sr. Soderó Nievas. - Señor presidente: nuestra participación se va a adecuar a su pedido, toda vez que la fundamentación política ya sido suficientemente expuesta a esta altura de debate. Quiero rescatar dos cosas. En primer lugar, el avance que tiene este proyecto en cuanto al carácter optativo que nos permite reivindicar para los trabajadores la libertad la independencia de decisión. No creo que la subestimación de los trabajadores contribuya absolutamente a nada. Hay que dejar que ellos a conciencia decidan qué es lo que les conviene y dónde van a invertir sus ahorros.

En segundo lugar, quiero destacar nuestra colaboración en el perfeccionamiento de normas centrales, entre ellas las relativas al menú de inversiones, como la incorporación de un

nuevo inciso que faculta a la administradora Banco Nación a invertir en "obras públicas de interés nacional o regional, de infraestructura y servicios públicos, de utilización de mano de obra intensiva o que promuevan el desarrollo de actividades productivas a largo plazo, tengan asegurada suficientemente las restitución y como mínimo las garantías de intangibilidad y rentabilidad previstas en el artículo 39". Esto permitirá librar al proyecto de la crítica generalizada e infundada de que se dirige exclusivamente al mercado de capitales, porque muestra que está al servicio del país, de las economías regionales y de la integración de todo el pueblo.

—Ocupa la Presidencia el. señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, doctor Oscar Santiago Lamberto.

Sr. Sodero Nieves. — En estos dos conceptos fundamentales, la libertad de decidir y el destino de las inversiones, dejo fundamentada brevemente nuestra posición en general, aunque voy a pedir la inserción de un trabajo que se divide en 16 capítulos y tiene 155 páginas, que justifica esa posición, reservándome el derecho de intervenir en la discusión en particular. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Lamberto). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Castillo (J. L.). - Señor presidente: sin conocer la razón aunque imaginándola, los dirigentes sindicales que tenemos el honor de ocupar bancas de diputado nacional estamos convirtiéndonos en el centro de atención por acompañar la reforma del régimen previsional.

Antes de fijar cuál es la posición de estos dirigentes sindicales, quisiera dar mi opinión sobre lo que está pasando en esta discusión. Por primera vez observo que en la Cámara nos faltamos el respeto y veo que diputados que ocupan un espacio en la televisión -no sé si cedido gratuitamente o porque tienen dinero- se dan el lujo de tergiversar la verdad, sin decir lo que aquí se discute y propone. No sé si por una subida del colesterol o por falta de circulación en sus arterias, estos diputados no son capaces de averiguar ni de conocer lo que estamos discutiendo. (*Aplausos.*)

En el día de la fecha, he escuchado decir a un diputado —que cuando nosotros estábamos presos era embajador del proceso militar— que la CGT se hizo presente en el Congreso para proponer que no se pague la pensión a la viuda. Eso es una mentira total. Como legislador asumo la responsabilidad de decir que ese diputado que usó un medio televisivo en un horario de mucha audiencia mintió; y asumo la responsabilidad de

llamarlo mentiroso, porque no se pueden captar los votos del pueblo mintiendo a la gente. No puede uno convertirse en defensor de los jubilados por una necesidad de votos. Uno defiende a los jubilados y a los trabajadores porque lo lleva adentro y lo siente; en caso contrario, es un impostor; y acá hay impostores de ideas y también de posiciones que no se sostienen luego cuando se habla mano a mano. O acaso nos olvidamos que ese mismo diputado dijo que no quería ser usado como profiláctico, cuando acá se quiere dar el lujo de usar como profilácticos a los jubilados que tienen necesidades en la República Argentina. (*Aplausos.*)

He escuchado en esta Cámara la siguiente pregunta: ¿por qué esta entrega? Preguntaría al diputado que formuló ese interrogante si leyó este proyecto de ley. Si aquí hubo *lobbies*, estos cayeron de a uno. Vamos a entrar a analizarlo.

Cuando vino el proyecto se nos acusaba de que la iniciativa era para la banca privada; cuando incluimos al Banco de la Nación Argentina, se nos dijo que ello estaba bien pero que el presidente lo iba a vetar; cuando logramos que el señor presidente de la Nación pública mente se comprometiera a no vetar, nos dijeron que el sistema era obligatorio, y cuando ahora eliminamos la obligatoriedad, se nos dice que es inducida: ¡No hay nada que les venga bien señor presidente! (*Risas y aplausos.*)

Hay diputados que en el fondo son honestos con su pensamiento. No diré quién fue, pero recién escuché a un diputado joven que se animó a decir cuál es el fondo de la cuestión. Dijo: nosotros nos oponemos a la discusión de esta ley porque no queremos el mercado de capitales. Ese es el fondo del asunto. Es mentira que quisieron discutir este proyecto artículo por artículo, porque cada vez que lo planteamos en la comisión nos decían que no querían la capitalización.

Sr. Moure. — Efectivamente.

Sr. Castillo (J.L.). — Entonces, que asuman que no quieren que el país crezca.

Cuando nosotros decimos que queremos que ello suceda con el ahorro de los trabajadores nos dicen que somos estúpidos porque les sacamos el dinero a esos trabajadores para apostar al país; pero se olvidan que nuestro jefe, el creador de nuestro movimiento, dijo que primero está la Patria, después el movimiento y por último los hombres. (*Aplausos.*)

Con esto los trabajadores, que no tenemos formación universitaria, que no usamos palabras di-

ficiles, que no nos convertimos en maestros “cruela” para decir dónde está la equivocación de un punto y una coma, lo único que hemos hecho en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por un dirigente gremial, ha sido trabajar, y aquí hay alrededor de cien modificaciones. El 80 por ciento de ellas ha sido propuesto por el movimiento obrero. Lo digo con mucho orgullo. Y si las modificaciones a este proyecto de ley nos hacen pender nuestro puesto en el sindicato, bienvenido sea el sacrificio por el país. Esto es lo que ponemos acá. (*Aplausos.*)

Nosotros no somos diputados que tenemos que andar haciendo rosca cada año para que nos voten; nuestros compañeros nos votan y eligen cada dos años; y si tenemos que quedar en el camino por un principio y un ideal, ése es el sacrificio que hacemos por la patria, y así hay que aceptarlo.

Esto es lo que venimos a decir esta noche, porque estoy cansado que cada vez que votamos una ley enviada por el gobierno se diga que el movimiento obrero se entrega. Nosotros hemos venido a proponer que este sistema sea optativo; no dijimos nada más, y eso es lo que hemos conseguido de este bloque.

Entonces, no se puede hablar de que estamos preparando esto para otorgar poder económico a grupos concentrados. ¿Quiénes son los grupos concentrados? ¿Los sindicatos, las mutuales, las cooperativas y los colegios profesionales? No; éstos son los que quieren asumir el compromiso de defender al país y de tener voz en el mismo. ¿Acaso nos olvidamos de que cuando gobernaban otros colores políticos nos querían cambiar la ley de asociaciones sindicales para sacarnos poder de decisión y de participación política? (*Aplausos.*)

Suelo hablar muy poco en éste recinto, pero no quería dejar pasar esta oportunidad sin expresar la opinión de muchos trabajadores que este año dejan la Cámara y están haciendo un aporte fundamental. De una vez por todas debe dejar de decirse que el dirigente gremial se está entregando. Recuerdo que cuando gobernaba el doctor Alfonsín, lo que nos pedía a los dirigentes era que modernizáramos nuestros pensamientos porque había que cambiar la estructura económica del país. Ahora, porque somos gobierno, porque somos peronistas, porque estamos comprometidos con el futuro, porque queremos cambiar el país, nos dicen que somos entreguistas. ¡Bienvenida sea esta entrega si sirve para salvar a la Nación! (*Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Lamberto).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Baylac. - Señor presidente: ¡qué lindo sería que en la Cámara tuviéramos la posibilidad de contar con un recurso tecnológico que nos permitiera visualizar los dos países que se discuten en el día de hoy! Me refiero a la Argentina de ayer, la de hace pocos años, y la de hoy, es decir, la del coraje, la de las maravillosas transformaciones, la del valor de las decisiones y la de los cambios que se hacen en nombre del movimiento, de la patria y de la historia. Sin duda, la Argentina que hoy vivimos está cambiando.

Si contáramos con ese recurso tecnológico hubiéramos tenido la posibilidad de hacer, como en televisión, el *replay*, o sea, volver a ver la jugada. ¡Cómo me gustaría que por un instante las pasiones de los aquí presentes permitieran que cada uno se reencontrara con su propio espíritu y viera cómo era la Argentina de hace pocos años, la que según fuera definida por el señor diputado Green -representante de Buenos Aires que entonces era intendente-, era la Argentina de los saqueos y de la hiperinflación, mientras que la Argentina de hoy, es la de la estabilidad y la baja inflación.

Si hubiera tenido ese recurso tecnológico probablemente le habría tenido que aconsejar al doctor Raúl Alfonsín —entonces presidente de los argentinos— que era fácil arreglar la Argentina. Y entonces, por ejemplo, para resolver el problema de los ferrocarriles, bastaba con decidir que no hubiera más ferrocarriles; de este modo quedarían 15 mil trabajadores en la calle, y entregaríamos la posibilidad de la explotación a los sectores de la concentración económica monopólica y sanseacabó.

Yo no sabía que para arreglar Hipasam había que eliminar un pueblo, porque en ese caso se lo hubiera dicho a Alfonsín y entonces nos habríamos evitado las consecuencias de aquella Argentina de la hiperinflación. Yo no sabía que tenía que haber corrido detrás de Alfonsín y decirle que había que cerrar Altos Hornos Zapla porque era fácil. Eso era lo que había que hacer, en la Argentina de Alfonsín, en la de la falsa democracia, en la de los intelectuales, en aquella en la que había que reconstruir nada menos que la solidaridad social, la convivencia entre todos los argentinos, la civilización y la cultura del esfuerzo, en una patria que había sido socavada por la dictadura militar.

Había que hacer prevalecer la norma jurídica sobre la anomia para reconstruir un país que había sido lacerado Pero entonces, ¿qué hacen

los argentinos de hoy que le dicen a Menem que está teniendo coraje para transformar el país? En aquella época nos hicieron trece paros generales por mantener la fuente de trabajo de miles de hombres y mujeres empleados en Hipasam.

También nos hicieron paros generales por mantener en funcionamiento Altos Hornos Zapla o SOMISA en manos del Estado, para buscar mejores oportunidades a la actividad económica argentina.

¡Qué fácil tener coraje para entregar todo! ¡Qué fácil ser el abogado de quienes estábamos endeudados y quebrados en 1983 y en lugar de pelear un concurso civil llegar a la quiebra del patrimonio familiar! (*Aplausos.*) ¡Qué sencillo es quebrarle el espíritu al desesperanzado y decir que aquí se terminó la Argentina del jolgorio! Es cierto: viene la Argentina de la pobreza y la miseria, la Argentina que esta perdiendo la esperanza en su futuro. . .

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Baylac. - Basta andar por la Argentina...

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Baylac. -Yo tuve la suerte de adquirir cierta notoriedad gracias a Menem y Sofovich y de recorrer el país. He ido a la Argentina menemista de Palito Ortega, como nunca llena de villas miseria...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Baylac. — He ido a la Argentina de Menem en La Rioja y ahí vi como los tomeros hacen huelga de hambre porque no pueden defender sus derechos. Me han contado cómo han crecido los padecimientos de estos trabajadores en esa provincia.

Sr. Romero (C. A.). - Por eso sacó el 70 por ciento de los votos Menem en La Rioja. **Sr. Baylac.** - ¡Escuchá, infeliz!

-Varios señores diputados hablan a la vez.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Luis Alberto Martínez

Sr. Presidente (Martínez). - Señor diputado Baylac: la Presidencia...

Sr. Baylac. — Señor presidente: antes de que proceda a reconvenirme, retiro el término "infeliz". Voy a decir simplemente: hombre feliz de estar entregando el país.

Yo no sabía que a Alfonsín le tenía que aconsejar que para poder mantener la patria, el territorio nacional y la soberanía no había que ir a los Estados Unidos a cantarle cuatro frescas a Reagan sino sacarse una foto con Bush para salir

en los grandes diarios y luego condecorar a los que son jefes de la banca extranjera, que viene a expoliar con el ajuste a los hombres y mujeres de mi patria. Tampoco sabía que para ayudar a la Argentina, del coraje y de los cambios tenía que dejar de cantar las marchas que habían gobernado la historia de los últimos 30 años defendiendo un proyecto nacional.

¡No se animan a cantar como antes "combatiendo al capital"! ¡Le están haciendo el juego al capital financiero que es precisamente el más improductivo que tiene una nación cuando se juegan como ahora los destinos del país y de los jubilados!

No sabía que si hubiera tenido ese recurso tecnológico del *replay* y pudiera utilizarlo tenía que decirle a Ubaldini, cuando convocaba a los trabajadores a defender sus derechos sociales y la Ley Sindical, que permanecieran por dos años los dirigentes votados en las federaciones, confederaciones y sindicatos como ahora ocurre.

No sabía que lo que había que hacer era convocar a la CGT para que nos diera estos argumentos que ahora le dan la bienvenida a la entrega. Recuerdo que en aquella Argentina estaba el plan de los treinta puntos de la CGT. ¡Esos sí eran anacronismos y no modernización! Nosotros buscábamos la privatización y la transformación del país, ¡claro que sí! Buscábamos la modernización de la Argentina, ¡claro que sí!

Por supuesto que recuerdo también algunos debates que aparecen por ahí como en chiste en la televisión, en esto de "Las patas de la mentira 2", donde se ve al vicepresidente de la República, Eduardo Menem, decir que iban a transformar la Argentina pero nunca para entregar el patrimonio nacional de los argentinos. (*Aplausos.*) Y la gente lo toma a risa, pero claro, les va bien. En la Argentina del presente, a los que desarrollan este argumento les va bien. Si no, miremos lo que pasó con Hipasam, en donde quedaron cinco mil trabajadores y siguen con el bombo combatiendo el capital. Hipasam ya desapareció y tuvo que salir un gobernador como Horacio Masacessi, poniendo lo que hay que poner, para salvar a esa gente, que si no me falla la memoria sigue siendo un buen radical que va a defender la fuente de trabajo y la solidaridad social.

Pero les va bien, ¿y saben por qué? Porque triunfa la tesis de los medios de comunicación en el sentido de que hay que profundizar el in-

dividualismo en la sociedad, y hacer una apuesta individual con el futuro. Se terminaron las apuestas colectivas y solidarias con los grandes valores de la Nación. Ahora hay una apuesta individual: mi destino me lo juego solo, y si le sale bien al "turco", en una de esas zafo. Vamos a quedarnos donde estamos, no hay problema, sigamos, en una de esas zafamos. Y así van pasando los meses y los días.

Yo hablo mucho, porque me gusta, con mis amigos los compañeros justicialistas de las bases y les pregunto: "¿Cómo votás a Menem vos que creés en un proyecto colectivo, en un proyecto nacional, en un proyecto de soberanía?", y me contestan: "Porque por ahí le sale bien". Entonces empecé a hurgar cómo era que este gobierno había conseguido semejante cosa en la sociedad, cómo había conseguido desmotivar los brazos de una sociedad para movilizarse por esos valores comunes, y cómo había conseguido desmotivar en la Argentina a una patria para defender los argumentos que no son comunes como proyecto de país. Esto se había conseguido a través de los medios de comunicación social. El principal medio es ATC, donde hay mecanismos de comunicación que han transformado los valores que venían de nuestros abuelos a los abuelos.

Recuerdo que de chico me decían "estudiá, trabajá, ahorrá y tendrás horizonte social en la Argentina". No entendía por qué razón en ATC se le decía a la gente "tímbeá, jodé y tendrás posibilidades de ser un hombre importante en la Argentina". Era porque había que implantar en la conciencia del pueblo argentino la dádiva por un lado y por otro la apuesta individual por el azar en el destino del país; era el triunfo de un país que está mecanizado precisamente para las desmotivaciones y las desmovilizaciones. No solamente las barras, los policías y las vallas son los que impiden llegar a los jubilados. Es la tortura de una sociedad. con testimonios permanentes de que para reclamar sus derechos la gente termina peleando, tirándose en el piso y golpeándose, como ocurre casi todos los miércoles. Siempre un incidente, y arriba de esa casa que está en la esquina del Congreso una cámara de televisión que sólo se dedica a filmar la angustia y la esperanza de los pobres jubilados cuando por allí algunos se enfrentan con otros. Incluso, se infiltran en el movimiento de los jubilados para generar una actitud que desmotive a esa viejita y a ese viejito que con muchas ganas y garra vendrían a defender sus derechos frente al Congreso.

Por eso le rompimos la primera **pata** cuando buscamos las firmas. ¡Se conmovieron ese momento el menemismo y el poder! ¡No podían impedir que la gente practicara una especie de votación al adherir con su firma al reclamo legítimo de los jubilados!

No tenían alternativa alguna, porque los partidos populares y los sectores del frente popular habían salido a la calle a juntar la voluntad del pueblo expresada en más de un millón de firmas, para que se replantea una entrega innecesaria del futuro del país.

Sin embargo, no los paró una movilización de sectores; no los paró una actitud como la de estar detrás de las cortinas aguardando que no logren quórum. Yo estuve detrás de las cortinas y lamento que hoy no esté aquí Julio Ramos para sacarme una foto en mi banca. ¡Estoy aquí testimoniando el "no", al desastre que están haciendo al entregar el futuro del país!

¡Estoy testimoniando el "sí" a la Argentina de la verdad y no a la Argentina de la mentira! Estoy con la Argentina de la verdad en la que el hombre y la mujer del común utilizan su trabajo, esfuerzo e inteligencia. ¡No estoy con la Argentina de la timba, la joda y las minas como pretende este gobierno! (*Aplausos.*)

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Baylac. — Estamos atravesando por un momento en el que las grandezas no importan. No busco la reelección como algunos. ...

Sr. Ayala. — ¡No le da para la reelección!

Sr. Baylac. - Volveré en 1995...

Sr. Ayala. — ¡Y será millones!

Sr. Baylac. — Por supuesto que seré millones.

Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia solicita a los señores diputados que eviten toda referencia personal.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Baylac. — Señor presidente: ¿qué ha pasado en la Argentina de hoy? Existen 250.000 obreros menos en el sector público, no hay trenes, no hay aviones, no hay transporte, y no hay rutas, salvo las que consiguieron con Dromi y Barra en los intersticios del entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos. ¡No hay producción! ¡Tenemos un déficit comercial de tres mil millones de dólares! ¡Importamos caca, huevos, pollos, calzoncillos usados, gomas usadas y todo tipo de porquerías!

Varios señores diputados. — También pollos.

Sr. Baylac. — ¡Qué fácil es gobernar en la Argentina de hoy! ¿Será por eso que el presidente Menem puede jugar al golf y puede arreglar-

se el cabello durante una hora y media? ¿Puede ser que sea tan brillante para los ojos de pocos y ofrezca tanta tristeza para el corazón y el sentimiento de la mayoría del pueblo argentino? (*Aplausos.*)

Aun en la pasión, aun en el grito destemplado siempre guardo en mi corazón un viejo testimonio que aprendí de un gran líder de mi partido: Ricardo Balbín. En un momento de la historia Balbín se abrazó con Perón no para convalidar una entrega del patrimonio nacional sino para consolidar un proyecto de la mayoría al servicio de la causa del pueblo.

Me voy a seguir abrazando al justicialista que es hombre de mi tierra y que piensa en su historia, que defiende su patria, pero que sigue al servicio de la causa del pueblo que nunca debemos abandonar.

Por un minuto les pido que le pongan al presidente de la República una remera que se ha hecho popular por su leyenda: "Menem 1995". Pero lo único que les tengo que pedir es que cambien la leyenda y le pongan: "Mienten 1995", porque esta Argentina es la Argentina de la mentira y no la de la verdad. Es la Argentina que ni siquiera permite gozar del privilegio de conseguir con el trabajo y el esfuerzo diario un horizonte social mejor. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente: si hay algo que causa admiración y merece ponderación es el esfuerzo físico que han hecho los dos últimos oradores. (*Risas.*)

Sr. Canata. — Ahora va a dar la bendición...

Sr. Durañona y Vedia. - Además, bendigo al señor diputado Canata todas las veces que quiera porque bien lo necesita.

Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia ruega al señor diputado que no dialogue con sus colegas.

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Durañona y Vedia. — De acuerdo, señor presidente; de ahora en más me voy a dirigir a la Presidencia.

Una vez más se cumple una vieja tradición de esta Cámara que tiene que ver con el tiempo que llevamos sesionando, lo avanzado de la hora y la proximidad de la votación. En todos los grandes debates de los últimos años ocurrió lo mismo: desaparece el tema que está en consideración y surge una especie de debate político enconado, lleno de reminiscencias, en el que los oradores se desgañitan, hacen toda clase de piruetas físicas en sus bancas y quieren pasar revista -sucintamente y en forma acalorada- a toda una serie de episodios

donde todos hemos tenido alguna participación y responsabilidad.

Pero así como me ha impresionado mucho la expresión física, diría que no me han conmovido en absoluto los argumentos vertidos, pues se trata de una reiteración. Basta leer los Diarios de Sesiones del año 1983 en adelante, por ejemplo, para comprobar que este debate siempre se ha reproducido con similares características. La diferencia está en que a veces han sido mayoría los diputados que ahora están a mi izquierda -sin que esto tenga connotación política- y otras los que están a mi derecha.

Sr. Presidente (Martínez). - Con todo respeto, señor diputado, esta Presidencia le va a formular dos preguntas. La primera de ellas es si va a conceder interrupciones, y la segunda, si se va a atener al tema en debate.

Sr. Durañona y Vedia. - Señor presidente: considero impertinente —en el sentido castizo del término— su segunda pregunta, porque estamos en un debate libre, y como hombre libre voy a hacer ejercicio de los mismos derechos de que gozaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Martínez); — ¿Va a conceder interrupciones, señor diputado?

Sr. Durañona y Vedia. — Sí, señor presidente, porque ésa es mi costumbre.

Sr. González (L. M.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Durañona y Vedia. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Martínez). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. González (L. M.). - Señor presidente: esta Cámara sabe del respeto que siento por quien he propuesto sea el control de calidad de este cuerpo -proposición que ha sido aceptada-, pero a pocos meses de terminar mi mandato tengo miedo de que el control de calidad se nos muera esta noche de un ataque de importancia. Entonces, le pediría que modere sus expresiones tan importantes porque me llena de congoja pensar en la posibilidad de que eso hecho se produzca. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Martínez). - Esa es la causa por la cual la Presidencia le hizo la segunda pregunta, señor diputado Durañona y Vedia.

Sr. Durañona y Vedia. — Pero precisamente esta causa es lo que motiva que sigamos con lo que estamos haciendo, porque, así se pone ameno el debate a esta hora de la noche. Llegué a las 10 de la mañana, de manera que me parece

que podemos tener un momento de esparcimiento.

No sé si alguna vez estuve cerca de un ataque de importancia. Puede ser desde que el señor diputado Luis González me ha calificado en la forma que ahora acaba de hacerlo, lo cual me llena de orgullo y regocijo, pero sí reconozco que muchas veces he estado cerca de morir de un ataque de risa por las expresiones con que nos regala asiduamente el señor diputado por Santa Fe. (*Risas y aplausos.*)

Continúo con mi exposición, y espero que el señor presidente no se impaciente porque seré breve. Decía que no me conmueve este espectáculo que acabamos de presenciar, porque sabemos muy bien que después, a horas más avanzadas, se despierta alguna vena sensible en los partidos mayoritarios que terminan recordando sus abrazos históricos y haciendo alusión a todas las veces que han trabajado por este país y por la democracia. Muchas veces hemos tenido en este recinto las muy gratas palabras, que siempre recordaré con todo gusto, del entonces diputado Juan Carlos Pugliese cuando decía: señores diputados de las expresiones populares, lleguemos a un punto de referencia, no dejemos que se metan entre nosotros los liberales malintencionados; y siempre hacía un himno a la expresión mayoritaria de los partidos.

También me sumo a eso porque reconozco que hace 50 años que el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical son los mayoritarios en la Argentina y por ello hice revista a este pasado reciente. Cuando el radicalismo ha estado en el gobierno, el justicialismo ejerció en ocasiones un accionar muy parecido al que utiliza hoy la Unión Cívica Radical, siendo gobierno el justicialismo, y así podemos seguir hablando sobre las distintas etapas de la vida institucional.

Recuerdo también cuando en los años 1988/1989 eran tratados los paquetazos impositivos que llegaban cada dos meses porque era necesario tapar rápidamente los agujeros que provocaba el gasto y que generaban la hiperinflación. Muchas veces me he retirado del recinto porque se cerraba el debate y no se permitía hablar respecto de determinadas iniciativas que dieron lugar a toda clase de injusticias.

Recuerdo asimismo cuando fue tratado un decreto que determinaba que los jubilados no tenían derecho a hacer juicio para que se les reconocieran sus acreencias en los tribunales, aunque también este Congreso dejó sin efecto dicho decreto, incluso con el voto de la Unión Cívica Radical.

Quiero señalar que en estos días se han festejado, se han conmemorado los diez años de ejercicio

democrático, porque es cierto que cuando la intransigencia, la intolerancia, la obstrucción, la oposición sistemática alcanzaron en la vida argentina a alguno de estos partidos mayoritarios cuando fueron oposición, eso costó horas muy amargas. Entonces, me parece que no hay derecho a crear un sistema que permita el resurgimiento entre nosotros de esas épocas de antagonismos estériles. Entiendo que estos debates, esta profusión, son más bien el producto de un ademán teatral.

Hay que tener un poco más de respeto por el pueblo que representamos, y no hacer de esta opinión un artificio incomprensible, que sólo se entiende dentro de estas paredes y afuera no lo comprende nadie. Estamos cundiendo el desprestigio de la actividad política, del Congreso y de la tarea en la que hemos puesto nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y nuestro corazón.

Por eso creo que hay que abandonar estas prácticas. La Unión Cívica Radical favoreció e hizo posible el gobierno del justicialismo. Así lo ha dicho muchas veces el ex diputado Jaroslavsky, expresando que no podía poner piedras en el camino de quien gobierna, cuando ni siquiera, tenía quizás un proyecto alternativo.

En estas bancas el ex diputado Jaroslavsky dijo que el gobierno iba a tener el número que el pueblo había acordado en una elección para no impedir su tarea. Así se dictaron las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado. De ese modo se pudieron hacer las privatizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a creer ahora que la Unión Cívica Radical entiende que hay una entrega del país y un desmoronamiento de todo? Si así fuera, un partido de ese arraigo y tradición jamás habría facilitado o promovido que se dictaran esas leyes; tampoco habría permitido que se hicieran posibles esas medidas de gobierno.

Entonces, debe existir un poco más de seriedad, reconociéndose esos hechos, nuestra democracia y lo que son las mayorías. Es necesario tener un poco más de respeto por nuestra propia función. Yo mismo, por respeto a ella, voy a dejar de hacer uso de la palabra.

Quería referirme a graves aspectos que presenta esta iniciativa en materia del régimen patrimonial de los fondos de administración, que es extraño a nuestro derecho. Incluso, la norma da una solución peligrosa para el futuro de esos fondos. De todos modos, voy a dejar el tema para la discusión en particular.

Deseo que mi palabra sirva -sencillamente y sin ataques de importancia- para que la Cámara vuelva al curso normal de las cosas. Quiero que

los partidos mayoritarios concreten entre ellos el hecho que significa representar al pueblo en la magnitud en que ellos lo hacen. Desde mi posición política considero que desde esa base es posible cimentar el futuro y la grandeza de nuestra patria, a que se refería el señor diputado Castillo, escribiendo entre todos la historia de un destino común. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra. la señora diputada por la Capital.

Sra. Kelly. — Señor presidente: hoy me dirijo a esta Honorable Cámara por primera vez para intervenir en este debate, que por su importancia marcará una divisoria de aguas en la historia política de nuestro país.

Se trata no sólo de un debate que pone al descubierto intereses sectoriales de una magnitud que raramente tienen la posibilidad de enfrentarse públicamente, sino que constituye una discusión sobre ideas trascendentes, que contribuirán a establecer las bases fundamentales de la convivencia social en la Argentina.

Se trata —ni más ni menos— del debate de uno de los elementos más importantes del nuevo contrato social. Me refiero al concepto rousseauneano que lentamente va conformándose a medida que avanza el juego institucional de la democracia.

Existen dos modelos de contrato. En uno de ellos el Estado desaparece ante la demanda de justicia social y deja librado al mercado la resolución del conflicto de intereses. El otro, al que adhiero, implica que el Estado tiene una presencia irrenunciable para garantizar la vigencia y cumplimiento de los derechos sociales. Por ello es necesario que este debate no se trivialice dando a esta iniciativa el carácter de un proyecto de ley como cualquier otro, como pareciera es el espíritu que anima al menos a numerosos diputados y no al oficialismo en bloque.

No en vano la Asamblea Constituyente de 1957 incluyó como una de las responsabilidades más importantes del Estado proveer a la seguridad social de nuestro pueblo, en un mismo pie de igualdad que su obligación de garantizar la administración de justicia, la defensa, la educación y tantas otras obligaciones allí definidas como propias de lo que ahora llamamos el rol del Estado.

Este debate, ya muy degradado habida cuenta del procedimiento antirreglamentario con que se manejó el oficialismo para su tratamiento en comisión, se está dando ahora en el marco de un diálogo de sordos, teniendo en cuenta el abroquelamiento del gobierno en sostener cueste lo que cueste una privatización —la mayor de ellas—

que constituye un verdadero salto hacia el vacío en el campo previsional.

Nadie niega al oficialismo su papel en el funcionamiento de la democracia argentina en su carácter de bloque mayoritario, pero lo que está en discusión es un proyecto de ley de una importancia singular que no sólo requiere el apoyo del justicialismo —dudo aún que todos sus miembros estén de acuerdo con él en el fondo de su corazón—, sino también un consenso indispensable en este recinto y en el Senado de la Nación, pero asimismo en la sociedad, donde obviamente no se registra, tal como lo demuestran las más de un millón de firmas pidiendo una consulta popular para frenar la iniciativa del gobierno del presidente Menem.

No puede haber fisuras que dividan prácticamente por mitades a quienes estamos en contra de la privatización de aquellos que están a favor de ella. Esto no constituye una base sólida para asentar el funcionamiento de un sistema de previsión social.

Se trata además de asegurar el destino de una enorme masa de dinero —no quiero ahora aventurar cifras, pero se cuentan por decenas de miles de millones de dólares en los próximos 20 años— que constituye además la casi totalidad del ahorro interno dada la crisis económica estructural que soporta nuestro país desde fines de la década del 70.

Considero que el gobierno se ha embarcado en esta aventura con una frivolidad considerable. Uno tiene la sensación de que se ha abrazado a esta privatización como una tabla de salvación, poniendo dudas a la credibilidad de su política económica, como si no se estuviesen obteniendo los resultados esperados. Esta impresión se agrava cuando los funcionarios del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos explican que es el Fondo Monetario Internacional el que estableció la necesidad de la privatización del sistema previsional, poniendo un velo de despersonalización para la discusión de esto problema. Sería algo así como decir: no soy yo quien lo dice, es el gran rey de Borgoña. Se induce al principio de autoridad para afianzar su intento de terminar con la era de la previsión social y comenzar la era del mercado de capitales. En esta encrucijada uno puede imaginar al Ministerio de Economía intentando zanjar el enfrentamiento entre los sectores interesados en esta reforma para resolver favorablemente a juicio del Ejecutivo los graves problemas económicos inmediatos que debe afrontar este gobierno hasta el año 1995.

Nosotros, que constituimos casi la otra mitad de esta Cámara, que no compartimos esta forma trivial de resolver los grandes problemas del país, nos preguntamos dónde queda situada la previsión y seguridad social. Esta ni siquiera es la política del pan para hoy y hambre para mañana. Es la política del hambre para hoy y del hambre para mañana. Es la política del "después de mí, el diluvio".

La previsión y la seguridad social están consagradas como derechos inalienables de los ciudadanos en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. ¿En qué jerarquía queda situada nuestra Carta Magna? Ya sabemos cuál es el valor que el Poder Ejecutivo nacional otorga a las normas constitucionales. Por eso es necesario alegar aquí que con este proyecto se viola el artículo 14 bis.

Me parece muy importante recordar que la naturaleza del sistema previsional ya está definida por nuestra Constitución y ninguna ley puede alterarla. Dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional: "...el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados, sin que pueda existir superposición de aportes...".

Ninguna de estas condiciones es cumplida por el proyecto. Bien dice el señor diputado Olivera que este proyecto también viola el artículo 14 de nuestra Carta Magna, que protege a los habitantes de toda norma emanada de cualquier autoridad—incluso de nosotros— tendiente a obligarlos a asociarse con entidades privadas. Remarcó el señor diputado Olivera que en tal sentido existe una constante y pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La materia de la que trata este proyecto -previsión y seguridad social- no debe ser presa fácil de los sectores económicos -del gran poder económico- que intentan siempre manejar los hilos del poder político en nuestro país, que ahora se escudan detrás del oficialismo para privar a los hombres pequeños como nosotros, que no tenemos ese poder, de todo beneficio de seguridad integral, irrenunciable y garantizado por el Estado.

Puedo imaginar el hervidero de dudas e incertidumbres que se generarán con este proyecto de ley. Si uno de los objetivos del gobierno es la estabilidad económica, este instrumento legal generará una gran inseguridad jurídica de difícil

definición, una nueva vuelta de tuerca a la tan precaria seguridad jurídica general.

La letra y el espíritu de la norma constitucional son claros y difíciles de torcer. Allí afuera, la mayoría está con nosotros y muchos comenzarán una movilización con los mecanismos legales y constitucionales, a su alcance para impedir la concreción de esta nueva frustración de las clases populares de este país, a quienes representamos por medio de un mandato cuyo cumplimiento es sagrado,

A propósito de este tema del mandato existen quienes creen que el pueblo les ha otorgado con su voto un cheque en blanco y se ufanan proclamando que en sus campañas políticas no dicen la verdad de cuáles serán las políticas que aplicarán si ganan las elecciones porque si las hubieran dicho el pueblo no los habría votado.

Nosotros no votaremos favorablemente este proyecto porque pensamos que es inconstitucional e impopular, porque es violatorio de la Constitución y contrario a los intereses populares.

(Aplausos.)

Ya lo dijeron otros miembros prestigiosos de esta Cámara, muchos pertenecientes a otros bloques, como los diputados Fontela, Estévez Boero, Bravo, López de Zavallía, Martín de De Nardo, Martínez Raymonda, y tantos otros pertenecientes a la bancada radical, como los diputados Moure, Olivera, Ricardo Héctor Vázquez y Ceballos: esta Cámara debería abocarse a sancionar un proyecto que tienda a resolver los problemas que presenta el actual sistema previsional para que el sistema de reparto y de universalidad, fundado en la solidaridad, se convierta en un sistema eficiente para lograr los fines de la previsión y la seguridad social.

El señor diputado Moure aludió al éxito del gobierno en convertir a la DGI en una agencia recaudadora eficiente, y afirmó que el Estado posee los medios para garantizar la eficacia recaudadora de la que hace gala y que yo celebro.

Sr. Presidente (Martínez). - La Presidencia advierte que hará desalojar el palco bandeja si vuelve a advertir molestias para el normal desarrollo de la sesión.

Sra. Kelly. — Por su parte decía el señor diputado Olivera que se puede conseguir un mercado de capitales sin extinguir para siempre — como seguramente ocurrirá si se sanciona este proyecto— el sistema previsional. Puntualizaba Olivera. que ello puede lograrse con medidas tendientes a aumentar la credibilidad de nuestro país, desterrando la inseguridad jurídica y

asegurando la estabilidad económica con un crecimiento del sector productivo.

Quisiera referirme al esfuerzo de algunos diputados que antes se oponían al proyecto oficialista y ahora se han adherido a la posición de la bancada mayoritaria. Las enmiendas presentadas por el señor diputado González Gaviola introducen elementos de confusión y dudas muy grandes. En primer lugar, la forma de su presentación se presta a las dudas propias de su estado: no se sabe si cuentan o no con el apoyo del bloque mayoritario. Se trata de enmiendas que tienen poca credibilidad porque se suceden las versiones sobre el veto presidencial. Pero lo más importante es que las enmiendas introducen variantes que desnaturalizan tanto el sistema privado contenido en el proyecto del Poder Ejecutivo nacional como el sistema vigente que debe modificarse pero de una manera coherente con el sistema estatal.

Pienso que es poco serio que estemos discutiendo el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo por un lado y por el otro un conjunto de enmiendas incompatibles con él y que reflejan claramente la acción de un lobby activo unido a las contradicciones propias de quienes en el bloque mayoritario y en silencio no apoyan el proyecto.

Por todo eso insto a los señores diputados del oficialismo a que declinen su actitud de imponer por un voto escasamente mayoritario esta ley inicua y perversa, y a que acepten el regreso a comisión del proyecto. De no ser así, desde ya adelanto mi voto negativo. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. González (L. M.). - Señor presidente: voy a. Ser breve en mis expresiones.

Reiterando algunas opiniones que ayer vertí en las explicaciones del artículo que hace referencia a la cartera...

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. González (L. M.). - Señores diputados: a mí me enseñaron que los descamisados son los que están junto al pueblo, y yo trato de estarlo. Además, todavía no tengo Movicom ni acepto que me lo quieran prestar. Usted, señor diputado Cabrera, a pesar de ser miembro informante del dictamen no ha tenido éxito con el "Lole". Si usted quiere, le puedo dar una mano, pues yo soy de Santa Fe y lo conozco del Lawn Tennis y del Jockey Club. Si me dejan hablar mínimamente, voy a explicar lo que ayer tratamos de decir cuando se hizo referencia a las modificaciones

introducidas en relación con las carteras que se permiten a los fondos de pensión.

Tenemos que analizar el tema de los jubilados desde la lógica interna del mercado de capitales. Resulta ser que la mayor expectativa alrededor del sistema jubilatorio reside en dotar a la economía argentina de un mercado de capitales dinámico.

Yo decía ayer que cuando se disminuye el porcentaje de títulos públicos del 80 al 30 por ciento, que algunos lo han reivindicado como una cuestión sana, lo que en realidad se está haciendo es disminuir la capacidad de endeudamiento del Estado para poder pagar o para mantener el sistema actual de jubilaciones; el grueso de los títulos va a ser tenido en las carteras de los fondos de pensión y el Estado va a tener que pagar religiosamente los cupones de amortización y los intereses. Es decir que se perjudica la posibilidad de endeudamiento del Estado.

Por otro lado, al aumentarse la posibilidad de tener en la canasta de los fondos de pensión el 20 por ciento de certificados a plazo fijo en tanto y en cuanto esos fondos sean volcados a las economías regionales, se está desconociendo que éstas no pueden depender, en esta instancia de crisis, de las reglas del mercado. Como bien señaló la señora diputada Troyano, la reactivación de las economías regionales requiere de subsidios por parte del Estado, y el mercado no puede otorgarlos. En consecuencia, creer que el alimento de ese porcentaje va a beneficiar a las provincias, es una equivocación. Ello no favorece ni al Estado ni a las economías regionales ni a las empresas privadas emisoras de acciones en el mercado de capitales,

-Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, doctor Carlos Federico Ruckauf.

Sr. González (L. M.). - Nadie que tenga conocimientos mínimos sobre el funcionamiento del sistema financiero vinculado con el proceso de "securitización" -es decir, de la utilización de las técnicas del mercado de capitales en el sistema financiero- puede ignorar que no existe posibilidad alguna de que las empresas puedan emitir acciones u obligaciones negociables en el volumen sustitutivo de la disminución de los títulos públicos en la medida en que se produciría un crecimiento del capital financiero desvinculado del capital productivo. Esto provocaría lo que ocurrió hace poco en la Bolsa de Comercio, que es la pinchadura de la burbuja elaborada a través de las cauciones, pases y operaciones a cinco días que llevaron al *boom* de la Bolsa; a Martín Redrado, a ser primera

estrella de la política argentina; al presidente Menem, a comprar cinco mil dólares en acciones de la empresa telefónica; a los bancos, a prestar dinero a los pequeños ahorristas para que compren acciones que hoy valen la mitad respecto de aquel momento y que le costó la pérdida de dos acciones del mercado de valores a uno de los más expertos operadores de Bolsa de la Argentina que propiciara la ley de fondos comunes de inversión, el señor Castro Corbat, o sea que tampoco beneficia a las sociedades anónimas emisoras de títulos. Al crearse una canasta o cartera que pone como tope un 30 por ciento para los títulos públicos, se están violentando normas mínimas de seguridad y utilidad de los fondos.

Yo pregunto a cualquiera de los señores que usan Movicom y tienen acciones en la Bolsa —y que a veces hacen las operaciones desde el mismo comedor de nuestra Cámara de Diputados— en qué fondo común de inversión que autolimite su cartera de títulos públicos en un 30 por ciento invertirían. Estoy a disposición de quien quiera contestar esta pregunta.

Es decir que este toque, retoque y recontratoque de la ley está produciendo ...

Por favor, señor presidente, solicito que la gente que está en el palco bandeja no interrumpa.

Decía que el toque y retoque de esta ley está llegando a términos de irracionalidad desde la lógica propia del mercado de capitales porque quienes van a invertir en los fondos son aquellos pequeños ahorristas que ...

—*Varios señores diputados pronuncian palabras que no se alcanzan a percibir.*

Sr. González (L. M.). — Sí, fue asesor de nuestro gobierno y tiene trabajos escritos con un amigo mío de Santa Fe que nada tiene que ver con lo que estamos haciendo acá: el doctor Schulthess, de Marcos Juárez.

La lógica interna de la economía de mercado está siendo violentada en términos tales de perjudicar al inversor. Todo el sistema de la ley 17.811, que regula el mercado de capitales, tiene como bien jurídico protegido la buena fe del ahorrista en la oferta pública, y cuando desde una ley se está violentando al mercado lo que se está haciendo es perjudicar las posibilidades de rentabilidad de los fondos que van a aportar los futuros jubilados.

Me duele enormemente que esta noche tenga que hablar en términos técnicos sobre el tema del mercado de capitales porque aquí se ha producido una absurda tergiversación del debate. Mientras los jubilados quieren soluciones al problema previsional y los que no somos jubilados queremos previsiones para el futuro, los operadores económicos que también usan Movi-

com se comunican permanentemente con esta Cámara para saber si el proyecto va a salir sancionado.

¡Cómo no va a tener usted Movicom diputado Piotti, si es el arquetipo del Movicom en la Argentina! Y yo no estaría tan orgulloso de andar mostrándolo porque en realidad siempre digo que hay mucha gente a la que la prefiero con un revólver y no con un Movicom.

Desde la lógica interna del mercado de capitales se produce la insensibilidad. Cuando se discute el tema del sistema de reparto o del sistema de capitalización, lo que se está discutiendo en realidad es si estamos en el campo de la previsión social o de las finanzas.

Entonces, y para terminar... (*Aplausos.*) Entonces no voy a terminar porque cuando ustedes me aplauden es que estoy mal.

Sr. Presidente (Ruckauf). - La Presidencia solicita a los señores diputados que respeten al orador.

Sr. González (L. M.). - Tanta cháchara, tantas nubes de Ubeda, tanta confusión de confusiones como se llama un libro de cabecera que tienen todos los operadores de bolsa, cuya lectura recomiendo a los señores legisladores que tan preocupados están por el mercado de capitales - ¡Mongo mercado de capitales!-, sólo sirven para ocultar lo que en realidad está en juego aquí, es decir, quién va a administrar el ahorro de los pobres en la Argentina, porque los que ahorran en nuestro país no son los que usan Movicom sino los que están pensando en su futuro. Precisamente de ellos se llenó la plaza 25 de Mayo de La Rioja por la huelga de los trabajadores del Estado y la convocatoria de la CGT en una multitudinaria movilización, donde se pidió al gobernador de La Rioja que se dirigiera al Congreso para que no sancionara el proyecto oficial. .

Por un lado están los grupos económicos que se aprestan a apropiarse del ahorro público y por el otro los humildes trabajadores de La Rioja. Quiero decir, que si bien los operadores económicos son muy inteligentes el pueblo de La Rioja es sabio, pero no es del Partido Blanco de los jubilados.

Sr. Presidente (Ruckauf). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. - Señor presidente: probablemente estamos discutiendo aquí el tema más preocupante de nuestra agenda social. En la Argentina de hoy los mayores de 65 años son el 9 por ciento de la población, es decir que algo más de tres millones de personas son los que cobran ju-

bilaciones o pensiones. También los pensionados son casi un 5 por ciento de la sociedad. Esta gente está percibiendo actualmente haberes mínimos del orden de los 150 pesos, llegando, algunos de ellos a los 200 si se consideran los subsidios, con un haber promedio de 230 pesos. Esta gente se enfrenta todos los días con una canasta familiar que en la más moderada de las estimaciones ronda los mil pesos para cubrir las necesidades mínimas de consumo. Esto es lo que precisamente estamos discutiendo: una de las facetas de la pobreza de la sociedad argentina.

La mayoría de los jubilados son pobres, y también una porción importante de los pobres de la Argentina son jubilados. En esta clasificación que nadie quiere sostener hay dos tipos de pobres, dos tipos de carenciados: los pobres estructurales y los que han venido a ser nuevos pobres. Los pobres estructurales son los que nunca han accedido ni han tenido la posibilidad de disponer de alguno o todos los servicios básicos que debe ofrecerles una sociedad moderna; éstos son los verdaderos carenciados.

Por otra parte, los nuevos pobres son aquellos que habiendo tenido acceso a estos servicios básicos que les brinda la sociedad moderna hoy se encuentran con que sus ingresos no les garantizan cubrir los mínimos de subsistencia. No hay duda de que casi todos los jubilados están en estas condiciones, es decir, son fundamentalmente nuevos pobres.

Este tema de la pobreza de nuestros ancianos y de las dificultades para resolver sus problemas no es un asunto que lo está discutiendo sólo la Argentina. En nuestro país, como en otros países de América latina y varios de la periferia, la discusión alcanza un tono dramático. Sin embargo, aun alejándose de la periferia hay una discusión cada vez más creciente acerca de cómo enfrentar este problema que tienen las sociedades más evolucionadas como las europeas o incluso la americana.

Hay dos fenómenos que comienzan a incidir en los sistemas previsionales —que se han mencionado reiteradamente a lo largo del debate— y que modifican las tendencias de su funcionamiento. Son las tendencias demográficas de la población y las condiciones de desenvolvimiento de la economía mundial. En las sociedades capitalistas modernas hay dos fenómenos fundamentalmente determinantes: en una sociedad capitalista cada persona le vende al mercado una forma especializada o simple de trabajo, y toma del mercado lo que necesita para consumir. Por eso en este tipo de sociedades no hay autosuficiencia individual. Por otro lado, sería

inconveniente ir hacia esa autosuficiencia individual cuando se buscan fenómenos colectivos para mejorar la productividad y el estándar de vida de esta sociedad. Sin embargo, este fenómeno tan particular de tener que vender trabajo y recibir bienes es un fenómeno muy grave para los desposeídos porque ellos son los que no tienen otra oportunidad de poseer otros ingresos que no sean los de la venta de su trabajo para adquirir los elementos mínimos para la subsistencia.

La gente sólo puede trabajar en determinada etapa de su vida. No me refiero desde luego a quienes tienen la fortuna de poseer patrimonios, ser terratenientes y que no necesitan recurrir a su trabajo para sostenerse en la niñez o en la vejez. Pero ésta lamentablemente es la situación de los menos. La situación de los más es la de los trabajadores comunes, que las sociedades tienen que ir resolviendo. Frente a esto hay múltiples vías de ataque del problema que responden a razones culturales, económicas y de distinta índole. Hay sociedades como la japonesa donde el sostenimiento de los ancianos es una tarea que corresponde fundamentalmente a los jóvenes de la familia.

Hay sociedades, como la de los Estados Unidos de América, donde el sostenimiento de la vejez encuentra fundamentalmente su asiento en la capacidad de ahorro de la población —ahorro personal o ahorro familiar—, que induce a que un individuo tenga la posibilidad de generar para su vejez un mejor pasar invirtiendo en propiedades, ahorrando en títulos o realizando inversiones financieras.

Otros países —casi todos los europeos y muchos de nuestra América— están adheridos a sistemas previsionales fundamentalmente públicos que les garantizan una vejez más o menos digna a los que no pueden ahorrar. En general se trata de un sistema público basado en un principio que se ha citado muchas veces en el debate: el de reparto, donde todo trabajador aporta una parte de su ingreso para sostener a aquellos que ya no están en el tramo de la vida activa, posibilitando de esta manera a quienes no tienen trabajo en el mercado un ingreso mínimo para su subsistencia.

Frente a este sistema se alza el otro sistema, que es de ahorro y capitalización, donde no ya un conjunto de hombres y mujeres solidariamente unidos realizan el esfuerzo de aportar para quienes abandonaron la vida activa, sino que cada uno de los trabajadores individualmente ahorra para tener la posibilidad de una renta en su vejez.

Lo primero que hay que preguntarse cuando se trata de decidir por qué sistema optar es,

precisamente, cuál es la capacidad de ahorro que tienen los sujetos a los que se dirige el sistema, porque de lo contrario esto puede ser un estéril combate teórico que no nos conduzca a ninguna parte. Fíjense que donde los ingresos son extremadamente bajos ya ni siquiera se piensa en la vejez. Es lo que pasó con los "tigres asiáticos" en su primera etapa de formación, cuando la gente era tan pobre que no tenía siquiera capacidad de ahorro, lo que le impedía pensar en instaurar un sistema previsional de reparto y mucho menos de capitalización. Esto queda para países con cierto grado de desarrollo; pero en esos países mucho más pobres el sostenimiento de la vejez se reduce al auxilio de la familia.

Cuando pensamos en los sistemas de ahorro, que tanto han ocupado a la Argentina en los últimos tiempos e impregnado a los proyectos oficialistas, se ingresa en un terreno en el que es fácil sufrir de ilusiones ópticas. Hay que pensar que un hombre o una mujer tienen 40 o 45 años de vida activa y pueden tener de diez a quince años de vida pasiva. Por lo tanto, en cada uno de esos extremos -40 o 45 años de vida para el activo y 10 o 15 años para el pasivo- se quiere resolver todo mediante el ahorro. Para atender su vejez una persona tendría que ahorrar entre el 19 y el 32 por ciento de su salario. Pero para ello debería contar con una varita mágica que le posibilite que el ahorro de esos 40 a 45 años mantenga un valor real. De esa forma, durante los diez o quince años de vida pasiva, podrá tener una jubilación que equivalga al 85 por ciento de los ingresos que tuvo mientras estaba en actividad. Esto es así porque, si bien en la Argentina la esperanza de vida al nacer es de 68 años para los varones y de 74 para las mujeres, cuando se llega a los 65 años la esperanza de vida es de 14 años más para los hombres y de 17 más para las mujeres.

Es decir que la esperanza de vida que se tiene al nacer -aquí hay que tener en cuenta que se debe atravesar la etapa en que se produce una gran mortalidad infantil- es distinta a la de la persona que llega a los 65 años, con lo cual en materia de ahorro siempre estamos cerca de la hipótesis más desfavorable, tanto en cuanto al plazo de vida activa como al de vida pasiva.

Para decirlo de un modo más claro, señor presidente, si yo trabajara cuarenta años de mi vida y decidiera retener el 8 por ciento de mi sueldo, al final de mi vida activa acumularía 42 salarios. Si luego de jubilarme viviera 10 años -no 15- y quisiera cobrar durante esos 10 años el 80 por ciento del salario que percibía mientras estaba en actividad, tendría que juntar 108 salarios. Pero

acumulando el 8 por ciento apenas he juntado 42, por lo que me faltarían 66 salarios para cubrir nada más que los 10 años.

En el proyecto del gobierno esa diferencia la cubre virtualmente en forma central un milagro llamado capitalización. Y hay ejemplos bien gráficos al respecto. Si yo estuviera obligado durante cuarenta años de mi vida activa a ahorrar el 10 por ciento de la sal que consumo, juntaría nada más que 4 años de sal, pero necesitaría que esa sal se multiplicara milagrosamente para cubrir no ya 4 años sino los 10 años de mi hipótesis. Aquí entra en escena el sistema de capitalización que, a semejanza del relato bíblico, sería capaz de multiplicar los panes y los peces.

Sin embargo, señor presidente, el sistema de capitalización es de una gigantesca incertidumbre, porque es extremadamente sensible a un factor muy volátil, fluctuante y difícil de determinar, cual es la tasa de interés; mucho más cuando el ejercicio de determinación no es de corto plazo sino que pretende anticipar lo que va a ocurrir, no ya durante uno o dos años sino durante 40 o 45.

La tasa de interés de largo plazo es la más difícil de calcular para hacer un ejercicio de simulación de cómo funciona en el largo alcance un sistema de capitalización. Nosotros hemos hecho algunas simulaciones matemáticas y hemos llegado a la siguiente conclusión. Si uno pretendiera con el sistema de capitalización resolver los problemas de la vida pasiva de un trabajador, con 40 años de aportes y una tasa de interés situada entre el 0 por ciento -es decir, una tasa neutra que preserva los ahorros de la inflación-, y un 2 por ciento real -esto significa que hay un rendimiento del 2 por ciento sobre la inflación-, resulta que para alcanzar una jubilación del 80 por ciento del sueldo en actividad necesitaría entre un 24 y un 44 por ciento de aportes sobre su salario; esto depende de si la tasa es neutra o si se trata de una tasa real del 2 por ciento sobre la inflación.

Ahora pensemos en nuestro país para ubicarnos en el contexto de a quiénes obligamos a hacer ahorro y dentro de qué sistema. En nuestro país el salario promedio es de alrededor de 500 pesos, con canastas mínimas de consumo de mil pesos en la más favorable de las hipótesis; es decir, si quisiéramos resolverlo por la capitaliza-

ción le tendríamos que pedir a alguien que no tiene capacidad de cubrir su consumo mínimo, que está en la mitad de su consumo —ese es el promedio en la Argentina—, que ahorre entre el 24 y el 44 por ciento de su salario, lo que aparece a primera vista como un despropósito.

Cuando tomamos tasas del 2 por ciento, que no coinciden con estudios —que muchos de los señores diputados habrán visto— hechos al 3, al 5, o al 7 por ciento, lo que pretendemos es reflejar las tasas que la ciencia actuarial recomienda para el largo plazo. Lo ha dicho en el seno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social un actuario de jerarquía internacional como el doctor Somoza. Pero fíjense que el gobierno nos ha enviado hace poco tiempo una proyección que tiene más o menos el mismo sentido.

A raíz de la batahola por el famoso artículo 39, cuyo humo no termina de esclarecerse, el secretario de Seguridad Social envió a muchos de los diputados que integramos aquellas comisiones un trabajo encargado a un doctor, el consultor Martín Navarro, por intermedio de un organismo multilateral.

En ese trabajo el consultor expresa que, a raíz de que el Banco de la Nación Argentina ofrecería una garantía semejante al interés que fija la Caja de Ahorro, esa tasa en la Argentina ha sido neutra o levemente negativa y, lo que es más importante, que ese también puede ser su comportamiento futuro.

Dice en su trabajo que esta tasa de interés es la que pueden obtener las administradoras de fondos de pensión que actúen con eficiencia, y que dicha tasa es probablemente igual al piso del 70 por ciento del promedio del sistema de las administradoras de fondos de pensión, que es lo que fija el mínimo que cualquier administradora está obligada a ofrecer.

Para completar una interesante conclusión, el trabajo habla de otra gama de inversiones que no se rigen directamente por la tasa de interés. Las acciones son descartables como inversión que busca beneficios seguros precisamente por su alta volatilidad. Es decir, con la tasa neutra que menciona el trabajo de Martín Navarro y 40 años de aportes al sistema de capitalización, el trabajador sólo recibirá el 18 por ciento del salario que cobraba al cese de su vida activa, siempre que uno considere la capitalización exclusivamente.

He aquí el primer problema. El fuerte ahorro que hay que realizar para sostenerse en la vejez no puede ser afrontado por los sectores de menores

ingresos. Esto es lo que justifica en gran parte la evasión previsional, que según los propios funcionarios del gobierno todavía ronda el 40 o 50 por ciento de los actuales aportantes.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Baglini. —El sector de más bajos ingresos ni siquiera puede aportar el 11 por ciento que reclama el actual sistema basado en la solidaridad, y prefiere exigirle al patrón que le dé salario y empleo antes que cumplir con las obligaciones previsionales. Esto se va a dar en cualquier sistema: en el de reparto o en el de capitalización, Voy a volver al argumento de que es imposible pedir a un trabajador que resuelva el problema de su vejez teniendo que aportar exclusivamente a un sistema de capitalización una tasa monstruosa que variará entre el 24 y el 44 por ciento de sus ingresos según se adopte una tasa de interés neutra o de apenas el 2 por ciento. Justamente porque es imposible solicitárselo, la mayor parte de los sistemas previsionales del mundo compensa este problema haciendo que los sistemas sean de reparto y exigiendo una contribución patronal que complemente la escasa posibilidad que tiene el trabajador de diferir sus ingresos.

En los sistemas más avanzados la tercera pata está constituida por el Estado, que tiende a solventar el sistema previsional mediante impuestos específicos. De no existir el aporte patronal se cree —esta es la idea que anida en algún artículo del proyecto— que esa plata se destinaría a mejoras salariales. Ello implica no conocer el mercado de trabajo y menos el que existe hoy en la Argentina, que presenta una alta desocupación. En nuestro país se tiran los salarios para abajo, en virtud de lo cual la eliminación de los aportes patronales sólo tendería a mejorar los márgenes de ganancia del patrón antes que a aumentar el salario de los trabajadores. De no ser así, nos preguntamos a dónde va el 40 por ciento de evasión que hoy existe en la Argentina. ¿Qué están haciendo con ella los empleadores? ¿Le están pagando mejores salarios al obrero o están mejorando su propio margen de ganancia?

Si todos los sistemas, tanto el de reparto como el de capitalización, tienen dificultades, hay que dilucidar por qué es así y cuáles son las soluciones posibles. Ya dijimos que los dos problemas centrales son la tendencia del crecimiento demográfico y la forma de crecimiento

económico de largo plazo que hoy tiene la humanidad.

La actual tendencia del crecimiento económico lleva a un constante ahorro de mano de obra, donde el operario es sustituido por maquinaria y tecnología. Esto ocurre en la Argentina y en los países desarrollados y se observa con claridad cuando se analizan ejemplos sobre cómo evoluciona el empleo, el producto y la productividad industrial.

Entre 1970 y 1989, el volumen de producción industrial fue constante en la Argentina. Sin embargo, los obreros ocupados se redujeron en un 44 por ciento, la productividad media por obrero se incrementó en un 50 por ciento y la productividad media por hora trabajada, en un 74 por ciento.

En el mismo período en Brasil el producto industrial se incrementó en un 185 por ciento, pero el empleo sólo aumentó el 100 por ciento. En los Estados Unidos el producto industrial subió un 45 por ciento, pero el empleo disminuyó un 8 por ciento en el mismo período. En Alemania el producto industrial creció el 20 por ciento, mientras que el empleo bajó un 22 por ciento.

Es decir que el crecimiento sin empleo es una de las dificultades más serias que tienen que afrontar los sectores desposeídos de la población. Desde luego, esto ocasiona problemas al sistema de reparto y constituye un tema sobre el que se ha batido el parche hasta el cansancio en foros, conferencias y publicaciones. Si un sistema de reparto quiere pagar a los jubilados el 80 por ciento del salario medio y desea establecer un aporte medianamente razonable, necesita una proporción muy alta de activos con respecto a pasivos. Si es posible, cinco aportantes por cada jubilado; en este caso, el aporte será cercano al 15 por ciento. Si la relación es de dos aportantes por cada jubilado nos acercáramos a un aporte superior al 40 por ciento. Pero, tal como se está enfocando la discusión previsional en la Argentina, sería absurdo creer que estos dos problemas sólo afectan al sistema de reparto. También ponen un palo en la rueda al sistema de capitalización, porque mientras éste es fresco y nuevo recibe el flujo de aportantes y no tiene quienes retiren pensiones o jubilaciones. El ahorro de los activos es mayor que la suma de la que el sistema de capitalización necesita desprenderse para pagar las jubilaciones o las pensiones, y por lo tanto en esa primera etapa no necesita deshacerse de activos financieros importantes para pagar a los pasivos.

Sin embargo, a medida que va transcurriendo el tiempo y la relación se invierte, sucede lo mismo con el sistema de capitalización: para sostenerse necesita tasas reales de interés cada vez más elevadas. Asimismo necesita pensar qué pasa cuando una administradora de fondos de pensión debe empezar a liquidar activos financieros de importancia en la plaza para asumir sus obligaciones.

Este será un marco en el cual los rendimientos financieros irán bajando, y el hecho de que las administradoras tengan que desprenderse de activos financieros importantes potencia aún más la caída de los rendimientos. Esta es entonces una de las dificultades comunes al sistema de reparto y al de capitalización.

El segundo problema es el demográfico. Ciertamente en el mundo se registra una tendencia a disminuir la tasa de reproducción o de fecundidad. El problema no radica en que todos nos estamos poniendo más viejos con sociedades más longevas. La cuestión es que antes por cada mujer había dos hijas mujeres; es decir que el coeficiente de fertilidad, que precisamente se mide sobre las mujeres, iba en aumento. Yo he hecho un aporte en ese sentido porque tengo cuatro mocosas, pero no alcanza a nivelar un coeficiente de reproducción que disminuye en la Argentina y en el mundo.

Los estudios analizados en esas muy parciales consultas de la Comisión de Previsión y Seguridad Social demostraron que con una tasa de reproducción de niveles altos -dos mujeres por cada mujer- aunque la población pasara a ser más longeva no se requerirían muchos más aportes para sostener el sistema. Si en este caso la esperanza de vida aumentara 30 años y pasara de 47 a 77 años, el aporte de los trabajadores para sostener el sistema —según el doctor Somoza— sólo habría tenido que aumentar del 12 al 14 por ciento. Pero si la tasa de reproducción disminuye medio punto, del 1,5 al 1, el aporte de los trabajadores debería elevarse 10 puntos para sostener el sistema. En la Argentina tenemos una tasa de reproducción decreciente.

Frente a los problemas comunes que afectan tanto al sistema de reparto como al de capitalización, debemos preguntarnos cuáles son los criterios, las argumentaciones y los contenidos filosóficos que se esconden detrás de uno y de otro.

Aquí hay una tema importante que no puede ser soslayado y es que en el sistema de reparto las generaciones actuales...

Sr. Amadeo. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Baglini. - Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia advierte al señor diputado por Mendoza que ha terminado el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra, de manera que le ruega que redondee su exposición.

Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Amadeo. — Señor presidente: cuando en la Europa posnapoleónica se discutía en un congreso celebrado en Viena el futuro de la integración de Francia derrotada frente a una Europa victoriosa, habló un abogado del separatismo, el duque de Clignancourt, quien tenía enfrente al genial Talleyrand, al que aquél ponía muy nervioso porque era un brillante orador. Talleyrand dijo en ese momento del duque que era tan buen decidor que era capaz de esconder sus falsedades en su discurso, de manera que simplemente parecieran las estrofas de un bello poema. Cuando lo escucho al señor diputado Baglini recuerdo aquella frase, porque creo que mi colega también esconde tras su discurso un magnífico sofisma.

Por eso esta interrupción, para que cuando empiece a plantear sus soluciones recuerde dos aspectos de su sofisma. Nos planteó un modelo estático de un país que no crece, donde la introducción de un modelo nuevo de acumulación de capital no producirá ningún efecto. Está guardado en el tiempo y sólo servirá para que la gente esté peor. Y en segundo lugar, nos ha planteado un modelo donde no hay caída de la evasión, donde todo sigue igual y, por lo tanto, todo va peor.

En consecuencia, como el señor diputado Baglini está por arribar a sus conclusiones, quisiera que sea tan amable de introducir una parte de mi modelo entre las bellas estrofas de su poema.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Baglini. - Señor presidente: precisamente los ejemplos que he dado están tomados de una Argentina cuyos trabajadores tienen la suerte de arrancar con un salario medio de 500 pesos mensuales, y al cabo de 40 o 45 años de vida activa, llegar a 1.000 pesos. Es decir, es una economía que crece al 2,5 por ciento, donde no hay oscilaciones financieras y donde se dan tasas de interés neutras o del 2 por ciento, que corresponden a países desarrollados como Japón o algunos de Europa. De manera que no estamos hablando de una economía estática.

La discusión que hoy se da en nuestro país soslaya cuestiones filosóficas que están detrás del sistema de reparto y del de capitalización; es decir, hasta dónde se justifica obligar a ahorrar a alguien cuyo ingreso no cubre el 50 por ciento de sus necesidades.

La única justificación hasta ahora ha sido la solidaridad. Difícil es encontrarla en un sistema individual. Pero aquí se ha hablado durante decenas de horas y se ha sostenido que este problema hay que solucionarlo como lo propone el gobierno, porque necesitamos ahorro; y el problema de la Argentina no pasa por el volumen de ahorro sino por el destino que se le da.

En la década pasada se ha invertido en promedio el 22 por ciento del ingreso, que es una cifra bastante alta; en 1990, el 12 por ciento y ahora debemos andar cerca del 20 por ciento. Hay numerosos ejemplos de esto, que como los señores diputados saben es un problema real que todos hemos vivido.

Entre 1984 y 1990 el país acumuló un excedente de su balanza comercial de 28.000 millones de dólares. A la Argentina no le faltaba ahorro y sin embargo tuvimos 14.000 millones de dólares fugados del país. Reitero que el problema no es falta de ahorro sino a dónde va.

Tengo sobre mi banca la ley 23.758, cuyo autor es el señor diputado Matzkin, que creó en la Argentina los depósitos en dólares. Esos depósitos estaban prioritariamente destinados por la ley para financiar exportaciones. El último informe del Banco Central -que es de diciembre de 1992- dice que a esa altura, de los 10.900 millones de dólares en depósitos que había en el país, sólo se canalizaron 772 millones para la exportación. Es decir, el 7 por ciento.

En abril de este año los depósitos en dólares llegan a 12.733 millones y aunque no hay un informe del Banco Central que diga cuánto se canalizó en exportaciones, dudo mucho que esto se haya modificado.

Otro ejemplo, en cuanto a las obligaciones negociables, esta misma Cámara generó hace dos años un sistema impositivo especial de gigantesco incentivo para que se emitieran papeles por las empresas privadas que les permitieran desarrollar nuevos proyectos de inversión. Se dijo entonces en este recinto que ese ahorro rápidamente iba a llegar a las empresas pequeñas y privadas. Hay 3.000 millones de dólares de obligaciones negociables girando en la Argentina y en el mundo. ¿Qué empresa pequeña y mediana ha tenido acceso a esos fondos? ¿Cuáles

son los proyectos de inversión? Entonces, aquí no se trata de generar más ahorro sino de destinarlo productivamente a la inversión.

Y ahí aparecen las ilusiones ópticas de la modificación del artículo 73. Con un menú que es facultativo, donde el inversor puede decidir o no poner la plata, se dice que será posible invertir hasta el 40 por ciento —en lugar del 30 por ciento fijado en el proyecto original— en depósitos a plazo fijo siempre que los recursos se destinen a producciones regionales, o hasta el 30 por ciento en obras públicas de recupero seguro. Y aquí muchas veces se ha preguntado qué se va hacer, ¿Vamos a financiar el peaje con la plata de los jubilados? ¿Vamos a garantizar que ese aporte no tendrá tal destino? Será difícil.

Bajo el argumento de que hay que generar más ahorro se han hecho cambios desacertados en épocas pasadas, y voy a citar uno.

Sr. Presidente (Pierri). — Como ha vencido su término, la Presidencia le solicita que redondee su exposición.

Sr. Baglini. — El caso que cito es la licuación de pasivos de la década del 80, cuando el doctor Cavallo no era ministro sino presidente del Banco Central. Dijo que los ahorristas que tenían depósitos en el sistema financiero tenían que contribuir con sus riquezas para que las industrias del país pudieran reducir sus pasivos y de esta manera pudieran iniciar el camino de la inversión, la creación de fuentes de trabajo y de riqueza. Se cumplió sólo la primera parte. Los ahorristas se quedaron sin sus recursos, es decir, el gobierno se quedó con la riqueza del presente y nosotros nos quedamos con las promesas de inversión que nunca se cumplieron.

¿Para qué hablar de las cifras del Banco Central? Su presidente, el doctor Roque Fernández, en un discurso pronunciado en ADEBA hace dos años, habló de 67 mil millones de dólares de pérdida del Banco Central, parte de los cuales comprende la licuación de los pasivos. ¿Para qué mencionar la opinión de un economista, Manuel Solanet, tan distante de nuestra posición? Dijo que a la Argentina no le falta ahorro sino planes de inversión; no le falta financiamiento sino proyectos de inversión en serio que le permitan superar el estancamiento..

Aquí se da una paradoja. Para crear el mercado de capitales, se dice que hay que quitar plata a los trabajadores. ¿No sería mejor evitar este *by pass*? Si pensamos que realmente se pueden recaudar 3.000 millones de pesos, ¿no sería mejor evitar el costo de intermediación monumental de las administradoras? Parece que el gobierno ha descubierto que puede volcar 3.000 millones de

pesos anuales al mercado financiero sin generar sobresaltos o, suponiendo que habrá opcionalidad entre el sistema público y el sistema de capitalización y que sólo el 50 por ciento de los trabajadores elegirá el sistema de capitalización, que puede volcar 1.500 millones sin conmover el esquema económico. En lugar de sacar esa plata a los jubilados, ¿por qué no bajamos el encaje técnico de los bancos, de modo de liberar 1.500 millones de dólares y de canalizar ese ahorro a la inversión productiva? Pero se dice que eso no se puede hacer porque crearía presión monetaria sobre un tipo de cambio fijo o sobre los precios...

Sr. Presidente (Pierri). El señor diputado Ceballos le solicita una interrupción por intermedio de esta Presidencia, señor diputado. De todas formas, le informo que ya ha vencido el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. Baglini .- Concedo la interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Ceballos. - Señor presidente: teniendo en cuenta que éste es un tema sobre el que cada uno legítimamente debe explayarse en sus posiciones fundamentalmente en términos de bloque y no cabiéndome la menor duda de que también a los miembros del bloque oficialista que aún no han hecho uso de la palabra el término reglamentario puede llegar a resultarles corto, voy a solicitar a la Cámara, por su intermedio y fundamentalmente a aquellos que están convencidos de que es necesario debatir en el Parlamento —que tiene la misión esencial de hablar para poder discutir y fijar posiciones—, que se amplíe el término reglamentario para que lo oradores puedan profundizar en el debate que hoy nos ocupa.

Sr. Presidente (Pierri). - ¿Cuántos minutos estima el señor diputado por Mendoza que requerirá para concluir su exposición?

Sr. Baglini. - Calculo que serán quince minutos, señor presidente.

Sr. Presidente (Pierri). Si hubiere asentimiento de la Cámara, se extenderá a diez minutos el tiempo del que dispone el señor diputado para hacer uso de la palabra.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza

Sr. Baglini. — Señor presidente: el problema central del sistema previsional que tenemos, es de recursos, En algún momento las cajas fue-

ron ricos. En oportunidad del segundo Plan Quinquenal tuvimos que financiar obras de infraestructura a través de las cajas: se construyeron puentes, escuelas, caminos y obras que están por allí.

El Estado, que utiliza estos recursos, se siente obligado no desde ahora sino desde hace muchos años a pagar la deuda que tiene con los jubilados, y para hacerlo busca obtener más recursos. Nosotros lo hicimos inicialmente mediante un impuesto sobre los pulsos telefónicos —que luego se derogó—, que hoy permitiría recaudar 600 millones de pesos. Después lo hicieron este gobierno y este Parlamento: le mandaron una porción del IVA y un impuesto —el denominado impuesto Matzkin— sobre los bienes productivos, que recién está empezando a cobrarse y que viene recaudando entre 60 y 70 millones de pesos. Las provincias hicieron un esfuerzo para con la Nación y le destinaron el 15 por ciento de la recaudación; además, el Parlamento le envió recursos de las privatizaciones. Entonces, si el problema es de recursos, parece exagerado que nosotros ahora encontremos la solución precisamente en desviar recursos de las cajas para solucionar el problema de los actuales y los futuros jubilados. Ello sería excesivo, porque si el problema es de recursos pareciera que tuviéramos que preguntarnos por qué restárselos.

Esta reforma que se está proponiendo, en lugar de mejorar el perfil fiscal de la Argentina va a generar un déficit en un área que el gobierno considera equilibrada. Las estimaciones del señor secretario de Seguridad Social, a las que aquí se hizo mención, respecto del proyecto que teníamos en tratamiento hasta anoche, llegaban a una deuda de 22.000 millones de pesos en el año 2013. Mientras el Estado acumula 22.000 millones de pesos de deuda, para ese año las administradoras de fondos de pensión acumularán 8.000 millones de pesos en concepto de comisiones. Voy a pedir que se inserte en el Diario de Sesiones, porque son muy interesantes, las expresiones del licenciado Gerchunoff vertidas en oportunidad de la presentación de un libro sobre la reforma previsional, que demuestran que, incluso al terminar el episodio de transición del régimen, el Estado todavía sigue enfrentando dificultades fiscales.

Entonces, preguntémonos por qué hemos cambiado de estrategia. En vez de buscar, como todos juntos lo hemos hecho hasta ahora, inyectar recursos al sistema, lo que estamos tratando de hacer en este proyecto es poner un techo y pagar menos a los jubilados. Esto se

desprende claramente del monto que cobrarán los jubilados según las estimaciones que se hacen sobre el nuevo sistema.

Veamos qué nos dicen nuestros cálculos conforme a una planilla cuya inserción en el Diario de Sesiones solicito. Supongamos el caso de un joven que ingresa al sistema y elige la opción pública: comienza a trabajar a los 20 años y se jubila a los 65 con 45 años de aporte. Imaginemos que sólo vive 15 años como jubilado y que ha hecho todos los aportes al nuevo sistema; que su salario inicial fue de 500 pesos y que en los últimos 15 años ascendió a 1.000 pesos —es decir que hubo un incremento salarial— y que la tasa de interés haya sido neutra para todo el período. Esta persona va a juntar entre la prestación básica universal -200 pesos- y lo que corresponde en concepto de adicional por permanencia —que apareció anoche en el dictamen—, 225 pesos, o sea, el 42,5 por ciento del salario, según surge, si no me equivoco, de los cálculos que hizo el señor diputado Martínez Raymonda.

En cuanto a la opción de la capitalización -ya no la pública-, es más o menos lo mismo: 200 pesos de prestación básica universal con la garantía incluida en el proyecto y 210 pesos de capitalización, o sea, el 41 por ciento del salario.

Entonces, si triplicando la burocracia actual y generando desfinanciamiento al Estado llegamos a este resultado, tenemos el derecho de pensar que hay que hacer otra cosa.

Dedicaré ahora un par de minutos al famoso tema de que hemos llegado —como se dijo aquí— a un esquema voluntario en el cual cada trabajador decide. Yo me pregunto hasta dónde el esquema es voluntario. Si se mantienen los artículos impositivos que están diseñados en el proyecto, existe un incentivo fiscal que consiste en transformar lo que era el revólver en la cabeza que estaba en la ley previsional obligando a ir a ese sistema en ya no un revólver pero por lo menos una honda de carácter impositivo que dice que es mejor entrar en el sistema de capitalización.

Debemos advertir que la prestación pública está cambiada en el proyecto del gobierno; no va a llegar al 82 por ciento mítico que los jubilados piensan que tendrían derecho a percibir.

Sí va a llegar al 41 por ciento, dado que es muy probable que todos opten por el sistema de capitalización pensando que con este techo tan bajo no hay futuro; si además se enteran de que las movilidades en el sector público de prestaciones se cambian, pues según el artículo 24 del proyecto ya no se van a regir por el sa-

lario medio, como hasta ahora, sino por un índice que se va a construir de acuerdo con la reglamentación; si además estamos en un país donde hay ilusión financiera de las tasas de interés, es decir que la gente no se termina de acostumbrar a la estabilidad y le siguen retumbando en los oídos las tasas de interés del pasado o las que les dicen que ha tenido Chile, del 11, 12 o 13 por ciento anual; si a esto se suma la publicidad del gobierno y un ministro de Trabajo —que ya no está— que dice que el sistema público no se encuentra en crisis sino irremisiblemente muerto, y esto se dice todos los días, yo pregunto hasta dónde existe efectivamente esta voluntariedad de opción.

La gente está fuertemente inducida para que no haya tal voluntariedad sino una inducción más que sesgada hacia el sistema de capitalización. Y digo esto sin abrir juicio sobre qué ocurre con el famoso artículo 39, con referencia al cual el señor diputado González Gaviola ayer dijo que se mantienen el Banco de la Nación Argentina y las dos garantías.

Esta mañana los señores diputados Amadeo y Lamberto discutían por radio si hay que sostener o no al Banco de la Nación dentro de un sistema voluntario, y este es un secreto a voces dentro del gobierno. Además, el propio ministro de Economía lo dijo en una conferencia llevada cabo en el Instituto de Ejecutivos de Finanzas en el día de ayer.

En síntesis, nosotros lamentamos que en un tema de esta envergadura no se haya corregido el sistema de cálculos del haber sino la sumatoria -yo diría la yuxtaposición- de los intereses de los sectores, que es otra cosa totalmente diferente. Que se haya rechazado la voz de la calle y la de las firmas que piden más consultas y análisis; que se haya rechazado el consenso que ofrecimos nosotros, que advierto no era para hacer demagogia porque -como bien han dicho algunos señores diputados de nuestro bloque- proponer la elevación de la edad para las jubilaciones, cambiar el sistema de cálculos del haber —medidas todas con las que las cajas de jubilaciones actuales mejoran automáticamente sus finanzas y facilitan pagar mejores prestaciones a los jubilados— no son medidas agradables ni demagógicas.

No se trata de venir a decir: jubilemos a las amas de casa sin haber hecho los aportes correspondientes. Se trata de una propuesta seria y lamentamos que el gobierno haya girado siempre sobre un mismo eje: capitalización sustitutiva del sistema público, que en un momento fue obligatoria y ahora se dice que es voluntaria. Y esto lo digo entre comillas.

Este es el actor central de la escena y seguirá siendo el mismo. No es, como dijo el señor diputado Lamberto, que nos ofrecieron un helado y después pedimos crema y tras la crema, las frutillas. Efectivamente pedimos la crema y también las frutillas, y cuando revisamos el helado nos encontramos con que abajo había vidrio y no helado. Ese es el problema.

Lamentamos que no se haya reparado en el procedimiento, que haya habido publicidad sesgada, que hayan existido instituciones de la envergadura de la Organización Internacional del Trabajo o de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensión de Chile que no hayan pasado aunque fuera dos minutos por las comisiones para exponer sus experiencias sobre la cuestión.

Aquí puedo recordar una expresión de Perón para decir que este proyecto termina siendo ahora por la yuxtaposición de intereses, como un gigantesco sofacama que no sirve ni para sentarse ni para acostarse -hoy, que estamos en la época de las transgresiones, podemos agregar que además de no servir para sentarse o para acostarse- tampoco sirve para hacer el amor. (*Aplausos.*)

Nuestro partido no es la máquina de impedir incluso le presentó al oficialismo un proyecto de ley alternativo de reforma del Estado. Además le votó la ley penal tributaria que el entonces justicialismo en la oposición no nos quiso aprobar. Asimismo este partido posibilitó que en las dos Cámaras del Congreso se tratara -aun con las disidencias sobre el fondo- en quince días el primer paquete impositivo del ministro Cavallo en febrero del '91, y en seis días el plan de convertibilidad. A su vez se ha prestado a una discusión seria y honesta sobre la consolidación de pasivos; ha generado propuestas sobre el régimen de promoción industrial, que el gobierno resistió dos años y después terminó adoptando. En definitiva, en todas y cada una de las medidas hemos tratado de contribuir de la mejor forma posible al progreso de las acciones de gobierno, procurando evitar errores irreparables.

Lamentamos profundamente hoy que tengamos que decir a quienes han puesto en funcionamiento la máquina de imponer voluntades, que tendrán que hacerse responsables para asegurar una votación en un tema que no queríamos que llegara a votación como si fuera un partido River-Boca, que se define por un gol de diferencia.

Esto no era lo que queríamos porque ésta no es la ley ni de ustedes ni de nosotros. Es la ley de nuestros padres, de nuestros abuelos y de

nuestros hijos. Lo han querido las circunstancias y nosotros lo lamentamos profundamente. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). —Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Santín. - Señor presidente: muy pocas cosas quedan para decir después de la brillante exposición del señor diputado Baglini. Pero aquellos que hemos intentado trabajar en el proyecto previsional desde su primer día, aquellos que hemos asistido a cada una de las reuniones que las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda han convocado, tenemos casi la obligación de hacer algunas reflexiones sobre el final de este debate. Debate que no pudimos tener en la comisión ni tampoco hoy en este recinto, ya que se ha convertido casi en un monólogo de cada uno de los legisladores.

Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de que ningún diputado del oficialismo nos explique específicamente cuál es el proyecto que estamos discutiendo.

—*Varios señores diputados hablan a la vez.*

Sr. Santín. — Un proyecto previsional no es una suma de voluntarismos. Un proyecto previsional que es una ley que nos va a regir a los argentinos en los próximos cuarenta o cincuenta años, no se resuelve simplemente con decir que el déficit del Estado se va canalizar porque el ministro de Economía dijo que la plata le va a alcanzar,

Un régimen previsional merece un estudio absolutamente serio, merece discutir las tablas demográficas y también cómo se va a comportar ese mecanismo en los próximos años.

Partimos de la coincidencia elemental de que un régimen previsional no se puede mantener tal cual está porque todos somos conscientes de que hay más de dos millones de jubilados que ganan menos de 200 pesos. Todos somos conscientes de que en la actualidad el sistema no tiene incentivos para que un joven de 25 años se incorpore y aporte con visión de futuro. Todos somos conscientes de que el aporte que el Estado está haciendo a través de los impuestos es una carga altísima que necesitaría garantizar los mecanismos de la educación, de la salud, y poner en marcha el aparato productivo. Pero éstas condiciones no las tenemos en ninguna de las bases filosóficas que el proyecto oficial está planteando, porque con vergüenza el oficialismo, que empezó trabajando con un sistema de capitalización, trató de ir convirtiéndolo en un proyecto de reparto. Por supuesto que no lo logró, y a la suma de cosas "truchas" que se vienen generando en la Argentina hoy podemos

agregar -lo vamos a inaugurar con ese nombre- el sistema previsional de reparto "trucho". Esto lo digo porque estamos generando como opción para aquél que se quiere quedar en el Estado, que después de 40 años de aportes va a cobrar el 20 por ciento de su salario. Por lo tanto, ese sistema viene a frustrar a los actuales jubilados que van a ver cómo los aportes de los trabajadores activos día a día van a ir al sistema privado, el que va a contar con toda la propaganda y con los mecanismos de *marketing* frente a un sistema estatal que el propio oficialismo ha ayudado a desprestigiar.

Esos tres mil millones de dólares anuales se perdieron de las cajas de los actuales jubilados. Además se está condenando a nuestros padres y abuelos a que nunca más sueñen con la posibilidad de tener un aumento de haberes. Pero a lo mejor el oficialismo creyó que con esto íbamos a seducir a los jóvenes de 20 a 25 años para que vayan a capitalizar sus aportes al sistema privado. Pero esos jóvenes, como dice la propaganda oficial, se van a encontrar en el primer mes con su libretita y ahí van a tener la primera sorpresa porque van a apreciar que en el correspondiente recibo le descontaron el 11 por ciento y que en esa libreta aparece que se capitaliza solamente poco menos que el 8 %. Ya le rapiñaron la primera parte del famoso ahorro con el cual va a estar generando su futuro, y al mismo tiempo le van a decir: señor, si usted tiene suerte y a ese personaje que puso para administrar su dinero le va bien, a lo mejor puede tener un futuro digno, pero si le va mal, como dirían los chicos es casi "pelito para la vieja".

Debo decir que este sistema viene a privatizar específicamente el déficit del Estado. Mucho trabajamos aquí para mantener equilibradas las cuentas fiscales mucho trabaja la ciudadanía para tener que bancarse una situación como ésta: sin escuelas, sin salud, sin caminos y sin obras públicas.

Ahora venimos a generar un sistema que en los próximos veinte años nos va a provocar un déficit -según las cifras oficiales- de 23.000 millones de dólares. Es exactamente la misma cifra que acaba de renegociar el país con el Plan Brady, que nos trajo como consecuencia el cierre de los ferrocarriles, la transferencia de las escuelas y la transferencia de los hospitales.

Este sudor que está sufriendo el trabajador se va a volver a generar cuando tengamos que pa-

gar el Plan Brady y comencemos una nueva renegociación de la deuda externa. Por ello nosotros queríamos trabajar sobre una serie de puntos consensuados que tenían que ver con la edad, que tenían que ver con un monto jubilatorio final relacionado con los aportes, que tenían que ver con el cálculo del haber, que tenían que ver con el cierre de los grifos de un sistema en el cual casi un tercio son jubilados sin haber generado aportes en el pasado.

Frente a esa situación no sólo ofrecimos un proyecto sino también todas las tablas y todos los cálculos para poder discutir. Pero ese debate nunca pudimos hacerlo ya que prevaleció el voluntarismo del gobierno, es decir, la decisión política de privatizar el sistema para generar un mercado de capitales.

Ese mercado de capitales que en el mejor de los casos va a generar el ahorro privado, provocará al mismo tiempo un desahorro público, el que se pagará con la educación, con la salud o con más impuestos.

Esta casa sirvió para rematar los bienes del Estado -me refiero al remate de YPF, de SEGBA, de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, etcétera—, y ahora venimos a rematar la ilusión que tienen los jubilados argentinos, de vivir un poco mejor.

Teníamos la oportunidad de dar el debate, ya que muchos miembros del bloque oficialista demostraron a través de sus proyectos que teníamos coincidencias para hacerlo. Pero desde el oficialismo se decidió apretar las clavijas y servir a los mandatos del capitalismo internacional.

De modo que perdimos una nueva oportunidad. Pero lo que no podemos perder es la capacidad de reflexionar y la posibilidad de que algún día construyamos una Argentina mejor. Nosotros hemos solicitado una y mil veces que trabajemos por el consenso, pero ustedes prefirieron un triunfo a lo Pirro, y en definitiva este triunfo va a hacer que cada uno de ustedes se convierta en responsable de que los jubilados actuales y futuros de la Argentina no tengan destino.
(Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. González Gaviola. — Señor presidente: en primer lugar quiero pedir disculpas por no estar en las mejores condiciones para exponer, ya que me encuentro afectado por una laringitis. De todos modos, dentro de tales dificultades, trataré de poner todas las ganas posibles para hacerlo bien.

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita al señor diputado que se limite al discurso que pensaba realizar y trate de evitar toda confrontación dado que todavía quedan anotados varios señores diputados en la lista de oradores.

Sr. González Gaviola. — Más allá del desgano que me provoca el estado gripal que estoy padeciendo, procuraré lograr fuerza suficiente como para revertir la sensación de pesimismo que parece imperar en el ánimo de los señores diputados luego de las últimas exposiciones.

Es importante que el análisis que efectuemos de esta reforma previsional sea encarado no desde el marco estrictamente académico, de una foto estática o desde el blanco y negro que muchas veces sirve para dar brillo a la oratoria pero esconde detrás la indefinición de una realidad más compleja.

Quienes ocupamos una banca en este recinto, somos políticos y nos debemos a la necesidad de construir el poder. Por eso creemos que debemos contemplar el contexto como algo dinámico porque no estamos tratando la reforma del régimen previsional en cualquier momento de nuestro país.

Como argentinos debemos reconocer que venimos de una situación de dolorosa derrota nacional, luego de décadas de ejercer un modelo que fracasó, un modelo de capitalismo prebendario donde los grupos organizados obtenían privilegios para sí en perjuicio de la gente mediante la pérdida de vidas, la de la libertad y la de la democracia, en una Argentina humillada y derrotada incluso en el ámbito militar.

Después de una década hemos construido un poco de poder tras de esta humillación. Parece que nuestro mayor patrimonio es haber recuperado la libertad, la democracia y la estabilidad. Esto es producto del trabajo del conjunto de los argentinos y en este contexto de país debilitado que puja por tener más poder es que venimos realizando un tremendo esfuerzo para salir de desorden que como gobierno heredamos. Con este ajuste hemos alcanzado la estabilidad y debemos continuar con la reforma del Estado ofreciendo a las futuras generaciones de argentinos un régimen previsional mejor que el que deben soportar los actuales jubilados. De allí la importancia de analizar el momento que se está definiendo y qué es lo que pretendemos hacer con este patrimonio básico de libertad, democracia y estabilidad. Hoy se plantea una seria discusión en nuestro país en donde conviven la Argentina que se murió pero que todavía tiene algunas manifestaciones de pesimismo y la Argentina que pretende un mejoramiento.

Es una discusión de modelos en un mundo donde no hay respuestas mágicas. Hace dos años, ante la caída del muro de Berlín, algunos que están con las modas ideológicas vinieron a pregonar la caída del paraíso comunista y que aquí se acababa la historia —al decir de Francis Fukuyama— para iniciarse una nueva etapa del paraíso mercadista. Dos años después de estas premoniciones advertimos que los países ordenados incluso dentro del marco del capitalismo sufren severos problemas, porque pareciera que el mercado no es tampoco la solución mágica de las cuestiones fundamentales que hoy aquejan a la humanidad.

Podemos citar la incorporación del fenómeno de la revolución científico-tecnológica al mercado de trabajo, que produce en los países centrales altas masas de desocupación; la hiperconcentración de riqueza, la contaminación del medio ambiente, que no va acompañada de los mecanismos de recuperación y prevención necesarios, y las políticas insuficientes para el crecimiento demográfico; pero parece que el paraíso mercadista tampoco da respuesta a este tipo de cosas.

Los países que siguiendo esta moda optaron por el Estado ausente y dejaron que las políticas sociales las hiciera el mercado terminaron con tremendos fracasos que ahora están tratando de revertir, como ocurre en Estados Unidos e Inglaterra, donde se deterioraron los sistemas de salud y de educación y disminuyó la productividad en la economía, incrementándose el déficit fiscal.

Estos son los elementos que están dando el marco necesario a la discusión que hoy se tiene que dar en nuestro país y que se está produciendo dentro del oficialismo, que ha asumido con valentía la alternativa de volver a capitanear el ritmo de la historia como siempre lo ha hecho el justicialismo, que siempre tuvo como objetivo producir cambios y fue un ejecutor de políticas que además siempre planteamos en democracia. Es por eso que en esta discusión, más que obrar como miembro informante de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo —que todos sabemos que critiqué severamente—, vengo a contar el proceso y a tratar de explicar por qué hoy me siento sumamente orgulloso de ser miembro de este Parlamento e integrante de este bloque Justicialista.

La discusión, la búsqueda de consenso y el trabajo que se ha realizado en este año tiene pocos parangones en la tarea parlamentaria. Ello ha permitido demostrar cómo funciona la división de poderes y que el peronismo —lejos de lo que dicen algunos de sus detractores— no es un

movimiento de gente sumisa y "levantamano", sino un partido donde se practica la democracia interna, se discuten ideas y surgen opiniones constructivas, alcanzándose el consenso que permite superar las dificultades.

Esta es la historia que ha tenido la iniciativa. Aquellos que digan que no ha habido consenso o discusión están evitando la verdad. Aquí ha habido debate y búsqueda de acuerdo. No sólo ello ha ocurrido en la sala de las comisiones, sino que también nos hemos cruzado en centenares de programas de radio y televisión y en innumerables mesas redondas, donde se adoptaron posturas diferentes. La iniciativa que estamos tratando no guarda ninguna relación con el proyecto que ingresó hace un año al Parlamento.

Por eso también es importante ver cómo dentro de este contexto fundamental —donde se recuperó la democracia, la libertad y la estabilidad— tenemos el gran desafío de definir entre todos los argentinos cuál es el modelo de país que debemos construir. ¿Cuál es el rol que corresponde al Estado y al mercado? No debemos mirar ni al Estado ni al mercado que tuvimos, porque si hacemos eso encontraremos que cada uno fue peor que el otro.

Hay algunos que sólo miran para atrás y encuentran al Estado como culpable, olvidándose de las barbaridades que concretó el mercado en este país, que fue responsable de la corrupción del Estado y el depositario de las prebendas de un capitalismo deformado, que se sirvió de aquél. Por otro lado, creo que volver a pensar en un Estado nostálgico y benefactor, que ha fracasado en el mundo, sería someter a nuestro país a tremendos errores.

Dentro de este contexto en el que hoy se rediscute cuál es el rol del Estado y el del mercado, la primera discusión que se dio aquí es la valoración que otorgamos a las políticas sociales. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado ante ellas? El primer punto que se planteó fue si el Estado es o no responsable de ser el artífice de las prestaciones sociales.

Creemos que la política está por encima de la economía. Pero no se puede hacer política sin economía; si no, es demagogia pura. Primero está la voluntad política y después se construye la economía para servirla. Nuestra comunidad —por cultura, solidaridad e historia— ha definido que una de las políticas sociales básicas es dar prestaciones a los sectores vulnerables, como es el constituido por nuestros ancianos. Entonces, esto lo hacemos como responsabilidad indelegable de la comunidad, que utiliza al Estado como un instrumento de ella.

La primera discusión fue de quién era la responsabilidad. Había dudas en el texto originario sobre si el Estado debía asumir la responsabilidad de todo o de parte del sistema previsional. ¿El Estado no se desligaba peligrosamente de su obligación? Este debate fue saldado dentro del bloque Justicialista y con todos aquellos que quisieron concurrir a la discusión.

Hoy, en la iniciativa que estamos considerando, el Estado es absolutamente responsable de las prestaciones previsionales, tanto en el sistema básico de reparto como en el de capitalización. No sólo es responsable, sino que se fijan garantías. De modo que si los mecanismos para el pago de esas prestaciones fracasan, el Estado tendrá que sacar recursos de otro lado, para que el hilo no se corte por lo más fino, o sea, por los jubilados. Tendrá que cortarse por otras áreas menos vulnerables.

La segunda discusión es no confundir una cuestión que sí está vinculada con la filosofía y la solidaridad. ¿Cuáles son los instrumentos con los cuales brindaremos la prestación? Hoy en el mundo existen tres herramientas para otorgar prestaciones previsionales: aquellas que se financian mediante un régimen de reparto, con aportes y contribuciones que surgen de la masa salarial; aquellas que implican un sistema de capitalización que se financia con el ahorro previo de los trabajadores activos, buscando que esa plata se multiplique y pueda ser repartida en la etapa de pasividad; finalmente, existe el financiamiento por medio de impuestos simples a cargo del Estado. Este no es un invento de nadie y, ni siquiera, es nuevo. Estos tres sistemas existen desde hace mucho tiempo en el mundo; han funcionado bien y han funcionado mal, en distintos momentos históricos y en una misma época. Hoy estamos asistiendo a la *débaule* del sistema de capitalización en países del Primer Mundo como los Estados Unidos, en donde desde el Estado tienen que rescatarse las garantías.

Sin entrar a opinar sobre el resto de las implicancias, cabe mencionar que el régimen chileno se da en el marco de una economía joven que ha crecido vertiginosamente hasta alcanzar su meseta en los últimos diez años y ha tenido altas tasas de rendimiento.

Se observa también que los regímenes de reparto se ven afectados seriamente por la desocupación, que pareciera ser uno de los problemas fundamentales de los países centrales.

Estos sistemas entran en crisis en algunos países y en el nuestro por motivos que no se refieren sólo a la estructura del sistema sino también al mal

manejo y al tipo de economía en la que están insertos.

Nosotros estamos utilizando una serie de herramientas a las que no tenemos que dar una connotación ideológica. Algunos amigos dicen por allí: "Yo estoy en contra de la capitalización", como si alguien pudiera estar en contra del sistema de reparto. El reparto y la capitalización no son ni buenos ni malos en sí mismos; son métodos con determinadas virtudes y ventajas. La posibilidad de tener un buen régimen previsional depende de que esos sistemas se puedan aplicar puros o combinados, pero en la forma adecuada.

Una vez que hemos definido quién es el responsable y cuáles son las estrategias o metodologías para constituir las prestaciones, debemos definir cuáles son los riesgos que tiene el sistema en movimiento. Si hay riesgos hay que dotarlo de mecanismos de seguridad y de las garantías pertinentes. De allí la gran lucha que hemos dado en este Congreso, por el consenso, por las garantías. En un sistema de reparto que igualaba para abajo y que daba una prestación básica totalmente insuficiente para los recursos de que se nutría, hemos elevado esa prestación a un mínimo del 40 por ciento. En el artículo 124 hemos establecido una garantía de prestación mínima de la que se hace responsable el Estado, por lo cual la prestación básica nunca será inferior al 40 por ciento del salario medio de la economía.

La discusión sobre la obligatoriedad o no del régimen de capitalización nunca fue el eje central de nuestros planteos. Lo que sí sosteníamos es que el régimen de capitalización no podía ser obligatorio sin tener garantías de que por lo menos se devolvería a la gente la plata que se le hacía aportar de modo obligatorio. Allí surgió otra de las grandes discusiones y la búsqueda del consenso, que logramos generando también dentro del sistema de capitalización una empresa estatal que actuara como testigo y pusiera un piso de garantía, a fin de no entregar, como sucedía en el texto originario, o los aportantes al régimen jubilatorio atados de pies y manos a un capitalismo que no quería asumir el riesgo sino las prebendas. Por el mal funcionamiento del Estado se entregaba un mercado cautivo; pero esto también lo modificamos. No es casual que algunos sectores afectados estén "apretando" y haciendo lobby para lograr la eliminación de algunos artículos que benefician a los futuros jubilados.

También es cierto que al perfeccionar un proyecto de ley estamos definiendo nada más que las normas de juego y no el resultado del partido. Por eso tan importante como nuestra res-

ponsabilidad al legislar será nuestra responsabilidad de controlar el funcionamiento del sistema e introducir las correcciones necesarias en una norma que tenga la correspondiente flexibilidad y que se amolde a las situaciones de incertidumbre que hoy padecemos. Nadie puede asegurar en este recinto qué va a pasar con un régimen de capitalización dentro de 40 años, pero tampoco nadie puede asegurar qué sucederá con un sistema de reparto dentro de 40 años, cuando se observa que la tendencia universal es que la participación de la masa salarial en el crecimiento económico de un país, en los modelos capitalistas, progresivamente se está restringiendo.

Esperamos que la Argentina, entre en un modelo de crecimiento. Somos optimistas para que ello ocurra. Tenemos la legitimidad necesaria para generar el marco global adecuado, porque somos el partido mayoritario y porque venimos de una experiencia de haber revertido una situación de desorden absoluto, en donde la administración de otro partido probó, no pudo, y nosotros, aun con muchas dificultades, probamos y a veces pudimos y deseamos seguir pudiendo. (*Aplausos.*) Estamos apostando a una receta que debe atender los problemas estructurales de la crisis. Si queremos cambiar el sistema previsional es por varias razones. Hay más de 2 millones de argentinos que con la ley vigente están cobrando menos de 200 pesos mensuales. Entones, la culpa no está en un mal manejo del sistema, sino en el régimen previsional y en el tipo de economía que tenemos, que al haber tenido un escaso crecimiento en los últimos 25 años -aunque un poco mejor en estos tres últimos años-, ha generado subempleo, economía informal e insuficiencia salarial.

Estas condiciones estructurales han hecho fracasar el sistema de reparto. La mala administración interna también hizo lo propio; aquella hizo que con los aportes de los que contribuyeron se pagase jubilaciones a los que no los hicieron.

Entonces, toda reforma debe tender, por lo menos, a mejorar la situación aunque sea de los más vulnerables. Hoy estamos ante la ficción de una legislación de 30 años de data, que es incumplida.

El partido oficialista asumió el gobierno y se encontró con cuatro problemas fundamentales con los jubilados; los encaró a todos y les dio respuestas parciales. El primer problema que tenían los jubilados era que tenían que pagar el impuesto más regresivo que se conoce, el hiperinflacionario. A partir de la estabilidad que hemos conseguido logramos paliar esa situación.

Y aquí se nos presenta otro problema, ya que dentro de este marco de estabilidad las cosas no corren parejas para todos y a algunos les empieza a ir peor que a otros. Por eso es que tenemos que devolver a los jubilados la movilidad que perdieron en sus haberes con la sanción de la ley de convertibilidad, lo que constituye una gran injusticia porque todos sabemos que tienen sus ingresos congelados.

A este tema de la hiperinflación el partido oficial le puso fuerza, ganas y estrategia. Hoy no son los trabajadores y los jubilados los que pagan ese impuesto.

Otro elemento a tener en cuenta es que a nuestros jubilados no se les reconoció en forma adecuada en los gobiernos anteriores la deuda que el sistema previsional mantenía con ellos por el no pago de los porcentajes previstos en la ley.

En la búsqueda de todas estas estrategias sería bueno que logremos consenso. Pero tenemos que ser honestos: en la búsqueda de la estabilidad no fuimos acompañados por nuestros hermanos radicales; en la búsqueda de la consolidación de deuda, tampoco lo fuimos; en la búsqueda de tratar de pagar el 82 por ciento en un acuerdo con las provincias —donde conseguimos 3 mil millones de dólares—, tampoco fuimos acompañados por nuestros colegas radicales.

Por eso queremos que en esta nueva oportunidad en que tenemos que tratar de resolver el problema de los futuros jubilados, nos acompañen. Les vuelvo a pedir que reflexionen, porque después de más de 180 muestras de flexibilidad por parte nuestra, el radicalismo no ha mostrado ni una sola. Lo único que así se ha logrado es que el justicialismo demorase el proyecto base a partir del cual en el bloque consensuamos el acuerdo. ¡Qué bueno sería que ustedes, señores diputados de la oposición, hubiesen seguido el mismo camino!

Es por eso que creo que hoy estamos definiendo un nuevo régimen que tiene redes de seguridad y también riesgos que debemos saber asumir. Pero debemos hacer un esfuerzo porque desgraciadamente la ciudadanía está mal informada en este tema. Está nutrida de medias verdades que hemos escuchado muchas veces, y la suma de medias verdades frecuentemente da grandes mentiras.

Hoy parece jugarse con el cuco de que esta ley va a privatizar las jubilaciones y quiero reiterar que esta ley no privatiza las jubilaciones.

Esta no es una ley de jubilaciones privadas. Abre la posibilidad de que la gente tenga más libertades dentro de un marco regulatorio en el que el Estado está presente. Posibilita que una parte de la jubilación sea administrada, pero no lleva atado de pies y manos a nadie. No discrimina entre mayores y menores de 45 años. Tiene todas las garantías necesarias, que son incluso superadoras de las garantías que brinda el sistema vigente.

Creo que debemos explicar con orgullo al resto de la ciudadanía por qué los justicialistas estamos dispuestos a votar esta ley después de un largo debate. En primer lugar, porque el Estado no se desentiende de la responsabilidad de la política social. En segundo lugar, porque protegemos a todos aquellos trabajadores que tengan salarios inferiores al medio de la economía, generando un sistema de reparto que será mucho más solidario que el que tenemos actualmente, ya que se reconocerá una prestación básica universal -que en algunos casos será equivalente al ciento por ciento del salario aportado- a las personas que perciban un salario inferior al promedio de la economía.

También votamos esta ley porque mejoramos el régimen de capitalización al darle las garantías necesarias y hacerlo más competitivo. El Banco de la Nación Argentina sólo podrá cobrar gastos administrativos a partir de que la administración de los fondos confiados dé ganancias a aquellos que lo elijan como administradora. A partir de la creación de la administradora Banco Nación, intentamos resolver el problema de la concentración económica generando un mecanismo para devolver poder económico a la democracia, que es la única que puede contrarrestar el poder de la concentración económica y aplicar una política redistributiva a la riqueza del país. Más allá del sarcasmo de algunos que no se han acercado para mejorar con su sapiencia el sistema, generamos incentivos dentro del portfolio. Y cuando recibimos la crítica de que era muy grande el porcentaje de inversión en títulos públicos -lo cual iba a provocar que todo el endeudamiento se pagara en tales títulos-, bajamos ese porcentaje; pero esto tampoco gustó, en una suerte de "gataflorismo".

Con las modificaciones que hemos introducido esta ley tiene mecanismos para bajar el costo laboral, que permitirán mejorar nuestra competitividad y dar a nuestro perfil fiscal una mayor equidad.

Votamos el proyecto de ley porque también mejoramos el portfolio de inversiones de manera de priorizar el impacto social y una mayor distribución de los capitales que se acumulen; porque protegemos a las provincias preservando

sus recursos coparticipables; porque generamos mecanismos para que el mercado compita con un Estado eficiente y desarmamos un mecanismo de capitalismo asistido.

Los peronistas no tenemos miedo a los negocios y no queremos ser socios de negociados; pero sabemos que en este país la única vía para distribuir riqueza es el crecimiento. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso?

Mediante esta ley garantizamos los derechos adquiridos de los actuales jubilados, y les devolvemos la movilidad. Con ello también estamos dando un mensaje.

Este es un proyecto ambicioso pero con riesgos; por ello, ésta no es una ley para archivarla luego de ser sancionada; es una ley para aprobarla y controlarla. Su desafío es el de mejorar la capacidad recaudadora para poder llenar el hueco que significa el costo de la transición. El desafío de esta ley es que los capitales que aporten los trabajadores para mejorar el ahorro institucional en el país no pueden ni deben ser el centro del crecimiento económico y de la capitalización del país no pueden ni deben ser los trabajadores sino los capitalistas en la Argentina. Si esto no es así, esta ley no sirve.

Por otro lado, el desafío de esta ley consiste en superar las experiencias del pasado y ser a la vez capaces de construir en el futuro un Estado y un mercado que sean eficientes y no corruptos; que las inversiones que hagan los trabajadores se queden en el país y que no sean alambicadas por otros mecanismos hacia el extranjero.

Nuestro desafío es el desafío del país: reconstruirlo con un Estado y un mercado como el que nos merecemos. Hoy estamos aquí para ejercer uno de los poderes. Ello, en un momento en que en el país hay puja de poderes sectoriales, donde cada uno quiere tirar de la camiseta para llevarse un pedazo más grande que el que le corresponde. Entonces, ejerzamos con responsabilidad nuestro poder de representantes, cual es el de legislar, para que cada sector se quede nada más que con el espacio que le corresponde. *(Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)*

Sr. Presidente (Pierri). — No habiendo más señores diputados anotados para hacer uso de la palabra, corresponde en primer término que la Honorable Cámara se pronuncie con respecto a

la moción formulada por el señor diputado Gauna en el sentido de que el dictamen vuelva a comisión.

Se va a votar.

—Resulta negativa.

Sr. Presidente (Pierri). —Queda rechazada la moción.

Se va a votar en general el dictamen de las Comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica el Sistema Nacional de Previsión Social.

- Resulta afirmativa. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — En uso de las facultades que el artículo 157 del reglamento confiere a esta Presidencia, invito al cuerpo a pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a la hora 14 y 30

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 1
y 55 del día 30.

FULVIO F. RAMOS
Director del Cuerpo de Taquígrafos.